DIARIO DE DEBATES DE SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA MIÉRCOLES VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

PRESIDENTE C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ

(Asistencia de veinticinco ciudadanos Diputados)

SECRETARIA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

- EL C. PRESIDENTE: (Inicia: 15:00 horas) Buenas tardes, vamos a iniciar con la Sesión Ordinaria de Clausura del Segundo Periodo de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XXIII Legislatura del Estado de Baja California, siendo las quince horas del día miércoles 25 de marzo del año 2020; Diputada Secretaria sírvase pasar lista de asistencia.

- LA C. SECRETARIA: Procedo a la toma de la lista de asistencia a solicitud del Diputado Presidente, iniciamos con: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio Cesar, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa".

XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA **LISTA DE ASISTENCIA**		
SESIÓN ORDINARIA **DEL 25 DE MARZO DE 2020.**		
1.-	AGATÓN MUÑIZ CLAUDIA JOSEFINA	PRESENTE
2.-	BUJANDA RUIZ MIGUEL ÁNGEL	PRESENTE
3.-	CABALLERO RAMÍREZ MONSERRAT	PRESENTE
4.-	CANO NÚÑEZ MIRIAM ELIZABETH	PRESENTE
5.-	DEL VILLAR CASAS ROSINA	PRESENTE
6.-	GALLARDO GARCÍA FAUSTO	PRESENTE
7.-	GERALDO NÚÑEZ ARACELI	PRESENTE
8.-	GONZÁLEZ QUIROZ JULIA ANDREA	PRESENTE
9.-	HERNÁNDEZ CARMONA CARMEN LETICIA	PRESENTE
10.-	LÓPEZ MONTES GERARDO	PRESENTE
11.-	MELÉNDREZ ESPINOZA JUAN	PRESENTE
12.-	MOLINA GARCÍA JUAN MANUEL	PRESENTE
13.-	MORÁN HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL	PRESENTE
14.-	MORENO HERNÁNDEZ LUIS	PRESENTE
15.-	NAVARRO GUTIÉRREZ VÍCTOR HUGO	PRESENTE
16.-	OTAÑEZ LICONA RODRIGO ANIBAL	PRESENTE
17.-	QUINTERO QUINTERO LORETO	PRESENTE
18.-	RODRÍGUEZ EVA GRICELDA	PRESENTE
19.-	RUVALCABA FLORES DAVID	PRESENTE

20.-	TOPETE ROBLES ELÍ	PRESENTE
21.-	VACA CHACÓN MARÍA TRINIDAD	PRESENTE
22.-	VÁSQUEZ HERNÁNDEZ EVA MARÍA	PRESENTE
23.-	VÁZQUEZ CASTILLO JULIO CÉSAR	PRESENTE
24.-	VÁZQUEZ VALADEZ RAMÓN	PRESENTE
25.-	VILLALOBOS AVILA MARIA LUISA	PRESENTE

- LA C. SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente, tenemos quórum.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, en consecuencia, se abre la Sesión, (timbre).

- EL C. PRESIDENTE: Toda vez que el Orden del Día, ha sido distribuido con anticipación a los Señores Diputados vía electrónica, ruego a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a consideración de la Asamblea en votación económica, la dispensa de su lectura y en su caso su aprobación.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de esta asamblea en votación económica la dispensa de lectura y aprobación del orden del día, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; **por unanimidad Diputado Presidente**.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, procedemos a dar cuenta del siguiente punto del Orden del Día, relativo a la **"Aprobación de Actas"** de la Sesión Ordinaria del 11 de marzo y de la Sesión Previa de fecha 25 de marzo, ambas del 2020, y toda vez que se les hizo llegar previamente vía correo electrónico, se pregunta si tienen alguna enmienda que hacer, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a efectuar la votación para la dispensa de su lectura, así como para su aprobación.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a consideración de la asamblea en votación económica la dispensa de lectura presenta y la aprobación del acta referida, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; **por unanimidad Diputado Presidente**.

(SE INSERTA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2020)

APROBADA

_____ _____

PRESIDENTE SECRETARIA

DÍA: MES: AÑO 2020.

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA MIÉRCOLES ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

PRESIDENTE C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

(Asistencia de veinticuatro ciudadanos Diputados)

SECRETARIA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

En la Ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con cincuenta y siete minutos del día miércoles once de marzo del año dos mil veinte, el Diputado

Presidente de esta Mesa Directiva da inicio a la Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura del Estado de Baja California; y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, solicita a la Diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Meléndrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa. Asimismo, se justifica la inasistencia de la Diputada Del Villar Casas Rosina.

Enseguida, y existiendo quórum, el Diputado Presidente informa que el "**orden del día"**, propuesto para esta sesión, ya fue distribuido con anticipación a los ciudadanos Diputadas y Diputados vía electrónica, solicitando a la Diputada Secretaria Escrutadora lleve a cabo la votación de la dispensa de su lectura, así como la aprobación de la misma; **resultando aprobada en votación económica por mayoría de los ciudadanos Diputados presentes.**

Se continúa con el siguiente punto del Orden del Día, que se refiere a: **"Aprobación del Acta de Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de febrero del 2020** ", asimismo, el Diputado Presidente en virtud de que el acta respectiva se hizo llegar previamente a los ciudadanos Diputados y Diputadas vía correo electrónico, pregunta si

tienen alguna enmienda que hacer, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora proceda a efectuar la votación para la dispensa de su lectura, así como para su aprobación, resultando aprobada en votación económica por mayoría de los Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Presidente hace mención que se va adelantar un tema en el apartado de **proposiciones**; enseguida le concede el uso de la voz a la Diputada Eva Gricelda Rodríguez en conjunto con el Diputado Juan Meléndrez Espinoza, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), para presentar la siguiente

PROPOSICIÓN DE ACUERDO ECONÓMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE:

PRIMERO. - Se exhorta a esta H. XXIII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, a efecto de que reciba y admita en donación a perpetuidad, la antorcha olímpica con la cual se encendió el pebetero olímpico en la ceremonia de inauguración de los XIX (19) Juegos Olímpicos el día 12 de octubre de 1968, y con ello, se pueda colocar dentro de una urna en las instalaciones de este Recinto Legislativo, con la finalidad de que forme parte del patrimonio histórico del Congreso del Estado, se preserve y exhiba dicho elemento olímpico al pueblo de Baja California.

SEGUNDO. - Se exhorta al XXIII Ayuntamiento Municipal de Mexicali, por conducto de la Presidenta Municipal Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, a efecto de que realice las gestiones necesarias ante el Consejo Municipal de Nomenclatura, a fin de que se le asigne oficialmente el nombre de "Norma Enriqueta Basilio Sotelo" a la vialidad principal del Ejido Puebla, hasta ahora conocida como Ignacio Zaragoza.

TERCERO. – Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, Ingeniero Jaime Bonilla Valdez, a efecto de que adicione el nombre al Centro Deportivo conocido como "Ciudad Deportiva Mexicali" ubicada en fraccionamiento Aviación de ésta Ciudad de Mexicali, para que quede finalmente de la siguiente manera: "Ciudad Deportiva Queta Basilio", como comúnmente se le reconoció, con la intención de recordar sus aportaciones y honrar su memoria, en los espacios deportivos, políticos y sociales.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN.

Enseguida, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a declarar abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a declarar abierto el debate de la Proposición presentada. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma.

Posteriormente, intervienen en este tema para sumarse los siguientes Diputados: Juan Manuel Molina García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, María Trinidad Vaca Chacón y Carmen Leticia Hernández Carmona.

Enseguida, la Diputada Eva Gricelda Rodríguez solicita permiso a la Asamblea para que el Maestro Alfonso Sepúlveda Ornelas entregue la antorcha con la que se incendió el pebetero y la vez dar una reseña.

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, en los términos que fue leída por la Diputada Eva Gricelda Rodríguez. **Dado en el** Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

A continuación, se pasa al siguiente punto relativo **"Acuerdos de los Órganos de Gobierno",** para lo cual se le concede el uso de la voz a la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez para dar lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea e integra la Comisión Especial para llevar a cabo los trabajos de la municipalización de San Felipe.

Asimismo, se somete a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 119 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y solo ser de injerencia de este Poder, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se integra la COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN FELIPE ACTUALMENTE PARTE DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA

FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SEGUNDO.- La Comisión Especial, que dará seguimiento a la solicitud de municipalización de la Delegación de San Felipe, se conformará por los siguientes Diputados:

PRESIDENTE: DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA.

SECRETARIA: DIPUTADA MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ

VOCAL: DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ

VOCAL: DIPUTADO VICTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ

VOCAL: DIPUTADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

VOCAL: DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA

VOCAL: DIPUTADA EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

VOCAL: DIPUTADO ELÍ TOPETE ROBLES

TERCERO.- Aprobado el presente acuerdo, el Presidente de la Comisión Especial antes referida deberá citar a sesión a más tardar dentro de los próximos 15 días hábiles, para la instalación de la misma e iniciar los trabajos correspondientes y en ese mismo acto acordar informar a los ciudadanos solicitantes que ha quedado integrada la comisión de seguimiento.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 10 de marzo del año dos mil veinte.

Enseguida, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a declarar abierto el debate de la dispensa

de trámite del Acuerdo. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por mayoría de los Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a declarar abierto el debate del acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo.

Acto seguido, el Diputado Juan Manuel Molina García, solicita a la Mesa Directiva un receso de dos minutos siendo las doce horas con cuarenta y seis minutos y una vez reanudada la sesión y siendo las doce horas con cuarenta y siete minutos el Diputado Presidente, solicita a la Diputada Secretaria, proceda a verificar el quorum mediante el pase de lista y contestan de presentes los siguientes ciudadanos Diputados: Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, la suscrita Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César. Se justifica la inasistencia de la Diputada Del Villar Casas Rosina.

Enseguida el Diputado Presidente, concede el uso de la voz a la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, para hacer la corrección correspondiente, relativo a los nombres en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política:

PRIMERO.- Se integra la COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE MUNICIPALIZACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE SAN FELIPE ACTUALMENTE PARTE DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

SEGUNDO.- La Comisión Especial, que dará seguimiento a la solicitud de municipalización de la Delegación de San Felipe, se conformará por los siguientes Diputados y Diputadas:

PRESIDENTE: DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA.

SECRETARIA: DIPUTADA MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ

VOCAL: DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ

VOCAL: DIPUTADO VICTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ

VOCAL: DIPUTADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

VOCAL: DIPUTADA MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA

VOCAL: DIPUTADA EVA GRICELDA RODRÍGUEZ

VOCAL: DIPUTADO ELÍ TOPETE ROBLES

TERCERO.- Aprobado el presente acuerdo, el Presidente de la Comisión Especial antes referida deberá citar a sesión a más tardar dentro de los próximos 15 días hábiles, para la instalación de la misma e iniciar los trabajos correspondientes y en ese mismo acto acordar

informar a los ciudadanos solicitantes que ha quedado integrada la comisión de seguimiento.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesión Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 10 de marzo del año dos mil veinte.

A continuación, el Diputado Presidente, toda vez que no hay oradores en contra, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal el acuerdo de la Junta de Coordinación Política; resultando aprobado con 19 votos a favor de los ciudadanos Diputados: Vázquez Valadez Ramón, Ruvalcaba Flores David, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Villalobos Ávila María Luisa, Rodríguez Eva Gricelda, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Melendrez Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Moreno Hernández Luis, López Montes Gerardo, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel.

Posteriormente el Diputado Presidente, procede a declarar aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, leído por la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez. Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado de Baja California, a los 11 días del mes de marzo de 2020.

Se continua con el siguiente apartado del orden del día, referente a **"Iniciativas"**; por lo que EL Diputado Presidente, hace del conocimiento de la asamblea, que, en Oficialía de Partes de este Congreso, se recibieron las siguientes iniciativas:

1. Del Ing. Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza a los Municipios del Estado de Baja California

gestionar y contratar, uno o varios financiamientos, que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social.

Misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

2. Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y en representación del Partido Verde Ecologista Mexicano, por el que se reforma el inciso g) de la fracción III del artículo 83 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.

Misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

3. Del Ing. Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, por el que se reforma la fracción V del artículo 2 y 21 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado, los artículos 2 y 17; y la adición de una fracción IV al artículo 96 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California, así como la adición del artículo 14 bis al Código Fiscal para el Estado de Baja California.

Misma que se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

4. De la Diputada Loreto Quintero Quintero, a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario PAN, por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California.

Misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

5. Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y como integrante de la XXIII Legislatura, por el que se reforman los artículos 3, 5, 8, 17, 18, 19, 20, 35, 43, 45, 60, 63, 66, 79, 80, 85 y 86 de la Ley de Planeación para el Estado de Baja California.

Misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

6. De la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se reforman los artículos 3, 4, 17 y 18 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables para el Estado de Baja California.

Misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

7. Del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario MORENA, por el que se reforma el artículo 337 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Misma que fue turnada a la Comisión de Justicia.

Se continua con la presentación en tribuna de las iniciativas, y el Diputado Presidente, hace un atento recordatorio a los ciudadanos Diputados, para que la lectura de su iniciativa sea por un máximo de cinco minutos.

A continuación, hace uso de la tribuna la Diputada Aracely Geraldo Núñez, en nombre propio y representación del Grupo Parlamentario MORENA para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California.

Enseguida el Diputado Presidente, procede a turnar dicha iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Posteriormente hacen uso de la voz para sumarse a dicha iniciativa los siguientes Diputados: Loreto Quintero Quintero, Eva Gricelda Rodríguez, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Juan Melendrez Espinoza, Fausto Gallardo García, María Trinidad Vaca Chacón, Gerardo López Montes, Eva María Vásquez Hernández, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Carmen Leticia Hernández Carmona, Víctor Manuel Morán Hernández, Araceli Geraldo Núñez, Ramón Vázquez Valadez, Julia Andrea González Quiroz, Claudia Josefina Agatón Muñiz, David Ruvalcaba Flores.

A continuación, el Diputado Presidente, solicita al Diputado David Ruvalcaba Flores, hacer uso de la tribuna para presentar su iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California. Y el Diputado David Ruvalcaba Flores, manifiesta que cede su lugar a la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz.

Enseguida la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, hace uso de la tribuna y el Diputado Presidente, manifiesta que va a solicitar un receso.

Acto seguido el Diputado Presidente, procede a decretar un receso, que es solicitado por la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, el cual es secundado por la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, siendo las trece horas con diecisiete minutos.

Se reanuda la sesión siendo las trece horas con veintiún minutos y el Diputado Presidente, solicita a la Diputada Secretaria, proceda al pase de lista correspondiente para verificar el quorum legal y contestan de presentes los siguientes ciudadanos Diputados: "Agatón Muñiz Claudia, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López

Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Morán Hernández Víctor Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio César, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa. Se justifica la inasistencia de la Diputada Del Villar Casas Rosina.

A continuación, el Diputado Presidente, concede el uso de la voz a la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, para que presente iniciativa que Crea la Ley de Jubilación por 25 años de Servicio y por Antigüedad para los miembros de las Instituciones Judiciales del Gobierno del Estado de Baja California.

Asimismo la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, da las gracias y una cordial bienvenida a cada uno de los policías, a los ministeriales, a los custodios, a los jubilados, a las viudas, a nuestros regidores de Ensenada, Christian Dum y de Mexicali, nuestro compañero regidor Sergio Tamay, Licenciado Cuauhtémoc Castillas, Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, Alejandro Monreal Noriega, quien es fundador de la Asociación de Policías Investigadores de Mexicali y Director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, también, Oscar Vázquez, Presidente de la Asociación de Policías, Investigadores de Mexicali, a Cristina Madera Herrera, Presidenta de los Policías Jubilados, el licenciado Job Durán García, quien es representante estatal del movimiento nacional por la Seguridad y Procuración de Justicia, Asociación Civil, muchas gracias, al Presidente de la Fraternidad Policiaca de Mexicali, Luis Antonio Navarrete.

Acto seguido el Diputado Presidente, procede a turnar dicha iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidiendo la primera.

Enseguida, hacen uso de la voz para sumarse a dicha iniciativa los ciudadanos Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Monserrat Caballero Ramírez, Gerardo López Montes, Loreto Quintero Quintero, Rodrigo Anibal Otañez Licona, Juan Manuel Molina García, María Trinidad Vaca Chacón, Víctor Manuel Morán Hernández y Araceli Geraldo Núñez.

Enseguida, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, para presentar, a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 26 de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.

Posteriormente, el Diputado Presidente turna esta Iniciativa para su análisis y Dictamen a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Juan Meléndrez Espinoza, para presentar, a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con solicitud de dispensa de trámite, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:

ÚNICO. Que la Vigésima Tercera Legislatura del Estado de Baja California, exhorta al SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. CARLOS MANUEL URZUA MACÍAS; al SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, VÍCTOR MANUEL VILLALOBOS ARÁMBULA; y, al DIRECTOR GENERAL DE FINANCIERA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO, ING. FRANCISCO JAVIER DELGADO MENDOZA para atender la problemática para evitar el colapso económico y social del Valle de Mexicali, se solicitan recursos extraordinarios y un programa integral emergente de reactivación productiva para los sistemas productos trigo y algodón del Valle de Mexicali.

Con fundamento en lo señalado en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y su correlativo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en virtud de la urgente y obvia resolución, solicito sea sometido para su aprobación ante esta Asamblea.

Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García", en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

Acto seguido, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite; y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo. De no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por mayoría de los Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Presidente, de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declara abierto el debate de la Proposición presentada; y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma. De no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes.

Enseguida, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, en los términos que fue leída por el Diputado Juan Meléndrez Espinoza.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en Sesión Ordinaria de la Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez para intervenir en relación a la Proposición que presenta el Diputado Juan Meléndrez Espinoza, la cual ya fue aprobada.

Enseguida el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Anibal Otañez Licona, del Partido de Baja California, para presentar Iniciativa que Reforma la Ley para la Promoción, Fomento y Desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de Baja California.

Posteriormente, el Diputado Presidente turna esta Iniciativa para su análisis y Dictamen a la Comisión de Desarrollo económico y Comercio Binacional.

A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García, para presentar a nombre propio y de los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

Enseguida, el Diputado Presidente turna esta Iniciativa para su análisis y Dictamen a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Seguidamente, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Fausto Gallardo García, para presentar a nombre y representación del Partido Verde Ecologista de México, Iniciativa que Reforma la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California.

Posteriormente, el Diputado Presidente turna esta Iniciativa para su análisis y Dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Eva María Vásquez Hernández, integrante del Partido Acción Nacional para presentar

Iniciativa que Reforma Diversos Preceptos de la Ley de Educación del Estado de Baja California; así como de la Ley de Seguridad Escolar del Estado de Baja California.

Acto seguido, el Diputado Presidente turna esta Iniciativa para su análisis y Dictamen a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Posteriormente, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reforma y Adiciones a la Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Baja California; y al Código Penal para el Estado de Baja California, en Materia de Maltrato Infantil.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia.

A continuación, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz a los Diputados: Julia Andrea González Quiroz, Carmen Leticia Hernández Carmona, Víctor Manuel Morán Hernández y David Ruvalcaba Flores, para felicitar y sumarse a la Iniciativa presentada por la Diputada María Trinidad Vaca Chacón.

Acto continuo, el Diputado Luis Moreno Hernández, hace uso de la tribuna para presentar a nombre propio y en representación de TRANSFORMEMOS, Iniciativa Ley, que reforma el artículo 208 Bis del Capítulo I, Título Sexto perteneciente a la Sección Primera del Libro Segundo en su parte especial del Código Penal para el Estado de Baja California.

Enseguida, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz a los Diputados: Miguel Ángel Bujanda Ruiz, Loreto Quintero Quintero, Carmen Leticia Hernández Carmona, Gerardo López Montes, María Trinidad Vaca Chacón, Víctor Manuel Morán Hernández, Monserrat Caballero Ramírez y María Luisa Villalobos Ávila, para felicitar y sumarse a la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia.

Para antes de continuar, el Diputado Presidente procede a dar la bienvenida a los alumnos de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana de la facultad de Coordinación, reflexión Universitaria y como responsable viene la Doctora Liz Sánchez, bienvenidos.

Acto seguido, el Diputado Ramón Vázquez Valadez, hace uso de la tribuna para presentar a nombre propio como integrante del Grupo Parlamentario MORENA, Iniciativa de reforma que adiciona las fracciones IX, X, XI del Artículo 6 y reforma la fracción XIX y adiciona XX, XXI del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

A continuación, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz a los Diputados: Fausto Gallardo García, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Víctor Manuel Morán Hernández y María Trinidad Vaca Chacón, para felicitar y sumarse a la Iniciativa presentada por el Diputado Ramón Vázquez Valadez.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnar dicha Iniciativa para su análisis y dictamen a la Comisión Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

Acto continuo, el Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, hace uso de la tribuna para presentar a nombre propio y como integrante de la Vigésima Tercera Legislatura, Iniciativa que reforma los artículos 113 Bis, 114 Bis, 119, 184 Quinquies, y que adiciona el 184 Sextus del Código Penal para el Estado de Baja California.

Enseguida, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz a los Diputados: Araceli Geraldo Núñez, María Luisa Villalobos Ávila, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, María Trinidad Vaca Chacón, Eva Gricelda Rodríguez, Fausto Gallardo García, Luis Moreno Hernández, Monserrat Caballero Ramírez, Julia Andrea González Quiroz, Elí Topete Robles,

Carmen Leticia Hernández Carmona, Loreto Quintero Quintero, Julio César Vázquez Castillo, Eva María Vásquez Hernández, Víctor Manuel Morán Hernández, Juan Manuel Molina García y Miriam Elizabet Cano Núñez, para felicitar y sumarse a la Iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a turnarla para su análisis y dictamen a la Comisión de Justicia.

A continuación, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz al Diputado David Ruvalcaba Flores para presentar Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, mismo que manifiesta sea considerada por Oficialía de Partes.

Enseguida, el Diputado Presidente **decreta un receso siendo las quince horas con veinte minutos; reanudándose la sesión siendo las dieciséis horas con diez minutos.**

Posteriormente, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria llevar a cabo el pase de lista, una vez realizado el mismo y contando con el quórum legal para sesionar, se continúa con el siguiente punto del Orden del Día, **"Dictámenes".**

A continuación, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García, para presentar los Dictámenes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, solicitando la dispensa de la lectura total de los mismos, para efectos de únicamente dar lectura al proemio y los puntos resolutivos de los Dictámenes 33, 34 y 36.

Enseguida, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de lectura total de los Dictámenes en comento,

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para que únicamente se dé la lectura del proemio y resolutivos de los mismos; **resultando aprobado por mayoría de los Diputados**.

Acto seguido, hace uso de la tribuna el Diputado Juan Manuel Molina García para dar lectura al Dictamen Número 33 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; bajo el siguiente Punto

RESOLUTIVO

Único. Se aprueba la reforma a los artículos 14, 24 y 46 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 14.- Se crea la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California, como organismo público desconcentrado, adscrito a la **Secretaria de Economía Sustentable y Turismo** del Gobierno del Estado de Baja California, cuyas atribuciones serán:

I a la XI. (...)

XII. Proponer acciones con base en estudios y programas especiales, sobre la simplificación de la actividad económica**;**

XIII. Vigilar que las empresas extranjeras o foráneas que inicien operaciones en Baja California, cumplan con lo señalado en la fracción V del artículo 24 de esta ley, cuando así lo determinen las autoridades en mejora regulatoria del Estado, y

XIV. Interpretar en el ámbito administrativo esta Ley.

Artículo 24.- Para el desahogo de los trámites o servicios se observarán las previsiones siguientes, salvo que en otra regulación de carácter general se establezcan reglas particulares:

I a la IV. (…)

V. En los trámites de apertura y operación de empresas extranjeras o Foráneas en Baja California, si así lo estimaren conveniente las autoridades en materia de mejora regulatoria en el Estado, podrán requerir a las empresas anteriores, el depósito de una garantía que tenga como finalidad cubrir las obligaciones legales adquiridas con motivo de su operación y/o apertura.

Artículo 46.- Se crea el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, con el objeto de coordinar las acciones de la administración pública centralizada del Estado de Baja California y los Ayuntamientos, para que las empresas de bajo riesgo para la salud y el medio ambiente, puedan contar con los permisos y licencias administrativas para iniciar sus operaciones en un plazo máximo de tres días hábiles, a partir del ingreso de la solicitud debidamente integrada.

El trámite de apertura rápida de las empresas extranjeras o foráneas en Baja California, no procederá hasta en tanto se dé cumplimiento a lo señalado en la fracción V del artículo 24 de esta ley, cuando así lo determinen las autoridades en mejora regulatoria en el Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- La Secretaria de Economía Sustentable y Turismo, realizará una campaña informativa para dar a conocer la presente reforma, asimismo realizará un estudio de riesgo para identificar las características de las empresas golondrinas o de riesgo, para que sean considerados por los funcionarios responsables de dar a trámite a las autorizaciones de nuevas empresas para la aplicación de la presente Reforma.

TERCERO.- La Secretaria del Trabajo vigilará el cumplimiento de la presente reforma, en el ámbito de sus atribuciones.

CUARTO.- Las presentes disposiciones se aplicarán a las nuevas empresas que inicien operaciones a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.

Dado en la Sala de Comisiones "Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los cinco días del mes de marzo de dos mil veinte.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Dictamen antes referido, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra del mismo y no siendo así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal, el Dictamen número 33, **resultando aprobada con 19 votos a favor** de los Ciudadanos Diputados: Vázquez Valadez Ramón, Ruvalcaba Flores David, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Vázquez Castillo Julio César, Rodríguez Eva Gricelda, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Gallardo García Fausto, Moreno Hernández Luis, Topete Robles Elí, López Montes Gerardo, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel. 2 votos en abstención de las ciudadanas Diputadas: Vásquez Hernández

Eva María y Quintero Quintero Loreto. Y 1 voto en contra del ciudadano Diputado: Otáñez Licona Rodrigo Aníbal.

Acto continuo, el Diputado Presidente les concede el uso de la voz a las Diputadas Eva María Vásquez Hernández y Loreto Quintero Quintero, para razonar el sentido de su voto en abstención.

Posteriormente, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen Número 33 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Juan Manuel Molina García. Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Acto seguido, el Diputado Presidente le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García para presentar el Dictamen número 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente punto resolutivo:

ÚNICO. Se aprueba la reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:

I. a la V.- (...)

VI.- Si son personas menores de dieciocho arios de edad, tendrán los siguientes derechos:

a) (...)

b).- Que el Estado les garantice de manera subsidiaria la protección nutricional a través de programas en los que se establezcan los apoyos y lineamientos necesarios a cargo de las instituciones públicas, en los términos que determine la ley, las niñas y niños en Baja California tendrán acceso a una alimentación sana y de calidad mediante un desayuno caliente diario en escuelas públicas de nivel básico del Estado.

c) al e) (…)

VII.- (…)

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

TERCERO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

Dado en la Sala de Comisiones "Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 5 días del mes de marzo de dos mil veinte. Y firman los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Como integrante de la Comisión Dictaminadora, debo de comentar que inclusive dentro del espacio que dio al debate en la sesión de comisión, se llevó a la conclusión de que esta

iniciativa que actualmente es un programa que se comprometió por parte del Gobernador del Estado y varios de los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes el día de hoy como integrantes de la Legislatura se comprometió a los ciudadanos de Baja California en beneficio de los hijos de la mayoría de ellos ese programa de los desayunos escolares y de esta manera pasará de ser un programa, a ser un mandato constitucional, que será obligación de los siguientes gobiernos en Baja California, en beneficio de los niños y niñas que en muchos de los casos desgraciadamente por los altos niveles todavía de marginación que existen en el Estado, llegan a la escuela sin alimento y un niño sin alimento no puede estudiar bien, es una injusticia lo que ha venido sucediendo y que esta reforma constitucional va a dar pauta y lo reitero a que pase de ser un programa de este gobierno a un derecho constitucional de las niñas y niños en el Estado, es verdaderamente un privilegio para la Comisión de Gobernación haber dictaminado esta iniciativa favorable, y por esa razón les insistimos en pedirle su voto compañeros Diputados.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Dictamen de referencia, y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los Diputados y Diputadas si desean intervenir en contra del mismo y no siendo así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación nominal, el Dictamen en comento, resultando aprobado con 23 votos a favor de los Ciudadanos Diputados: Vázquez Valadez Ramón, Ruvalcaba Flores David, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Topete Robles Elí, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Vázquez Castillo Julio César, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Meléndrez

Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Moreno Hernández Luis, López Montes Gerardo, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel.

A continuación, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen número 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, leído por el Diputado Juan Manuel Molina García. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Enseguida, el Diputado Presidente de nueva cuenta le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García para presentar el Dictamen número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, asimismo, solicita la dispensa de trámite de dicho dictamen dado que es un asunto de urgente y obvia resolución.

Acto seguido el Diputado Presidente, en base a lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Dictamen No. 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y de acuerdo a lo que establece el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite; en donde intervienen los ciudadanos Diputados: David Ruvalcaba Flores, Eva María Vásquez Hernández y Juan Manuel Molina García.

No existiendo más intervenciones el Diputado Presidente, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de trámite; resultando aprobada por mayoría, de los ciudadanos Diputados presentes.

A continuación, el Diputado Juan Manuel Molina García continúa con el uso de la voz para dar lectura al Dictamen No. 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, estableciéndose los siguientes Puntos Resolutivos:

PRIMERO: Se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

La ...

Cuando...

Durante …

El proceso electoral dará inicio el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La …

La …

APARTADO A …

APARTADO B …

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad.

El …

El …

I a la XI …

El …

El …

El …

Los …

Los …

El …

Los …

Los …

La …

Las …

El …

La …

APARTADO C …

APARTADO D …

APARTADO E …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO. Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la Declaratoria de Incorporación Constitucional correspondiente.

TERCERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO: Se aprueba la reforma a los artículos 35, 66, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Son fines del Instituto Estatal:

I a la VI. (…)

Las actividades del Instituto Estatal Electoral, se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad. Para el desempeño de sus actividades, el Instituto contará con un cuerpo de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional Electoral conforme lo establecido en Ley General y el Estatuto que apruebe el Instituto Nacional.

(…)

Artículo 66.- El Consejo General, designará a los consejeros electorales de los Consejos Distritales Electorales, mediante el siguiente procedimiento:

I.- En la tercera semana del mes de diciembre del año anterior al de la elección, emitirá convocatoria pública en la que se establezcan las bases y requisitos para participar garantizando un plazo de treinta días naturales para el registro de aspirantes;

II a la III. (…)

(…)

Artículo 68.- El Consejo General a más tardar la primera semana del mes de marzo del año de la elección, celebrará sesión a efecto de tomar protesta de Ley correspondiente al

Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Distritales Electorales, expidiéndose la Constancia correspondiente.

ARTÍICULO 69. Los Consejos Distritales durante la tercera semana de marzo del año de la elección celebrarán Sesión de Instalación, previa convocatoria de su Consejero Presidente, con el objeto de preparar el proceso electoral procediendo, previa recepción de las acreditaciones de los Consejeros Electorales y representantes de partidos políticos, en dicha sesión a:

I a la V. (…)

Artículo 97.- La retribución del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales del Consejo General, será establecida en el presupuesto de egresos del Instituto Estatal y aprobada por el Congreso del Estado, en términos del artículo 127 de la Constitución Federal, las cuales no podrán disminuirse durante el tiempo que dure su encargo. Las y los Consejeros Electorales del Consejo General y de los Consejos Distritales Electorales, no tendrán derecho a las prestaciones que por ley les corresponden a los trabajadores del Instituto Estatal, salvo la atención del servicio médico en institución pública de salud.

Los Consejeros Electorales Distritales, recibirán desde su instalación y hasta la entrada en receso, una dieta de asistencia mensual para cubrir los gastos que se generen por el desempeño de su encargo, la que se calculara diariamente a razón de:

I.- Para el Consejero Presidente doce Unidades de Medida y Actualización diarias;

II.- Para las y los Consejeros Distritales Numerarios seis Unidades de Medida y Actualización diarias, y

III.- Para las y los Consejeros Supernumerarios tres Unidades de Medida y Actualización diarias. Solo en el mes de junio del año de la elección, la dieta se igualará en los mismos términos que la fracción anterior.

Estarán sujetos en lo conducente al régimen de responsabilidades administrativas previsto en esta Ley y podrán ser sancionados por el Consejo General por la violación en que incurran a los principios rectores de la función electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Publíquese el contenido de la presente reforma en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. – La presente reforma entrará en vigor hasta en tanto sea publicada la modificación al artículo 5 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el párrafo segundo del APARTADO B, del mismo artículo.

TERCERO. – Remítase el contenido del presente Decreto al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO: Se aprueba la reforma a la Ley que Reglamenta las Candidaturas Independientes en el Estado de Baja California, para quedar como sigue:

Artículo 9.- (…)

(…):

I a la II. (…)

(…)

(…)

III. Los aspirantes al cargo de Diputados por el principio de mayoría relativa ante el Secretario Ejecutivo del Instituto, y se hará en fórmulas integradas por propietarios y suplentes.

En las fórmulas y planillas de aspirantes, se deberán observar las reglas de equidad entre mujeres y hombres establecidas en la legislación electoral del Estado.

Artículo 11.- (…)

Concluido el plazo para presentar la manifestación de intención, se publicarán en los estrados respectivos, cédula en la que se haga del conocimiento los ciudadanos que adquirieron la calidad de aspirantes a Candidatos Independientes.

Artículo 25.- (…)

(…):

I a la IX. (…)

El Secretario Ejecutivo, dentro del plazo señalado en este artículo notificará al aspirante a Candidato Independiente la determinación con precisión del motivo por el cual los apoyos ciudadanos recabados no fueron computados, debiendo detallar de manera pormenorizada las causas por las que estos fueron desestimados, en cada caso deberá establecer los datos de identificación del registro considerado deficiente, y en el supuesto de existir duplicidad de firmas, deberá proporcionar los datos de localización necesarios para que le sea posible identificar ambos apoyos, concediéndole un plazo de cuarenta y ocho horas para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

TRANSITORIOS

PRIMERO. – Publíquese el contenido de la presente reforma en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. – La presente reforma entrará en vigor hasta en tanto sea publicada la modificación al artículo 5 párrafo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como el párrafo segundo del APARTADO B, del mismo artículo.

TERCERO. – Remítase el contenido del presente Decreto al Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, para los efectos legales correspondientes.

Dado en la Sala de Comisiones "Dr. Francisco Dueñas Montes" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Enseguida, el Diputado Presidente de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de Dictamen No. 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación Puntos Constitucionales; y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo, solicitando el uso de la voz los siguientes Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Juan Manuel Molina García, Gerardo López Montes y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez.

Enseguida el Diputado Presidente, le solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración de la asamblea el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, resultando aprobado en votación nominal por 17 votos a favor de los siguientes Diputados**:** Vázquez Valadez Ramón, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Rodríguez Eva Gricelda, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Meléndrez Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Moreno Hernández Luis, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea y Morán Hernández Víctor Manuel; y 4 votos en contra de los siguientes Diputados: Elí Topete Robles, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Eva María Vásquez Hernández y Loreto Quintero Quintero; así como 2 votos en abstención de los siguiente Diputados: Gerardo López Montes y David Ruvalcaba Flores quien manifiesta el sentido de su abstención.

Acto continuo, el Diputado Presidente procede a declarar aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación Legislación y

Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Juan Manuel Molina García. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

A continuación, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, resultando aprobado por 17 votos a favor de los siguientes Ciudadanos Diputados: Vázquez Valadez Ramón, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Vázquez Castillo Julio César, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Rodríguez Eva Gricelda, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Meléndrez Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Luis Moreno Hernández, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel; 4 votos en contra de los siguientes Ciudadanos Diputados: Topete Robles Elí, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto; y 2 votos en abstención de los siguientes Ciudadanos Diputados: Ruvalcaba Flores David y López Montes Gerardo.

Enseguida el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado David Ruvalcaba Flores para dar a conocer el motivo de su abstención.

Continuando con el siguiente apartado del Orden del Día, correspondiente a **"Proposiciones"**, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Loreto Quintero Quintero, para presentar a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Proposición con Punto de Acuerdo, con solicitud de dispensa de trámite; bajo los siguientes puntos resolutivos:

ÚNICO.- El H. Congreso del Estado de Baja California, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a las dependencias a su cargo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como Secretaría General de Gobierno, en cuanto responsable del sistema penitenciario estatal, a fin de que coordinen esfuerzos en la inspección y vigilancia en el cumplimiento de los derechos laborales, seguros, pago de prestaciones y acceso a la seguridad social en favor de las personas privadas de la libertad que realizan labores en los centros penitenciarios en el Estado, en la modalidad de actividades productivas remuneradas en favor de terceros, en tanto resulten compatibles con su internamiento y situación jurídica, dando así cumplimiento a lo previsto por el artículo 91, fracción III, párrafo tercero, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

Enseguida, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobada por mayoría de los Diputados presentes**.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo

ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica; **resultando aprobado por mayoría de los Diputados presentes.**

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leído por la Diputada Loreto Quintero Quintero. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Posteriormente, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona, para presentar a nombre propio y en representación del Partido Baja California, Proposición con Punto de Acuerdo, con solicitud de dispensa de trámite; bajo los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES: MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA PRESIDENTA MUNICIPAL DE MEXICALI, ARMANDO AYALA ROBLES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO Y OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CUENTEN CON UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE.

SEGUNDO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES: MARINA DEL PILAR AVILA OLMEDA PRESIDENTA

MUNICIPAL DE MEXICALI, ARMANDO AYALA ROBLES PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENSENADA, HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO PRESIDENTA MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO Y OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TECATE, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PARA QUE DENTRO DE SU ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DESARROLLEN UN PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" AL DIA DE SU PRESENTACIÓN.

Enseguida, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobada por unanimidad**.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica; **resultando aprobado por mayoría de los Diputados presentes.**

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leído por el Diputado Rodrigo Anibal Otañez Licona. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de

Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

A continuación, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado Julio César Vázquez Castillo, para presentar a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Proposición con Punto de Acuerdo, con solicitud de dispensa de trámite; bajo los siguientes puntos resolutivos:

ÚNICO. - Esta Honorable Legislatura exhorta respetuosamente, al C. JAIME BONILLA VALDEZ, Gobernador del Estado de Baja California, a efecto de que instruya a personal a su cargo, para que informen a esta Soberanía, sobre los avances y fecha programada para dar inicio a los trabajos con la totalidad de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, a su fecha de presentación.

Enseguida, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobada por unanimidad**.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo

ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica; **resultando aprobado por unanimidad.**

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leído por el Diputado Julio César Vázquez Castillo. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Posteriormente, el Diputado Presidente concede el uso de la voz al Diputado David Ruvalcaba Flores, para presentar a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Proposición con Punto de Acuerdo, con solicitud de dispensa de trámite; bajo los siguientes puntos resolutivos:

PRIMERO: Se exhorta al Secretario de Educación, Catalino Zavala Márquez a efecto de que realice las gestiones conducentes para incluir la lectura de libros en los criterios de evaluación de los docentes en el Estado de Baja California

SEGUNDO: Se exhorta al Secretario de Educación en el Estado de Baja California Catalino Zavala Márquez, a efecto de que elabore anualmente una lista de libros recomendados para el nivel de educación básica y los publique de manera electrónica para que los maestros promuevan la lectura de los mismos.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES BENITO JUÁREZ DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA A LOS 11 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020.

Enseguida, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; en donde hace uso de la palabra la Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona.

A continuación, no existiendo ninguna otra intervención de los Ciudadanos Diputados, el Diputado Presidente, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobada por unanimidad**.

Acto continuo, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación nominal la Proposición; **resultando aprobado por 19 votos a favor,** de los siguiente Ciudadanos Diputados: Ruvalcaba Flores David, Geraldo Núñez Araceli, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Agatón Muñiz Claudia Josefina, Vázquez Castillo Julio César, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Rodríguez Eva Gricelda, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Gallardo García Fausto, Luis Moreno Hernández, López Montes Gerardo, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel.

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leído por el Diputado David Ruvalcaba Flores. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Posteriormente, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Eva María Vásquez Hernández, para presentar a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Proposición con Punto de Acuerdo, con solicitud de dispensa de trámite; bajo los siguientes puntos resolutivos:

ÚNICO: El Poder Legislativo del Estado, remite atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para que en ejercicio de sus atribuciones restaure, restituya y reinicie el funcionamiento y operación de la Casa del Emprendedor localizada en la Calle Cuarta y Rio Bravo de la Delegación Gonzales Ortega PALACO, de Mexicali Baja California, esto a efecto de cumplir con lo dispuesto por el Artículo 1 y 133 (Protección Amplia y Supremacía de normas), quinto párrafo del Artículo 3 (prioridad del acceso y participación de servicios educativos, así como fracción II inciso h), criterio integral relativo a educar para la vida) Artículo 4 (derecho de acceso al desarrollo de la cultura, libertad creativa y manifestación cultural), éstos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Apartado A de la del Artículo 7 y la fracción VI del Artículo 8, segundo y tercer párrafos del Artículo 98, estos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN.

Enseguida, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate de la solicitud de dispensa de trámite presentada. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra de la misma; de no ser así, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobada por mayoría de los Diputados presentes**.

Posteriormente, el Diputado Presidente y de acuerdo a lo que establece el Artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, declara abierto el debate del Punto de Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el Artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo; en donde hace uso de la palabra la Diputada María Luisa Villalobos Ávila.

A continuación, no existiendo ninguna otra intervención de los Ciudadanos Diputados, el Diputado Presidente, solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora la someta a votación en forma económica, **resultando aprobado por mayoría de los Diputados presentes.**

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a declarar aprobada la Proposición con Punto de Acuerdo, leído por la Diputada Eva María Vásquez Hernández. Dado en el Salón de sesiones "Licenciado Benito Juárez García" del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en Sesión Ordinaria de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura, a los once días del mes de marzo del año dos mil veinte.

Se continua con el siguiente punto del Orden del Día, relativo a **"Posicionamientos",** en donde el Diputado Presidente le concede el uso de la voz a la

Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, para presentar a nombre propio y como integrante del Grupo Parlamentario MORENA, Posicionamiento relativo a los hundimientos y socavones que se han presentado en las calles de la ciudad de Tijuana.

Enseguida y agotado el Orden del Día el Diputado Presidente cita a los Ciudadanos Diputados integrantes de esta Vigésima Tercer Legislatura del Estado, a Sesión Ordinaria el día miércoles veinticinco de marzo del año dos mil veinte, a las once horas en el Recinto Oficial "Licenciado Benito Juárez García" del edificio del Poder Legislativo, en Mexicali, Baja California. Se levanta la Sesión Ordinaria, siendo las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día miércoles once de marzo del año dos mil veinte.

La presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de Clausura de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura el día 25 de marzo del año dos mil veinte, ante la presencia del C. Diputado Presidente Víctor Manuel Morán Hernández, quien autoriza la presente Acta asistida de la Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva Carmen Leticia Hernández Carmona, quien con su firma da fe.

_____ _____

PRESIDENTE **SECRETARIA**

(CONCLUYE DOCUMENTO)

(SE INSERTA ACTA DE LA SESIÓN PREVIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2020)

APROBADA

_____ _____

PRESIDENTA SECRETARIA

DIA: MES: AÑO 2020.

ACTA DE SESIÓN PREVIA DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA, PARA LA ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE CONDUCIRÁ LOS TRABAJOS DEL TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE VIGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE SESIONES "LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA", EL DÍA MIÉRCOLES VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

PRESIDENTE C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

(Asistencia de veinticinco ciudadanos Diputados)

SECRETARIA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día miércoles veinticinco de diciembre del año dos mil veinte, da inicio la Sesión Previa de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura del Estado de Baja California.

Enseguida, y antes de iniciar la Sesión Previa el Diputado Presidente solicita a los Diputados, Diputadas y público asistente ponerse de píe para brindarle un minuto de silencio al Ex Diputado de la Honorable XIII Legislatura Bernardo Borbón Vilches

Acto seguido, el Diputado Presidente procede a llevar a cabo el desarrollo de esta sesión en que habrá de elegirse la Mesa Directiva de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura del Estado, que habrá de funcionar a partir del día 01 de abril al 31 de julio de 2020. Y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, le solicita a la Diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia, misma que certifica la presencia de los Ciudadanos Diputados: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Eli, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio Cesar, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa".

Acto continuo, el Diputado Presidente solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a consideración de la asamblea el orden del día, resultando aprobado en votación económica por unanimidad de los Diputados presentes.

A continuación, y con base en lo que establece el Artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, el Diputado Presidente concede el uso de la voz a la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, en su calidad de Presidenta de la Junta de Coordinación Política, para dar lectura a Acuerdo en donde se establecen los nombres de los Diputados

que integrarán la Mesa Directiva que habrá de funcionar durante el Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Vigésima Tercer Legislatura del Estado, que comprende del 1 de abril al 31 de julio del año 2020, quedando en los siguientes términos:

ÚNICO.- La propuesta para integrar la Mesa Directiva así como el cargo que ocuparán para el TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA, QUE COMPRENDERA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2020, se integra por:

PRESIDENTE.-	DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE.-	DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO
SECRETARIA.-	DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
PRO SECRETARIO.-	DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA
SECRETARIA ESCRUTADORA.-	DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA

El método de su elección será mediante VOTACIÓN POR NOMINAL, DE LA PROPUESTA REMITIDA POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA.

Dado en la sala "Octavio Paz" del edificio del Congreso del Estado de Baja California, ciudad de Mexicali a los 24 días del mes de marzo de 2020.

Enseguida, el Diputado Presidente de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo

ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora lo someta a votación en forma económica, resultando aprobado por unanimidad de los Diputados presente.

A continuación, el Diputado Presidente de acuerdo a lo que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo declara abierto el debate del Acuerdo presentado. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del mismo ordenamiento legal, pregunta a las Diputadas y Diputados si desean intervenir en contra del mismo, de no ser así solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado con 25 votos a favor, de los ciudadanos Diputados: Vázquez Valadez Ramón, Ruvalcaba Flores David, Bujanda Ruíz Miguel Ángel, Geraldo Núñez Araceli, Topete Robles Elí, Otañez Licona Rodrigo Anibal, Agatón Muñiz Claudia Josefina, Vázquez Castillo Julio César, Vásquez Hernández Eva María, Quintero Quintero Loreto, Del Villar Casas Rosina, Villalobos Ávila María Luisa, Caballero Ramírez Monserrat, Rodríguez Eva Gricelda, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Molina García Juan Manuel, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Meléndrez Espinoza Juan, Gallardo García Fausto, Hernández Carmona Carmen Leticia, Vaca Chacón María Trinidad, González Quiroz Julia Andrea, Morán Hernández Víctor Manuel.

Posteriormente, el Diputado Presidente hace mención que la Mesa Directiva que habrá de funcionar durante el Tercer Período Ordinario de sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional ha quedado legítimamente constituida, para funcionar a partir del día 1 de abril al 31 de julio de 2020.

Agotado el orden del día, el Diputado Presidente procede a clausurar la Sesión Previa, siendo las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del día miércoles veinticinco

de marzo del año dos mil veinte; asimismo cita a los ciudadanos Diputados para el día miércoles 15 de abril del año en curso, a las 11:00 horas a Sesión de Instalación y Apertura.

La presente Acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de Clausura de la Honorable Vigésima Tercera Legislatura el día 25 de marzo del año dos mil veinte, ante la presencia del C. Diputado Presidente Víctor Manuel Morán Hernández, quien autoriza la presente Acta asistida de la Diputada Secretaria de esta Mesa Directiva Carmen Leticia Hernández Carmona, quien con su firma da fe.

PRESIDENTE	**SECRETARIA**

(CONCLUYE DOCUMENTO)

(SE INSERTA CORRESPONDENCIA RECIBIDA)

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
XXIII LEGISLATURA

PRESIDENCIA

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
AL DÍA 25 DE MARZO DE 2020

Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	(1)	OFICIO No. DEMS/75/2020 recibido el 25 de Febrero de 2020, que remite el C CARPIO ASCENCIO EUGENIO JUAN, en su calidad de DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, Mediante el cual solicita apoyo en dos diferentes gestiones con Números 71787 y 72255 (se anexan con copias simples).
Túrnese a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología	(2)	OFICIO No. DEMS84/2020 recibido el 2 de Marzo de 2020, que remite el C CARPIO ASCENCIO EUGENIO JUAN, en su calidad de DIRECTOR DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR, Mediante el cual solicita apoyo de

gestión Número 72645 (se anexa con copias simples).

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

(3) OFICIO No. IEEBC/CGE/296/202 recibido el 10 de Marzo de 2020, que remite el LIC. RAMOS MENDOZA CLEMENTE CUSTODIO, en su calidad de CONSEJERO PRESIDENTE del CONSEJO ELECTORAL DEL IEE, mediante el cual envía Iniciativa de Ley que formula el Instituto Estatal Electoral de Baja California, por la que se expide la Nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California. (SE ANEXA CERTIFICADO, UN CD, DOS ENCUADERNADO.

Túrnese a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca

(4) OFICIO No. 749-2/20201d.p recibido el 10 de Marzo de 2020, que remite el DIPUTADO RENÉ FRÍAS BENCOMO, en su calidad de PRESIDENTE del H. CONGRESO del ESTADO de CHIHUAHUA, mediante el cual exhorta a los Presidentes de las Comisiones de Agricultura y Desarrollo Rural de las 31 Entidades Federativas a pronunciarse ante el Gobierno Federal en relación al pago de los Productores Agrícolas que tengan contratos a ASERCA, para garantizar su ingreso, asimismo que se pronuncien ante el Congreso Federal, para solicitar la comparecencia del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural.

Túrnese a la Comisión de Salud

(5) OFICIO No. LXII/2/SSP/DPL/094 recibido el 10 de Marzo de 2020, que remite el LIC. BENJAMÍN GALLEGOS SEGURA, en su calidad de SECRETARIO de SERVICIOS PARLAMENTARIOS del H. CONGRESO del ESTADO de GUERRERO, en el que exhorta al Secretario de Salud del Gobierno Federal, Doctor Jorge Alcocer Varela, así como al Director del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), LICENCIADO JUAN ANTONIO FERRER AGUILAR, PARA QUE DE MANERA urgente se establezcan los lineamientos y Reglas de Operación que permitan precisar el fortalecimiento en la prestación de los Servicios de Salud en los primeros, segundo y el tercer niveles de salud, así como garantizar la gratitud de medicamentos.

Túrnese al Dip. Gerardo López Montes

(6) OFICIO No. CEDHBC/TIJ/OT/30 recibido el 10 de Marzo de 2020, que remite el C MORA MARRUFO MIGUEL ANGEL, en su calidad de PRESIDENTE COMISION ESTATAL DERECHOS HUMANOS, mediante el cual envía respuesta al acuerdo aprobado el 26 de febrero de 2020, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, para que solicite la declaración

		de una Alerta de Violencia de Género ante las instancias correspondientes en los términos del Artículo 20 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(7)	OFICIO No. SANMA/2/2020 recibido el 11 de Marzo de 2020, que remite el MTRO BLASQUEZ SALINAS MARCO ANTONIO, en su calidad de DIRECTOR DE INDIVI, mediante el cual envía Cuenta Pública anual para el Ejercicio Fiscal 2019, de Fideicomiso 243 San Antonio del Mar.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(8)	OFICIO No. TJE-0220/2019 recibido el 11 de marzo de 2020, que remite el LIC. LOAIZA CERVANTES LEOBARDO, en su calidad de MAGISTRADO PRESIDENTE del TRIBUNAL de JUSTICIA ELECTORAL del ESTADO de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía ampliación de partidas, correspondiente al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, por un monto de $3,868,500.00
Túrnese a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales	(9)	ESCRITO S/N recibido el 11 de marzo de 2020, que remite el MTRO CURIEL VILLASEÑOR IVÁN JOSÉ, en su calidad de MAGISTRADO de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, mediante el cual envía renuncia a su cargo que ha venido desempeñando desde 09 de mayo del 2019.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(10)	OFICIO No. SA284-III-2020 recibido el 12 de marzo de 2020, que remite el M. ING. LÓPEZ LÓPEZ GONZALO, en su calidad de DIRECTOR GENERAL CESPTE, mediante el cual envía la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (ESPTE) (Se anexa carpeta y cd.)
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(11)	OFICIO No. PRES-018/2020 recibido el 13 de marzo de 2020, que remite el LIC. LOAIZA MARTÍNEZ ALBERTO, en su calidad de PRESIDENTE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO ESTADO B.C., mediante el cual informa que la ampliación solicitada por la XXIII Legislatura de B.C. por la cantidad de $ 880,800.00 M.N., se ha configurado en su forma tácita.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(12)	OFICIO No. PRES-017/2020 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el LIC. LOAIZA MARTÍNEZ ALBERTO, en su calidad de PRESIDENTE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL

ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO ESTADO B.C., mediante el cual informa que la ampliación solicitada por la XXIII Legislatura de B.C. por la cantidad de $ 124,138.13 M.N., se ha configurado en su forma tácita.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (13) OFICIO No. PRES-016/2020 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el LIC. LOAIZA MARTÍNEZ ALBERTO, en su calidad de PRESIDENTE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVO ESTADO B.C., mediante el cual solicita transferencias entre partidas presupuestales del grupo 10000 Servicios Personales por un monto $ 61,900.00 M.N.

Túrnese a la Comisión de Igualdad Entre Mujeres, Hombres y Juventud (14) OFICIO S/N recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el DIP. AMADOR CASTRO PEDRO, en su calidad de DIPUTADO DEL ESTADO DE DURANGO, MEDIANTE EL CUAL ENVÍA PARA SU ADHESIÓN PUNTO DE ACUERDO, en el que exhorta a la ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA respecto al tema de violencia de género.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (15) OFICIO No. IN-CAB/0913/20 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el LIC. MURGUÍA MEJÍA CARLOS, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIAL, mediante el cual envía Dictamen XXIII-HDA-024/2020 Solicitud de modificación presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del municipio de Tijuana, B.C.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (16) OFICIO No. PD/32/2020 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el MTRO BLASQUEZ SALINAS MARCO ANTONIO, en su calidad de DIRECTOR DE INDIVI, mediante el cual envía Cuenta Pública anual para el Ejercicio Fiscal 2019, de Promotora del Desarrollo Urbano de Tijuana, S.A. de C.V.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (17) OFICIO No. 001083 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el C.P.J. JAUREGUI SANTILLÁN NETZAHUALCOYOTL, en su calidad de SECRETARIO DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, mediante el cual envía aviso de modificaciones presupuestales que no requieran de autorización en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020, de la Entidad Paramunicipal Dirección de Desarrollo Social Municipal.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(18)	OFICIO No. 001084 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el C.P.J. JAUREGUI SANTILLÁN NETZAHUALCOYOTL, en su calidad de SECRETARIO DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, mediante el cual envía aviso de modificaciones presupuestales que no requieran de autorización en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, de la Entidad Paramunicipal Patronato D.A.R.E. de MEXICALI, B.C.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política	(19)	OFICIO No. IN-CAB/0941/20 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el LIC. MURGUÍA Mejía CARLOS, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIAL, mediante el cual envía el Plan Municipal de Desarrollo 2020-21 del Municipio de Tijuana, Baja California.
Túrnese a la Dirección de Administración	(20)	OFICIO No. OASF/0018/2020 recibido el 13 de Marzo de 2020, que remite el C. COLMENARES PARAMO DAVID, en su calidad de AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, Mediante el cual envía Informe Individual de Auditoría que contiene las Solicitudes de Aclaración, pliegos de Observaciones y Recomendaciones, para atenderse en un plazo no mayor de 30 Días. (se anexa cd)
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(21)	OFICIO No. PM-0154-2020 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite la ALCALDES AVILA OLMEDO MARIA DEL PILAR, en su calidad de PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H. XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, Mediante el cual solicita Refinanciamiento de la Deuda Pública Municipal.(se anexa carpeta)
Túrnese a la Junta de Coordinación Política	(22)	OFICIO No. SGA/VIII-133-2020 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C. MORENO AVILA MIGUEL ANGEL, en su calidad de SECRETARIO DE PLAYAS DE ROSARITO, B.C., mediante el cual el Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito PMD-2020-2021 se acompaña de dictamen de compatibilidad emitido por COPLADE.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(23)	OFICIO No. TM-PP-VIII-0292/20 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el L.A.E ZERMEÑO CHAVEZ MANUEL, en su calidad de TESORERO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, mediante el cual envía la aprobación de creación de plazas de confianza y pago de compensaciones para conocimiento y revisión de la Cuenta Pública.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(24)	OFICIO No. TM-PP-VIII-0273/20 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el L.A.E ZERMEÑO CHAVEZ MANUEL, en su calidad de TESORERO MUNICIPAL ROSARITO, mediante el cual remite las siguientes modificaciones presupuestales del H. VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para conocimiento y revisión de la Cuenta Pública.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(25)	OFICIO No. 382 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 11 Secretaría de Economía Sustentable y Turismo por un importe de $ 12 MILLONES 697 MIL 875 PESOS 96/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(26)	.- OFICIO No. 383 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 04 Secretaría General de Gobierno por un importe de $ 57 MIL PESOS 00/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(27)	OFICIO No. 384 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 05 Oficialía Mayor por un importe de $9 MILLONES 863 MIL 545 PESOS 00/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(28)	OFICIO No. 385 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 14 Secretaría de Educación por un importe de $15 MILLONES 452 MIL 400 PESOS 33/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(29)	OFICIO No. 387 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo

03 Oficina de la Gubernatura por un importe de $69 MIL 210 PESOS 80/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (30) OFICIO No. 389 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales de las partidas 16103 por un importe de $43 MILLONES 010 MIL 629 PESOS 51/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (31) OFICIO No. 390 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación programática del Ramo 16 Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (32) OFICIO No. 391 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el Cual envía aviso de modificación programática del Ramo 16 Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (33) .- OFICIO No. 393 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación programática del Ramo 16 Secretaría de Integración y Bienestar Social.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (34) OFICIO No. 392 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZALEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, MEDIANTE EL CUAL ENVÍO A USTED, AVISO DE MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA DEL RAMO 16 SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (35) OFICIO No. 394 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación programática del Ramo 10 secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial.

Túrnese a la Unidad de Asuntos Jurídicos (36) ESCRITO S/N recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el LIC. ZURITA LÓPEZ ESTEBAN

RICARDO, en su calidad de SOLICITANTE, mediante el cual solicita por triplicado copias certificadas del Acta de Sesión Ordinaria de la XXII Legislatura del Congreso del Estado, celebrada el 6 de septiembre de 2018.

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (37) ESCRITO S/N recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el LIC. ZURITA LÓPEZ ESTEBAN RICARDO, en su calidad de DEMANDANTE, mediante el cual solicita se inicie el proceso de selección y nombramiento del titular del Órgano Interno de Control del Sistema Estatal Anticorrupción.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (38) OFICIO No. 399 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 22 Secretaría de Salud por un importe de 4 MILLONES 789 MIL 990 PESOS 28/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (39) .- OFICIO No. 376 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del ramo 10 Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial por un importe de $ 70 MILLONES 280 MIL 242 PESOS 98/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (40) OFICIO No. 377 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del ramo 14 Secretaría de Educación por un importe de $570 MIL 339 PESOS 74/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (41) OFICIO No. 378 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del ramo 14 Secretaría de Educación por un importe de $ 6 MIL 614 PESOS 19/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (42) OFICIO No. 379 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA,

		mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 04 Secretaría General de Gobierno y Ramo 06 Fiscalía General del Estado de Baja California por un importe de $ 54 MILLONES 077 MIL 481 PESOS 43/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(43)	OFICIO No. 380 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediamente cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del ramo 25 financiamiento y deuda público por un importe de $130 MILLONES 210 MIL 846 PESOS 00/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(44)	OFICIO No. 381 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del ramo 22 Secretaría de Salud por un importe de $ 246 MILLONES 625 MIL 825 PESOS 86/100 M.N.
Túrnese a la Dirección de Administración	(45)	OFICIO No. SG-070/2020 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el LIC. GUERRERO LUNA MANUEL, en su calidad de SECRETARIO GENERAL DE S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C., Mediante el cual solicita que en atención a la alerta a nivel Nacional del COVID-19, se implementen las medidas necesarias en áreas de Trabajo, siendo las Siguientes:1.- Filtros Sanitarios a la entrada de Edificios 2.- Gel Antibacterial 3.- Jabón en las áreas de higiene del Personal 4.- Cubre bocas
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(46)	OFICIO No. 420 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 14 ¨Secretaría de Educación¨ del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para el año fiscal 2020, por un importe de $6 MILLONES 365 MIL 675 PESOS 89/100 M.N.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto	(47)	OFICIO No. 421 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación programática del Ramo 16 ¨Secretaría de

Integración y Bienestar Social derivada de un movimiento presupuestal automático correspondiente a una transferencia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020,

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (48) OFICIO No. 422 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación programática del Ramo 14 ¨Secretaría de Educación¨ derivada de un movimiento presupuestal automático correspondiente a una transferencia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (49) OFICIO No. 419 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 ¨Erogaciones Adicionales¨ al Ramo 12 ¨Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria¨ del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por $1,640,468,00 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (50) OFICIO No. 418 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 ¨Erogaciones Adicionales¨ al Ramo 08 ¨Secretaría de la Honestidad y la Función Pública¨ del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por $179,118.40 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (51) OFICIO No. 415 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación del Ramo 22 ¨Secretaría de Salud¨ por el monto de $ 356 MIL 325 PESOS 14/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (52) OFICIO No. 416 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía, aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 ¨Erogaciones Adicionales¨ al Ramo 06

¨Fiscalía General del Estado de Baja California¨ del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por $56,593,270.00 PESOS00/100 M.N..

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (53) OFICIO No. 417 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Ramo 24 ¨Erogaciones Adicionales¨ al Ramo 14 ¨Secretaría de Educación¨ del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por $28, MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (54) OFICIO No. 410 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de ampliación presupuestal para ampliar la asignación de recursos de la partida 041401 ¨Asignaciones presupuestales Órganos Anónimos¨ de la UABC del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 del Ramo 26 ¨Organismos Autónomos¨, por la cantidad de $173 MILLONES 814 MIL PESOS 00/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (55) OFICIO No. 412 recibido el 17 de Marzo de 2020, que remite el C GONZALEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envío a Usted, aviso de ampliación presupuestal para ampliar la asignación presupuestal en el Ramo 22 ¨Secretaría de Salud¨, del Presupuesto de Egresos el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $3 MILLONES 929 MIL 934 PESOS 22/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (56) OFICIO No. 413 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA en el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación presupuestal en el Ramo 22 ¨Secretaría de Salud¨, del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por un total global de $87,542,632.77 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (57) OFICIO No. 414 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO

DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación presupuestal en el Ramo 22 ¨Secretaría de Salud¨, del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por un total global de $13 MILLONES 802 MIL 637 PESOS 71/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (58) OFICIO No. 408 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar recursos en el presupuesto de Egresos en el Ramo 10 ¨Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial¨, por un importe de $1 MILLON 930 MIL PESOS 00/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (59) OFICIO No. 407 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, el cual envía aviso de modificación presupuestal para ampliar la asignación presupuestal en el Ramo 22 ¨Secretaría de Salud¨, del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, por un total global de $797MIL 547 PESOS 10/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (60) OFICIO No. 411 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para adecuar el importe de $2 MILLONES 525 MIL 485 PESOS 00/100 M.N. de la asignación presupuestal del Ramo 14 ¨Secretaría de Educación¨.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (61) OFICIO No. 409 recibido el 17 de marzo de 2020, que remite el C GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO de HACIENDA de BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para adecuar el importe de $44 MILLONES 958 MIL 712 PESOS 00/100 M.N. de la asignación presupuestal del Ramo 14 ¨Secretaría de Educación¨.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público (62) OFICIO No. 1313.7/035/2020 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el C. IBARRA PICOS HUMBERTO, en su calidad de EL COORDINADOR ESTATAL DE INEGI, Mediante el cual solicita información sobre registros administrativos de las finanzas de los Gobiernos Municipales, (se anexa un cd)

Túrnese a la Comisión de Justicia	(63)	OFICIO No. DIPFGGPVEM NO. 032/2020 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el DIP. GALLARDO García FAUSTO, en su calidad de INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual envía Iniciativa que Reforma el Código Penal para el Estado de Baja California, con el fin de sancionar a quien desobedezca un mandato legítimo de Autoridad Judicial con el fin de informar acerca de ingresos del deudor alimentario.
Túrnese a la Comisión de Justicia	(64)	OFICIO No. DIPFGGPVEM NO. 034/2020 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el DIP. GALLARDO García FAUSTO, en su calidad de INTEGRANTE DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, mediante el cual envía Iniciativa de Reforma al Código Penal para el Estado de Baja California, con el fin de sancionar a quien imparta ilícitamente educación, sin tener el reconocimiento de validez oficial del estado.
Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, Familia y Asuntos Religiosos	(65)	OFICIO No. 33/2020 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el C. MORA MARRUFO MIGUEL ANGEL, en su calidad de PRESIDENTE COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE LA SOLICITUD DE LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA NUESTRO ESTADO HA SIDO ADMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(66)	OFICIO No. /CA/038/03/20 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el DR. SANDEZ PÉREZ AGUSTIN, en su calidad de COORDINADOR GENERAL DEL COMPLADEMM, mediante el cual envía Cuenta Público 2019, de Comité de Planeación para Desarrollo del Municipio de Mexicali, (COPLADEMM).
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes	(67)	OFICIO No. SGG/BC/069/2020 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el LIC. Rodríguez LOZANO AMADOR, en su calidad de SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, mediante el cual envía Iniciativa de Decreto por el cual se crea la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.
Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público	(68)	OFICIO No. 000000 recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el LIC. ZAVALA MARQUEZ CATALINO, en su calidad de SECRETARIO DE EDUCACIÓN, mediante el cual envía para su revisión y análisis la documentación que

integra el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre 2019.

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

(69) OFICIO S/N recibido el 18 de Marzo de 2020, que remite el LIC. RINCON REY DAVID JESUS, en su calidad de CIUDADANO, mediante el cual envía propuesta ciudadana de Iniciativa de Ley para que se modifique el artículo 114 BIS y se adicione un artículo 171 TER al Código Penal para el Estado de Baja California.

Túrnese a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

(70) INICIATIVA No. VMM//125/2020 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el DIP. MORÁN HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL, en su calidad de DIPUTADO DE LA XXIII LEGISLATURA, mediante el cual envía la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Túrnese a la Comisión de Salud

(71) INICIATIVA S/N recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el DIP. GERALDO NUÑEZ ARACELI, en su calidad de DIPUTADO XXIII LEGISLATURA DE BAJA CALIFORNIA, con proyecto de decreto por el que se adiciona la sección VI denominado control, prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de diabetes, mellitus así como los Artículos 106 Quinquies, 106 Sexies, 106 Septies y 106 Octies Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California.

Túrnese a la Comisión de Justicia

(72) INICIATIVA S/N recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el DIP. BUJANDA RUÍZ ÁNGEL MIGUEL, en su calidad de DIPUTADO XXIII LEGISLATURA CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, que Reforma al Artículo 255 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Túrnese a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público

(73) OFICIO No. CTA/318/2020 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el SR. LEYVA CAMACHO GILBERTO, en su calidad de PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TURISMO Y CONVENCIONES DE TIJUANA, mediante el cual envía la documentación que integra la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019 del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal del Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Tijuana. (dos carpetas y un cd)

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto

(74) OFICIO No. 0000445 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ

HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Presupuesto de Egresos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 16 Secretaría de Integración y Bienestar Social, por un importe de $145 Millones 262 Mil 325 Pesos 00/100 M.N.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (75) OFICIO No. 0000446 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos de diversas partidas del capítulo 10000 del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo, para el ejercicio fiscal 2019, por un importe de $161 Millones 055 Mil 953 Pesos 53/100 M.N

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (76) OFICIO No. 0000447 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Presupuesto de Egresos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 28 Desarrollo Municipal por un importe de $1 Millón 183 Mil 676 Pesos 55/100 M.N

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (77) OFICIO No. 0000448 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Presupuesto de Egresos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 05 Oficialía Mayor de Gobierno por un importe de $180 Mil 450 Pesos 00/100 M.N

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Presupuesto (78) OFICIO No. 0000449 recibido el 19 de Marzo de 2020, que remite el C. GONZÁLEZ HIGUERA ADALBERTO, en su calidad de SECRETARIO DE HACIENDA DE BAJA CALIFORNIA, mediante el cual envía aviso de modificación presupuestal para transferir recursos del Presupuesto de Egresos del Ramo 24 Erogaciones Adicionales al Ramo 21 Secretaría de Seguridad Pública por un importe de $12 Millones 283 Mil 683 Pesos 73/100 M.N

(CONCLUYE DOCUMENTO)

(SE INSERTA CORRESPONDENCIA DESPACHADA)

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA DESPACHADA POR LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA

AL 25 de marzo de 2020

Oficio dirigido al Ing. Jaime Bonilla Valdez. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, para su debida publicación en el Periódico Oficial del Estado:

Oficio No. 3710, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el cual se remite dictamen No. 36, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3712, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Zulema Adams Pereyda, mediante el cual se remite dictamen No. 36, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3714, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Hilda Araceli Brown Figueredo , mediante el cual se remite dictamen No. 36, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3716, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Hilda Araceli Brown Figueredo, mediante el cual se remite dictamen No. 34, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al inciso b) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3717, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Armando Ayala Robles, mediante el cual se remite dictamen No. 34, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al inciso b) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3718, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Arturo González Cruz, mediante el cual se remite dictamen No. 34, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al inciso b) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No. 3719, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el cual se remite dictamen No. 34, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprueba la reforma al inciso b) de la fracción VI del artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Oficio No., de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al Dr. Carlos Manuel Urzua Macías, Secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se envía Acuerdo relativo atender la problemática para evitar el colapso económico y social del Valle de Mexicali.

Oficio No., de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante el cual se envía Acuerdo relativo atender la problemática para evitar el colapso económico y social del Valle de Mexicali.

Oficio No. 3791, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al Ing. Francisco Javier Delgado Mendoza, Director general de Financiamiento de Desarrollo Agropecuario Rural, Forestal y Pesquero, mediante el cual se envía Acuerdo relativo atender la problemática para evitar el colapso económico y social del Valle de Mexicali.

Oficio No. 3792, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido a al C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el cual se envía acuerdo por lo que se le exhorta a la Presidenta Municipal de Mexicali, para que dentro de su Administración Municipal, desarrolle un plan integral de movilidad urbana sustentable.

Oficio No. 3793, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido a la C. Hilda Araceli Brown Figueredo, mediante el cual se envía acuerdo por lo que se le exhorta a la Presidenta Municipal de Playas de Rosarito, para que dentro de su Administración Municipal, desarrolle un plan integral de movilidad urbana sustentable.

Oficio No. 3794, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Olga Zulema Adams Pereyda, mediante el cual se envía acuerdo por lo que se le exhorta a la Presidenta Municipal de Tecate, para que dentro de su Administración Municipal, desarrolle un plan integral de movilidad urbana sustentable.

Oficio No. 3795, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Armando Ayala Robles, mediante el cual se envía acuerdo por lo que se le exhorta al Presidente Municipal de Ensenada, para que dentro de su Administración Municipal, desarrolle un plan integral de movilidad urbana sustentable.

Oficio No.3796, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigidos al Ing. Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual se envía acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones restaure restituya y reinicie el fundamento y operación de la casa del Emprendedor Localizada en la Calle Cuarta y Río Bravo de la Delegación González Ortega PALACO, de Mexicali Baja California.

Oficio No. 3800, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Ing. Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual se envía acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado, a efecto que instruya al personal a su cargo, para que informe a esta Soberanía, sobre los avances y fecha programada para dar inicio a los trabajos con totalidad de las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de Baja California.

Oficio No. 3801, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Ing. Jaime Bonilla Valdez,, mediante el cual se envía acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a las dependencias a su cargo, a fin de que coordinen esfuerzo en la inspección y vigilancia en el cumplimiento de los derechos laborales, seguros pagos de prestaciones y acceso a la seguridad social en favor de las personas privadas de su libertad que realizan labores en el centro penitenciarios en el Estado.

Oficio No. 3802, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Ing. Jaime Bonilla Valdez, mediante el cual se envía acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado, a efecto de que reciba y admita en donación a perpetuidad, la antorcha olímpica, con la finalidad de que forme parte del patrimonio histórico del Congreso del Estado.

Oficio No. 3803, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al C. Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante el cual se envía acuerdo por el que se exhorta a la presidenta Municipal de Mexicali, a efecto que realice las gestiones necesarias ante el Consejo Municipal de Nomenclatura, a fin de que se asigne oficialmente el

nombre de “Norma Enriqueta Basilio Sotero” a la vialidad principal del Ejido Puebla, hasta ahora conocida como Ignacio Zaragoza

Oficio No. 3898, de fecha de 18 de marzo de 2020, dirigido al Mtra. Laura Luisa Torres Ramírez, Titular de la secretaria de Integración y Bienestar Social, mediante el cual se envía se le hace de su conocimiento que la comparecencia ante la Junta de Coordinación Política y los Diputados Integrantes se llevara a cabo el día 25 de marzo de 2020 a las 12:00 de este Poder Legislativo.

Oficio No. 3904, de fecha de 11 de marzo de 2020, dirigido al. Mtro. Catalino Zavala Márquez, Secretario de Educación, mediante el cual se envía acuerdo relativo a que realice las gestiones conducentes para incluir la lectura de libros en los criterios de evaluación de los docentes en el Estado de Baja California.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, se continúa con el siguiente apartado **“Comunicaciones Oficiales”,** para lo cual se le concede el uso de la voz a la Diputada Secretaria Carmen Hernández Carmona, para dar lectura a declaratoria de procedencia del Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la Iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como a los artículo 35, 38, 69, 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California. Tiene el uso de la voz Diputada.

- LA C. SECRETARIA: Gracias Diputado Presidente, procedo a dar lectura a dicha Declaratoria de procedencia de la Iniciativa de reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

DECLARATORIA

1. Con fecha 5 de febrero de 2020, fue presentada ante oficialía de partes, de este Congreso, la INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 68, 69 Y 97 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR EL ING. JAIME BONILLA VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2. Recibida que fue la iniciativa, en sesión ordinaria celebrada por la Honorable XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la iniciativa mencionada y fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, misma que fue dictaminada, en sesión de dicha comisión, bajo el Número de Dictamen 36.

3. En sesión plenaria de este H. Congreso de fecha once de marzo de dos mil veinte, fue aprobado el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene la reforma al numeral 5 de la Constitución Política local, así como los artículos 35, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

4. Mediante oficios remitidos el once de marzo de dos mil veinte, de números 003710, 003711, 003712, 003713 y 003714 suscritos por los Diputados PRESIDENTE y SECRETARIA, Víctor Manuel Morán Hernández y Carmen Leticia Hernández Carmona, respectivamente, los cuales fueron recibidos por los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito el día doce de marzo de dos mil veinte, fue solicitado, con fundamento en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, el sentido de su voto en relación a la aprobación realizada por el Pleno del Honorable Congreso del Estado del Dictamen Número 36, de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, referente a la REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEBAJA CALIFORNIA, así como los artículos 35, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del Estado de Baja California.

5. Con fecha diecinueve de marzo de dos mil veinte, fue recibido oficio No. IN CAB/0977/20, del Secretario de Gobierno Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana

Baja California, C. Carlos Murguía Mejía, por el cual, remite certificación de acuerdo de cabildo, por el que, ese Honorable Cuerpo Edilicio, determina aprobar por mayoría, el punto de acuerdo, por el cual, el Ayuntamiento constitucional de Tijuana, Baja California, SE DECLARA A FAVOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

6. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, fue recibida certificación del acuerdo de cabildo del Secretario del XXIII Ayuntamiento, de Mexicali, Baja California, J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN, por el cual, señala que en sesión ordinaria celebrada los días 20 y 24 de marzo de dos mil veinte, se tomó el acuerdo, por mayoría de votos, de aprobar el que el XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, se pronuncia a favor de la REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, a que se refiere el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

7. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, fue recibida certificación de acta de sesión de cabildo número 15, de carácter extraordinaria, celebrada el 20 de marzo del año dos mil veinte, que remite el C. LIC. RAÚL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES, Secretario del Ayuntamiento de Tecate, Baja California, por el cual, señala que por votación de mayoría absoluta de votos, el Ayuntamiento de Tecate, Baja California, aprueba el Dictamen Número 36 remitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto a la REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, dando cumplimiento al artículo 112 de la Constitución Local.

8. Con fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, fue recibido oficio PM/607/2020, que remite la C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, Baja California, por el cual se envía

certificación de punto de acuerdo, relativo a la aprobación por mayoría de votos del cabildo de dicho cuerpo edilicio, de los Dictámenes Número 34 y 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión extraordinaria de cabildo del día 18 de marzo del año en curso.

9. A partir de la fecha en que fueron recibidos los oficios descritos en el punto cuarto de esta declaratoria; los AYUNTAMIENTOS DE TIJUANA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO Y TECATE, manifestaron expresamente el sentido de su voto a favor, respecto a la REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).

ÚNICO. -Se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

(Los siguiente tres párrafos quedan igual).

El proceso electoral dará inicio el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

(Los siguientes dos párrafos quedan igual).

(El APARTADO A también queda igual, así como el APARTADO B).

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y austeridad.

(Los siguientes quince párrafos quedan igual, así mismo el contenido de los APARTADOS C, APARTADO D y APARTADO E, quedan igual).

TRANSITORIOS

PRIMERO. Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO. Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la Declaratoria de Incorporación Constitucional correspondiente.

TERCERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

Firman el Presidente y la Secretaria de esta Directiva, es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DEL DICTAMEN No. 36 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES)

DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

D E C L A R A T O R I A

1. Con fecha 5 de febrero de 2020, fue presentada ante oficialía de partes, de este Congreso, la **INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 35, 68, 69 Y 97 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA POR EL ING. JAIME BONILLA VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

2. Recibida que fue la iniciativa, en sesión ordinaria celebrada por la Honorable XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la iniciativa mencionada y fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, misma que fue dictaminada, en sesión de dicha comisión, bajo el número de dictamen 36.

3. En sesión plenaria de este H. Congreso de fecha once de marzo de de dos mil veinte, fue aprobado el Dictamen Número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene la reforma al numeral 5 de

la Constitución Política local, así como como los artículos 35, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del estado de Baja California.

4. Mediante oficios remitidos el once de marzo de dos mil veinte, de números 003710, 003711, 003712, 003713 y 003714 suscritos por los **Diputados PRESIDENTE y SECRETARIA, Víctor Manuel Morán Hernández y Carmen Leticia Hernández Carmona, respectivamente**, los cuales fueron recibidos por los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito **el día doce de marzo de dos mil veinte,** fue solicitado, con fundamento en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, el sentido de su voto con relación a la aprobación realizada por el Pleno del Honorable Congreso del Estado del Dictamen Número 36, de la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, referente a la **REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,** así como como los artículos 35, 68, 69 y 97 de la Ley Electoral del estado de Baja California.

5. Con fecha **diecinueve de marzo de dos mil veinte,** fue recibido oficio No. IN CAB/0977/20, del Secretario de Gobierno municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana Baja California, C. Carlos Murguía Mejía, por el cual, remite certificación de acuerdo de cabildo, por el que, ese Honorable Cuerpo Edilicio, determina aprobar por mayoría, el punto de acuerdo, por el cual, el ayuntamiento constitucional de Tijuana, Baja California, **SE DECLARA A FAVOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

6. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibida **certificación del acuerdo de cabildo del Secretario del XXIII Ayuntamiento**, **de Mexicali, Baja California, J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN**, por el por el cual, señala que en sesión ordinaria celebrada los días 20 y 24 de marzo de dos mil veinte, se tomó el acuerdo, por mayoría de votos, de aprobar el que el **XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California,** se **pronuncia a favor** de la **REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,** a que se refiere el dictamen número 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

7. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibida certificación de acta de sesión de cabildo número 15, de carácter extraordinaria, celebrada el 20 de marzo del año dos mil veinte, que remite el **LIC. RAÚL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES, Secretario del Ayuntamiento de Tecate, Baja California**, **por el cual,** señala que **por votación de mayoría absoluta de votos, el Ayuntamiento de Tecate, Baja California**, aprueba el dictamen número 36 remitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, **respecto a la REFORMA EL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, dando cumplimiento al artículo 112 de la Constitución Local.**

8. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibido oficio PM/607/2020, que remite la **C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, Baja California,** por el cual se envía certificación de punto de acuerdo, relativo a la aprobación por mayoría de votos del cabildo de dicho

cuerpo edilicio, de los dictámenes número 34 y 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión extraordinaria de cabildo del día 18 de marzo del año en curso**.**

9. A partir de la fecha en que fueron recibidos los oficios descritos en el punto cuarto de esta declaratoria; los **AYUNTAMIENTOS DE TIJUANA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO Y TECATE,** manifestaron expresamente el sentido de su voto a favor, respecto a la **REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a **DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA AL ARTÍCULO 5 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).

ÚNICO. -Se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

La ...

Cuando...

Durante …

El proceso electoral dará inicio el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección. La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La …

La …

APARTADO A …

APARTADO B …

La organización de las elecciones estatales y municipales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad **y austeridad.**

El …

El …

I a la XI ...

El ...

El …

El …

Los …

Los …

El …

Los …

Los …

La …

Las …

El …

La …

APARTADO C …

APARTADO D …

APARTADO E …

TRANSITORIOS

PRIMERO. Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

SEGUNDO. Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la Declaratoria de Incorporación Constitucional correspondiente.

TERCERO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

DIPUTADA SECRETARIA-

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. SECRETARIA: Damos cuenta de la llegada del Diputado Ruvalcaba Flores David.

- EL C. PRESIDENTE: Se le concede nuevamente el uso de la voz a la Diputada Secretaria para dar lectura a la Declaratoria de procedencia del Dictamen Número 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, respecto de Iniciativa de reforma del inciso b), de la fracción VI, del Artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

- LA C. SECRETARIA: Procedo a dar lectura a la Declaratoria que a la letra dice, DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE REFORMA DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).

ÚNICO. Se aprueba la reforma al artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:

De la fracción I. a la 5, a la V, perdón, queda igual.

Si son personas menores de dieciocho arios de edad, tendrán los siguientes derechos:

El inciso a) queda igual; el inciso b).- (a la letra dice), Que el Estado les garantice de manera subsidiaria la protección nutricional a través de programas en los que se establezcan los apoyos y lineamientos necesarios a cargo de las instituciones públicas, en los términos que determine la ley, las niñas y los niños en Baja California tendrán acceso a una alimentación sana y de calidad mediante un desayuno caliente diario en escuelas públicas de nivel básico del Estado.

Inciso c) al e) queda igual; la fracción VII también queda igual, así como el primer párrafo.

El punto PRIMERO dice.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

Punto SEGUNDO.- Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para que el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Punto TERCERO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

Y firman el Diputado Presidente y la Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DEL DICTAMEN No. 34 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES)

DECLARATORIA DE PROCEDENCIA DE LA INICIATIVA DE REFORMA DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

D E C L A R A T O R I A

1. Con fecha 14 de febrero de 2020, fue presentada ante oficialía de partes, de este Congreso, la **INICIATIVA DE REFORMA DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,** PRESENTADA POR EL ING. JAIME BONILLA VALDEZ, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2. Recibida que fue la iniciativa, en sesión ordinaria celebrada por la Honorable XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la iniciativa mencionada y fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, misma que fue dictaminada, en sesión de dicha comisión, bajo el número de dictamen 34.

3. En sesión plenaria de este H. Congreso de fecha once de marzo de de dos mil veinte, fue aprobado el Dictamen Número 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene la reforma EL INCISO B) LA

FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

4. Mediante oficios remitidos el once de marzo de dos mil veinte, de números, 003715, 003716, 003717, 003718 Y 003719 suscritos por los **Diputados PRESIDENTE y SECRETARIA, Víctor Manuel Morán Hernández y Carmen Leticia Hernández Carmona, respectivamente**, los cuales fueron recibidos por los Ayuntamientos de Tecate, Playas de Rosarito, Ensenada, Tijuana y Mexicali, **el día doce de marzo de dos mil veinte,** fue solicitado, con fundamento en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, el sentido de su voto con relación a la aprobación realizada por el Pleno del Honorable Congreso del Estado del Dictamen Número 36, de la Comisión de Gobernación Legislación y Puntos Constitucionales, referente a **la REFORMA DEL INCISO B) LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

5. Con fecha **diecinueve de marzo de dos mil veinte,** fue recibido oficio No. IN CAB/097/20, del Secretario de Gobierno municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana Baja California, C. Carlos Murguía Mejía, por el cual, remite certificación de acuerdo de cabildo, de fecha 18 de marzo del año en curso, por el que, ese Honorable Cuerpo Edilicio, determina aprobar por mayoría, el punto de acuerdo, por el cual, el ayuntamiento constitucional de Tijuana, Baja California, **SE DECLARA A FAVOR DE LA REFORMA AL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

6. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibida **certificación del acuerdo de cabildo del Secretario del XXIII Ayuntamiento**, **de Mexicali, Baja California, J. NETZAHUALCOYOTL JAUREGUI SANTILLAN**, por el por el cual, señala que en sesión ordinaria celebrada los días 20 y 24 de marzo de dos mil veinte, se tomó el acuerdo, por mayoría de votos, de aprobar el que el **XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California,** se **pronuncia a favor** de la **REFORMA A DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA,** a que se refiere el dictamen número 34 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

7. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibida certificación de acta de sesión de cabildo número 15, de carácter extraordinaria, celebrada el 20 de marzo del año dos mil veinte, que remite el **LIC. RAÚL ARMANDO MARTÍNEZ NÚÑEZ DE CÁCERES, Secretario del Ayuntamiento de Tecate, Baja California**, **por el cual,** señala que **por votación de mayoría absoluta de votos, el Ayuntamiento de Tecate, Baja California**, aprueba el dictamen número 34 remitido por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, **respecto a la REFORMA EL DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, dando cumplimiento al artículo 112 de la Constitución Local.**

8. Con fecha **veinticinco de marzo de dos mil veinte,** fue recibido oficio PM/607/2020, que remite la **C. HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H.VIII AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE**

ROSARITO, Baja California, por el cual se envía certificación de punto de acuerdo, relativo a la aprobación por mayoría de votos del cabildo de dicho cuerpo edilicio, de los dictámenes número 34 y 36 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en sesión extraordinaria de cabildo del día 18 de marzo del año en curso**.**

9. A partir de la fecha en que fueron recibidos los oficios descritos en el punto cuarto de esta declaratoria; los **AYUNTAMIENTOS DE TIJUANA, MEXICALI, PLAYAS DE ROSARITO Y TECATE,** manifestaron expresamente el sentido de su voto a favor, respecto a la **REFORMA AL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículo 50 fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se procede a **DECLARAR FORMALMENTE LA REFORMA DEL INCISO B) DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.**

(Que está en esta declaratoria, para lo cual solicito que sea transcrita textualmente en el acta de esta Asamblea, así como la versión estenográfica de la misma).

ÚNICO. Se aprueba la reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:

I. a la V.- (...)

VI.- Si son personas menores de dieciocho arios de edad, tendrán los siguientes derechos:

a) (...)

b).- Que el Estado les garantice de manera subsidiaria la protección nutricional a través de programas en los que se establezcan los apoyos y lineamientos necesarios a cargo de las instituciones públicas, en los términos que determine la ley, las niñas y niños en Baja California tendrán acceso a una alimentación sana y de calidad mediante un desayuno caliente diario en escuelas públicas de nivel básico del Estado.

c) al e) (…)

VII.- (…)

(…)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO.- Aprobada la presente reforma por el Pleno del Congreso, túrnese a los Ayuntamientos para el trámite previsto en el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

TERCERO.- Agotado el proceso legislativo, y de obtener aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos, el Congreso del Estado deberá de emitir la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

DIPUTADA SECRETARIA-

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, se continua con el siguiente apartado, "**Acuerdos de los Órganos de Gobierno"**, para lo cual se le concede el uso de la voz a la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, para dar lectura al Acuerdo de la Junta de

Coordinación Política, por el que se da a conocer la integración de la Junta de Coordinación Política para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio Constitucional de la XXIII Legislatura.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual presenta ante esta asamblea legislativa la propuesta de integración de la Junta de Coordinación Política del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones desde el primer año, del Primer Año de ejercicio Constitucional de la XXIII Legislatura.

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

HONORABLE ASAMBLEA

PRESENTE

Los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 27 TERCER PÁRRAFO, 31, y 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos presentar para conocimiento del Pleno del Congreso, la PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA EL TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXIII LEGISLATURA, al tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- El órgano de gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos con representación en el Congreso, así como por los diputados pertenecientes a partidos políticos que cuenten con un solo escaño. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando el máximo consenso posible.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual presenta ante esta asamblea legislativa la propuesta de integración de la Junta de Coordinación Política del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio Constitucional de la XXIII Legislatura.

SEGUNDA.- Así también, en la Junta de Coordinación Política, se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos del Congreso a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

TERCERA.- No debe pasar inadvertido, que en virtud del reciente inicio de la XXIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política, en su carácter de Órganos de Gobierno, están realizando tareas importantes en seguimiento de la correspondiente agenda legislativa, y dentro de esas tareas resalta la elaboración del Plan de Desarrollo Legislativo mismo que es el documento rector y guía en materia de planeación y gestión legislativa de una legislatura. Dicho Plan establece las directrices a que deberá sujetarse el Congreso del Estado para definir objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de legislación, fiscalización del gasto público, gestoría comunitaria y modernización institucional del Poder

Legislativo; de conformidad con sus atribuciones. Es así, que la referida Junta de Coordinación Política debe incorporar al Plan, las propuestas de las Direcciones y Unidades Auxiliares del Congreso, así como del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la mejora continua de sus funciones y servicios mediante la optimización de sus estructuras y organización técnica de los recursos materiales y humanos disponibles. De lo anterior, resulta clara la importancia de que exista continuidad de la Presidencia del multimencionado Órgano de Gobierno, y así acordado por las fuerzas políticas representadas a través de sus conducentes Coordinadores ante dicha Junta de Coordinación Política.

CUARTA.- En vinculación directa con lo señalado en la consideración que antecede se considera que la Junta de Coordinación política para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional de esta Legislatura estará integrada por la Diputada Monserrat Caballero Ramírez en carácter de Presidenta, y como integrantes a los Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Fausto Gallardo García, Gerardo López Montes, Luis Moreno Hernández, Eli Topete Robles, David Ruvalcaba Flores, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política tiene a bien poner a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y los Diputados de Partidos Políticos que cuentan con un escaño, por las razones expuestas y sustentadas en el rubro de Consideraciones del presente acuerdo, proponemos al Pleno de este Congreso que la

Junta de Coordinación Política para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XXIII Legislatura, del primero de abril del año dos mil veinte al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, se integre con la Presidencia de la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, y como integrantes a los Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Julio Cesar Vázquez Castillo, Fausto Gallardo García, Gerardo López Montes, Luis Moreno Hernández, Eli Topete Robles, David Ruvalcaba Flores, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

SEGUNDO.- Se acuerda que para la conducción y gobernabilidad de la Junta de Coordinación Política se tomarán en cuenta, para su renovación, a los miembros que la integran con derecho a voto considerando el carácter de ponderado de dicho voto.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 24 de marzo del año dos mil veinte.

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Montserrat Caballero Ramírez, PRESIDENTE.

Dip. Eva María Vásquez Hernández, INTEGRANTE.

Dip. Claudia Agatón Muñiz, INTEGRANTE.

Dip. Fausto Gallardo García, INTEGRANTE.

Dip. Gerardo López Montes, INTEGRANTE.

Dip. Luis Moreno Hernández, INTEGRANTE.

Dip. Elí Topete Robles, INTEGRANTE.

Dip. David Ruvalcaba Flores, INTEGRANTE.

Dip. Miguel Ángel Bujanda Ruiz, INTEGRANTE.

Dip. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, INTEGRANTE.

Dip. María Trinidad Vaca Chacón, INTEGRANTE.

Junta de Coordinación Política; es cuanto Presidente.

(SE INSERTA ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LEÍDO POR LA DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ)

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. XXIII
LEGISLATURA DELCONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

HONORABLE ASAMBLEA

PRESENTE

Los Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el **artículo 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California**, así como en los **artículos 27 TERCER PÁRRAFO, 31, y 37 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California**, nos permitimos presentar para conocimiento del Pleno del Congreso, la **PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA EL TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XXIII LEGISLATURA,** al tenor de las siguientes:

C ON S I D E R A C I O N E S

PRIMERA.- El órgano de gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los diputados coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos políticos con representación en el Congreso, así como por los diputados pertenecientes a partidos políticos que cuenten con un solo escaño. La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen

en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando el máximo consenso posible.

SEGUNDA.- Así también, en la Junta de Coordinación Política, se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos del Congreso a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

TERCERA.- No debe pasar inadvertido, que en virtud del reciente inicio de la XXIII Legislatura, la Junta de Coordinación Política, en su carácter de Órganos de Gobierno, está realizando tareas importantes en seguimiento de la correspondiente agenda legislativa, y dentro de esas tareas resalta la elaboración del Plan de Desarrollo Legislativo mismo que es el documento rector y guía en materia de planeación y gestión legislativa de una legislatura. Dicho Plan establece las directrices a que deberá sujetarse el Congreso del Estado para definir objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de legislación, fiscalización del gasto público, gestoría comunitaria y modernización institucional del Poder Legislativo; de conformidad con sus atribuciones. Es así, que la referida Junta de Coordinación Política debe incorporar al Plan, las propuestas de las Direcciones y Unidades Auxiliares del Congreso, así como del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para la mejora continua de sus funciones y servicios mediante la optimización de sus estructuras y organización técnica de los recursos materiales y humanos disponibles. De lo anterior, resulta clara la importancia de que exista continuidad de la Presidencia del multimencionado Órgano de Gobierno, y así acordado por las fuerzas políticas representadas a través de sus conducentes Coordinadores ante dicha Junta de Coordinación Política.

CUARTA.- En vinculación directa con lo señalado en la consideración que antecede se considera que la Junta de Coordinación política **para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Legislatura estará integrada por la Diputada Monserrat Caballero Ramírez en carácter de Presidenta, y como integrantes a los Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Julio César Vázquez Castillo, Fausto Gallardo García, Gerardo López Montes, Luis Moreno**

Hernández, Eli Topete Robles, David Ruvalcaba Flores, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.

Por lo antes expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación Política tiene a bien poner a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO.- Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y los Diputados de Partidos Políticos que cuentan con un escaño, por las razones expuestas y sustentadas en el rubro de Consideraciones del presente acuerdo, proponemos al Pleno de este Congreso **que la Junta de Coordinación Política para el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XXIII Legislatura, del primero de abril del año dos mil veinte al treinta y uno de julio del año dos mil veinte, se integre con la Presidencia de la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, y como integrantes a los Diputados: Eva María Vásquez Hernández, Julio Cesar Vázquez Castillo, Fausto Gallardo García, Gerardo López Montes, Luis Moreno Hernández, Eli Topete Robles, David Ruvalcaba Flores, Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, María Trinidad Vaca Chacón y Miguel Ángel Bujanda Ruiz.**

SEGUNDO.- Se acuerda que para la conducción y gobernabilidad de la Junta de Coordinación Política se tomarán en cuenta, para su renovación, a los miembros que la integran con derecho a voto considerando el carácter de ponderado de dicho voto.

Así queda acordado por los aquí firmantes **en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 24 de marzo del año dos mil veinte.**

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Montserrat Caballero Ramírez
PRESIDENTE

Dip. Eva María Vásquez Hernández
INTEGRANTE

Dip. Claudia Agatón Muñiz
INTEGRANTE

Dip. Fausto Gallardo García
INTEGRANTE

Dip. Gerardo López Montes
INTEGRANTE

Dip. Luis Moreno Hernández
INTEGRANTE

Dip. Elí Topete Robles
INTEGRANTE

Dip. David Ruvalcaba Flores
INTEGRANTE

Dip. Rodrigo Aníbal Otáñez Licona
INTEGRANTE

Dip. Miguel Ángel Bujanda Ruiz
INTEGRANTE

Dip. María Trinidad Vaca Chacón
INTEGRANTE

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
HOJA DE FIRMAS

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, con la anterior lectura que nos acaba de hacer ahorita la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, la asamblea queda enterada.

- EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Araceli Geraldo, para dar lectura a Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se hace del conocimiento del Pleno de la renuncia presentada por el Lic. Iván José Curiel Villaseñor al cargo de Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

- LA C. DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ: Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

HONORABLE ASAMBLEA:

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura del Congreso Libre y Soberano de Baja California, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, 36, 37, 62 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LIC. IVÁN JOSÉ CURIEL VILLASEÑOR AL CARGO DE MAGISTRADO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Y COMBATE A LA CORRUPCION DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, al tenor de las siguientes:

PRIMERA. El párrafo tercero del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, establece que el Órgano de Gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, así como por los Diputados pertenecientes a Partidos Políticos que cuenten con un solo escaño.

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando al máximo consenso posible.

SEGUNDA. En términos de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracción I, de la referenciada Ley Orgánica, esta Junta de Coordinación Política es uno de los Órganos de Gobierno con los que se organiza y funciona el Congreso del Estado de Baja California.

TERCERA. En vinculación directa con lo establecido en el numeral que antecede, y lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se solicita la dispensa de trámite del presente Acuerdo para ponerse a consideración del Pleno de esta Soberanía, por ser este un asunto de urgente y obvia resolución, dada la naturaleza del mismo.

Señalando que esta Junta de Coordinación Política recibió en fecha 20 de marzo de 2020, la solicitud del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales hacer del conocimiento del Pleno la renuncia presentada por el Lic. Iván José Curiel Villaseñor al cargo de Magistrado de la Sala Especializada en Materia de

Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

CUARTA. En fecha 9 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria de la XXII Legislatura de este H. Congreso del Estado, se designó al C. Iván José Curiel Villaseñor, para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por un periodo de seis años a partir de la toma de protesta lo cual aconteció en la misma fecha.

QUINTA. El 11 de marzo de 2020, se recibió en Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, escrito firmado por el Mtro. Iván José Curiel Villaseñor, mediante el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo de Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.

Renuncia la cual manifiesta el funcionario pretende hacer efectiva a partir del día 15 de marzo del presente año, sin embargo, afirma que permanecerá en el cargo hasta en tanto se otorgada la venia del Congreso del Estado, y una vez autorizada la renuncia procederá de manera formal con el procedimiento de entrega-recepción del área a su cargo.

SEXTO. Tomando en consideración que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado, es un Órgano Constitucional Autónomo y cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización y funcionamiento; estará dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

Tribunal el cual se integra por el Pleno, las Salas y la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.

SIETE. Que es facultad del Congreso elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones; en la forma y términos que la Constitución y las leyes determinen, tal como lo establece el artículo 27 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Ahora bien, de acuerdo al último párrafo del apartado B del artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, este dispone que, tratándose de renuncias, ausencias definitivas o remociones de los Magistrados, el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria correspondiente, para que dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.

OCTAVO. Que dada la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y en Baja California por el COVID-19, este Congreso ha tomado la determinación de reducir las actividades al mínimo indispensable en cuanto sea posible, incluyendo el trámite en Comisiones sin desatender los asuntos que requieren inmediata atención al ser razonablemente asuntos de urgente y obvia resolución.

EN virtud de lo anterior, los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción 1, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 119 y 145 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Baja California, por considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y solo ser de injerencia de este Poder, el siguiente:

PRIMERO.

ACUERDO.

Se aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Lic. Iván José Curiel Villaseñor, al cargo de Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido del presente Acuerdo al Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y al C. Iván José Curiel Villaseñor, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. En su oportunidad, una vez que superada la contingencia surgida por el COVID-19 en nuestra entidad federativa, continúe, continúese con el procedimiento respectivo para la emisión de la Convocatoria, proceso y designación del Magistrado de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 25 de marzo del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ, PRESIDENTA.

DIP. EVA MARIA VASQUEZ HERNANDEZ, INTEGRANTE.

DIP. CLAUDIA AGATON MUÑIZ, INTEGRANTE.

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA, INTEGRANTE.

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES, INTEGRANTE.

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ, INTEGRANTE.

DIP. ELÍ TOPETE ROBLES, INTEGRANTE.

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES , INTEGRANTE.

DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ LICONA, INTEGRANTE.

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ, INTEGRANTE.

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN, INTEGRANTE.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LEÍDO POR LA DIP. ARACELI GERALDO NÚÑEZ)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIERCTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California, en términos de lo dispuesto por los artículos 27, 36, 37, 62 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea**, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL LIC. IVAN JOSE CURIEL VILLASEÑOR AL CARGO DE MAGISTRADO DE LA SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMBATE**

A LA CORRUPCION DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERA. El párrafo tercero del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, establece que el Órgano de Gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, así como por los Diputados pertenecientes a Partidos Políticos que cuenten con un solo escaño.

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando el máximo consenso posible.

SEGUNDA. En términos de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracción I, de la referenciada Ley Orgánica, esta Junta de Coordinación Política es uno de los Órganos de Gobierno con los que se organiza y funciona el Congreso del Estado de Baja California.

TERCERA. En vinculación directa con lo establecido en el numeral que antecede, y lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se solicita la dispensa de trámite del presente Acuerdo para ponerse a consideración del Pleno de esta Soberanía, por ser este un asunto de **urgente y obvia resolución**, dada la naturaleza del mismo.

Señalando que esta Junta de Coordinación Política recibió en fecha ___ de marzo de 2020, la solicitud del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales hacer del conocimiento del Pleno la renuncia presentada por el Lic. Iván José Curiel Villaseñor al cargo de Magistrado de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

CUARTA. Que en fecha 9 de mayo de 2019, en sesión extraordinaria de la XXII Legislatura de este H. Congreso del Estado, se designó al C. Iván José Curiel Villaseñor, para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, por un periodo de seis años a partir de la toma de protesta lo cual aconteció en la misma fecha.

QUINTA. El 11 de marzo de 2020, se recibió en Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, escrito firmado por el Mtro. Iván José Curiel Villaseñor, mediante el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo de Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.

Renuncia la cual manifiesta el funcionario pretende hacer efectiva a partir del día 15 de marzo del presente año, sin embargo afirma que permanecerá en el cargo hasta en tanto se otorgada la venia del Congreso del Estado, y una vez autorizada la renuncia procederá de manera formal con el procedimiento de entrega-recepción del área a su cargo.

SEXTO. Tomando en consideración que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, de conformidad con el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado, es un órgano constitucional autónomo y cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización y funcionamiento; estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

Tribunal el cual se integra por el Pleno, las Salas y una Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción.

SEPTIMO. Que es facultad del Congreso elegir a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, determinar su adscripción a Pleno o a Salas y resolver respecto a su ratificación o no ratificación, ausencias definitivas, renuncias y remociones; en la forma y términos que la Constitución y las leyes determinen, tal como lo establece el artículo 27 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Ahora bien, de acuerdo al último párrafo del apartado B del artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, este dispone que, tratándose de renuncias, ausencias definitivas o remociones de los Magistrados, el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria correspondiente, para que dicha vacante sea cubierta dentro de un plazo no mayor de sesenta días.

OCTAVO. Que dada la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y en Baja California por el COVID-19, este Congreso ha tomado la determinación de reducir las actividades al mínimo indispensable en cuanto sea posible, incluyendo el trámite en Comisiones sin desatender los asuntos que requieren inmediata atención al ser razonadamente asuntos de urgente y obvia resolución.

EN virtud de lo anterior, los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción 1, y demás relativos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 119 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y solo ser de injerencia de este Poder, el siguiente:

A C U E R D O

PRIMERO. Se aprueba la renuncia presentada por el ciudadano Lic. Iván José Curiel Villaseñor, al cargo de Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente el contenido del presente Acuerdo al Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y al C. Iván José Curiel Villaseñor, para los efectos legales correspondientes.

TERCERO. En su oportunidad, una vez que superada la contingencia surgida por el COVID-19 en nuestra entidad federativa, continúese con el procedimiento respectivo para la emisión de la Convocatoria, proceso y designación del Magistrado de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 25 de marzo del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

PRESIDENTA

DIP. EVA MARIA VASQUEZ HERNANDEZ

INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA AGATON MUÑIZ

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES

INTEGRANTE

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

INTEGRANTE

DIP. ELÍ TOPETE ROBLES

INTEGRANTE

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES

INTEGRANTE

DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ LICONA

INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ

INTEGRANTE

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN

INTEGRANTE

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; por unanimidad Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, se declara abierto el debate del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, se

solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación nominal el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
ACUERDO			
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina			
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina			

Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto			
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**22**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, son 22 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones**.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se le concede el uso de la voz al Diputado Gerardo López para dar lectura a Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que a solicitud del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se hace del conocimiento del Pleno de la renuncia presentada por la

Licenciada Olga Elizabeth Ojeda Mayoral al cargo del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para el Estado de Baja California, tiene el uso de la voz Diputado.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Buenas tardes.

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIERCTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO.

HONORABLE ASAMBLEA:

Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los términos de lo dispuesto por los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción I, 62 fracción XV, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a consideración de esta Asamblea, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA LIC. OLGA ELIZABETH OJEDA MAYORAL AL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. En el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se establece que el Órgano de Gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, así como por los Diputados pertenecientes a Partidos Políticos que cuenten con un solo escaño.

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando el máximo consenso posible.

SEGUNDA. En términos de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracción I, de la referida, de la referenciada Ley Orgánica, esta Junta de Coordinación Política es uno de los Órganos de Gobierno con los que se organiza y funciona el Congreso del Estado de Baja California.

TERCERA. En vinculación directa con lo estipulado en el numeral que antecede, y lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se solicita la dispensa de trámite del presente acuerdo para ponerse a consideración del Pleno de esta Soberanía, por ser de urgente y obvia resolución, dada la naturaleza del mismo.

Señalando que esta Junta de Coordinación Política recibió en fecha 20 de marzo de 2020, la solicitud del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales hacer del conocimiento del Pleno la renuncia presentada por la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para el Estado de Baja California.

CUARTA. Que en fecha 19 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria de la XXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó a la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción tomando protesta ante el Pleno del Congreso, por un periodo de 5 años.

QUINTA. El 29 de enero de 2020, se recibió en Oficialía de Partes del Poder Legislativo, escrito firmado por la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, mediante el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

SEXTA. De conformidad con el artículo 27 fracción XLVI y 49 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el Congreso del Estado tiene la facultad para designar por el voto de la mayoría calificada de los Diputados al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, de la terna que para ello presente el Gobernador del Estado.

Tomando en consideración que el cargo para el que fue designado la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral es de rango constitucional, y este Congreso fue quien la designo, por ello es que este Congreso debe conocer de su renuncia y pronunciarse al respecto.

SEPTIMA. Que dada la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y en Baja California por el COVID-19, este Congreso ha tomado la determinación de reducir las actividades al mínimo indispensable en cuanto sea posible, incluyendo el trámite en Comisiones sin desatender los asuntos que requieren inmediata atención al ser razonadamente asuntos de urgente y obvia resolución.

OCTAVA. Por lo anterior expuesto y fundado, los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción 1, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 119 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y solo ser de injerencia de este Poder, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se le tiene por presentada y aceptada la renuncia de la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, al cargo de Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción.

SEGUNDO. En su oportunidad, una vez superada la contingencia surgida por el COVID-19 en nuestra entidad federativa, y reanudándose de manera regular las actividades de este Congreso del Estado, hágase del conocimiento al Gobernador del Estado el contenido del presente Acuerdo, para que proceda conforme a derecho corresponda.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 24 de marzo del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE, Integrantes de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto Señor Presidente.

(SE INSERTA ACERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, LEÍDO POR EL DIP. GERALDO LÓPEZ MONTES)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ

PRESIDENTE DE LA MESA DIERCTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

HONORABLE ASAMBLEA:

Junta de Coordinación Política de la XXIII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, en los términos de lo dispuesto por los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción I, 62 fracción XV, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea**, ACUERDO PARLAMENTARIO POR EL QUE A SOLICITUD DEL PRESIDENTE DE LA COMISION DE GOBERNACION, LEGISLACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA LIC. OLGA ELIZABETH OJEDA MAYORAL AL CARGO DE FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCION PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA. En el tercer párrafo del artículo 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se establece que el Órgano de Gobierno denominado Junta de Coordinación Política se integra con cada uno de los Diputados Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos con representación en el Congreso, así como por los Diputados pertenecientes a Partidos Políticos que cuenten con un solo escaño.

La Junta de Coordinación Política expresa la pluralidad del Congreso del Estado y toma sus resoluciones por el voto ponderado de sus integrantes, quienes se constituyen en representantes de su Grupo Parlamentario, procurando el máximo consenso posible.

SEGUNDA. En términos de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 fracción I, de la referenciada Ley Orgánica, esta Junta de Coordinación Política es uno de los Órganos de Gobierno con los que se organiza y funciona el Congreso del Estado de Baja California.

TERCERA. En vinculación directa con lo estipulado en el numeral que antecede, y lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se solicita la dispensa de trámite del presente acuerdo para ponerse a consideración del Pleno de esta Soberanía, por ser de **urgente y obvia resolución**, dada la naturaleza del mismo.

Señalando que esta junta de Coordinación Política recibió en fecha ___ de marzo de 2020, la solicitud del Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales hacer del conocimiento del Pleno la renuncia presentada por la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, al cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción para el Estado de Baja California.

CUARTA. Que en fecha 19 de diciembre de 2019, en sesión extraordinaria de esta XXIII Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó a la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, para ocupar el cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción tomando protesta ante el Pleno del Congreso, por un periodo de 5 años.

QUINTA. El 29 de enero de 2020, se recibió en Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, escrito firmado por la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, mediante el cual presenta su renuncia irrevocable al cargo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

SEXTA. De conformidad con el artículo 27 fracción XLVI y 49 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el Congreso del Estado tiene la facultad para designar por el voto de la mayoría calificada de los Diputados al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, de la terna que para ello presente el Gobernador del Estado.

Tomando en consideración que el cargo para el que fue designado la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral es de rango constitucional, y este Congreso fue quien la designo, por ello es que este Congreso debe conocer de su renuncia y pronunciarse al respecto.

SEPTIMA. Que dada la contingencia sanitaria que se vive actualmente a nivel mundial y en Baja California por el COVID-19, este Congreso ha tomado la determinación de reducir las actividades al mínimo indispensable en cuanto sea posible, incluyendo el trámite en Comisiones sin desatender los asuntos que requieren inmediata atención al ser razonadamente asuntos de urgente y obvia resolución.

OCTAVA. Por lo anterior expuesto y fundado, los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 27 párrafo tercero, 36, 37 fracción 1, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos a consideración del Pleno del Congreso del Estado, con petición de dispensa de trámite y proceso legislativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 119 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, por considerarse como un asunto de urgente y obvia resolución, y solo ser de injerencia de este Poder, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Se le tiene por presentada y aceptada la renuncia de la Lic. Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, al cargo de Fiscal Especializada en Combate a al Corrupción.

SEGUNDO. En su oportunidad, una vez que superada la contingencia surgida por el COVID-19 en nuestra entidad federativa, y reanudándose de manera regular las actividades de este Congreso del Estado, hágase del conocimiento del Gobernador del Estado el contenido del presente Acuerdo, para que proceda conforme a derecho corresponda.

Así queda acordado por los aquí firmantes en la sala de sesiones Octavio Paz del Honorable Congreso del Estado de Baja California el día 24 de marzo del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ

PRESIDENTA

DIP. EVA MARIA VASQUEZ HERNANDEZ

INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA AGATON MUÑIZ

INTEGRANTE

DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA

INTEGRANTE

DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES

INTEGRANTE

DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ

INTEGRANTE

DIP. ELÍ TOPETE ROBLES

INTEGRANTE

DIP. DAVID RUVALCABA FLORES

INTEGRANTE

DIP. RODRIGO ANÍBAL OTÁÑEZ LICONA

INTEGRANTE

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ

INTEGRANTE

DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN

INTEGRANTE

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Gerardo López, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano, por unanimidad Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en consecuencia se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación nominal el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
ACUERDO			
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		

Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina			
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**24**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política; se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina, para

dar lectura a Acuerdo de la Mesa Directiva por el que se somete a consideración de la Asamblea Minuta con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma y adiciona el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, tiene el uso de voz Diputado Molina.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputado Presidente, con su permiso compañeras Diputadas, compañeros Diputados, antes que nada, pediría al Presidente someter a consideración del Pleno la dispensa del trámite de circulación previo de la presente Minuta, para ser sometido a consideración en este momento y la dispensa de la lectura total del mismo, dado, dada las condiciones en las que nos encontramos derivadas de la pandemia mundial del covid-19 y derivado de que van ser urgentes y necesarísimas medidas que tome el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas en relación a los temas de apoyo social, relacionados básicamente con el bienestar de los mexicanos, y que estas reformas atañen precisamente a concretar constitucionalmente diferentes áreas de este rubro, es por lo que se considera que es un asunto de suma urgencia decidir el día de hoy, ya que su incorporación al texto de la Constitución una vez que pasare la mayoría de los congresos de los Estados y que Baja California puede ser uno de ellos, implicaría poder enfrentar esta situación de contingencia mundial en México, entonces, pediría primero que nada que se sometiera la dispensa del trámite de circulación previa de la Minuta para ser sometida de manera directa al Pleno, y la dispensa de la lectura total del documento para hacer consideraciones generales y acudir directamente a los resolutivos del mismo.

- EL C. PRESIDENTE: Claro, claro que sí Diputado, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en

contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; por unanimidad Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate del acuerdo de la Mesa Directiva, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo. Enseguida se le concede nuevamente el uso de la voz al Diputado Juan Manuel Molina García.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Gracias Diputado Presidente, para dar lectura al Acuerdo.

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE A SOLICITUD DE LA CÁMARA DE SENADORES, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO Y SE APRUEBA LA MINUTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR.

ANTECEDENTES, que es el área de Consideraciones jurídicas.

Esta soberanía considera jurídicamente viable la reforma planteada, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. Como señala el proyecto de origen de la reforma constitucional contenida en la minuta en análisis, tiene como pretensión cuatro principales rubros, en los cuales eleva a rango

constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

2. Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. El cual tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional. Además del derecho a la protección de la salud consagrado en la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, se pretende garantizar un sistema de salud para el bienestar, entendido como la satisfacción de las necesidades en los servicios de salud todo su ciclo de vida, ejerciendo con ello a plenitud el derecho salud. Fortaleciendo con ello, las acciones que tienen que ver con la preservación de la salud, que se convierte en una prioridad, y con la atención en la medida que los recursos disponibles lo permiten.

3. De igual manera la reforma establece que el Estado garantizará la entrega de apoyo económico a las mexicanas y mexicanos que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley correspondiente. Se advierte que la Constitución Federal en el párrafo primero del artículo 1, establece: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Por lo que al reconocer la necesidad de promover y proteger mediante programas asistenciales los derechos humanos de todas personas, con la presente reforma se amplía la acción para otorgar mayor protección a las personas con discapacidad las cuales necesitan un apoyo mayor debido a la vulnerabilidad.

4. Señala que las personas mayores de 68 años, tienen derecho a recibir por una parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. Este Poder Legislativo coincide plenamente con el planteamiento legislativo formulado, ya que nos hemos pronunciado a favor de todas las reformas que otorguen seguridad social, apoyo de oportunidades de trabajo y colaboración a los adultos mayores.

5. También precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación. De lo anterior se desprende la loable pretensión legislativa, ya que, al ser adicionado en la Constitución Federal, será un derecho fundamental que el Estado implemente y garantice.

6. De lo anterior se desprende la necesidad de implementar nuevas políticas públicas las cuales fortalecen y construyen un Estado de bienestar. Por último, es importante verificar que la propuesta se encuentre dentro del margen constitucional y legal correspondiente, lo que ha quedado de manifiesta hasta este punto.

En conclusión, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, la reforma propuesta, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público, aunado a que su redacción cumple a plenitud con las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la minuta en análisis en los términos precisados en el cuerpo del presente estudio.

RESOLUTIVO

Primero. Se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo 4°, primer párrafo igual, segundo, tercero igual, parte reformada:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Siguientes párrafos quedan igual, parte a reformar:

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto.

Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

SEGUNDO. - Remítase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a veinticinco de marzo de dos mil veinte.

Y firman los integrantes de la Mesa Directiva de esta XXIII Legislatura, es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, LEÍDA POR EL DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA)

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA, POR EL QUE, A SOLICITUD DE LA CÁMARA DE SENADORES, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO Y SE APRUEBA LA MINUTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR.

ANTECEDENTES

1. En fecha 24 de marzo de 2020, el SENADOR SALOMON JARA CRUZ, Vicepresidente de la Cámara de Senadores, remitió a la H. XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, MINUTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR.

2. Presentada que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo.

3. Se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa, signado por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, en el que acompaña la iniciativa señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de que sea elaborada la opinión correspondiente.

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el analisis correspondiente.

Contenido de la Reforma.

El contenido de la minuta en análisis es el siguiente:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE BIENESTAR.

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos décimo cuarto, décimo quinto y décimo sexto, del artículo 4°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4°.- …
…
…
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
…
…
…
…
…
…
…
…
…

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las

familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto.

Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Cuadro Comparativo.

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la Minuta de marras se presenta el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 4°.- … … … Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.	**Artículo 4°.-** … … … Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las

	personas que no cuenten con seguridad social.
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
…	…
No existe correlativo	El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.
No existe correlativo	Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.
No existe correlativo	El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.
	TRANSITRORIOS **Primero.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. **Segundo.** El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para

	adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto. **Tercero.** El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente *Tabla Indicativa* que describe de manera concreta la intención del legislador:

INICIALISTA	PROPUESTA	OBJETIVO
CÁMARA DE SENADORES	Minuta con proyecto de reformar y adición al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Pretende garantizar la protección del derecho a la salud, que implica la prestación de servicios de salud, mediante atención médica, tratamientos, medicinas o cualquiera que sea la política pública en ese sentido. Además de establecer becas para estudiantes y pensiones para adultos mayores serán un derecho.

Análisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jurídica del instrumento que se analiza, previamente debe estudiarse el marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

En primer término, se analizó la constitucionalidad de la reforma planteada, tomando en consideración que la propuesta se encuentra dentro de los márgenes constitucionales, ya que nuestra Carta Magna, en su artículo 71 fracción I, faculta al titular del ejecutivo federal para iniciar leyes o decretos; por otra parte, el artículo 73 fracciones VII y XXIX, establece como competencia exclusiva del Congreso de la Unión, el establecimiento y la imposición de contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto; como puede apreciarse en la transcripción de dichos numerales:

> Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
>
> I. (…)
> II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
> III. (…)
> IV. (…)
>
> Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
>
> I a la VI. (…)
> VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.
> VIII a la XXVIII. (…)
> XXIX. Para establecer contribuciones:
> 1o. Sobre el comercio exterior;
> 2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo 27;
> 3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
> 4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
> 5o. Especiales sobre:
> a) Energía eléctrica;
> b) Producción y consumo de tabacos labrados;
> c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
> d) Cerillos y fósforos;
> e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
> f) Explotación forestal.
> g) Producción y consumo de cerveza.
> […]

En dichos numerales se establece, en términos generales, las facultades de la Cámara de Senadores para iniciar leyes o decretos relativos a su competencia, por tanto, lo relativo a la imposición de contribuciones e impuestos, así como a la prohibición de exenciones a dichas contribuciones e impuestos, es facultad del Congreso de la Unión, institución compuesta por cámaras: diputados y senadores. Por otra parte, el artículo 31 fracción IV, obliga a los mexicanos a contribuir para los gastos públicas, tanto de la federación como de los estados y municipios.

Analizado lo anterior como ha sido, se procede a pronunciarse en términos generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este órgano deliberativo, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 31 fracción IV, 71 fracción I y 73 fracciones VII y XXIX, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Consideraciones jurídicas.

Esta soberanía considera jurídicamente viable la reforma planteada, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. Como señala el proyecto de origen de la reforma constitucional contenida en la minuta en análisis, tiene como pretensión cuatro principales rubros, en los cuales eleva a rango constitucional programas sociales en favor de diversos grupos vulnerables de la población e instaura un sistema nacional de salud para el bienestar.

2.Crea un sistema nacional de salud para personas que no cuentan con acceso a la seguridad social. El cual tiene como finalidad asegurar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de este sector poblacional. Además del derecho a la protección de la salud consagrado en la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución, se pretende garantizar un sistema de salud para el bienestar, entendido como la satisfacción de las necesidades en los servicios de salud todo su ciclo de vida, ejerciendo con ello a plenitud el derecho salud. Fortaleciendo con ello, las acciones que tienen que ver con la preservación de la salud, que se convierte en una prioridad, y con la atención en la medida que los recursos disponibles lo permiten.

3. De igual manera la reforma establece que el Estado garantizará la entrega de apoyo económico a las mexicanas y mexicanos que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley correspondiente. Se advierte que la Constitución Federal en el párrafo primero del articulo 1, establece: "**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas **gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,** cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece." Por lo que al reconocer la necesidad de promover y proteger mediante programas asistenciales los derechos humanos de todas personas, con la presente reforma se amplía la acción para otorgar mayor protección a las personas con discapacidad las cuales necesitan un apoyo mayor debido a la vulnerabilidad.

4. Señala que las personas mayores de 68 años, tienen derecho a recibir por una parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En caso de las y los indígenas esta prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad. Este Poder Legislativo coincide plenamente con el planteamiento legislativo formulado, ya que nos hemos pronunciado a favor de todas las reformas que otorguen seguridad social, apoyo de oportunidades de trabajo y colaboración los adultos mayores.

5. También precisa que el Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a las familias que se encuentran

en condición de pobreza para garantizar, con equidad, el derecho a la educación. De lo anterior se desprende la loable pretensión legislativa, ya que, al ser adicionado en la Constitución Federal, será un derecho fundamental que el Estado implemente y garantice.

6. De lo anterior se desprende la necesidad de implementar nuevas políticas públicas las cuales fortalecen y construyen un Estado de bienestar. Por último, es importante verificar que la propuesta se encuentre dentro del margen constitucional y legal correspondiente, lo que ha quedado de manifiesta hasta este punto.

En conclusión, tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, la reforma propuesta, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público, aunado a que su redacción cumple a plenitud con las características formales que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la minuta en análisis en los términos precisados en el cuerpo del presente estudio.

RESOLUTIVO

Primero. Se aprueba la minuta con proyecto de decreto po el que reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a este Congreso del Estado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue:

Artículo 4°.- ...

…

…

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

…

…

…

…

…

…

…

…

…

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán

prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente Decreto.

Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

SEGUNDO. - Remítase a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para su conocimiento y para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DADO en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del H. Poder Legislativo del Estado de Baja California, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, el veinticinco de marzo de dos mil veinte.

VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

DIPUTADO PRESIDENTE

CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

DIPUTADA SECRETARIA-

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Molina, se declara abierto el debate del Acuerdo de la Mesa Directiva, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Acuerdo de la Mesa Directiva.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente se somete a votación nominal el Acuerdo de la Mesa Directiva iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, claro que si, por el bien de todos, primero los pobres, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
ACUERDO			
DE LA MESA DIRETIVA			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		

Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal			
Agatón Muñiz Claudia Josefina			
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**23**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 23 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones**.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobado el Acuerdo de la Mesa Directiva; se continua con el siguiente punto del Orden del Día **"Iniciativas"**, por lo que se hace del conocimiento de la asamblea que en Oficialía de Partes se recibieron las Iniciativas en listadas en el apartado A del Orden del Día mismas que fueron turnadas por esta Presidencia a las comisiones respectivas señaladas. Se continua con la presentación en tribuna de las Iniciativas, haciendo un atento recordatorio a los compañeros Diputados para que la lectura de su Iniciativa sea por un máximo de cinco minutos, solicito al Diputado Juan Manuel Molina García hacer uso de la tribuna para presentar Iniciativa de reforma, que reforma el Código Civil para el Estado de Baja California.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Con su permiso Diputado Presidente, Compañera y Compañeros Diputados, voy a modificar un poquito la estructura del planteamiento que hago de la Iniciativa, porque es importante precisar cuál es el alcance de la misma y para eso habríamos de hacer lo propio, derivado de la situación en la que nos encontramos actualmente el suscrito Diputado Juan Manuel Molina en lo personal y a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, en uso de la facultad que nos confieres lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica y en la Constitución, someto a consideración la INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Hay una serio de condiciones que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo situaciones inusitadas, inéditas a nivel mundial, no solo en Baja California y hoy más que nunca nos damos cuenta que esa contención y que la autoridad ha recomendado a la

ciudadanía ese distanciamiento social ha originado que muchos ciudadanos y muchas ciudadanas no puedan desplazarse a sus lugares de trabajo, inclusive se han cerrado fuentes de trabajo, no vemos circulación de muchos ciudadanos, no hay escuelas, se ha recomendado la reclusión domiciliaria inclusive, voluntario claro, y eso está generando una preocupación y zozobra sobre todo en la gente que vive al día, la gente que tiene que pagar la renta, la gente que tuvo que ir a empeñar lo poco que tiene para poder abastecerse y poder recluirse en su domicilio y permanecer ahí como una recomendación de la autoridad para esta situación de salud que estamos viviendo; para eso el Congreso del Estado tiene la oportunidad con esta Iniciativa de poder ofrecer una parte de alivio en la presión de que estas familias, que estos ciudadanos están viviendo, voy a leer el texto del planteamiento que se hace, dice en relación al Código Civil, artículo 1986, que es el planteamiento de la reforma, dice, así sería la reforma:

Artículo 1986.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone.

(testo de la reforma dice:)

Se considerará caso fortuito las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias, así como pandemias declaradas oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por recomendación u orden de la Autoridad. Las circunstancias previstas en este párrafo no implicaran recisión, resolución o nulidad de la obligación o sus accesorios sino de ajustar el contrato u obligación en los términos del Artículo 20 de este Código en tanto el obligado acredite la imposibilidad o disminución de sus posibilidades para cumplir durante la contingencia.”

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO: Derivado de la Pandemia Mundial causada por el Coronavirus o COVID-19 reconocida por la Autoridad Sanitaria y dado el caso fortuito que ello representa, por lo que hace a los meses de abril y mayo del año 2020 no se considerara que incurren en mora o incumplimiento de las obligaciones las personas, sin que esto les libere en su momento de las mismas y sus accesorios salvo la obligación de ajustar el contrato u obligación, las siguientes:

a) Las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria previstos por el código Civil, de ahí que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por retraso del pago durante este lapso de tiempo.

b) Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público bienes o servicios, de ahí que no se contara este tiempo en el término que provoque el desahucio de la finca arrendada como lo marca el Articulo 475 del código de Procedimientos Civiles o la rescisión del contrato en términos del Artículo 2363 del código Civil.

c) El arrendamiento de casa habitación de hasta de 120 metros cuadrados, de ahí que no se contara este tiempo en el término que provoque el desahucio de la misma como lo marca el Articulo 475 del código de Procedimientos Civiles o rescisión del contrato en términos del Artículo 2363 del código Civil.

TERCERO: Los Jueces del Poder Judicial del Estado deberán observar estas disposiciones en concordancia al Artículo 20 del Código Civil del Estado y fomentarán al máximo en su caso los medios alternos de solución de conflictos de manera directa o apoyados por los Centros de Justicia Alternativa,

CUARTO: Los propietarios de los negocios regulados por la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California deberán acatar a la letra las disposiciones contenidas en este Decreto bajo su estricta responsabilidad.

Y firman los integrantes, la totalidad de los integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA en esta Legislatura.

Compañeras y Compañeros Diputados, sobra decir que es un hecho notorio la pandemia que estamos viviendo no en México, no en Baja California, sino a nivel mundial, es momento de que seamos solidarios con la gente, es momento en de que les quitemos una preocupación que puedan tener, sobre todo, insisto, en la gente que ha tenido que ir a empeñar sus bienes, lo poco que tienen y que puedan ver en riesgo esa pérdida; estos meses esto implica una espera, esto implica que lo que hayan, lo que adeuden vaya a ser diluido en los siguientes meses en un acuerdo que tendrán que celebrar con quienes les pedimos que sean solidarios que son los dueños de estas instituciones de préstamos prendarios, que tienen que ser solidarios con la ciudadanía, pero este Decreto los obligará a serlo de inicio; en el caso de los arrendamientos también las familias no tienen ahorita ingresos, tienen esa preocupación de perder, poder perder sus viviendas, entonces con esta Iniciativa les estamos dando ese margen de espera, las instituciones algunas instituciones bancarias a nivel nacional ya lo están haciendo, el Ayuntamiento de Mexicali ya ofreció condonaciones y reducciones de adeudos y otros Ayuntamientos del Estado

están haciendo lo propio, estamos esperando, seguramente así será por parte del Gobierno del Estado, pero si quisiera hacer un acotamiento a lo mejor extendiéndome en el término que nos marca, porque es importante, y yo quisiera señalarlo con puntualidad, que es lo que vamos aprender cuando todo esto pase, que es lo que tenemos que aprender desde ahorita, ahorita los seres humanos, porque ya no estamos hablando nada más de Mexicali, de México, de Baja California, es un problema de la humanidad, nos estamos enfrentando a un enemigo extraño, a un enemigo que no tiene rostro, a un enemigo que no podemos ver y no podemos percibir hasta que desgraciadamente nos afecta y lo que tenemos que aprender es que a final de cuentas todos somos igual, todos somos igual, aquí no hay pobres ni ricos, aquí no hay blancos ni morenos, aquí no hay gente joven y gente adulta, no hay gentes que vivan en las colonias y gentes que vivan en residenciales, todos somos exactamente iguales ante este nuevo enemigo de la humanidad que solo las fortalezas que nosotros nos podamos generar y la ciencia nos podemos sacar adelante, no nos veamos, porque abecés pareciera así y nos sentimos extraños cuando no podemos saludar a nuestros amigos, cuando no podemos abrazar a nuestros hijos, cuando no podemos abrazar a nuestras familias nuestros seres queridos nos sentimos extraños, porque no estábamos acostumbrados a esto, es una recomendación que hacemos; pero que vamos hacer cuando podamos volverlo hacer, lo tenemos que hacer de veras de manera sincera y todo ese afecto que como seres humanos nos tenemos lo tenemos que demostrar, yo verdaderamente se los digo que muchas veces por diferencias políticas, por diferencias de ideas, de doctrinas, podemos generar enfrentamientos de ideas que hasta ahí tienen que llegar, pero ahorita verdaderamente entender que somos hermanos y hermanas, se los digo sinceramente, mi padre de chamaco m y mi mamá también nos dijeron mucho que, que iban a venir tiempos difíciles, nos dijeron eso y decían que teníamos que estar

preparados, la pregunta si verdaderamente estamos preparado para esto, pero estemos preparados o no yo les aseguro que la humanidad vamos a salir adelante, porque les vuelvo a decir no es el tema nada más en Baja California o de México, la humanidad va a salir adelante, pero que es lo que vamos aprender al final de todo esto, les vuelvo a repetir, todos somos iguales, hombres, mujeres, grandes, y pequeños, ricos y pobres, no hay diferencia porque este nuevo enemigo no nos ve distintos, echémonos la mano, echémosle la mano a la gente para la que estamos dispuestos a servir, aquí estamos sirviendo y de lo que venga, de lo que venga verdaderamente los invito a todos, yo espero, espero sinceramente aprender mucho de esto y espero con mucho amor volver a poder abrazar a quienes yo quiero y poderlos saludar y poder estrechar sus manos como siempre lo hemos hecho y créanme que debe de ser mucho más sincero, somos iguales, somos iguales y, iguales y unidos vamos a salir a delante, la humanidad va a salir adelante se los aseguro; es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA INICIATIVA, PRESENTADA POR EL DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA)

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE.-

El suscrito Diputado JUAN MANUEL MOLINA GARCIA en lo personal y en nombre del Grupo Parlamentario de **MORENA**, en uso de la facultad que nos confieres lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 28 fracción I de la Constitución Política del Estado y los artículos 115, 119, 160 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Soberanía **INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es un hecho cierto, que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de virus SARS-Co V2(COVID-19) es una pandemia, derivado del número de casos existentes en los países que han confirmado los mismos, por que dicha organización considero tal circunstancia como una emergencia de Salud Pública de relevancia internacional ; asimismo los expertos mundiales consideran que en virtud del potencial riesgo pandémico y comportamiento del COVID-19 y de acuerdo a las estimaciones basadas en la información de los eventos pandémicos de la Organización Mundial de la Salud, la Población Mundial será afectada severamente.

Ante tales hechos y dando los casos de personas infectadas que se han venido incrementando en nuestro país, El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada en fecha 19 de marzo de 2020 reconoce la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que atención a ello emitió el acuerdo publicado el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de marzo de 2020, mediante el cual se establecen las actividades de preparación y repuesta a dicha epidemia.

A nivel federal y local el sector salud ha establecido una serie de medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia, de igual manera los poderes del estado ha replicado dichas medidas particularmente la de distanciamiento social, recomendado a la población quedarse en casa para evitar el contagio y propagación del virus, siendo hecho que estas medidas preventivas limitan la movilidad y convivencia social de las personas y afectan la economía de los que menos tienen y particularmente a los prestadores de bienes y servicios que hacen de su actividad su medio cotidiano para subsistir, por lo que se hace necesario plantear soluciones o medidas paliativas particularmente nuestras Leyes Estatales para los efectos que estas drásticas medidas van a producir en los contratos civiles que están en vigencia, toda vez que esto hechos constituyen casos fortuitos que impiden cumplimiento de obligaciones civiles contractuales, tales como Las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria; Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público bienes o servicios y El arrendamiento de casa habitación .

En ese sentido la doctrina jurídica es unánime al admitir que existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque éste se ve

impedido a cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever o que aun previéndolo no ha podido evitar. A un acontecimiento de esa naturaleza se le llama caso fortuito o fuerza mayor, esta definición ha sido recogida por la jurisprudencia al señalar que cuando existe un obstáculo proveniente de la naturaleza o del hombre, que le imposibilita física o jurídicamente cumplir cabalmente, de modo que el fenómeno de la naturaleza, hecho social grave o acto de autoridad pública irresistible, por inimpugnable, incide en el objeto principal de la obligación contraída.

Igualmente tomando en cuenta que en el artículo 20 del Código Civil para el estado de Baja California se establece que**:** " Cuando haya conflicto de derechos, a falta de Ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.", Motivos estos por los cuales**,** se propone reformar el artículo 1986 del Código Civil para el Estado de Baja California para considerar como casos fortuitos para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias así como pandemias declaradas oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por recomendación u orden de la Autoridad en los siguientes términos:

INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ARTÍCULO ÚNICO.- REFORMA EL ARTÍCULO 1986 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE:

"**Artículo 1986**.- Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se la impone.

Se considerara caso fortuito las situaciones derivadas de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos o de la naturaleza, plagas, epidemias así como pandemias declaradas oficialmente cuando afecten la movilidad y convivencia social por recomendación u orden de la Autoridad. Las circunstancias previstas en este párrafo no implicaran recisión, resolución o nulidad de la obligación o sus accesorios sino de ajustar el contrato u obligación en los términos del Artículo 20 de este Código en tanto el obligado acredite la imposibilidad o disminución de sus posibilidades para cumplir durante la contingencia."

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.

SEGUNDO: Derivado de la Pandemia Mundial causada por el Coronavirus o COVID-19 reconocida por la Autoridad Sanitaria y dado el caso fortuito que ello representa, por lo que hace a los meses de abril y mayo del año 2020 no se considerara que incurren en mora o incumplimiento de las obligaciones las personas, sin que esto les libere en su momento de las mismas y sus accesorios salvo la obligación de ajustar el contrato u obligación, las siguientes:

a) Las derivadas de los contratos de mutuo con interés y garantía prendaria previstos por el código Civil, de ahí que la garantía prendaria no podrá ser adjudicada ni sacada a remate por retraso del pago durante este lapso de tiempo.
b) Las obligaciones de los arrendatarios de locales dedicados al comercio que expende al público bienes o servicios, de ahí que no se contara este tiempo en el término que provoque el desahucio de la finca arrendada como lo marca el Articulo 475 del código de Procedimientos Civiles o la rescisión del contrato en términos del Artículo 2363 del código Civil.
c) El arrendamiento de casa habitación de hasta de 120 metros cuadrados, de ahí que no se contara este tiempo en el término que provoque el desahucio de la misma como lo marca el Articulo 475 del código de Procedimientos Civiles o rescisión del contrato en términos del Artículo 2363 del código Civil.

TERCERO: Los Jueces del Poder Judicial del Estado deberán observar estas disposiciones en concordancia al Artículo 20 del Código Civil del Estado y fomentaran al máximo en su caso los medios alternos de solución de conflictos de manera directa o apoyados por los Centros de Justicia Alternativa,

CUARTO: Los propietarios de los negocios regulados por la Ley que Establece las Bases de Operación de las Casas de Empeño del Estado de Baja California deberán acatar a la letra las disposiciones contenidas en este Decreto bajo su estricta responsabilidad.

DIPUTADO JUAN MANUEL MOLINA GARCIA
EN LO PERSONAL Y EN NOMBRE DE LOS
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Molina.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Nada más cierro, le solicito la dispensa de trámite, de la circulación previa, para que sea votado en esta fecha, porque de otra manera pues no tendría el alcance que pretendemos, y la justificación creo que ya sobra decirla, la he explicado con detalle en la misma manifestación a este Pleno compañeras y compañeros, gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Así será Diputado, adelante Diputado Ruvalcaba.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Me parece muy expresiva la intervención del Señor Diputado, por supuesta la hacemos nuestra, pero para quienes nos escuchan en redes sociales que están aquí presentes, voy a retomar un poco las palabras que él mismo ha planteado, en donde establecemos nuestra igualdad, en donde el problema que se vive es conjunta, el problema es conjunto entre sociedad y gente, gobernantes, de todo; no me voy a negar a aprobar la dispensa de trámite porque es un tema por supuesto muy importante, pero es un tema que se estaba discutiendo para presentarse en conjunto como legislatura, solamente lo quiero puntualizar, porque nos confundimos luego y no entendemos porque luego pasan estas cosas, yo creo que no es tampoco momento para que cuando busquemos el bienestar de los ciudadanos, los créditos son lo de menos, yo creo que como entidad de gobierno debemos asumir ese rol, yo lo puntualizo, porque si escuche la Iniciativa y estaba un tanto confundido porque era un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero lo tomamos Diputado y agradecemos por supuesto su bondad y hacemos nuestra la Iniciativa, de mi parte es lo que tengo que decir.

- EL C. PRESIDENTE: Bien Diputado Ruvalcaba, tiene el uso de voz el Diputado Gerardo López.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Gracias a todos los compañeros y yo primero que nada deseo felicitar a los integrantes de esta XXIII Legislatura, yo incluso ayer que este tema lo planteamos en la Junta de Coordinación Política me sentí por primera vez motivado, donde tenemos una preocupación por Baja California, por nuestro país, por el mundo en específico, por la crisis de salud que se está viviendo, yo me quito mi envestidura de partido político, mis insignias de partido político y yo llamo a la unión de

esta Legislatura, definitivamente es de aplaudir esta Iniciativa propuesta por el Diputado Molina y como bien dice el Diputado, el compañero Ruvalcaba, vamos a sumarnos todos sin tintes políticos, vamos a sumarnos por el bien de Baja California, porque esto es urgente y definitivamente yo puedo decirles que estoy a favor de que se valla con dispensa de trámite y que salga lo más pronto posible, porque el de no hacerlo va haber un perjuicio en el patrimonio de los Bajacalifornianos, yo agradezco y celebro la preocupación de todos los legisladores en relación al pueblo de Baja California por esta crisis de salud que se está viviendo, gracias y yo estoy a la orden para sumarme a esta Iniciativa de manera inmediata.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Gerardo López, tiene el uso de la voz el Diputado Otáñez.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Gracias Diputado Presidente, pues así es compañeros, estamos viviendo tiempos complejos y creo que es momento de unirnos todos, Diputado bien lo mencionaste, es un tema que a toda la ciudadanía afecta y es por eso que como Legislatura debemos de unirnos dejar los temas de colores a un lado y resolver para la ciudadanía que es a los que representamos y son los que nos tienen aquí adentro sentados y como dices sirviendo en este momento de contingencia, estando aquí trabajando, sacando los temas adelante y es un tema que los bajacalifornianos necesitan, que necesitan con urgente y obvia resolución, apoyo la Iniciativa, nos sumamos como partido de Baja California, hemos hecho muchos llamados a este tipo de acciones, lo vemos, lo apreciamos, la ciudadanía lo necesita y todos juntos debemos de salir a quien nosotros representamos y darle este tipo de soluciones, nos sumamos y exhorto a la unidad a todos los Diputados en este tema, es cuanto Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, tiene el uso de la voz la Diputada María Trinidad Vaca Chacón.

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Gracias Diputado Presidente y de igual manera Diputado Juan Manuel Molina me sumo como Diputada Independiente en nombre de toda la ciudadanía y como Bajacaliforniana, e invito a toda la Legislatura que vallamos sin colores y a favor.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, continuamos, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite de la Iniciativa presentada por el Diputado. Haber Diputado Elí Topete tiene el uso de la voz.

- EL C. DIP ELÍ TOPETE ROBLES: Con su venia Presidente, pues igual bajo el mismo intención de que Movimiento Ciudadano también se suma a lo que hizo referencia el Diputado Molina, es un momento donde debemos estar unidos a margen de colores como se ha manifestado aquí en uso de la voz por algunos de los Diputados y pues nosotros no nos quedamos abajo, vamos con esto, adelante.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Elí Topete, entonces continuamos, bien se declara abierto el debate de la dispensa de trámite de la Iniciativa presentada por el Diputado Juan Manuel Molina García, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando su mano; **por unanimidad Diputado Presidente.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la Iniciativa, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Presidente, solo para una precisión.

- EL C. PRESIDENTE: Si, adelante.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Es nada más una precisión, agradezco y agradecemos como grupo parlamentario, el que todos vallamos en este tipo de tema juntos, porque ahí a fuera, lo vuelvo a decir todos somos iguales, verdaderamente iguales y tenemos que ir unidos en esta y otras cosas que tengamos que hacer para salir adelante como humanidad, como humanidad, es cuanto Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Molina; toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la Iniciativa presentada por el Diputado Molina.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal la Iniciativa presentada por el Diputado Molina iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, por Baja California, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
INICIATIVA			
PRESENTADA POR EL DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		

Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**25**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 25 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones**.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobada la Iniciativa presentada por el Diputado Juan Manuel Molina García; se continua con el siguiente punto del Orden del Día, **"Iniciativas",** por lo que se hace del conocimiento de la asamblea que en Oficialía de Partes se recibieron las Iniciativas.

(SE INSERTA RELACIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR OFICIALÍA DE PARTES ENLISTADAS EN EL ORDEN DEL DÍA DE ESTA SESIÓN)

1. Del Ing. Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 18, 27, 42, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 93, 94, 95, 107, y 109; y se derogan los artículos 64 y 65, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

2. Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y en representación del PVEM, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 311 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Justicia.

3. Del Diputado Fausto Gallardo García, a nombre propio y en representación del PVEM, por el que se adiciona el capítulo IX denominado ¨IMPARTICIÓN ILÍCITA DE EDUCACIÓN¨ al Título Tercero ¨DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA COMETIDOS POR PARTICULARES¨ al Código Penal para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Justicia.

4. Del Ing. Jaime Bonilla Valdez, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado, Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el día 18 de marzo de 2020.

5. Del Diputado Víctor Manuel Morán Hernández, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se adiciona una fracción V al artículo 63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

6. De la Diputada Araceli Geraldo Núñez, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se adiciona la Sección VI denominado "Control, prevención, Diagnóstico Oportuno y Tratamiento de Diabetes Mellitus", así como los artículos 106 QUINQUIES, 106 SEXIES, 106 SEPTIES y 106 OCTIES de la Ley de Salud Pública para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Salud.

7. Del Diputado Miguel Ángel Bujanda Ruiz, a nombre propio y como integrante de la XXIII Legislatura, por el que se reforma el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Justicia.

8. Del Diputado Julio César Vázquez Castillo, a nombre propio y como integrante del GPPT, por el que se reforman los artículos 1342, 4569, 1632 y 1633 del Código Civil para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Justicia.

9. De la Diputada Monserrat Caballero Ramírez, a nombre propio y en representación del GPMORENA, por el que se adiciona un artículo 23 BIS a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Salud.

10. De la Diputada Rosina del Villar Casas, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que adiciona una fracción al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, quedando esta, en la fracción XXVII y recorriendo la actual fracción XXVII a la fracción XXVIII.

Turno: Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

11. De la Diputada Eva Gricelda Rodríguez, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se crea la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

12. De la Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se reforman y adicionan los artículos 29 fracciones XI, XXX y XXXI, 30 fracciones XXXI y XXXII, 31 fracción XII, 32 fracciones II y XII, 33 fracciones XI, XIII, XVI y XXII, 34 fracciones XLI, XLII y XLIII, 35 fracción IX, 36 fracciones II y IX, y 38 fracciones XXVII y XXVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

13. De la Diputada Loreto Quintero Quintero, a nombre propio y como integrante del GPPAN, por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 29 de la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Hacienda y Presupuesto.

14. Del Diputado Eli Topete Robles, a nombre propio y en representación de MOVIMIENTO CIUDADANO, por el que se adicionan fracciones a los artículos 19 y 50 de la Ley de Salud Pública del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Salud.

15. De la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, a nombre propio y como integrante de la XXIII Legislatura, por el que se reforma la fracción XV del artículo 3; se adiciona una fracción XII al artículo 11, y se adiciona un artículo 55 BIS, todos de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

16. De la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se reforman los artículos 5 y 9, y de adiciona el artículo 10 BIS al Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

17. Del Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, a nombre propio y como integrante del GPMORENA, por el que se reforman y adicionan los artículos 7, 49, 52, 53, 54, 59, 60 BIS, 63 BIS y 64 BIS de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales

18. Del Diputado David Ruvalcaba Flores, a nombre propio y en representación del PRI, por el que se reforma el artículo 5 de la Ley para la venta Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Baja California.

Turno: Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.

(CONCLUYE)

- EL C. PRESIDENTE: Y por consiguientes pasamos a los Dictámenes, el Diputado Luis Moreno ¿verdad?, perfecto; entonces le damos el uso de la voz al Diputado Luis Moreno Hernández para que pase a la tribuna y presente la Iniciativa que crea la Ley Federal que Prohíbe y Sanciona la Especulación de Precio de Producto de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Epidémicas; tiene el uso de la voz Diputado Moreno.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Gracias Presidente, bueno comienzo diciendo que suscribo íntegramente lo externado por el Diputado Molina y esas reflexiones me van a permitir obviar por cuestión de tiempo algunas reflexiones propias que traigo yo

también respecto al tema del fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial, la pandemia del Covid-19; por esa razón me permito someter a consideración de este Honorable Congreso "INICIATIVA DE LEY QUE TIENE COMO PROPÓSITO LA CREACION DE LA LEY FEDERAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.

Hoy, México se encuentra inmerso en la pandemia originada por el virus COVID-19, trayendo con ello una serie de afectaciones a la vida diaria de las familias mexicanas, debo iniciar destacando que dicha epidemia mundial acarrea una serie de incertidumbres para la población, como lo es por un lado la salud y por el otro lo relativo a la economía familiar, en ese contexto la presente iniciativa pretende garantizar el derecho humano a la salud y al bienestar. Por medio de la prohibición y la sanción a la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas.

Todo hemos visto como los últimos días, las últimas semanas esta pandemia ha reflejado lo mejor, pero también lo peor de la sociedad; habido muchas muestras de lo mejor, tiendas de auto servicio que abren en horarios especiales para adultos mayores, que restringen de manera voluntaria la compra de ciertos artículos a una cantidad básica, para evitar que otros grupos vulnerables, puedan o no tengan acceso a esos productos básicos, hemos visto casos a nivel mundial de personas que inclusos se han quitado sus respiradores, personas de edad adulta para dárselos a jóvenes y poner en riesgo su vida, hemos visto muchas muestras de solidaridad y de amor al prójimo, pero también hemos visto personas, comercios que han hecho un gran negocio a partir de la tragedia que se están viviendo, artículos ya no solamente de la canasta básica, sino artículos y productos para enfrentar la enfermedad, geles antibacteriales, paquetes de cubre bocas, aerosoles, toallas desinfectantes a 500 o 600 % el valor comercial y desde luego que sabemos que

las autoridades en estos días han estado haciendo lo propio, han estado generando redadas, han estado haciendo más que nada visitas, corrijo el término, visitas, intervenciones a las tiendas de autoservicios y algunos negocios en algunas colonias del Estado y del país, pero con esta ley que hoy pongo a consideración de Ustedes, queremos ayudar a la autoridad, a poder especificar el grado de sanciones o de multas que se pueden cometer o llevar acabo, a partir de la especulación, o a partir de incrementar los precios de productos que tiene que ver particularmente con enfermedades epidémicas.

Tengo poco tiempo, les diré que esta ley tiene algunos artículos importantes, como el Artículo 4º que dice. "Precio de venta máximo. El precio de venta de los productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas no podrá ser superior al precio promedio de venta del mes anterior al alza artificial en términos reales de la moneda". Se establece un candado muy claro, de mantener los precios del mes anterior, los precios promedios; se prohíbe el acaparamiento en el Artículo 5; en el Artículo 6 se prohíbe la publicidad engañosa, geles antibacteriales que no tienen el porcentaje de alcohol que se necesita realmente para poder eliminar el virus y que se está vendiendo como si lo fuera, que reetiqueten algunos artículos que realmente no están ayudando a enfrentar la enfermedad y la gente cree que sí; y el Artículo trae sanciones que me hubiera gustado por cuestión de tiempo plantear, pero tengo ya nada más ocho segundos, entonces solamente apelo que esta ley que hoy presento pueda ser dictaminada en la comisión correspondiente de manera rápida, para que pueda ser votada en el pleno y pueda ser enviada a la Cámara de Diputados, toda vez que se trata de una ley federal, no es una ley estatal, es una ley que pretende ayudar y aliviar este problema en todo el país y en donde Baja California, concluyo Presidente, está levantando la mano de que cuando queremos hacer cosas, lo podemos lograr, muchas gracias.

(SE INSERTA INICIATIVA, PRESENTADA POR EL DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ)

C. DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
P R E S E N T E.-

Luis Moreno Hernández, Diputado integrante de la Vigésima Tercera Legislatura del Estado, por **TRANSFORMEMOS,** con fundamento legal en lo establecido en los artículos 71 fracción III y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo preceptuado en los Artículos 27 fracción I y 28 fracción I , de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en correlación con lo previsto por los Artículos 110 fracción I, 112 y 115 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de Estado, y demás relativos, me permito someter a la consideración de este Honorable Congreso: "**INICIATIVA DE LEY QUE TIENE COMO PROPÓSITO LA CREACION DE LA LEY FEDERAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS,** que se justifica en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy, México se encuentra inmerso en la pandemia originada por el virus COVID-19, trayendo con ello una serie de afectaciones a la vida diaria de las familias mexicanas, debo iniciar destacando que dicha epidemia mundial

acarrea una serie de incertidumbres para la población, como lo es por un lado la salud y por el otro lo relativo a la economía familiar, en ese contexto la presente iniciativa pretende tutelar el derecho humano a la salud y al bienestar. Por medio de la prohibición y la sanción a la especulación de precios de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas

Bajo esa premisa, quisiera hacerles participes de lo que, en los hechos, está aconteciendo en diferentes entidades de nuestro país y que a nuestro entender violentan categóricamente los derechos aludidos.

Publica el portal de noticias *infobae* en su portal electrónico de noticias el día lunes 23 de marzo del presente, algunos datos que me parecen alarmantes ante la precaria economía de una gran parte de las familias mexicanas. Cito.

Desde que el coronavirus comenzó a propagarse más allá de las fronteras de China, el gel antibacterial y las mascarillas son dos de los productos más demandados del mercado. En estados como Baja California y Tamaulipas, algunos comercios aseguran que se agotan en cuestión de horas, mientras que en la Ciudad de México parecen encontrarse prácticamente agotados.

La alta demanda de estos productos ha llevado a algunos establecimientos a incrementar el costo de venta. Ante este aumento, con el objetivo de que los mexicanos no paguen un precio abusivo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) estudió "Quién es quién en los precios", y reveló en qué locales de la República se pueden encontrar estos artículos más baratos.

Según los datos, recopilados por el personal de las 38 oficinas de Profeco en el país, el paquete de cubrebocas de 10 piezas se vendió la semana pasada a un precio medio de 23.99 pesos mexicanos. La sucursal León I de Farmacias Similares, en Guanajuato, fue el establecimiento que lo dispensó a un precio más económico: 10 pesos mexicanos. También se encontraban baratos en el local de Bodega Aurrera de la ciudad de Aguascalientes, y en Superama Sucursal Única de Morelia, donde tenían un valor de 12 pesos.

Por el contrario, las mascarillas más caras se vendieron en San Luis Potosí y en Tabasco. Con los precios más altos, ese mismo producto en H.E.B Sucursal San Luis y Sanborns sucursal El Dorado, las dos en San Luis Potosí, en 49.90 pesos y 45 pesos respectivamente. Mientras que en Walmart sucursal Universidad de Villahermosa, Tabasco, en 29 pesos", datos de la Profeco. Es decir que para el mismo producto existe una variación en misma fecha que va de los 10 pesos a los 49.90, más de casi el 500 por ciento de diferencia.

Continuando con la fuente, publica que en cuanto al gel antibacterial, la botella de 60 mililitros tiene un costo promedio nacional de 13.83 pesos mexicanos. El precio más bajo, se registró en tres locales, que la dispensaron por un valor de 10 pesos. Bodega Aurrera de Aguascalientes, Aguascalientes, Plaza Aragón de la Ciudad de México. Itzaes, en Mérida, Yucatán. La botella más cara, según informó la dependencia, se vendió a 24 pesos. Nuevamente algunos comercios incrementan el costo del necesario producto.

Por otra parte, Publica el Economista, en nota de Rodrigo Riquelme, en su portal de internet en cuanto al mercado electrónico respecto a los productos en cuestión lo siguiente, los cubrebocas de tres capas alcanzan un precio de 699 pesos por un paquete de 50 piezas en Mercado Libre, mientras que en Amazon su precio oscila entre los 185 y 850 pesos también por un paquete de 50 piezas.

Algunos vendedores que usan las plataformas de comercio electrónico de Amazon y Mercado Libre están aprovechando las compras de pánico y la desinformación alrededor de la transmisión por coronavirus para inflar los precios de ciertos productos, como los desinfectantes, el gel antibacterial y las máscaras cubrebocas.

Un desinfectante de la marca Lysol en aerosol Neutra Air de 283 gramos tiene un precio de 77 pesos en el portal electrónico del gigante minorista Walmart. El mismo producto alcanza un precio de hasta 429 pesos en un anuncio de la plataforma Mercado Libre publicado por un vendedor del estado de Colima. Definitivamente el Estado mexicano debe tomar cartas en el asunto.

Prosigo con la nota del economista, lo mismo sucede con las toallas desinfectantes que han desaparecido de los anaqueles de muchos supermercados. Un paquete con 35 de estas toallas, también de la marca Lysol, tiene un precio de 52 pesos en Walmart, mientras que, en Mercado Libre, un vendedor de Monterrey, Nuevo León, vende el mismo producto en 488 pesos.

Continuando con lo disparado de los precios en el mercado electrónico apunta tajantemente el economista que, A este grupo se suman el gel antibacterial y las máscaras cubrebocas, los cuales también han generado una mayor especulación entre los vendedores digitales de Amazon y Mercado Libre. Mientras que, en Walmart, una botella de gel antibacterial Blumen para manos de 525 ml tiene un precio de 39.90 pesos, un vendedor del municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, la vende por 649 pesos.

Estoy convencido compañeras Diputadas y respetables Diputados que las economías en ciertos casos deben ser regulados por el Estado, es decir involucrarse en la fijación de precios y no solo dejarlo al arbitrio de la *mano invisible* que refería Adam Smith, que en circunstancias extremas, como es el caso, si dejamos que los agentes del mercado actúen bajo las leyes que los rigen, en definitiva vulneran en muchas ocasiones a los más desfavorecidos.

Por otra parte, estimo oportuno traer a esta tribuna, lo que nuestras normas establecen respecto de los derechos que hoy pretendo sean cabalmente garantizados.

Establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28. Textualmente en su primer párrafo En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.

En su segundo párrafo mandata que la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en

una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

El tercer párrafo del artículo constitucional en comento claramente señala que, **las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios.** La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

En esa tesitura el Estado mexicano tiene la atribución constitucional de regular precios conforme a al Ley, para ello es necesario referir al ordenamiento secundario que deriva de este precepto constitucional, continuo.

Refiere la Ley Federal de Competencia Económica es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.

En esa tesitura la Ley secundaria tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar

los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Debemos colegir que dicha norma promueve la libertad de los mercados y que la competencia sea un factor determinante en la fijación de los precios de los bienes y servicios. Sin embargo, el Legislador mexicano a efecto de garantizar los derechos de los consumidores dejo plasmado en la Ley Federal de Protección al Consumidor los siguientes objetivos, y que sea contra peso del mercado abierto y liberal. Enuncio.

Esencialmente el promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Para dicho logro la norma protectora de los consumidores a través de la Procuraduría Federal del Consumidor vela por:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la

protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consumidores;

VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos;

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos aportados;

IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento;

X. La protección de los derechos de la infancia, adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas, y

XI. La libertad de constituir grupos u otras organizaciones de consumidores que, sin contravenir las disposiciones de esta ley, sean garantes de los derechos del consumidor.

En materia de la protección de los derechos humanos de los consumidores recobra fundamental importancia lo enunciado en el último párrafo del artículo 1 de la Ley de Protección referida y que sirve de sustento a lo que hoy les planteo pues de manera clara prevé que los derechos previstos en esa ley no excluyen otros derivados de tratados o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad. En este punto compañeros quiero manifestar que no somos los primeros en legislar respecto a la figura jurídica que hoy pongo a su

consideración pues existe una normatividad análoga en el país hermano del Paraguay que considero abre las puertas para que en México pueda tomar vigencia y fuerza la norma que hoy propongo.

En ese mismo orden de ideas es que manifiesto que la LEY FEDRAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS, tendrá por objeto evitar el alza artificial de precios, el acaparamiento y la publicidad engañosa de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, prohibiendo y sancionando la especulación de precios en el territorio nacional.

Además, esbozo que la autoridad de aplicación será la Secretaria de Economía, la cual coordinará con la Secretaria de Salud y Procuraduría Federal del Consumidor la las acciones que garanticen el cumplimiento de la ley.

Que, en todo momento, la Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán monitorear los precios de los productos que la Secretaria de Salud establezca como productos que prevengan y traten las enfermedades epidémicas, comparando los precios promedio de los doce meses anteriores a la ocurrencia de la epidemia.

Así como que la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de su normatividad, multará a las personas físicas o jurídicas que vendan productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas. Convencido que una vez vigente esta norma será en beneficio de los consumidores mexicanos ante situaciones que ponen en riesgo la salud.

En este contexto la norma que propongo de manera literal es:

LEY FEDERAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS

TITULO UNICO.

DISPOSICIONES

ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario y tiene por objeto evitar el alza artificial de precios, el acaparamiento y la publicidad engañosa de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, prohibiendo y sancionando la especulación de precios en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Secretaria de Economía, la cual coordinará con la Secretaria de Salud y Procuraduría Federal del Consumidor la las acciones que garanticen el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- Certificación de alza artificial de precios. La Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán monitorear los precios de los productos que la Secretaria de Salud establezca como productos que prevengan y traten las enfermedades epidémicas, comparando los precios promedio de los doce meses anteriores a la ocurrencia de la epidemia. En caso que la epidemia sea estacional, la comparación se realizará con base en los seis meses anteriores en que no se hayan registrados casos de la enfermedad. Se considerará además las variables que influyen en los precios, tales como el precio del dólar americano, la cotización del petróleo mexicano y la variación de los índices de precios al consumidor de los demás productos de la canasta familiar. En caso de no contarse con registros de precios anteriores, facturas originales de consumidores podrán ser utilizadas como base para la determinación de precios. Se reputará el alza artificial cuando el incremento sea en términos reales superior al diez por ciento.

ARTÍCULO 4º.- Precio de venta máximo. El precio de venta de los productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas no podrá ser superior al precio promedio de venta del mes anterior al alza artificial en términos reales de la moneda.

ARTÍCULO 5º.- Prohibición de acaparamiento. Todos los productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas estarán bajo supervisión de la Secretaria de Economía respecto a las mercaderías en general y de la Secretaria de Salud respecto a los medicamentos, ambas instituciones establecerán en el procedimiento de adquisición, almacenamiento y venta de los productos, de forma a que el consumidor final pueda adquirir como máximo la cantidad necesaria de cada producto para el uso o consumo de su hogar durante un mes.

ARTÍCULO 6º.- Prohibición de publicidad engañosa. Prohíbase la publicidad engañosa, la publicidad que genere e incite pánico para provocar un mayor consumo o la publicidad que incite a una compra desmedida de un producto de prevención o tratamiento de enfermedades epidémicas.

ARTÍCULO 7º.- Sanciones. La Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de su normatividad, multará a las personas físicas o jurídicas que vendan productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas:

a) A precios superiores a los establecidos en la presente ley: con una multa igual al triple del precio superior al máximo aplicado, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de respetar los precios so pena de suspensión de actividades por treinta días.

b) Permitiendo el acaparamiento de productos: con una multa al doble del precio de venta del producto, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de impedir el acaparamiento so pena de suspensión de actividades por treinta días.

c) Utilizando publicidad engañosa: con una multa igual al precio de venta del producto, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de retirar la publicidad engañosa so pena de suspensión de actividades por treinta días.

Es por todo lo anterior, que mediante la iniciativa de ley que hoy someto a la consideración de este Poder Legislativo del Estado de Baja California, considero que atendemos en esta ocasión, a la sociedad mexicana y en especial a los que menos tienen, por lo que le reitero a la comunidad Mexicana y a la Bajacaliforniana en particular, que mi paso por este Congreso como Legislador, será el conducirme con la más alta responsabilidad ética en el cumplimiento de mi mandato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado a esta H. Soberanía, Atentamente solicito:

ÚNICO. – ES DE APROBARSE Y SE APRUEBA LA INICIATIVA DE LEY QUE TIENE COMO PROPÓSITO LA CREACION DE LA LEY FEDERAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

LEY FEDERAL QUE PROHÍBE Y SANCIONA LA ESPECULACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES EPIDÉMICAS

TITULO UNICO.

DISPOSISIONES

ARTICULO 1º.- Objeto. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario y tiene por objeto evitar el alza artificial de precios, el acaparamiento y la publicidad engañosa de productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, prohibiendo y sancionando la especulación de precios en el territorio nacional.

ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación será la Secretaria de Economía, la cual coordinará con la Secretaria de Salud y Procuraduría Federal del Consumidor la las acciones que garanticen el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 3º.- Certificación de alza artificial de precios. La Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor deberán monitorear los precios de los productos que la Secretaria de Salud establezca como productos que prevengan y traten las enfermedades epidémicas, comparando los precios promedio de los doce meses anteriores a la ocurrencia de la epidemia. En caso que la epidemia sea estacional, la comparación se realizará con base en los seis meses anteriores en que no se hayan registrados casos de la enfermedad. Se considerará además las variables que influyen en los precios, tales como el precio del dólar americano, la cotización del petróleo mexicano y la variación de los índices de precios al consumidor de los demás productos de la canasta familiar. En caso de no contarse con registros de precios anteriores, facturas originales de consumidores podrán ser utilizadas como base para la determinación de precios. Se reputará el alza artificial cuando el incremento sea en términos reales superior al diez por ciento.

ARTÍCULO 4º.- Precio de venta máximo. El precio de venta de los productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas no podrá ser superior al precio promedio de venta del mes anterior al alza artificial en términos reales de la moneda.

ARTÍCULO 5º.- Prohibición de acaparamiento. Todos los productos de prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas estarán bajo supervisión de la Secretaria de Economía respecto a las mercaderías en general y de la Secretaria de Salud respecto a los medicamentos, ambas instituciones establecerán en el procedimiento de adquisición, almacenamiento y venta de los productos, de forma a que el consumidor final pueda adquirir como máximo la cantidad necesaria de cada producto para el uso o consumo de su hogar durante un mes.

ARTÍCULO 6º.- Prohibición de publicidad engañosa. Prohíbase la publicidad engañosa, la publicidad que genere e incite pánico para provocar un mayor consumo o la publicidad que incite a una compra desmedida de un producto de prevención o tratamiento de enfermedades epidémicas.

ARTÍCULO 7º.- Sanciones. La Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de su normatividad, multará a las personas físicas o jurídicas que vendan productos de prevención y tratamiento de las enfermedades epidémicas:

d) A precios superiores a los establecidos en la presente ley: con una multa igual al triple del precio superior al máximo aplicado, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de respetar los precios so pena de suspensión de actividades por treinta días.

e) Permitiendo el acaparamiento de productos: con una multa al doble del precio de venta del producto, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de impedir el acaparamiento so pena de suspensión de actividades por treinta días.

f) Utilizando publicidad engañosa: con una multa igual al precio de venta del producto, multiplicado por la cantidad de producto comercializado por la persona física o jurídica en los últimos treinta días y con la obligación de retirar la publicidad engañosa so pena de suspensión de actividades por treinta días.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor fuerza que contravengan la presente reforma.

SEGUNDO. De conformidad con la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la presente iniciativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se efectúe el trámite legislativo correspondiente.

A t e n t a m e n t e.-
A la fecha de su presentación.
"Construyendo juntos un futuro diferente".

DIPUTADO LUIS MORENO HERNÁNDEZ.
INTEGRANTE DE LA XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Claro que sí Diputado Luis Moreno Hernández, túrnese para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Rosina Del Villar Casas para presentar el Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, le podría pedir un receso de cinco minutos.

- LA C. DIP. MARÍA LUISA VILLALOBOS ÁVILA: Secundo.

- EL C. PRESIDENTE: Cinco minutos de receso.

- EL C. PRESIDENTE: Bueno, continuamos, solicito a la Secretaria Diputada Hernández a pasar lista de asistencia.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ: En atención a la solicitud del Diputado Presidente, hacemos nuevamente el pase de lista: "Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez

Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio Cesar, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa".

- LA C. SECRETARIA: Tenemos quórum Diputado Presidente.

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Cano Núñez, presente.

- LA C. SECRETARIA: Hacemos presentes a los ya Diputados que se han presentado por sí solos.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se declara abierta la Sesión, (timbre).

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Moreno Hernández.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Muchas gracias Presidente, para comentarle que al concluir mi participación los representantes de la totalidad de las fuerzas políticas en el Congreso y con gran sentido de solidaridad y responsabilidad social, me han comentado de la necesidad de ver la posibilidad de pedir, solicitar dispensa de trámite en comisiones sobre la Ley que presenté en tribuna por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, no podemos esperar más tiempo, es importante mandar señales de acciones de Gobierno, acciones de política pública que logre enfrentar esta terrible pandemia, y por esa razón respetuosamente le solicito a Usted, el poder solicitar también al Pleno del Congreso la dispensa de trámite correspondiente.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado, dejamos sin efecto la turnación anterior que se hizo.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Y procedemos a declarar abierto el debate de la dispensa de trámite de la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA: Damos presente al Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez en la Sesión.

- EL C. PRESIDENTE: De no ser así, se solicita a la Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ECRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano, **por unanimidad Diputado Presidente.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo.

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: No es en contra, yo propondría al Diputado Luis Moreno que esta Iniciativa no se quede en comisiones, que se vaya de una vez al Congreso de la Unión.

- EL C. PRESIDENTE: Claro que sí Diputada.

- LA C. DIP. MARÍA TRINIDAD VACA CHACÓN: Correcto.

- EL C. PRESIDENTE: Algún, tú Diputado.

- EL C. DIP. VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ: Nada más sumarme con el Diputado Luis, creo que es un tema importante y creo que lo que estamos viviendo el día de hoy, no es un tema menor, la verdad todo es poco en contra de esta pandemia, te felicito Luis.

- LA C. DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ: Diputado, de igual manera, me sumo.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Diputado, nada más para solicitarte si me permites unirme a tu Iniciativa, es muy interesante, porque los precios están subiendo muchísimo ahorita, de un día para otro suben muchísimo todo, entonces no es justo, no es justo, yo creo que si debemos de poner nosotros como legisladores un alto y mandarla de inmediato.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Claro que sí Diputada, si me permite nada más una consideración, el día de ayer en la Junta de Coordinación Política llegamos a un acuerdo fundamental, y es que esta Iniciativa y todas las Iniciativa que se presenten para enfrentar la pandemia, van a ser Iniciativas producto de un esfuerzo conjunto, toda vez que yo, en todo caso, retiraría a la hora de la dictaminación que no sea una Iniciativa presentada por un servidor, sino una Iniciativa producto de todas las fuerzas políticas en el Estado.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Luis Moreno, de acuerdo alguien ¿más que desee intervenir?, adelante Diputado

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Nada más para pedirle permiso si me permite sumarme a la propuesta Diputado de PT, de la fracción del Partido del Trabajo.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, Diputado Otáñez.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: De igual manera Diputado Moreno, excelente Iniciativa, hay que respaldarla, es nuestra responsabilidad este tipo de situaciones intervenir de manera inmediata y ver por la ciudadanía, entonces (inaudible).

- EL C. PRESIDENTE: Bien, Diputado Gallardo tiene el uso de la voz.

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Muchas gracias, Presidente, felicitarte Diputado, reconocerte pues esa sensibilidad mostrada con este pleito legislativo y que el espíritu dentro de muchas cosas, pretende evitar los abusos, ante una situación tan delicada, que adolece a la humanidad, como lo dijo ciertamente el Diputado Molina, entonces pedirte me permitas, yo sé que ya lo hiciste abierto y felicitarte, reconocerte esa apertura a la inclusión de todo el Congreso en temas tan, tan sensibles como lo es esto, cuantas con mi apoyo y hacer un llamado desde esta tribuna del Estado al Congreso de la Unión, para que atienda, atienda esto que se está proponiendo desde Baja California, donde estamos preocupados por todo lo que está sucediendo, es cuánto.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputado Gallardo.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Damos cuenta de la llegada de la Diputada Josefina Agatón, así mismo de Miguel Ángel Bujanda y de Juan Manuel Molina al recinto.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz la Diputada Eva María Vásquez Hernández.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Solicitarte Diputado por esta Iniciativa, ayer que efectivamente nos la compartías y que fuiste generoso en tu planteamiento, realmente habla de que como ya se dijo con antelación que con esta desgracia, de esta contingencia todos nos hermanamos en favor de las causas de la gente, y una causa muy importante y como prioridad de uno es privilegiar en todo momento la salud, sabemos que cuando se hace referencia a esos abusos, a esas condiciones humanas o propias de la naturaleza humana que puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros como ya se ha dicho con antelación, nos lleva a priorizar ¿no?, y en es prioridad, yo creo que si bien la alimentación es fundamental, un tema como el que tu tocas como es el de salud,

no es un tema menor, es el tema número uno en caso como este tan lamentable y pues felicitarte, pedirte aún, cuando también reconozco al igual que lo hizo ya también nuestro compañero Fausto, a tu generosidad al incluir a toda la legislatura en este tema, pues habla justamente de eso, del compromiso que tenemos todos, pedirte me sumes y agradecerte y reconocerte por ese esfuerzo.

- EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la voz Diputada Hernández.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Yo quisiera contribuir también con una felicitación primero, segundo por el hecho de formar parte de la Comisión como Presidente de Asuntos Fronterizos y la particularidad que tenemos como Estado de tener la frontera precisamente con uno de los Estados donde se iniciaron los contagios; y el papel importante que tenemos ante la representación de nuestro país como frontera, porque es donde empieza la patria y el ejemplo que damos a los demás Estados, porque nuestra jornada es doble, nuestros hermanos que viven en el otro lado, vienen y se abastecen de lo que ya se terminó allá y la reserva que tenemos local también se agota más rápidamente, situación que no se presenta me imagino, en los Estados conurbados en nuestro país, entonces, un doble mérito por el hecho de representar binacionalmente a este Congreso y además un ejemplo para los vecinos que también están muy atentos; y que somos una comunidad interdependiente, tanto económica, como física y socialmente, entonces, solidarios con nuestros connacionales, nuestros familiares que radican allá y que extendamos este punto de vista tan importante para que se considere también en los gobiernos de nuestros vecinos en nuestras acciones solidarias, gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, entonces continuamos.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, solamente breve para sumarme al planteamiento, aunque ya nos quedó claro que pensamos igual y ojalá no sea necesarias hacer leyes para obligar al ser humano a ser solidario, pero estoy completamente convencido de que esta situación nos va a enseñar a serlo y mucho, mucho más, es cuánto.

- EL C. DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ: De acuerdo, igualmente Diputado Moreno, si Usted me permite, también me sumo a su iniciativa, en los mismos términos pues que ya todos, bueno todos los compañeras y compañeros Diputados nos sumamos a la Iniciativa de Luis Moreno Hernández (aplausos).

- EL C. PRESIDENTE: Bien, toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández, iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
INICIATIVA			
PRESENTADA POR EL DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		

Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**25**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 25 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones**.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobada la Iniciativa presentada por el Diputado Luis Moreno Hernández.

- EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputa Rosina del Villar Casas para presentar Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Gracias Diputado Presidente, Señor Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, previo a la lectura del Dictamen Número 60, solicito se someta a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura total del Dictamen, para efecto de que solo dar lectura al proemio y a los resolutivos del mismo, solicitando a su vez, se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de Debates.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de la lectura presentada.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de lectura presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano, **por unanimidad Diputado Presidente.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, continua en uso de la voz la Diputada Rosina del Villar Casas para dar lectura al Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS: Con su venia Presidente, gracias.

DICTAMEN No. 60

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el oficio PRES-003/2020, recibido en el H. Congreso del Estado el día 27 de enero del 2020, por medio del cual el C. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, solicita autorización para realizar ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

RESOLUTIVO:

ÚNICO.- No se aprueba la ampliación de recursos por $ 8,716,470 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, mediante la cual se pretendía ampliar diversas partidas presupuestales, con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que le fueron autorizados a ejercer en el presente ejercicio fiscal, toda vez que no fue proporcionado el oficio por medio del cual la Secretaría de Hacienda del Estado, otorga la viabilidad financiera y de manera positiva, para el trámite de la presente ante el H. Congreso del

Estado, incumpliendo con lo que establece el artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y el Artículo 2 fracción II de la nueva Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, así mismo en lo que respecta al capítulo de gasto 10000 Servicios personales que se pretendía incrementar en diversas partidas hasta por un importe de $ 6,947,647 pesos M.N., se incumple con lo previsto en el artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya que su destino proyectado es complementar el pago de sueldos y prestaciones a las diversas categorías de personal, por los meses de noviembre y diciembre de 2020.

Es cuanto Señor Presidente.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 60 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, LEÍDO POR LA DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS)

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

DICTAMEN No. 60

HONORABLE ASAMBLEA:

Recibió esta Comisión para su estudio, análisis, dictamen y aprobación en su caso, el oficio PRES-003/2020, recibido en el H. Congreso del Estado el día 27 de enero del 2020, por medio del cual el C. Alberto Loaiza Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, solicita autorización para realizar ampliación de recursos al Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, por $ 8,716,470 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.).

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2019, fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado en Sesión Ordinaria celebrada en fecha 27 de diciembre del año 2018, y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 del mismo mes y año.

SEGUNDO.- Que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal del 2020 se incluye el del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California con un monto de $46’000,000.

TERCERO.- Que el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio 2020, fue autorizado por el H. Congreso del Estado el día 31 de diciembre de 2019, a través del Dictamen 55 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, publicándose sus Resolutivos en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2019, a través del cual se aprueba un Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California hasta la cantidad de $46’000,000, y se encomienda al Magistrado Presidente de dicho Tribunal, a que formule su presupuesto de egresos en los términos de la Ley de la materia y al techo financiero en comento, el cual en materia de Servicios Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo en la aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V de dicha Ley. Y que una vez formulado su Presupuesto de Egresos, lo publique en los términos de la Ley de la Materia a más tardar el 31 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Que dando seguimiento a lo señalado en el Considerando anterior, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, publicó en el Periódico Oficial del Estado, el día 3 de enero del 2020, su Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal del 2020, a nivel de partidas presupuestales por $46’000,000.

QUINTO.- Que en el oficio de solicitud de autorización del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, se establece en parte lo que se transcribe a continuación:

> **Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y los artículos 1 y 2 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por este conducto me permito solicitar a Usted ampliación del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California por la cantidad de $ 8,716,470.00 M.N. (ocho millones setecientos dieciséis mil cuatrocientos setenta pesos con cero centavos moneda nacional), como se detalla en documento que se anexa al presente. Lo anterior tomando en consideración que el Congreso del Estado aprobó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2020 a este Órgano Jurisdiccional por la cantidad de $ 46,000,000.00 M.N. (cuarenta y seis millones de pesos con cero centavos moneda nacional), que es la misma cantidad que el presupuesto autorizado para el ejercicio de 2019, sin considerar que en el ejercicio de 2019 se autorizó una ampliación al Presupuesto de Egresos de este Tribunal por la cantidad de $ 6,887,750.00 M.N. (seis millones ochocientos ochenta y siete mil setecientos cincuenta pesos con cero centavos moneda nacional) para la instalación y operación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción y la Contraloría Interna de este Órgano Jurisdiccional, que al no haber sido otorgada para el presente ejercicio de 2020 tuvo que ser absorbido dicho costo por el Tribunal a fin de que dicha Sala siguiera operando a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, impide que el Tribunal este en posibilidad de operar todo el año, por lo cual se requiere esta ampliación de presupuesto a fin de estar en posibilidad de cubrir el costo de operación del Tribunal por todo el ejercicio de 2020.**
>
> **A la brevedad se remitirá en alcance el impacto de esta ampliación de Presupuesto en el Programa Operativo Anual el cual se determinará una vez obtenidos los resultados de las visitas de inspección que se realizarán a las Salas de este órgano jurisdiccional durante la última semana del mes de enero del año en curso.**

SEXTO.- Que con la presente solicitud de modificación presupuestal, se afectarán las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		AMPLIACIÓN
11101	Dietas y retribuciones	$ 1,074,458
11301	Sueldo tabular personal permanente	1,668,496
12201	Sueldo tabular personal eventual	302,142
12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	8,000
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	16,272
13202	Prima vacacional	20,492
13203	Gratificación de fin de año	91,457
13401	Compensaciones	2,493,830
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	397,061
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	188,031
14103	Aportaciones patronales de accidente de trabajo	16,193
15401	Canasta básica	142,266
15402	Bono de transporte	75,860
15403	Previsión social múltiple	453,089
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 6,947,647**
21101	Materiales y útiles de oficina	91,826
21102	Equipos menores de oficina	21,800
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	41,533
21501	Material impreso y de apoyo informativo	15,000
21601	Material de limpieza	15,100
22105	Agua y hielo para consumo humano	6,500
22106	Artículos de cafetería	4,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000
26101	Combustibles	79,200
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 280,959**
31101	Servicio de energía eléctrica	74,167
31401	Servicio telefónico tradicional	19,000
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	26,040

PARTIDA		AMPLIACIÓN
31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	22,500
32201	Arrendamientos de edificios y locales	587,667
32301	Arrendamientos de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	93,660
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	18,567
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	53,563
33602	Servicios de impresión	19,000
33604	Otros servicios de apoyo administrativo	64,000
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	3,800
34501	Seguros de bienes patrimoniales	25,000
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	352,000
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,500
37501	Viáticos en el país	9,500
38201	Gastos de orden social y cultural	40,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,444,964**
51101	Muebles de oficina y estantería	11,700
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,400
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,800
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**42,900**
	TOTAL	**$ 8,716,470**

SÉPTIMO.- Que la Auditoría Superior del Estado, solicitó información complementaria al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, mediante oficio DEL/227/2020, de fecha 11 de febrero de 2020, recibiéndose respuesta en la misma, el día 26 de febrero de 2020, a través de oficio PRES-012/2020.

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Que con la presente solicitud de autorización para realizar ampliación de recursos se afectarán los capítulos de gastos siguientes:

CAPÍTULO		AMPLIACIÓN
10000	Servicios Personales	$ 6,947,647
20000	Materiales y Suministros	280,959
30000	Servicios Generales	1,444,964
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,900
		$ 8,716,470

SEGUNDO.- Que el capítulo de gasto 10000 Servicios Personales se incrementará por $ 6,947,647, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		AMPLIACIÓN
11101	Dietas y retribuciones	$ 1,074,458
11301	Sueldo tabular personal permanente	1,668,496
12201	Sueldo tabular personal eventual	302,142
12301	Servicio social a estudiantes y profesionistas	8,000
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	16,272
13202	Prima vacacional	20,492
13203	Gratificación de fin de año	91,457
13401	Compensaciones	2,493,830
14101	Aportaciones patronales de servicio médico	397,061
14102	Aportaciones patronales de fondo de pensiones	188,031
14103	Aportaciones patronales de accidente de trabajo	16,193
15401	Canasta básica	142,266
15402	Bono de transporte	75,860
15403	Previsión social múltiple	453,089
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$ 6,947,647**

JUSTIFICACIÓN: Los recursos en comento, serán aplicados para cubrir parte de las remuneraciones del personal, tanto de magistrados, personal de confianza, base y eventual, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del presente ejercicio fiscal, toda vez que en el techo financiero autorizado a ejercer para el presente ejercicio fiscal por

$ 46,000,000, no se incluyó el recurso que fue autorizado por el H. Congreso del Estado, vía aprobación tácita el 26 de junio de 2019, por un importe de $ 6,887,750, y que correspondió al período del 15 de mayo al 31 de diciembre del mencionado año, para la instalación y operación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción de dicho Órgano Jurisdiccional. Por lo cual en el presente ejercicio fiscal, tuvo que ser absorbido dicho costo por el Tribunal a fin de que dicha Sala siguiera operando, generando dicho déficit proyectado.

TERCERO.- Que el capítulo de gasto 20000 Materiales y Suministros se incrementará por $ 280,959, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		**AMPLIACIÓN**
21101	Materiales y útiles de oficina	$ 91,826
21102	Equipos menores de oficina	21,800
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	41,533
21501	Material impreso y de apoyo informativo	15,000
21601	Material de limpieza	15,100
22105	Agua y hielo para consumo humano	6,500
22106	Artículos de cafetería	4,000
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000
26101	Combustibles	79,200
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 280,959**

Los recursos en comento, se aplicarán a las áreas y por los importes, siguientes:

PARTIDA		**AMPLIACIÓN**	**ÁREA**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**TOTAL**
21101	Materiales y útiles de oficina	$ 91,826	PLENO	$ 12,913	$ 12,913	$ 25,826
	(hojas blancas, artículos de oficina y desechables)		PRIMERA SALA	9,000	9,000	18,000
			SEGUNDA SALA	6,000	6,000	12,000
			SALA AUXILIAR	6,000	6,000	12,000
			TERCERA SALA	5,000	5,000	10,000
			SALA ESPECIALIZADA	7,000	7,000	14,000
				45,913	**45,913**	**91,826**

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
21102	Equipos menores de oficina	21,800	PLENO	3,600	3,600	7,200
	(ventiladores y calculadoras)		PRIMERA SALA	1,950	1,950	3,900
			SEGUNDA SALA	1,350	1,350	2,700
			SALA AUXILIAR	1,050	1,050	2,100
			TERCERA SALA	1,050	1,050	2,100
			SALA ESPECIALIZADA	1,900	1,900	3,800
				10,900	**10,900**	**21,800**
21401	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	41,533	PLENO	6,000	6,000	12,000
	(toners para impresoras y usb)		PRIMERA SALA	4,000	4,000	8,000
			SEGUNDA SALA	3,266	3,267	6,533
			SALA AUXILIAR	2,500	2,500	5,000
			TERCERA SALA	2,000	2,000	4,000
			SALA ESPECIALIZADA	3,000	3,000	6,000
				20,766	**20,767**	**41,533**
21501	Material impreso y de apoyo informativo	15,000	PLENO	2,000	2,000	4,000
	(libros jurídicos actualizados)		TERCERA SALA	500	500	1,000
			SALA ESPECIALIZADA	5,000	5,000	10,000
				7,500	**7,500**	**15,000**
21601	Materal de limpieza	15,100	PLENO	2,000	2,000	4,000
	(limpiadores, bolsas para la basura, trapeadores, escobas, aromatizantes, etc)		PRIMERA SALA	1,200	1,200	2,400
			SEGUNDA SALA	1,000	1,000	2,000
			SALA AUXILIAR	850	850	1,700
			TERCERA SALA	1,000	1,000	2,000
			SALA ESPECIALIZADA	1,500	1,500	3,000
				7,550	**7,550**	**15,100**
22105	Agua y hielo para consumo humano	6,500	PLENO	1,000	1,000	2,000
			PRIMERA SALA	500	500	1,000
			SEGUNDA SALA	450	450	900
			SALA AUXILIAR	400	400	800
			TERCERA SALA	400	400	800
			SALA ESPECIALIZADA	500	500	1,000

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
				3,250	**3,250**	**6,500**
22106	Artículos de cafetería	4,000	PLENO	500	500	1,000
	(café, cremora, azúcar, etc)		PRIMERA SALA	400	400	800
			SEGUNDA SALA	300	300	600
			SALA AUXILIAR	200	200	400
			TERCERA SALA	300	300	600
			SALA ESPECIALIZADA	300	300	600
				2,000	**2,000**	**4,000**
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	5,000	PLENO	1,000		1,000
	(cafeteras)		PRIMERA SALA	1,000		1,000
			SEGUNDA SALA	500		500
			SALA AUXILIAR	500		500
			TERCERA SALA	1,000		1,000
			SALA ESPECIALIZADA	1,000		1,000
				5,000		**5,000**
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000	PLENO	500		500
	(medicamentos y botiquín de primeros auxilios)		SALA ESPECIALIZADA	500		500
				1,000		**1,000**
26101	Combustibles	79,200	PLENO	11,850	11,850	23,700
	(gasolina para mensajeros y actuarios, para notificar en Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito)		PRIMERA SALA	6,100	6,100	12,200
			SEGUNDA SALA	4,150	4,150	8,300
			SALA AUXILIAR	4,150	4,150	8,300
			TERCERA SALA	3,050	3,050	6,100
			SALA ESPECIALIZADA	10,300	10,300	20,600
				39,600	**39,600**	**79,200**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$ 280,959**		**$ 143,479**	**$ 137,480**	**$280,959**

CUARTO.- Que el capítulo de gasto 30000 Servicios generales se incrementará por $ 1,444,964, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		AMPLIACIÓN
31101	Servicio de energía eléctrica	$ 74,167
31401	Servicio telefónico tradicional	19,000
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	26,040
31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	22,500
32201	Arrendamientos de edificios y locales	587,667
32301	Arrendamientos de mobiliario y equipo de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	93,660
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	18,567
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	53,563
33602	Servicios de impresión	19,000
33604	Otros servicios de apoyo administrativo	64,000
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	3,800
34501	Seguros de bienes patrimoniales	25,000
35101	Conservación y mantenimiento menor de edificios y locales	352,000
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,500
37501	Viáticos en el país	9,500
38201	Gastos de orden social y cultural	40,000
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 1,444,964**

Los recursos en mención, serán aplicados en las diversas áreas y por los importes siguientes:

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
31101	Servicio de energía eléctrica	$ 74,167	PLENO	$ 9,000	$ 9,000	$ 18,000
			PRIMERA SALA	5,500	5,500	11,000
			SEGUNDA SALA	6,500	6,500	13,000
			SALA AUXILIAR	4,500	4,500	9,000
			TERCERA SALA	5,583	5,584	11,167
			SALA ESPECIALIZADA	6,000	6,000	12,000
				37,083	**37,084**	**74,167**

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
31401	Servicio telefónico tradicional	19,000	PLENO	2,000	2,000	4,000
			PRIMERA SALA	2,000	2,000	4,000
			SEGUNDA SALA	1,500	1,500	3,000
			SALA AUXILIAR	1,100	1,100	2,200
			TERCERA SALA	2,000	2,000	4,000
			SALA ESPECIALIZADA	900	900	1,800
				9,500	**9,500**	**19,000**
31701	Servicio de acceso a internet, redes y	26,040	PLENO	11,300	11,300	22,600
	procesamiento de información		SEGUNDA SALA	670	670	1,340
	(internet y soporte página web)		TERCERA SALA	600	600	1,200
			SALA ESPECIALIZADA	450	450	900
				13,020	**13,020**	**26,040**
31801	Servicio postal, telégrafo y mensajería	22,500	PLENO	4,000	4,000	8,000
	(paquetería regional y nacional)		PRIMERA SALA	500	500	1,000
			SEGUNDA SALA	3,000	3,000	6,000
			TERCERA SALA	3,000	3,000	6,000
			SALA ESPECIALIZADA	750	750	1,500
				11,250	**11,250**	**22,500**
32201	Arrendamiento de edificios y locales	587,667	PLENO	96,284	96,283	192,567
			PRIMERA SALA	49,100	49,100	98,200
			SEGUNDA SALA	49,450	49,450	98,900
			SALA AUXILIAR	22,200	22,200	44,400
			TERCERA SALA	26,000	26,000	52,000
			SALA ESPECIALIZADA	50,800	50,800	101,600
				293,834	**293,833**	**587,667**
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de		PLENO	16,131	6,960	23,091
	administración, educacional, recreativo y de		PRIMERA SALA	12,146	5,270	17,416
	bienes informáticos	93,660	SEGUNDA SALA	9,104	3,950	13,054
	(copiadoras y equipos de cómputo)		SALA AUXILIAR	5,784	2,500	8,284
			TERCERA SALA	5,712	2,460	8,172
			SALA ESPECIALIZADA	16,513	7,130	23,643
				65,390	**28,270**	**93,660**

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
33101	Servicios legales y asesorías en materia jurídica,	18,567	PLENO	9,284	9,283	18,567
				9,284	**9,283**	**18,567**
33302	Servicios de consultoría en tecnologías de	53,563	PLENO	9,781	9,782	19,563
	la información		SALA AUXILIAR	14,000	14,000	28,000
			SALA ESPECIALIZADA	3,000	3,000	6,000
				26,781	**26,782**	**53,563**
33602	Servicios de impresión	19,000	PLENO	4,000	3,000	7,000
			PRIMERA SALA	2,000	1,000	3,000
			SEGUNDA SALA	2,000	1,000	3,000
			SALA AUXILIAR	1,000	1,000	2,000
			TERCERA SALA	2,000	1,000	3,000
			SALA ESPECIALIZADA	1,000		1,000
				12,000	**7,000**	**19,000**
33604	Otros servicios de apoyo administrativo	64,000	PLENO	64,000		64,000
	(publicaciones en el Periódico Oficial del Estado)			**64,000**	**0**	**64,000**
34101	Intereses, comisiones y servicios bancarios	3,800	PLENO	1,900	1,900	3,800
				1,900	**1,900**	**3,800**
34501	Seguros de bienes patrimoniales	25,000	PLENO	2,000		2,000
	(pólizas de seguro de automóviles y equipos)		SEGUNDA SALA	500		500
			TERCERA SALA	500		500
			SALA ESPECIALIZADA		22,000	22,000
				3,000	**22,000**	**25,000**
35101	Conservación y mantenimiento menor de		PLENO		1,750	1,750
	edificios y locales	352,000	PRIMERA SALA	1,750		1,750
			SEGUNDA SALA	345,000		345,000
			SALA AUXILIAR		1,750	1,750
			TERCERA SALA	1,750		1,750
				348,500	**3,500**	**352,000**
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de		PLENO	6,250		6,250
	transporte	36,500	PRIMERA SALA	10,000		10,000
			SEGUNDA SALA	5,000		5,000

PARTIDA		AMPLIACIÓN	ÁREA	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
			SALA AUXILIAR	5,000		5,000
			TERCERA SALA	6,250		6,250
			SALA ESPECIALIZADA	4,000		4,000
				36,500		**36,500**
37501	Viáticos en el país	9,500	SALA ESPECIALIZADA	4,750	4,750	9,500
	(notificaciones foráneas)			**4,750**	**4,750**	**9,500**
38201	Gastos de orden social y cultural	40,000	PLENO		12,000	12,000
	(posada)		PRIMERA SALA		6,800	6,800
			SEGUNDA SALA		6,000	6,000
			SALA AUXILIAR		4,400	4,400
			TERCERA SALA		4,800	4,800
			SALA ESPECIALIZADA		6,000	6,000
					40,000	**40,000**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 1,444,964**		**$ 936,792**	**$ 508,172**	**$1,444,964**

QUINTO.- Que el capítulo de gasto 50000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles se incrementará por $ 42,900, afectándose las partidas presupuestales siguientes:

PARTIDA		AMPLIACIÓN
51101	Muebles de oficina y estantería	$ 11,700
51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	10,400
56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	20,800
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$ 42,900**

SEXTO.- Que la partida presupuestal 51101 Muebles de oficina y estantería se creará por $ 11,700, para destinarse a la adquisición de los bienes siguientes:

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ÁREA A ASIGNAR
1	Mesa plegable grande	$ 1,200	$ 1,200	Pleno y Presidencia
6	Mesa plegable chica	500	3,000	
4	Silla secretarial	1,500	6,000	

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ÁREA A ASIGNAR
1	Silla secretarial	1,500	1,500	Sala Especializada
	Totales		**$ 11,700**	

SÉPTIMO.- Que la partida presupuestal 51901 Otros mobiliarios y equipos de administración se creará por $ 10,400, con el fin de adquirir lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ÁREA A ASIGNAR
1	Despachador de agua	$ 2,600	$ 2,600	Pleno y Presidencia
1	Despachador de agua	2,600	2,600	Primera Sala
1	Despachador de agua	2,600	2,600	Sala Auxiliar
1	Despachador de agua	2,600	2,600	Sala Especializada
	Totales		**$ 10,400**	

OCTAVO.- Que la partida presupuestal 56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos se creará por $ 20,800, para destinarlo a la adquisición de lo descrito a continuación:

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ÁREA A ASIGNAR
6	Reguladores de voltaje	$ 1,300	$ 7,800	Pleno y Presidencia
2	Reguladores de voltaje	1,300	2,600	Primera Sala
2	Reguladores de voltaje	1,300	2,600	Segunda Sala
2	Reguladores de voltaje	1,300	2,600	Sala Auxiliar
2	Reguladores de voltaje	1,300	2,600	Tercera Sala
2	Reguladores de voltaje	1,300	2,600	Sala Especializada
	Totales		**$ 20,800**	

NOVENO.- Que la presente solicitud de autorización para realizar ampliación presupuestal por $ 8,716,470, se pretende realizar con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que le fueron autorizados a ejercer para el presente ejercicio fiscal, por lo que considerando lo anterior, se debe atender lo establecido en el artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, que en parte prevé lo siguiente:

> **Artículo 50.- Si algunas partidas presupuestales requieren modificarse para adecuar su disponibilidad durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, se estará a lo siguiente:**

I. a la IV. ….

V. Los Órganos Autónomos, por conducto de su Titular, solicitarán al Congreso del Estado la autorización correspondiente, y a su vez, deberá remitir simultáneamente copia de dicha solicitud, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada.

….

En los casos en que se solicite ampliar el Presupuesto autorizado del ejercicio a los Órganos Autónomos, por motivos distintos a los de ampliación automática, la solicitud de autorización deberá acompañarse de la opinión de la Secretaría de Planeación y Finanzas sobre la viabilidad financiera de la propuesta.

….

DÉCIMO.- Que por lo antes previsto en el Considerando que antecede, le fue requerida copia del oficio donde le solicita a la Secretaría de Hacienda del Estado, así como mediante el cual se le otorga por parte de ésta, la opinión de viabilidad financiera para realizar el presente trámite ante el H. Congreso del Estado, manifestándonos el organismo solicitante, lo siguiente:

En relación a la viabilidad financiera por parte de Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado a que se refiere su oficio, me permito informarle que a partir del 01 de enero de 2018, entraron en vigor las reformas al artículo 55 de la Constitución Política del estado de Baja California, que a la letra dicen lo siguiente:

ARTÍCULO 55.- El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa tendrá el carácter de órgano constitucional autónomo, y contará con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal e independencia en sus decisiones para el dictado de sus fallos y para el establecimiento de su organización y funcionamiento, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio y poseerá plena jurisdicción e imperio suficiente para hacer cumplir sus resoluciones.

El Pleno del Tribunal elaborará su presupuesto de egresos por grupos y partidas presupuestales, el cual deberá remitir por conducto de su presidente al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su inclusión en el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. El proyecto del Tribunal no podrá ser modificado por el titular del Poder Ejecutivo, pero si por el Congreso del Estado. El presupuesto

del Tribunal no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales.

Así mismo la nueva Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California establece lo siguiente:

ARTÍCULO 2.- …..

…….

El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado y las disposiciones aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente bajo el principio de rendición de cuentas.

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas:

I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, en términos de lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público;
II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por el Congreso del Estado;
III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de su disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal;
IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia unidad administrativa;
V. En los casos que requiera ampliar el presupuesto autorizado del ejercicio por motivos distintos de ampliación automática, mediante la utilización de remanentes obtenidos de ejercicios anteriores, el Tribunal deberá solicitar la autorización del Congreso del Estado.
VI. El Tribunal contará con un presupuesto que no podrá ser inferior al aprobado por el Congreso del Estado para el ejercicio anual anterior; para estos efectos no se considerarán las ampliaciones presupuestales.

De las disposiciones antes descritas se desprende que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un órgano constitucional autónomo, que cuenta con plena autonomía jurisdiccional, administrativa, financiera y presupuestal, al que se le asignan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado a través de ramo autónomos.

Razón por la cual se estableció claramente en la Ley que lo rige, que el Tribunal autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda del Estado; y en los casos que requiera ampliar el presupuesto autorizado del ejercicio, por motivos distintos a los de ampliación automática, mediante la utilización de remanentes obtenidos de ejercicios anteriores, el Tribunal deberá solicitar únicamente la autorización al Congreso del Estado, por lo tanto, de considerarlo necesario, este Congreso podrá solicitar la viabilidad financiera a la Secretaría de Hacienda del Estado.

Cabe señalar, que la autonomía presupuestal y financiera que le confiere la Constitución al Tribunal, constituye una condición necesaria para que el Tribunal ejerza sus funciones con plena independencia, en aras de cumplir con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que constituye la obligación del legislador de garantizar la independencia de los tribunales, cuestiones que difícilmente pueden cumplirse sin la referida autonomía presupuestal, ya que es evidente que no puede quedar sujeto a las limitaciones de otros poderes, pues ello implicaría violación a los principios constitucionales

DÉCIMO PRIMERO.- Que debemos atender lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016), que señala lo siguiente:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Adicionalmente, los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios cumplirán, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del

Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:

I al VIII. ….

IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos de las Entidades Federativas, los Municipios, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías;

….

Interpretando las disposiciones anteriores, y considerando que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, es un organismo autónomo, por lo tanto es un Ente Público, y si nos remitimos al Artículo 1 último párrafo, nos establece que como tal, cumplirá con lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de la Ley que nos ocupa.

El Título Segundo, "**Reglas de Disciplina Financiera" , Capítulo I "Del Balance Presupuestario Sostenible y la Responsabilidad Hacendaria de las Entidades Federativas",** relativo al tema que nos ocupa, de incremento al presupuesto de egresos en el Capítulo de gastos de servicios personales, prevé lo siguiente:

Artículo 10.- En materia de servicios personales, las entidades federativas observarán lo siguiente:

I. … .

II. En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberá presentar en una sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:

a) ….
b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. …

Tenemos que la presente solicitud de autorización, en lo que respecta al capítulo de gasto 10000 Servicios personales que se pretende incrementar por $ 6,947,647, se debe sujetar a lo previsto en la citada Ley, en el siguiente:

> **Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:**
>
> **I al IV. ….**
>
> **V. La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente.**

Con lo anterior, podemos observar que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, es clara y contundente; el capítulo de servicios personales no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, salvo el pago de sentencias laborales, lo cual no es el caso de la solicitud que nos ocupa.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que atendiendo lo dispuesto en el Considerando Décimo Primero, se concluye lo siguiente:

Respecto a la presente solicitud de autorización para ampliar el Presupuesto de Egresos por un monto de $8’716,470, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California manifestó que el Congreso del Estado aprobó un Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2020 a este Órgano Jurisdiccional por la cantidad de $46,000,000, que es la misma cantidad que se autorizó para el ejercicio de 2019, sin considerar que en el ejercicio de 2019 se autorizó una ampliación al Presupuesto de Egresos de este Tribunal por $6,887,750, para la instalación y operación de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, por el período del mes de mayo a diciembre del año en mención, el cual se incluyó por el mismo importe de la solicitud de autorización que nos ocupa, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020. Independientemente, de lo antes expuesto, tenemos que:

a) No fue proporcionado el oficio por medio del cual la Secretaría de Hacienda del Estado, otorgue la viabilidad financiera y de manera positiva, para el trámite de la presente ante el H. Congreso del Estado, tal como lo establece el artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, lo anterior, derivado a que el Organismo solicitante alude lo previsto en el Artículo 2 fracción II de la nueva Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, el cual establece que “**autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por el Congreso del Estado**”, y en este caso tratándose de una solicitud para realizar una ampliación presupuestal, sí se estaría por encima de su Presupuesto de Egresos autorizado, por lo que necesariamente está obligado a solicitar a la entonces Secretaria de Planeación y Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda del Estado, un oficio donde se otorgue la viabilidad financiera para el trámite de la presente

solicitud; respecto a lo anterior, también se toma en cuenta lo establecido en el artículo 2 tercer párrafo, de la ley arriba comentada que a la letra dice **"El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado …".**

b) En lo que respecta al capítulo de gasto 10000 Servicios personales que se pretende incrementar en diversas partidas hasta por un importe de $ 6,947,647, se incumple con lo previsto en el artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**,** ya que su destino proyectado es complementar el pago de sueldos y prestaciones a las diversas categorías de personal, por los meses de noviembre y diciembre de 2020. Es de comentar, que el 31 de diciembre de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, señalándose en el Resolutivo Segundo que **"Se instruya al Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, formule su Presupuesto de Egresos en los términos de la Ley de la Materia y al techo financiero considerado en el Resolutivo Primero de este Dictamen, el cual en materia de Servicios Personales deberá atender lo dispuesto en el Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, asimismo en la aprobación del Presupuesto de Egresos en cita, en lo correspondiente también al capítulo de Gasto de Servicios Personales, se deberá atender lo dispuesto en el Artículo 13 Fracción V de dicha Ley,** observando con la presente solicitud de autorización para realizar ampliación presupuestal incrementando el capítulo de gasto de servicios personales, que el Organismo no dio seguimiento a lo antes previsto por el H. Congreso del Estado de Baja California.

DÉCIMO TERCERO.- Que es obligación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, por conducto de su Titular, solicitar al Congreso del Estado la autorización correspondiente para efectuar la creación o supresión de partidas presupuestales, así como la ampliación, transferencia o reducción de recursos en las partidas de su Presupuesto de Egresos, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50, Fracción V de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California.

DÉCIMO CUARTO.- Que de conformidad con el primer párrafo del Apartado A del Artículo 22, de la Constitución Política del Estado de Baja California, es facultad del Congreso del Estado, en los tres períodos ordinarios de sesiones, estudiar y votar los dictámenes de las modificaciones presupuestales, que sean presentados a su consideración.

DÉCIMO QUINTO.- Que con fundamento en el Artículo 65, Fracción II, punto 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Hacienda y Presupuesto cuenta con facultades para llevar a cabo el estudio y dictamen de la transferencia, ampliación, creación o supresión de partidas en el Presupuesto de Egresos de las Entidades, que deban ser aprobados por el Congreso del Estado.

DÉCIMO SEXTO.- Que a fin de normar su criterio la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó a la Auditoria Superior del Estado, su opinión al respecto la que fue vertida en términos No viables mediante oficio DEL/410/2020.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente punto

R E S O L U T I V O :

ÚNICO.- No se aprueba la ampliación de recursos por $ 8,716,470 (OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, mediante la cual se pretendía ampliar diversas partidas presupuestales, con recursos del Gobierno del Estado, adicionales a los que le fueron autorizados a ejercer en el presente ejercicio fiscal, toda vez que no fue proporcionado el oficio por medio del cual la Secretaría de Hacienda del Estado, otorga la viabilidad financiera y de manera positiva, para el trámite de la presente ante el H. Congreso del Estado, incumpliendo con lo que establece el artículo 50 fracción V tercer párrafo de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California, y el Artículo 2 fracción II de la nueva Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, así mismo en lo que respecta al capítulo de gasto 10000 Servicios personales que se pretendía incrementar en diversas partidas hasta por un importe de $ 6,947,647, se incumple con lo previsto en el artículo 13 fracción V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**,** ya que su destino proyectado es complementar el pago de sueldos y prestaciones a las diversas categorías de personal, por los meses de noviembre y diciembre de 2020.

D A D O.- En la Sala de Juntas “Octavio Paz”, del H. Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali, Baja California, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte.

DIP. ROSINA DEL VILLAR CASAS
PRESIDENTE

DIP. EVA GRICELDA RODRÍGUEZ
SECRETARIA

DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ
VOCAL

DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO
VOCAL

DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA
VOCAL

DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUIZ
VOCAL

DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ
VOCAL

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ
VOCAL

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Se declara abierto el debate del Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo; toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen Número 60 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, a favor.

- Quintero Quintero Loreto, a favor.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
DICTAMEN NÚMERO 60			
COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		

Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María	**X**		
Quintero Quintero Loreto	**X**		
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto			
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**24**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**0**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 24 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobado el Dictamen Número 60 en el sentido o en la lectura que se acaba de dar de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Se concede el uso de la voz al Diputado Ramón Vázquez Valadez para presentar el Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transporte.

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Buenas tardes, Presidente Diputado, solicito someta a consideración de la asamblea la dispensa de la lectura integra y la dispensa de trámite del presente Dictamen, para dar lectura solamente al proemio y los Artículos Transitorios del mismo.

- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite presentada, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Una duda Presidente, ¿es la lectura y la dispensa de trámite, las dos, juntas?

- EL C. PRESIDENTE: Si, dije la lectura también y la lectura. Continuando, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora, someta a votación económica la dispensa de la lectura y su trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite y de lectura presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; **por mayoría Diputado Presidente**.

- EL C. PRESIDENTE: Continua con el uso de la voz el Diputado Ramón Vázquez Valadez para dar lectura al Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; tiene el uso de la voz Diputado Ramón.

- EL C. DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ: Muchas gracias Diputado Presidente, además que se registre el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Dictamen Número 1

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión recibió para su estudio, análisis y dictamen, de la INICIATIVA QUE POR LA QUE SE CREA LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, presentado por el Ing. Jaime Bonilla Valdez, Gobernador del Estado, con fecha de 18 de marzo del 2020, ante esta Honorable XXII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Esta Comisión en uso de sus facultades que le concede en su ejercicio los Artículos 56, fracción VIII, 60 inciso e), 110 fracción II, 115 fracción II, 116, 117, 118, 120, 123, 124 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, realiza el presente Dictamen con base en el siguiente punto:

PROEMIO

El objetivo de la Ley consiste en esta establecer las bases y directrices para planificar, regular, controlar, vigilar y gestionar la movilidad, el transporte público y privado de personas y bienes en todas las modalidades, garantizando las condiciones y derechos de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

El Artículo 2 de la Ley en estudio constituyo que la columna vertebral de dicho proyecto, pues es el precitado artículo se compone de 87 fracciones que cada una de ellas ofrece conceptos jurídicos que posteriormente son abordados y desarrollados en disposiciones subsecuentes de la Ley, sin embargo, lo que se debe destacarse es que, es en este artículo donde se advierten las primera novedades jurídicas que caracteriza a la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO, pues ofrece, un bagaje jurídico amplio, y con conceptos nuevos, debidamente definidos, lo que se traduce en seguridad jurídica para los destinatarios de la norma.

Por otro lado, también es importante destacar el acierto del inicialista en considerar como utilidad pública en materia de movilidad:

1. La prestación del servicio público de transporte de personas, de carga y de distribución de bienes y mercancías.
El establecimiento de infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar necesario para la prestación eficiente del servicio.
Y derechos de los usuarios.
Otro aspecto novedoso y altamente significativo es el hecho que esta Ley reconoce y protege a las personas con discapacidad. La Ley estableció diversos artículos protectores en favor de los derechos de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran

la no discriminación, la accesibilidad, la infraestructura, la seguridad, la calidad y la funcionalidad.

De igual manera la Ley contempla el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá por objeto planificar, regular, controlar, administrar y gestionar la movilidad y el transporte público para personas y bienes, en todas sus modalidades.

RESOLUTIVO

Único. Se aprueba la creación de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del

Estado de Baja California, para quedar como sigue:

La Ley cuenta con 255 Artículo principales, 6 Títulos, 30 Capítulos, 25 Secciones, 20 Disposiciones Transitorias.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. - A la entrada en vigor de la presente Ley, queda abrogada la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 49. Sección I, Tomo CVIII del día 9 de noviembre de 2001, con sus reformas y adiciones.

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que contravengan o se opongan a la presente Ley.

CUARTO. - A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, todas las menciones referentes a la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, en otras leyes del Estado, o disposición jurídica concurrente, se entenderán referidas a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado de Baja California deberá expedir el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, en un plazo de hasta 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Los procedimientos administrativos relacionados.

SEXTO.- Los procedimientos administrativos relacionados con concesiones y permisos de transporte público que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se sustanciarán y concluirán conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio y serán resueltos por el Instituto conforme a las facultades conferidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

SÉPTIMO.- Se establece un plazo de hasta 100 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley en el Periódico Oficial del Estado, para que los Ayuntamientos de los municipios realicen las adecuaciones administrativas, modificaciones reglamentarias, programáticas, presupuestales y de políticas públicas a efecto de adaptar sus atribuciones conforme al texto de este nuevo ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al mismo tiempo acordando con el Instituto los programas de desarrollo urbano, vialidad y tránsito que serán motivo de cooperación conjunta.

OCTAVO.- En el caso del Municipio de Mexicali, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, el Instituto podrá regularizar el transporte público en la modalidad de personal, previa acreditación de las empresas que

prestan este servicio, demostrando estas su capacidad de operación, la existencia previa de contratos legalmente celebrados con empresas con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

NOVENO.- En todos los procedimientos judiciales y de justicia administrativa, en los que sean parte los Municipios, los Ayuntamientos, las Secretarías y dependencias municipales, así como los organismos descentralizados de las administraciones públicas municipales que operan sistemas o subsistemas, integrados o no, de transporte público de pasajeros, ya sea en su carácter de autoridad o como parte celebrante de contratos, convenios u obligaciones extracontractuales; se deberán sustanciar por las autoridades antes referidas conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio.

DÉCIMO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California solo tendrá por válidos los permisos, autorizaciones, recorridos o rutas y concesiones otorgados a permisionarios de taxis o concesiones de transporte masivo legalmente otorgados por la autoridad competente con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, si estos fueren sometidos al Instituto para su empadronamiento legal en los términos de la presente Ley.

Por lo anterior, en un término improrrogable de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, todos los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos de todas las modalidades del servicio de transporte público, legalmente expedidos o autorizados por los Ayuntamientos, que operan sistemas o subsistemas de transporte público; deberán de presentar ante el Instituto los originales de todos los títulos, contratos, convenios, autorizaciones y todos aquellos documentos que les otorguen derechos y obligaciones para su debido empadronamiento, cotejo, digitalización y captura

de los datos que señale el Reglamento o la norma técnica emitida por el Instituto para este fin.

Para tal efecto, deberán señalar domicilio y/o correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos dentro de la circunscripción territorial que le corresponde, así como aquellos para acreditar la personalidad y representación respectiva, a fin de que el Instituto integre el Padrón de Movilidad conforme a la nueva legislación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de entrega recepción que realicen los Municipios al Instituto. Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, los permisos y concesiones que no sean empadronados, cotejados, digitalizados y capturados dentro del término establecido en el párrafo anterior dejarán de tener validez y se procederá a su cancelación sin mayor trámite.

DÉCIMO.- Las autorizaciones, permisos y concesiones de transporte público emitidos antes del 11 de diciembre de 2019 por los Ayuntamientos del Estado, no se empadronarán ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California en los términos del artículo Décimo Transitorio anterior, serán considerados nulos.

DÉCIMO SEGUNDO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California no podrá bajo ni una situación o circunstancia expedir nuevas concesiones o permisos del servicio público de transporte en la modalidad de taxis, masivo y de personal durante los próximos 10 años contándose a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados de transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y el Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria

su expedición por lo cual concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, no podrá autorizar modalidad del servicio público de transporte distintas a las ya autorizadas previamente en cada uno de los municipios del Estado de Baja California, durante los próximos 10 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados del transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria su expedición, por lo que al concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMO CUARTO.- Para los efectos legales y de funcionamiento del Organismo Municipal para la Operación del Sistema Integral de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT), quedarán vigentes los contratos, fideicomisos, empréstitos, acuerdos, convenios y cada uno de los instrumentos jurídicos que existan y se deriven de los antes mencionados.

Al Municipio de Tijuana, Baja California tendrá la administración del mismo en tanto no se suscriban los convenios de transferencia al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, quedando vigentes los acuerdos de pago de créditos adquiridos por la paramunicipal quien tiene como aval al Municipio de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Para el traslado de garantías de bancos al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o a empresas de transporte, el Municipio de Tijuana, de Baja California dentro de sus facultades podrá invertir recurso público para pago de subsidios, becas,

apoyos, así como la contratación de pago por kilómetro recorrido con el fin de poder entregar al Gobierno del Estado, el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, de 4Baja California (SITT) en condiciones óptimas de operación.

DÉCIMO QUINTO.- Se concede un término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que el Instituto celebre los convenios con las Empresas de Redes de Transporte para transferir de información prevista, así como el registro de vehículos y conductores sin perjuicio ni excepción alguna para la prestación del servicio en los términos de esta Ley y a demás disposiciones aplicables, siempre y cuando acrediten fehacientemente que se encuentran afiliados a estas, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO SEXTO.- Se concede un término de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que los conductores que prestan sus servicios a través de Empresas de Redes de Transporte obtengan las autorizaciones correspondientes.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Continúan vigentes las disposiciones en materia de sanciones de los reglamentos de transporte público de los municipios del Estado hasta en tanto no se publique el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

DÉCIMO OCTAVO.- Se concede un plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, a efecto de que las escuelas particulares deban implementar o contar con el servicio de transporte escolar conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

La Secretaria de Hacienda.

DÉCIMO NOVENA.- La Secretaria de Hacienda, realizará las acciones necesarias para proporcionar los recursos presupuestales necesarios al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California para el cumplimiento cabal de las atribuciones conferidas en la presente Ley.

VIGÉSIMO.- A efecto de garantizar la movilidad a personas con discapacidad, el Instituto realizará un diagnóstico de las necesidades de rutas e infraestructura dentro de los 160 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para efecto de implementar un plan de infraestructura y equipamiento por Municipio, así como para determinar el porcentaje de unidades rutas e infraestructura así como los tiempos de implementación y compromisos de las autoridades en materia de movilidad y transporte a nivel Estatal y Municipal.

Dado en la Sala de Comisiones "Octavio Paz" de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 23 días del mes de marzo de 2020.

La Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Dictamen 1; es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA DICTAMEN No. 1 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, LEÍDO POR EL DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ)

DICTAMEN No 1 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, RELATIVO A LA INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PRESENTADA EL 18 DE MARZO DE 2020.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado Jaime Bonilla Valdez, por conducto del Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano, por lo que sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 56 fracción VIII, 57 y 122 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolla sus trabajos conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado **"Fundamento"** se enuncian las disposiciones normativas que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora.

II. En el apartado denominado **"Antecedentes Legislativos"** se da cuenta del trámite recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen.

III. El apartado denominado **"Contenido de la Reforma"** se compone de dos capítulos: el relativo a **"Exposición de motivos"** en el que se hace una descripción sucinta de la propuesta en estudio, así como su motivación y alcances, haciendo referencia a los temas que la componen. En el capítulo denominado **"Cuadro Comparativo"** se presenta de manera esquemática el articulado propuesto.

IV. En el apartado denominado **"Análisis de constitucionalidad"** se realiza un estudio de constitucionalidad y procedencia legal, independientemente de su viabilidad y necesidad.

V. En el apartado de **"Consideraciones y fundamentos"** los integrantes de este órgano colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del presente dictamen.

VI. En el apartado de **"Propuestas de modificación"** se describe puntualmente las adiciones, modificaciones o eliminaciones de porciones normativas que esta dictaminadora considere susceptible de ser incorporadas al resolutivo.

VII. En el apartado de **"Régimen Transitorio"** se describen puntualmente las disposiciones de naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas al proyecto de decreto.

VIII. En el apartado denominado **"Impacto Regulatorio"** se enuncian los ordenamientos legales que, dado el caso, deben ser armonizados para reflejar y dar cumplimiento a la propuesta contenida en el presente dictamen.

IX. En el apartado denominado **"Resolutivo"** se vierte el sentido orientador del presente dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta Comisión.

I. Fundamento.

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción VIII, 57, 122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado siguiente.

II. Antecedentes.

1. En fecha 18 de marzo de 2020, el Gobernador del Estado Jaime Bonilla Valdez, por conducto del Secretario General de Gobierno, presentó ante la Oficialía de Partes de esta H. XXIII Legislatura, INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

2. Presentada que fue la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 50 fracción II inciso f, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, dio curso legal a la misma para su trámite legislativo.

3. En fecha 19 de marzo de 2020, se recibió en la Dirección Consultoría Legislativa, Oficio No. RVV/04/20, signado por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el cual remite la iniciativa señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de elaborar el dictamen correspondiente.

4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones II, III y IV de nuestra Ley Interior, procedió a realizar el presente proyecto de dictamen.

III. Contenido de la Reforma.

A. Exposición de motivos.

Señala el inicialista en su exposición de motivos los siguientes planteamientos y argumentos para motivar su propuesta:

> De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 fracción II y 49 fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, corresponde al Ejecutivo Estatal iniciar ante el Congreso Estatal leyes que redunden en beneficio del pueblo.
>
> Con fundamento en los artículos 113, 115 fracción II y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, corresponde al Gobernador del Estado las iniciativas de ley, mismas que deberán presentarse por escrito y firmadas ante el Presidente del Congreso, con la exposición de motivos que contenga las consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que la justifican, motivan y dan procedencia a la proposición de creación.
>
> Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, el Gobernador del Estado podrá expedir, en los términos de ley, los decretos, reglamentos, acuerdos, instructivos, circulares y disposiciones de carácter general para el buen desempeño de sus atribuciones.

En fecha 11 de diciembre de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto No. 6, mediante el cual se reforman los artículos 7 y 83, así como adición de las fracciones XXVII y XXVIII al artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, mediante el cual se transfieren al Estado las facultades de regulación y operación en materia de movilidad sustentable y transporte.

La presente Ley, de aprobarse, garantizará el derecho humano a la movilidad toda vez que esta iniciativa tiene la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de los bajacalifornianos, permitiéndoles mantener una vida digna y en ejercicio del derecho libre a la circulación, asimismo servirá como base para planificar, ordenar, regular, administrar y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes dentro de las vías públicas urbanas y metropolitanas del Estado, a fin de facilitar la movilidad, la accesibilidad, el respeto al medio ambiente y contribuir a la cohesión de la red de transporte público en todas sus modalidades que operan en dicho ámbito.

Algunos de los fracasos gubernamentales para asegurar el derecho humano a la movilidad son en gran parte causados por no contar con una serie de instrumentos jurídicos basados en la Constitución y en Ley, para reordenar a los distintos modos de transporte público y privado de una forma permanente, que asegure el derecho a la movilidad y plenitud democrática. Cabe destacar que, al definir los sistemas de transporte como uno de los ejes principales de la movilidad, y quizá el más importante, no podemos dejar por un lado los derechos de peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, así como el transporte de carga, siempre velando por los derechos piramidales de la movilidad reconocidos internacionalmente.

Asimismo, es necesario incorporar a esta propuesta los elementos de infraestructura y planeación a través de instrumentos medibles por expertos en ingeniería de tránsito y movilidad, así como una correcta coordinación con los entes municipales, a efecto sistematizar las vías por donde cruzan los sistemas integrados de transporte masivo e inclusive la promoción del uso de vehículos no motorizados.

La planeación de la movilidad debe ir encaminada a satisfacer en todo momento el derecho a un servicio digno, uniforme, continuo y eficiente de vehículos de transporte masivos hasta el uso de taxi o mediante plataformas digitales, a través de tarifas justas, paraderos, áreas de ascenso y descenso, sistemas conexos de transporte, tales como tarjetas de pago y prepago de los servicios de transporte sean públicos o privados, los cuales sean incluyentes y que generen en todo momento una competencia leal y transparente, por lo que el presente proyecto busca insertar las disposiciones legales adecuadas a efecto de instrumentar todos estas figuras de modernización.

La implementación de sistemas tecnológicos de última generación podrán ser los instrumentos que ayuden a garantizar la seguridad pública de los usuarios de la movilidad en general, a través de aplicaciones, que además de ofrecer la geolocalización en tiempo real de diversos sistemas de transporte, también se podrá conocer qué tipo de servicio o ruta es la adecuada para el usuario mediante esta aplicación móvil, las mismas que inclusive contarán con botón de pánico para que todo usuario pueda utilizarlo en caso necesario.

Igualdad, uno de los temas torales de la movilidad y que desde luego va encaminada a la no discriminación y la inclusión de todos los usuarios, independientemente de su género, condición física, religión o cultura, dichos elementos se encuentran insertados en el presente proyecto y que además se busca garantizar la movilidad para aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad física, mediante el estudio y la búsqueda de recursos para la infraestructura adecuada para la construcción de banquetas, paraderos, áreas de ascenso y descenso, estacionamientos, líneas punteadas para aquellas personas que cuentan con alguna discapacidad de visión, todo esto en aras de una cultura de la movilidad en todos los ámbitos desde la educación básica hasta la profesional, así como la capacitación de operadores del servicio de transporte.

Uno de los principales motivos por el cual se lleva a cabo esta reforma, consiste en el trazo de las rutas, realizado comúnmente por las mismas líneas de transporte, sin estudios o diagnósticos previos, ocasionando que el origen de la mayoría de las mismas sean en el centro de la ciudad y sus puntos terminales en las colonias respectivas, convirtiendo la mayoría de las zonas del centro de los Municipios del Estado en lugares donde confluye la población, aun cuando no sea su destino; causando con ello, un servicio de transporte caótico, excluyente y costoso, generando como consecuencia que el usuario utilice dos o más rutas de transporte, dado que no existe un medio que lo lleve en directo a su destino.

Lo anterior genera prolongados tiempos de espera y recorridos innecesarios sobre los trayectos de ruta, incremento de costos de pasaje para las personas cuyo destino principal es su centro de trabajo, de salud, instituciones educativas o culturales, así como acceso a diversos servicios; asimismo se acelera el deterioro de las vialidades, ocurren más embotellamientos de tránsito, accidentes automovilísticos y se incrementa la contaminación atmosférica.

En ese sentido, es de destacar que las vehículos de transporte público, se encuentran obsoletos, deficientes de capacidad, toda vez que el trazo de rutas se realiza en función del crecimiento de las mismas colonias, en lugar de implementar nuevas rutas ofreciendo un mejor servicio directo entre el origen y el destino, asimismo el servicio carece de disponibilidad en cuanto al horario y frecuencia, resultando inaccesible y poco confiable, no existe un sistema de boletaje, ni un horario fijo en el itinerario de ruta.

Aunado a que en los últimos años los problemas de mal servicio en el transporte público, se debe principalmente a la circulación de vehículos clonados, provocando una sobre oferta, dando origen a riñas de pasaje en las calles por los propios transportistas; no obstante que la gran mayoría de las rutas operan en calles pavimentadas, uno de los grandes problemas de transporte público consiste en que las rutas complementarias operan casi completamente en calles sin pavimento localizadas en la zonas habitacionales marginadas cuya población depende en mayor porcentaje de los servicios de transporte público.

Es importante destacar que el principal número de movimientos en el sistema de transporte público se origina de forma interurbana, de una colonia a otra; la movilidad de la población de las zonas rurales a la ciudad tiene poca representatividad, toda vez que en las anteriores administraciones, la cobertura del servicio de transporte de la mayoría de los Municipios del Estado se concentró principalmente en la mancha urbana; dejando prácticamente sin servicio a las zonas que se ubican en la periferia de éstas, poco habitadas o de difícil acceso, sin ninguna regulación o control estatal, dejándose al arbitrio de la demanda social y del interés particular de las compañías transportistas, ya que en el pasado los ayuntamientos entregaban al finalizar sus períodos permisos de transporte público por compromisos políticos, por lo que es imperante para la presente Administración acabar con la corrupción y regular a nivel estatal el otorgamiento de concesiones, con una nueva estructura y normatividad que permita al transporte servir al ciudadano sin verse afectado por cuestiones gremiales

Otro de los motivos de la referida reforma constitucional consiste en que los Municipios quienes tuvieron a su cargo ordenar y regular el servicio de transporte público y privado, carecían de instrumentos jurídicos adecuados que les permitieran reordenar los diferentes tipos de transporte de forma permanente, para asegurar con ello el derecho humano a la movilidad, fundamental para impulsar el desarrollo social y económico; de igual forma, con motivo del corto periodo de tiempo de duración de sus administraciones, sin constituir entes públicos que permitieran sistematizar el transporte de forma económica, moderno, de amplia cobertura, seguro e incluyente.

Por lo que hace a los transportistas y empresarios de ese sector, han demostrado su inconformidad en cuanto al trato de las autoridades de las anteriores administraciones, referente al manejo del servicio de transporte en todas sus modalidades, en relación a las constantes quejas y solicitudes de los usuarios del servicio exigiendo mayor calidad en la prestación del mismo, como de los vehículos para que sean modernos, seguros y confortables; toda vez que los transportistas ven limitada su capacidad de obtener nuevos créditos para la compra de mejores vehículos con motivo del corto período de la duración de las administraciones municipales, en razón de que las instituciones de crédito otorgan prestamos limitados al período de cada administración.

La multicitada reforma constitucional establece que el Gobernador del Estado, intervendrá mediante un organismo paraestatal que determine la Ley de la materia en la formulación y

aplicación de los programas de movilidad, así como en la prestación y regulación del servicio de transporte público, para promover y fomentar el derecho a la movilidad, es por ello que mediante Decreto del Ejecutivo Estatal se crea el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene por objeto planificar, regular, controlar, administrar y gestionar la movilidad y el transporte público de personas y bienes en todas sus modalidades, garantizando, las condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria sustentable y eficiente.

Cabe destacar que el presente proyecto de esta Ley, representa una de las promesas y compromisos con el Sector Transportista del Estado del Gobernador del Estado, por lo que se tuvo a bien socializar el mencionado proyecto con todos los sectores involucrados, a solicitud del sector transportista y con el fin de que estos grupos pudieran aportar sus conocimientos técnicos en la materia. Para tal propósito, se realizó una agenda la cual involucró a asociaciones civiles de ciclistas, inmobiliarios, arquitectos, ingenieros, empresarios y desde luego a los propios transportistas del Estado.

Una vez iniciada la socialización el equipo encargado del proyecto de Ley, sostuvo una reunión con el sector ciclista del municipio de Mexicali, en la cual se analizaron las necesidades de este sector tan importante en la comunidad, ya que la infraestructura de nuestras ciudades no cuentan con ciclovías, bicipuertos y accesos suficientes para poderse trasladar por la ciudades en este vehículo no motorizado, el cual además de ser saludable no contamina; aportando dicho sector elementos necesarios para integrar al proyecto de Ley, y proponiendo agregar al glosario las definiciones de esas modalidades de traslado, así como la garantía de la innovación en infraestructura suficiente para llevar a cabo este tipo de transporte.

Por otro lado, se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana un evento con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios con los que se pudo compartir el proyecto de Ley en materia de movilidad y transporte, a fin de que conocieran los beneficios y el impacto a su modelo de negocio, el cual como consecuencia traerá más y mejores atractivos para aquellas personas que deseen adquirir un inmueble en las Ciudades del Estado. Asimismo, se expuso la problemática de densificación urbana, proponiendo como que debe ser solucionada por expertos técnicos en ingeniería de tránsito, movilidad y urbanismo, con mejores prácticas y disposiciones de normativas modernas para todos los usuarios del transporte, peatones y conductores.

Continuando con la socialización y recepción de opiniones se sostuvieron diversas reuniones con arquitectos, ingenieros y empresarios de los diferentes municipios del Estado, además con las organizaciones siguientes: CDT, CCE, CANACO, COPARMEX, CANACAR entre otras.

La columna vertebral de la movilidad en el Estado es representada por el sector transportista, desde concesionarios a permisionarios, con los cuales se mantuvieron mesas de trabajo en cada municipio a efecto de que emitieran sus opiniones técnicas con el fin de que el proyecto cuente con todos los elementos necesarios y de garantía para la prestación del servicio público de transporte; acordando que es prioridad de esta Administración garantizar la seguridad y certeza jurídica de que serán ellos los que presten dicho servicio, pero con mejores disposiciones y condiciones de modernización.

En cada una de estas reuniones de trabajo se escucharon las problemáticas, así como las ideas de mejoramiento y modernización en materia de transporte de cada municipio por lo que se alimentó el proyecto de Ley de las opiniones técnicas que se desarrollaron en las mesas de trabajo. Algunas de las aportaciones de este sector consisten en agregar a la iniciativa de Ley un glosario amplio de definiciones que marcan la pauta de la regulación del servicio público de transporte, un padrón estatal de concesionarios, permisionarios y operadores del servicio; asimismo solicitaron incluir diversas garantías y seguridades jurídicas tales como la revalidación de sus concesiones y permisos, en particular en materia de transporte masivo, se añadió a solicitud del mismo sector las facilidades de incluirse en un sistema integrado de transporte, así como infraestructura y servicios conexos a efecto de facilitar el servicio.

En materia de permisionarios una de las solicitudes y que desde luego representa una seguridad jurídica viable y justa es considerar al permiso de taxi como patrimonio familiar y que inclusive el propio permisionario pueda adquirir hasta tres permisos de taxi, mismas solicitudes que nunca les fueron resueltas por las administraciones municipales pasadas.

Aunado a lo anterior se expuso el tema sobre el control y monitoreo del sistema de transporte, por lo que se acordó en conjunto copiar el modelo de control y monitoreo que actualmente existe en la ciudad de Mexicali. Por lo que los transportistas del Estado manifestaron agrado a esta propuesta toda vez que muchos de estos se encuentran invirtiendo en dichos sistemas, asimismo, se propuso seguir instalando GPS en los vehículos a efecto de que, mediante un centro de control y monitoreo del Instituto de Movilidad Sustentable, se les permita monitorear sus unidades y corroborar que se encuentren seguras y cumpliendo con sus itinerarios, rutas y frecuencias.

Cabe destacar que el sector transportista en el Estado solicitó una coordinación real con el Instituto de Movilidad Sustentable ya que en la actualidad no existe ese enlace con las autoridades regulatorias, toda vez que resulta indispensable para cumplir con las garantías de un mejor servicio público, el cual sea incluyente, moderno y en horarios y frecuencias apegadas a la realidad social; haciendo hincapié de manera unánime de contar con una regulación y vigilancia real con el fin de resguardar la seguridad, calidad y garantía del servicio ya que en estos momentos carecen de certeza jurídica y documentación que avale administrativamente en muchos de los casos la prestación de su servicio.

Dentro del proyecto de Ley presentado a los transportistas del Estado pudieron observar que una de las grandes propuestas va encaminada a que el otorgamiento de concesiones, permisos, así como su revalidación no quedarán a expensas de cuestiones políticas de un servidor público o un órgano de gobierno inexperto en el tema. Es decir, a través de este proyecto se planeó de manera exitosa que el otorgamiento de concesiones y permisos será mediante la propia Junta de Gobierno del Instituto, la cual está conformada por los Titulares de las Secretarías de Gobierno, Infraestructura, Economía, Honestidad y Hacienda, los cuales se encuentran rodeados de expertos en el tema.

Asimismo, se añadió un capítulo en relación con la participación de un Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte a efecto de que en este participen los transportistas emitiendo opiniones técnicas a efecto de considerar todas estas de manera real y consensuadamente.

La presente Ley garantizará el derecho humano a la movilidad fundamental con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de los bajacalifornianos, permitiéndoles mantener una vida digna y en ejercicio del derecho libre a la circulación, asimismo servirá como base para planificar, ordenar, regular, administrar y gestionar la movilidad de las personas y del transporte de bienes dentro de las vías públicas urbanas y metropolitanas del Estado a fin de facilitar la movilidad, la accesibilidad, el respeto al medio ambiente y contribuir a la cohesión de la red de transporte público en todas sus modalidades que operan en dicho ámbito.

Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos constitucionales citados, me permito someter a consideración de este H. Congreso del Estado, la presente:

B. Cuadro Comparativo.

En virtud de tratarse de una iniciativa de ley de nueva creación, no existe comparativo, sin embargo, con el propósito de ilustrar el contenido de la propuesta se presenta el contenido de la pretensión legislativa:

LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Baja California, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y directrices generales para planificar, regular, controlar, vigilar y gestionar la movilidad, el transporte público y privado de personas y bienes en todas sus modalidades, garantizando las condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

El servicio de transporte público está a cargo del Ejecutivo Estatal y lo prestará por conducto del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o previa declaratoria de imposibilidad lo podrá encomendar a personas físicas y morales mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones en los términos que señala esta Ley y su Reglamento, bajo los principios de equidad, justicia, igualdad, salud, medio ambiente, racionalización y modernización.

Los sujetos activos de la movilidad son las personas con discapacidad, peatones, ciclistas, usuarios de la movilidad no motorizada, motociclistas, conductor, usuarios del servicio de transporte, prestadores del servicio de transporte en todas sus modalidades, así como las empresas de redes de transporte.

Son sujetos de la aplicación de la presente Ley y de su Reglamento, las autoridades, las entidades y organismos públicos o privados, y las personas físicas o morales, permisionarias o concesionarias, que otorguen el servicio de traslado de pasajeros o de carga, o bajo cualquier

modalidad realicen las actividades a que se refiere el presente ordenamiento y la reglamentación respectiva.

La aplicación de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y el desarrollo de la política pública de movilidad y transporte del Estado, corresponde al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Acera o Banqueta: Camino a cada lado de una calle, generalmente más elevado que ésta, reservado para la circulación exclusiva de las personas con discapacidad, peatones y en su caso usuarios de la movilidad no motorizada cuando así se permita, excluyendo en todo momento al ciclista que pretenda utilizarla, con la excepción de los menores de edad acompañados de sus padres para efectos de recreación de los menores;

II. Aforo: Es el conteo de vehículos, usuarios o mercancías realizado durante un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de determinar la cantidad de vehículos, usuarios o mercancías que efectivamente pasan por una determinada ruta, vía pública o lugares;

III. Alimentador Complementario: Es el concesionario y/o permisionario del transporte público que opera y presta el servicio en sus rutas autorizadas, mismas que sin ser parte integrante de un subsistema, convergen con el mismo con la finalidad de generar una movilidad efectiva para el público usuario; para lo cual deberá celebrar los acuerdos y/o convenios necesarios con los Sistemas Integrados de Transporte y con los operadores autorizados para la prestación del servicio público en el Subsistema que corresponda. Los acuerdos y/o convenios celebrados entre los operadores autorizados y quien pretende colaborar bajo la figura de alimentador complementario deberán ser autorizados expresamente por el Instituto;

IV. Algoritmos electrónicos: Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenas y finitas que permiten solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades conexas o relacionas a la movilidad y el transporte;

V. Amonestación de Supervisión Mecánica: Prevención que se hace, en la hoja de revisión mecánica, a los concesionarios y permisionarios, para que procedan a efectuar las reparaciones o mejorar las condiciones físicas del vehículo revisado;

VI. Aplicación móvil: El programa informático o plataforma electrónica de geolocalización para la búsqueda, contacto virtual y validación real de prestadores del servicio de transporte con usuarios del servicio, así como para la contratación y pago de servicios de transporte; ejecutada u ofertada mediante dispositivos fijos o móviles mediante el uso de Internet o IOT

(internet de las cosas por sus siglas en inglés), bajo la cual operan las empresas de redes de transporte o plataformas digitales;

VII. Autobús: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con diseño de fábrica, el cual cuenta con capacidad que determinará el Reglamento de esta Ley;

VIII. Autobús Foráneo: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con capacidad de origen o diseño de fábrica y que presta servicio de transporte a nivel nacional o internacional;

IX. Autorización: Acto administrativo del Instituto a través del cual concede al particular la prestación del servicio de transporte público, privado o actividades conexas, conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento por el tiempo y condiciones que ambos establecen;

X. Autorización Temporal: Acto administrativo del Instituto mediante el cual concede la prestación del servicio de transporte, en sus distintas modalidades, para atender por un tiempo determinado el incremento en la demanda por actividades derivadas de acontecimientos y festividades públicas o situaciones de emergencia; misma que no podrá exceder de un mes conforme lo establezca la presente Ley y su Reglamento;

XI. Bahía: Espacio exclusivo dentro de la vialidad fuera del carril de circulación, para realizar labores de ascenso y descenso de pasajeros, así como carga y descarga de mercancías;

XII. Bicicleta: Vehículo de tracción humana a pedales o asistida por tracción eléctrica;

XIII. Bicipuertos: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado;

XIV. Calidad del servicio: Niveles cualitativos y cuantitativos de la eficiencia de la ruta y nivel de servicio ofrecido al usuario, en términos de tiempos de transportación, frecuencia de paso, accesibilidad, limpieza, comodidad del vehículo, manejo atención del conductor y en su caso sensación térmica del usuario. La calificación de la calidad del servicio es en base a una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos definidos en el Reglamento de la presente Ley;

XV. Calle completa: Las vialidades que por su diseño, construcción e implementación consideran las necesidades de movilidad de los peatones, ciclistas, personas que utilizan los medios de transportación masiva, conductores de vehículos de motor, personas de todas las edades y condiciones. Estas características incluyen, pero no se limitan a: aceras transitables, carriles exclusivos, rotulados para ciclistas, construcción de señales y estructuras como isletas, rotondas

y cruces que den paso a que se comparta la vía pública, cortes de esquinas, aceras elevadas con rampas de acceso y la adopción de medidas de seguridad pública para control de tránsito;

XVI. Carril confinado: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la exclusividad de circulación la tienen los vehículos/vehículos del servicio público de transporte masivo de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad, así como los del servicio de transporte escolar que cuenten con autorización para operar en los horarios y tramos determinados por el Instituto;

XVII. Carril preferencial: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la preferencia la tienen los vehículos/vehículos del servicio público de transporte masivo de pasajeros que cuenten con la autorización del Instituto para operar y prestar el servicio público dentro del sistema de transporte masivo en el Estado de Baja California o cualquiera de los subsistemas que lo integren;

XVIII. Causa de utilidad pública: Es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades ya sea a través de un organismo descentralizado, o bien, por conducto de personas físicas o jurídicas a quienes mediante concesiones, permisos y autorizaciones el Instituto, encomiende la realización de dichas actividades, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; Asimismo, se considera de utilidad pública y beneficio general, el establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles de tránsito vehicular y peatonal; señalización vial y nomenclatura y, en general, la utilización de los servicios, la infraestructura y los demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad de competencia del Estado y sus municipios, en términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XIX. Chatarrización: El proceso mediante el cual se desechan los vehículos de transporte público y privado que han cumplido su vida útil, mediante la instrumentación de un programa institucional que la incentive;

XX. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte;

XXI. Conductor: Es la persona física encargada de conducir o manejar un vehículo privado quien deberá obtener autorización del Instituto a efecto de realizar actividades económicas o de lucro conforme a la presente Ley y su Reglamento;

XXII. Ciclista: Al conductor de vehículo de tracción humana a pedales o asistido por tracción eléctrica;

XXIII. Cierre de Circuito: Son los espacios físicos permitidos en los que, sin realizar base, se efectúa el despacho de los vehículos destinadas al servicio público de transporte de pasajeros para iniciar o terminar su itinerario, incluyen maniobras de ascenso y descenso y en el que se controla el intervalo de salidas entre una y otra vehículo;

XXIV. Competencia desleal o ruinosa: Se considera competencia desleal y ruinosa la práctica ilegal de cualquier persona física o moral que oferte, promocione, comercialice, explote o preste el servicio de transporte, sin contar con permiso o concesión expedida por el Instituto. O bien cuando un prestador de servicio de transporte afecte indebidamente de manera directa en la prestación del servicio con consecuencias negativamente a su aforo a otro concesionario, permisionario o autorizado y que contravenga la presente Ley, su Reglamento o disposiciones aplicables;

XXV. Concesión: Acto administrativo por el cual el Instituto, autoriza a las personas morales, para prestar un servicio público de transporte, en los términos y condiciones que la propia Ley y su Reglamento señala. Su otorgamiento y las condiciones que se establezcan se consideran de utilidad pública y de interés general;

XXVI. Consejo: El Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte;

XXVII. Derecho de vía: Zona afecta a una vía pública en ambos lados de ésta, con las medidas que determine el Reglamento de la presente Ley;

XXVIII. Elementos de Identificación Vehicular: Los aditamentos, documentos, gafetes o medios electrónicos expedidos por la Secretaría de Hacienda a través de la Oficina Recaudadora y en coordinación con el Instituto autorizadas para ello en los que constan la autorización, permisos, concesión e identificaciones para la movilidad sustentable que comprenden las calcomanías, placas y tarjetas de circulación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y la normatividad aplicable.

XXIX. Empresas de redes de transporte: Empresas de Redes de Transporte: Son aquellas personas físicas o morales cuyo servicio se limita exclusivamente a intermediar vía electrónica la oferta, contratación y pago de servicios de transporte público o privado, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios con prestadores del servicio en cualquiera de sus modalidades autorizados y registrados por la autoridad competente.

XXX. Equipamiento vial o de transporte: El conjunto de espacios y edificaciones de uso predominantemente público donde se proporciona un servicio de movilidad y transporte a la población, que contribuye a su bienestar y a su desarrollo económico, social y cultural;

XXXI. Examen Toxicológico: Examen que certifica la presencia o ausencia de sustancias consideradas prohibidas en el cuerpo humano, tales como marihuana, opiáceos, benzodiacepinas, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína y otras de naturaleza similar; también conocido como examen antidoping;

XXXII. Holograma o QR de verificación vehicular: formas únicas autorizadas y emitidas por el Instituto, con características de seguridad y colores determinados de acuerdo con el año, para verificar la autenticidad y vigencia de las autorizaciones, permisos o concesiones en cumplimiento al Reglamento de esta Ley;

XXXIII. Horario: Hora determinada por el Instituto de inicio y término a que deberá sujetarse la prestación del servicio de transporte de pasajeros o de carga ya sea pública o privada, conforme a los términos definidos en la presente Ley y su Reglamento;

XXXIV. Itinerario: Relación completa de las calles o lugares por los que transitan un vehículo del servicio de transporte público, al realizar el traslado de usuarios de terminal a terminal y puntos intermedios;

XXXV. Infracción: Es el incumplimiento de las disposiciones normativas a la presente Ley su Reglamento y disposiciones aplicables, la cual amerita una sanción, medida de seguridad o de urgente aplicación y en su caso arrastre y depósito de todos los vehículos incluyendo los del servicio público, privado o de servicios conexos de movilidad o transporte;

XXXVI. Infracción electrónica: Las infracciones a la Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables que sean formuladas a través de equipos o sistemas electrónicos a cargo del Instituto;

XXXVII. Infraestructura vial: Todos los sistemas de comunicación y transporte de personas, de organización y distribución de bienes;

XXXVIII. Instituto: El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California;

XXXIX. Intermodalidad: La característica de un sistema de transporte en la cual se utilizan de forma integrada al menos dos modos de transporte diferentes para completar la cadena de traslado puerta a puerta;

XL. Ley: Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California;

XLI. Maquinaria agrícola, de construcción o industrial: Es aquella autopropulsada o remolcada, que tiene como uso exclusivo las actividades y servicios agrícolas, de construcción e industriales y que transitan de manera eventual o excepcional en los caminos, carreteras y autopistas de jurisdicción estatal y local; previa autorización del Instituto;

XLII. Menor de Edad: El conductor de vehículo o motocicleta, respectivamente, distinto a los reservados para operadores, con edad de 16 o 17 años;

XLIII. Minibús: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con diseño de fábrica, el cual cuentan con capacidad que determinará el Reglamento de esta Ley;

XLIV. Mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de las comunidades del Estado, los que, según su función, se aplican para el descanso, esparcimiento, deporte, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial;

XLV. Motociclista: El conductor de motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas sea cual fuere la capacidad de los centímetros cúbicos del motor, ya sea para el uso personal, servicio particular o para el desempeño de un trabajo;

XLVI. Movilidad: Es un derecho humano que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y cosas que se realizan en el Estado, a través de los diferentes medios, formas y modalidades de transporte que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso la movilidad tendrá como eje central a la persona;

XLVII. Multimodalidad: Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular;

XLVIII. Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie y a través de vehículos no motorizados;

XLIX. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la Ciudad, con el propósito de facilitar su identificación por parte de las personas;

L. Número económico: Número de registro oficial asignado por el Instituto para toda vehículo que preste o explote el servicio de transporte en la modalidad de que se trate;

LI. Operador: Se entiende referido a una persona física cuando ésta conduzca o maneje un vehículo destinado al transporte público o privado de personas o carga con fines económicos o de lucro, ya sea en forma intermitente o permanente;

LII. Parada oficial de ascenso y descenso: elemento de equipamiento y mobiliario debidamente identificado que permiten a los usuarios de un sistema integrado de transporte realizar los ascensos, descensos o trasbordos necesarios para sus traslados, mismos que por su naturaleza son los únicos espacios habilitados para que las vehículos de este sistema realicen estas actividades;

LIII. Parque vehicular: Cantidad de vehículos autorizados en una concesión para la prestación del servicio público;

LIV. Padrón: Padrón de Movilidad y Transporte que es la base de datos sistemáticamente ordenada y administrada por el Instituto y que contiene la información de los sujetos y objetos regulados por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

LV. Peatón: Es la persona física que transita a pie por la vía pública;

LVI. Permiso: Documento que otorga el Ejecutivo estatal por conducto del Instituto a través del cual autoriza al particular a prestar un servicio de transporte en las modalidades y términos que establezca la Ley y su reglamento.

LVII. Permisionario: Persona física titular de un permiso para prestar un servicio de transporte en las modalidades y términos que establezca la Ley y su reglamento.

LVIII. Póliza de seguro: Documento expedido por una persona jurídica debidamente acreditada y certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad

aplicable que ampare el aseguramiento del conductor, operador o propietario del vehículo automotor para responder por daños y perjuicios ocasionados a terceros;

LIX. Prácticas restrictivas del comercio aplicado a la movilidad y el transporte: Se considerarán ilícitas toda práctica monopólica o restrictiva del comercio aplicado a la movilidad cuando se pretenda fijar, elevar, concertar o manipular la oferta de servicios de transporte en perjuicio del usuario en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica;

LX. Prestadores del servicio de transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles: Propietarios del vehículo autorizado por el Instituto para prestar el servicio de transporte a través de una plataforma tecnológica operada por una empresa de redes de transporte en los términos de la presente Ley y su Reglamento;

LXI. Radio Taxi: Son los vehículos automotores de alquiler sin itinerario fijo que se contrata para viajes pactados consensualmente, equipados para el transporte de personas con capacidad conforme las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, el cual está conectado con una central de radio que comunica al operador con su usuario. La tarifa a pagar por el servicio prestado se determina atendiendo a la tarifa autorizada mediante el taxímetro o con algoritmos electrónicos administradas mediante plataformas de tecnologías; que tendrán una antigüedad menor a 6 años de su fecha de fabricación;

LXII. Recorrido: Descripción detallada de las vialidades por las que transitan los vehículos del servicio de transporte de personal;

LXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

LXIV. Responsabilidad civil del pasajero: Cláusula o cobertura amparada en un contrato de seguro mediante la cual el concesionario, permisionario o autorizado se encuentra asegurado mediante póliza de seguro por la cual se obliga a indemnizar hasta por un monto determinado a los pasajeros, por las lesiones, muerte o daños ocasionados al momento de un siniestro o accidente y con motivo de los servicios de transporte prestados;

LXV. Responsabilidad civil de daños a tercero: Cláusula o cobertura contenida en un contrato de seguro mediante la cual la empresa o institución aseguradora se obliga en nombre del asegurado y hasta por un monto determinado a responder por el pago de la responsabilidad civil en que incurra, con el consentimiento expreso o tácito del concesionario o permisionario, quien use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause daños a terceros en sus bienes, lesiones corporales o la muerte;

LXVI. Responsabilidad civil complementaria: Cláusula o cobertura de un contrato de seguro que cubre los costos que superan los límites de otras coberturas de seguro, en este caso opera en exceso de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros y ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado con cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a terceros;

LXVII. Ruta: El trayecto con origen y destino que podrá ser troncal, alimentadora, integrada a un corredor o formar parte de un sistema integrado de transporte o no, autorizadas o concesionadas por el Instituto;

LXVIII. Servicios conexos: Los servicios vinculados a la operación de los Sistemas Integrados de Transporte en el Estado, y que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se podrán incluir: servicios de pre y post pago

mediante tarjeta electrónica, monitoreo por sistemas de posicionamiento global o GPS, sistemas de semaforización inteligente, entre otros, que se definirán en la presente Ley y su Reglamento;

LXIX. Sistema de pago electrónico o prepago: Plataforma tecnológica para el pago, sea con elementos electrónicos o prepago de la tarifa autorizada; así como el conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y por lo general, sistemas interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero a través de sistemas electrónicos;

LXX. Sistema integrado de transporte: Conjunto de servicios de movilidad y transporte que incluyen de manera coordinada a concesionarios, infraestructura y usuarios de una ciudad o zona metropolitana con una organización de alta eficiencia, eficacia y sustentabilidad, facilitando la optimización de operaciones, reformulación de tarifas entre las distintas modalidades de transporte motorizado y no motorizado;

LXXI. Servicio metropolitano de transporte: Es el que se presta entre los Municipios declarados zona Metropolitana y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento;

LXXII. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de elementos ordenados y coordinados de infraestructura, equipamiento, mobiliario vehículos de transporte ya sean públicos o privados, así como los servicios conexos que facilitan el desplazamiento de personas y mercancías en un territorio.

LXXIII. Sistemas de control de tránsito: Todas las estrategias, equipamientos, mobiliario y servicios conexos orientados a prevenir la congestión vial, mejorar el flujo de tránsito, mantenimiento de la seguridad vial, priorización de la peatonalización, movilidad no motorizada y sistemas de transporte masivo de pasajeros;

LXXIV. Sistema de información para la Movilidad: La base de datos de los vehículos particulares o prestadores de servicio concesionado, conductores, operadores, propietarios, personas físicas o morales titulares de permisos o concesiones, los sistemas electrónicos y demás características que incidan en la movilidad;

LXXV. Sitio: El espacio en la vía pública o en propiedad privada, autorizado por la autoridad competente para estacionar vehículos de alquiler, no sujetos a itinerario y a donde el público usuario pueda acudir a contratar estos servicios;

LXXVI. Sociedad mutualista: Se conoce como Sociedad Mutualista a las asociaciones de personas debidamente constituidas que, sin dar pólizas o contratos, conceden a sus

miembros coberturas en caso de accidentes o daños personales o contra terceros, las cuales se encuentran autorizadas obligatoriamente conforme a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

LXXVII. Subsistema: Es cada uno de los elementos ordenados y diferenciados por su tipología o función de un sistema de movilidad sea integrado o no, el cual podría ser de infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos de transporte ya sean públicos o privados, así como los servicios conexos de movilidad que facilitan el desplazamiento de personas y mercancías en un territorio.

LXXVIII. Tarifa: Contraprestación a cargo de los usuarios, autorizada por el Instituto para la prestación del servicio de transporte en todas sus modalidades;

LXXIX. Terminal: Es la estación vehicular autorizada por el Instituto para iniciar o cerrar recorridos locales o foráneos previamente autorizados.

LXXX. Transporte escolar: Servicio de transporte público o privado destinado al transporte de estudiantes de las instituciones educativas y que opera en términos del permiso otorgado bajo esta modalidad. Este servicio se presta en autobuses y minibuses de distinta capacidad, diseñados de origen especialmente para tal fin.

LXXXI. Transporte de personal: Servicio de transporte público o privado destinado principalmente al traslado de trabajadores, dependientes o personas vinculadas a las empresas, industrias o fuentes de trabajo en que laboran, prestan sus servicios o mantienen relación comercial o profesional; con horario, precio, recorrido, origen y destino variables y dinámicos de acuerdo con las necesidades del cliente o usuario, y que opera en los términos del título concesión otorgado.

LXXXII. Transporte turístico: Servicio de transporte público destinado al transporte de personas a lugares de interés turístico o cultural en general; no está sujeto a horario y tarifa fija. Este servicio se presta en autobús y microbús de distinta capacidad o en su caso en vehículos automotor y de propulsión humana o animal acondicionados especialmente para tal fin.

LXXXIII. Trasbordo: La transferencia de bienes o personas de un vehículo de transporte a otra, dentro de un sistema integrado de transporte o de movilidad, los cuales deberán de compartir servicios conexos según lo disponga el Reglamento de esta Ley.

LXXXIV. UMA: La Unidad de Medida y Actualización (UMA);

LXXXV. Vehículo: Todo bien mueble identificado en su individualidad diseñado para el transporte terrestre de personas o cosas en la vía pública, que su movimiento sea generado por una fuerza motriz o de propulsión, así como aquellos destinados para ser remolcados;

LXXXVI. Vías públicas de comunicación local: Se refiere a las vías públicas, incluyendo sus construcciones de ingeniería como puentes, alcantarillas, pasos a desnivel y demás elementos de protección, monitoreo o control vía sistemas electrónicos a excepción de aquéllas que sean exclusivamente de jurisdicción de la Federación, que comuniquen al Estado con otra u otras entidades federativas, o las construidas en su totalidad o en su mayor parte por la Federación, siempre que éstas no se hubieren cedido al Estado o a los municipios;

LXXXVII. Vías Públicas: Las banquetas, ciclovías, calles, calzadas, avenidas, viaductos, carreteras, caminos y autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad con prioridad al transporte público y, en general:

a) Los predios destinados a los fines públicos del tránsito peatonal, vehicular y al transporte masivo, así como para las diferentes modalidades de taxi;

b) Los caminos públicos de jurisdicción estatal y municipal destinados temporal o permanentemente al tránsito de personas y vehículos, incluyendo el área del derecho de vía de los mismos; así como las vialidades de uso común de los condóminos, cuando su ubicación geográfica permitan el libre tránsito peatonal, vehicular o de transporte, sea necesario para la unión entre dos o más puntos de intersección con zonas urbanas y metropolitanas.

ARTÍCULO 3.- La presente Ley garantizará que la administración pública estatal y las municipales al planear, diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones en materia de movilidad observen los principios rectores siguientes:

I. Accesibilidad universal: Garantizar el derecho de las personas a elegir libremente la forma de desplazarse por las vías públicas sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición.

II. Calidad: Establecer criterios cualitativos y cuantitativos que aseguren que el servicio ofrecido al usuario cuente con un espacio apropiado y confortable para las personas, encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad y con mantenimiento regular para proporcionar una adecuada experiencia de viaje, desplazamiento y orientación del servicio público de transporte.

III. Desarrollo económico: Garantizar que el ordenamiento de las vías públicas de comunicación minimice costos y tiempos de traslado de personas y bienes a fin de contribuir al bienestar social y desarrollo del Estado.

IV. Eficiencia: Fomentar la oferta multimodal de servicios, la administración de flujos de personas que se desplacen en los distintos medios de transporte, así como de los bienes, la articulación de redes metropolitanas, regionales e intermunicipales y el uso de la infraestructura y tecnologías sustentables;

V. Igualdad: Generar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la movilidad, y asegurar que ésta se encuentre al alcance de todas las personas, atendiendo especialmente a los grupos que por sus condiciones sean catalogados como vulnerables.

VI. Innovación tecnológica: Impulsar sistemas tecnológicos que permitan un desarrollo eficiente de la movilidad, generando eficiencia en los sistemas de transporte y el desplazamiento de personas y bienes.

VII. No discriminación: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

VIII. Perspectiva inclusiva: Asegurar que las políticas públicas estatales y municipales garanticen la no discriminación, igualdad, equidad de género, seguridad e integridad física, sexual y no violencia de quienes transiten por la vía pública y utilicen el servicio público y especial de transporte.

IX. Participación ciudadana: Tomar en consideración la opinión de los ciudadanos, en los diferentes componentes de la movilidad.

X. Respeto al medio ambiente: Fomentar a través de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular de motor de combustión interna, traslado peatonal y tracción física por aquellos de carácter masivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

XI. Seguridad: Proteger la integridad de las personas y evitar posibles afectaciones a sus bienes.

XII. Sustentabilidad: Dirigir las acciones al respeto y atención prioritaria del derecho a la movilidad, considerando el impacto que las mismas tendrán en el desarrollo social, económico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones futuras.

ARTÍCULO 4.- Las acciones relativas a la movilidad y el transporte se regulan mediante actos y procedimientos administrativos que se establecen en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 5.- Las disposiciones de la presente Ley regularán entre otros aspectos, de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

I. Las acciones tendientes para garantizar que la movilidad y el transporte de las personas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de tránsito, la seguridad, el libre acceso, así como los requisitos de calidad apropiados a cada tipo de servicio, de manera que no afecten el orden de las vías públicas de circulación local y la circulación vial respetando el medio ambiente;

II. Que los servicios de transporte público se presten garantizando puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, sustentabilidad, medio ambiente y económico, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

III. Que las acciones relativas a la construcción, administración y aprovechamiento de las obras de infraestructura previstas en esta Ley se orienten a facilitar la movilidad motorizada, no motorizada y medios de transporte sustentables;

IV. Las características de los vehículos y sus condiciones operativas, necesarias para permitir su circulación, con base en la normatividad aplicable;

V. Los requisitos, condiciones, términos y procedimientos para el otorgamiento, suspensión o cancelación de las concesiones, autorizaciones y permisos destinados a la prestación del servicio público de transporte en sus distintas modalidades, en la operación de servicios conexos, así como sistemas electrónicos;

VI. Los requisitos y condiciones para establecer y operar servicios conexos,

VII. La vigilancia, inspección, planeación, administración, control y sanción del servicio de transporte público y privado.

VIII. La competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad y transporte;

IX. Los derechos y obligaciones de los sujetos activos en materia de movilidad de personas, bienes y mercancías;

X. Las políticas, lineamientos, estrategias y disposiciones relativas a la planeación de la movilidad y la formulación de los planes y programas específicos de la materia;

XI. Los esquemas de coordinación institucional que deben ejecutar el Estado y los municipios, para integrar y administrar el servicio de transporte y vialidad de personas y de transporte de carga;

XII. La promoción y fomento en la población para la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sostenible y la prevención de accidentes que coadyuven a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular e impulsar el uso intensivo del transporte público y no motorizado;

ARTÍCULO 6.- En el Estado de Baja California se considera de utilidad pública en materia de movilidad:

I. La prestación de servicio público de transporte de personas, de transporte de carga y de distribución de bienes y mercancías;

II. El establecimiento de infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar necesarios para la prestación eficiente del servicio público;

III. Los derechos de los usuarios;

Los demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad jurídica aplicable.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 7.- Para efectos de salvaguardar los derechos de las personas a la movilidad, se deberá de observar y garantizar lo siguiente:

I. El derecho de preferencia a los peatones, personas con discapacidad y sus perros guías, adultos mayores, mujeres embarazadas o con infantes, ciclistas y los usuarios del transporte público, quienes gozarán de preferencia sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso peatonal y se les brindarán obligatoriamente las facilidades necesarias para abordar el vehículo del transporte público en todas sus modalidades,

II. Establecer las medidas necesarias, que garanticen al usuario el derecho el servicio público de transporte en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia en apego a la normatividad aplicable;

III. Establecer los mecanismos de recepción de quejas y denuncias de los usuarios del servicio ante el Instituto de cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte público o cualquier tema inherente a la movilidad en el Estado;

IV. Realizar las acciones necesarias a fin de que el sistema de movilidad no disminuya su capacidad operativa ante situaciones fortuitas o de fuerza mayor, que afecte a los usuarios; y

V. Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 8.- Los usuarios del transporte público tendrán los siguientes derechos:

I. Recibir un servicio de transporte público de calidad moderno y que satisfaga sus necesidades por el pago de la tarifa;

II. Viajar con seguridad e higiene en el servicio, relativas al vehículo y conductor del servicio;

III. Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;

IV. A que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada.

V. Al respeto y cumplimiento de las frecuencias en los horarios autorizados.

VI. Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que en su caso corresponda.

VII. Recibir boleto con seguro de pasajero el cual podrá ser de manera física o electrónica en servicios conexos de pago o prepago.

VIII. El ascenso y descenso en las paradas autorizadas.

IX. Ser indemnizado en el caso de cualquier accidente o imprevisto durante el uso del transporte por el prestador del servicio de transporte mediante póliza de seguros emitida por una sociedad mutualista debidamente acreditadas y certificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad aplicable;

X. A la prestación del servicio público de transporte en forma regular, continúa, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones, comodidad y eficiencia.

XI. Conocer y escoger la ruta o recorrido que considere más adecuado para su destino. Si el usuario no opta por decidir el recorrido concreto, el servicio siempre será aquel que siga la ruta

previsiblemente más corta, señalando el conductor al usuario la distancia y el tiempo estimados de duración del servicio.

ARTÍCULO 9.- Los estudiantes tendrán el derecho de paso preferencial en todas las intersecciones y zonas señaladas para esos fines, próximos a los centros escolares, y tendrán prioridad para el ascenso y descenso en los vehículos de servicio público de transporte en general; en consecuencia, las autoridades competentes deberán proteger, mediante dispositivos, señalamientos e indicaciones convenientes, el tránsito de los estudiantes en los horarios y lugares establecidos.

ARTÍCULO 10.- Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y los peatones tienen derecho y prioridad de tránsito en la vía pública debiendo cruzar las vías rápidas, primarias y de acceso controlado por las esquinas, puentes peatonales, pasos a desnivel o zonas marcadas para tal efecto, excepto en las calles locales, cuando exista solo un carril para la circulación, en las cuales podrán cruzar en cualquier punto, con precaución del tránsito vehicular, así como evitar el tránsito por superficies de circulación vehicular.

ARTÍCULO 11.- Las aceras de las vías públicas, sólo deberán ser utilizadas para el tránsito de las personas con discapacidad y por los peatones, con las excepciones que determinen las autoridades dentro de su respectiva competencia y para dar espacio a la infraestructura ciclista, exceptuando aquella destinada para la circulación.

Para efecto de lo anterior, el Instituto tendrá la facultad de regular los colores en las guarniciones de las banquetas que prohíben o delimitan el estacionamiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la presente esta Ley.

ARTÍCULO 12.- Adicionalmente a los derechos que corresponden a los peatones en general, ciclistas y personas con discapacidad, tendrán preferencia de paso en todos los cruceros o zonas de paso peatonal.

Las autoridades y concesionarios deberán otorgar las facilidades necesarias para el abordaje de los vehículos de transporte público en los términos de la presente Ley.

SECCION I

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 13.- Los operadores del servicio público de transporte, tienen la obligación de auxiliar en el ascenso, transportación y descenso, a los usuarios que padezcan alguna discapacidad

temporal o permanente y personas adultas mayores, por lo que el Instituto promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y servicios conexos de pago y prepago, particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral, para efecto de lo anterior se llevarán a cabo las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte de competencia estatal;

II. Promover que, en la concesión del servicio de transporte público, las vehículos e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público;

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios y permisionarios, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de esta Ley y los derechos humanos.

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

ARTÍCULO 14.- Los servicios públicos de transporte implementarán el uso de tecnología y aditamentos auxiliares que permitan a la comunidad con discapacidad visual o auditiva a ejercer sus derechos de movilidad.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 15.- Todas las personas que transiten por las vías públicas están obligadas a cumplir, en lo que a ellos concierne, las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como las disposiciones, planes, programas y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 16.- Los operadores, conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y usuarios del sistema de transporte estarán obligados a vigilar y cumplir los lineamientos de establecen esta Ley y su Reglamento, así como las disposiciones establecidas en planes, programas y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 17.- El transporte público tiene preferencia de tránsito sobre el transporte particular, estando el particular obligado a respetar los carriles de circulación exclusivos, paradas oficiales de ascenso y descenso de pasajeros, dar preferencia de paso a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, y a proteger el espacio de circulación vial compartido con ciclistas. El transporte público en todas sus modalidades garantizará la intermodalidad con el transporte privado y en bicicletas.

ARTÍCULO 18.- Los usuarios del transporte público tendrán las obligaciones siguientes:

I. Pagar la tarifa del servicio público de transporte;

II. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas en el interior de los vehículos;

III. No arrojar basura u objetos a la vía pública;

IV. No podrá sacar del vehículo parte del cuerpo u objetos;

V. No podrá exigir al conductor su ascenso y descenso fuera de los lugares establecidos para ese efecto;

VI. Abstenerse de realizar actos que ocasionen molestias a los demás pasajeros y al operador;

VII. Queda prohibido el uso de bocinas que reproduzcan sonidos estridentes; y

VIII. No hacer uso de los asientos reservados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, cuando algunas de estas personas viajen de pie.

TÍTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MOVILIDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 19.- En la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, concurrirán el Gobernador del Estado, el Instituto y los Ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas competencias conforme a las atribuciones que establecen dichos ordenamientos. Las atribuciones y facultades que en esta Ley se asignan al Ejecutivo Estatal, serán desempeñadas por conducto del Instituto, salvo aquellas que, por razones constitucionales o legales, le correspondan en exclusiva al Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 20.- En el ejercicio de sus atribuciones, los Municipios observarán las disposiciones de esta Ley y su Reglamento y aplicarán las normas generales de carácter técnico, operacionales, y reglamentos locales en la materia.

ARTÍCULO 21.- Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley y vigilar su cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias las siguientes:

I. El Gobernador del Estado;

II. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California;

III. La Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California;

IV. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;

V. El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California;

VI. Los Municipios; y

VII. Las demás que señalen la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 22.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde al Gobernador del Estado las facultades y atribuciones en la Constitución del Estado, en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 23.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde al Secretario General de Gobierno, las atribuciones previstas en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley, en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 24.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría de Hacienda, realizar las acciones administrativas y legales previstas en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 25.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, las atribuciones previstas en la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II

DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 26.- El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de decisión, el cual tiene por objeto planificar, regular, controlar, administrar y gestionar la movilidad y el transporte público de personas y bienes en todas sus modalidades, garantizando las condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

Para la eficiente atención de sus asuntos, el Instituto contará con la estructura, administrativa, ejecutiva y operativa que considere necesaria, para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la presente Ley y su Reglamento, coordinándose con los diferentes órdenes de Gobierno.

La vigilancia del Instituto, quedará a cargo de un Órgano Interno de Control en los términos de la Ley aplicable.

ARTÍCULO 27.- Además de las atribuciones previstas en su Decreto de Creación, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, contará con las atribuciones que disponga la presente Ley, su Reglamento y más disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 28.- El Instituto se regirá por una Junta de Gobierno la cual será la autoridad administrativa superior del Instituto, que quedará integrada por un presidente que será el Secretario General de Gobierno, como coordinador del sector correspondiente; un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto y cinco vocales titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría General Gobierno;

II. Secretaría de Hacienda del Estado;

III. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;

IV. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo;

V. Secretaría de Cultura.

La Junta de Gobierno podrá invitar a instituciones, organizaciones sociales y privadas y otras autoridades a las reuniones que realice cuando así lo considere oportuno, mismas que participarán con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 29.- Además de las atribuciones y obligaciones previstas en su Decreto de Creación, la Director General del Instituto contara con las atribuciones dispuestas en la presente Ley, su Reglamento y más disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 30.- Al frente del Instituto habrá un Director General, quién será nombrado y removido por el Gobernador del Estado, conforme a los términos establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 31.- El Director General es mandatario con representación, investido de atribuciones ejecutivas y administrativas por lo que será responsable del funcionamiento del Instituto, conforme lo dispuesto en el Decreto de Creación del Instituto, la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 32.- En el ámbito de su competencia en materia de vialidad, movilidad y transporte las atribuciones de los Municipios del Estado se delimitarán conforme a las siguientes bases:

I. Observar y garantizar desde el ámbito de su competencia el Plan Sectorial de Movilidad y Transporte que el Instituto emita como el instrumento rector en la formulación y aplicación de programas de movilidad, transporte, desarrollo urbano y seguridad, en lo que incidan su ámbito territorial;

II. Coadyuvar con el Instituto, con el fin de verificar la factibilidad de los proyectos de infraestructura y equipamiento vial y servicios conexos a la movilidad, en lo relativo a su territorio, localización y aprovechamiento de áreas, conforme a la normatividad aplicable de carácter técnico y de ordenamiento territorial;

III. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, así como las demás disposiciones en la materia.

IV. Celebrar convenios con el Instituto a efecto de coordinarse y cooperar para hacer eficiente y sustentable la movilidad, los servicios de transporte, y el tránsito.

V. Ordenar, regular y administrar los servicios y obras de vialidad y tránsito en los centros de población ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta Ley en sus reglamentos respectivos.

VI. Dictar medidas para mejorar la infraestructura vial y los sistemas de control de tránsito de jurisdicción municipal en términos de esta Ley;

VII. Ejecutar las acciones relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de las vialidades en los centros de población de su jurisdicción;

VIII. Implementar las directrices, políticas, y normas de observancia general que emita el Instituto respecto a las características específicas y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la regulación del tránsito, conforme a las normas generales de carácter técnico;

IX. Coordinarse con el Instituto y con los otros Municipios de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley;

X. Coadyuvar con el Instituto, en la determinación de las rutas de acceso y paso de los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, suburbano, foráneos y de carga; así como los itinerarios y horarios para los vehículos de carga, con el fin de que el Instituto otorgue las autorizaciones correspondientes;

XI. Coadyuvar con el Instituto, para la localización y ubicación del equipamiento para el transporte, tanto para la operación de las terminales de autobuses de pasajeros, como de las terminales de carga, a efecto de tramitar las concesiones, permisos y autorizaciones que en su caso correspondan;

XII. Coadyuvar con el Instituto, para autorizar la ubicación de los lugares para el establecimiento de los sitios de transporte público;

XIII. Coadyuvar con el Instituto, con el fin de que este último autorice la localización de las obras de infraestructura y equipamiento vial;

XIV. Determinar y solicitar, en su jurisdicción territorial, la instalación de los espacios destinados para la ubicación de estacionamientos, ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios o espacios públicos, particulares o de Gobierno, cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del público en general;

XV. Solicitar al Instituto asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones en materia de movilidad urbana, vialidad y tránsito;

XVI. En el ámbito de su respectiva competencia, determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta Ley y a su Reglamento; y

XVII. Promover en el ámbito de su respectiva competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios de transporte masivo de pasajeros; así como garantizar espacios delimitados para la guarda de bicicletas y similares.

ARTÍCULO 33.- Los Municipios ejercerán sus atribuciones técnicas y administrativas en materia de vialidad y tránsito, e intervendrán en la formulación y aplicación efectiva de los programas de movilidad y transporte.

TÍTULO III

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD, PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO I

POLÍTICA DE LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 34.- Para la implementación de la política pública en materia de movilidad, se dará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, en especial personas con discapacidad o con movilidad limitada, la cual se refiere a los sectores de la población con necesidades especiales, tales como la población infantil, adultos mayores, mujeres en período de gestación o personas acompañadas de niños pequeños;

II. Ciclistas;

III. Usuarios de transporte no motorizado;

IV. Usuarios de transporte público de pasajeros;

V. Usuarios de medios de transporte ecológicamente sustentables y sostenibles;

VI. Transporte de carga y distribución de bienes;

VII. Motociclistas; y

VIII. Personas que usan el transporte particular automotor.

ARTÍCULO 35.- La prelación contenida en el artículo anterior debe ser observada en cualquier acción de las autoridades estatales o municipales, relacionada directamente con la movilidad de las personas, bienes y mercancías o que esté vinculada con el objeto de la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 36.- El objetivo de la planeación y estudio de la movilidad es el desarrollo de las políticas públicas en la materia, las cuales deberán estar apegadas al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y demás programas relativos, garantizando de forma eficiente y segura la movilidad de las personas, bienes y mercancías. Son instrumentos de planeación en materia de movilidad:

I. Plan Sectorial de Movilidad y Transporte;

II. Programa Sectorial de Seguridad Vial;

III. Programas especiales;

IV. Programas Municipales de Movilidad.

Estos instrumentos deberán apegarse al resto de los instrumentos en materia de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

ARTÍCULO 37.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte es el instrumento de planeación, gestión, control y evaluación, por medio del cual, el Poder Ejecutivo del Estado establece las bases, objetivos, metas y acciones a seguir en materia de movilidad por lo menos en los siguientes rubros:

I. Gestión de la movilidad;

II. Movilidad activa y grupos vulnerables; III.

Educación vial y cultura de la movilidad; IV.

Transporte de personas;

V. Transporte de bienes y logística de mercancías; y

VI. Transporte particular automotor.

El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte será aplicable en todo el territorio estatal y tiene naturaleza de plan sectorial, para los efectos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

ARTÍCULO 38.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte tendrá como objetivos primordiales los siguientes:

I. Disponer de un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente;

II. Impulsar el desarrollo del trasporte para garantizar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el fin de elevar la calidad de vida;

III. Mejorar la infraestructura vial en el Estado, partiendo de un diagnóstico de las necesidades, así como un estudio de las vialidades;

IV. Disponer de un sistema de transporte que cubra las necesidades de los usuarios;

V. Implementación de tecnologías de la información en la gestión pública de la movilidad, gestión institucional, y transporte público;

VI. Promover políticas que fomenten la movilidad institucional, entendida como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistema de auto compartido, fomento del uso de la bicicleta, y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines; y

VII. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 39.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte en el Estado de Baja California, deberá considerar todas las medidas técnicas, administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema de Movilidad y las políticas conducentes.

El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte fomentará la movilidad no motorizada y los medios de transporte masivo, incluyendo, pero no limitándose a las rutas, horarios, frecuencias y los elementos necesarios del sistema de transporte sustentable para lograr los objetivos del Plan; asimismo, implementará sistemas de movilidad, urbanos, suburbanos y rurales.

ARTÍCULO 40.- El Programa Sectorial de Seguridad Vial debe incluir en forma enunciativa, pero no limitativa los siguientes rubros:

I. El diagnóstico;

II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Movilidad en el Estado;

III. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución;

IV. Las acciones de coordinación con dependencias federales, entidades federativas y municipios;

V. Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su caso, corrección del Programa; y,

VI. Los demás que establezca el Reglamento.

ARTÍCULO 41.- Los Programas especiales y Programas Municipales de Movilidad, deberán incluir los elementos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley

CAPÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN DEL ESTADO CON LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 42.- Las autoridades estatales y municipales deberán:

I. Promover la participación de la sociedad en los programas que tengan como objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de movilidad y transporte, la difusión, sensibilización y adopción de las medidas de prevención y la seguridad vial;

II. Coadyuvar en la formulación y ejecución de los planes y programas en materia de movilidad y transporte con las entidades Federales, Estatales y Municipales que se determinen necesarias.

Los programas y proyectos de movilidad y transporte de alcance intermunicipal en las zonas metropolitanas se definirán y ejecutarán con la participación y coordinación entre los municipios y el Instituto, por lo cual este último determinara las directrices correspondientes.

ARTÍCULO 43.- El Estado y los Municipios, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de vialidad y tránsito a efecto de que:

I. Asesoría y apoye para realizar acciones y estudios técnicos en materia de movilidad, tránsito y seguridad vial;

II. Promoción de una movilidad sustentable, adopción de nuevas tecnologías para el control y administración del tránsito y modos de transporte no motorizados, equipamientos y servicios conexos; y

III. Las demás que sean necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y la garantía de al derecho de la movilidad y el transporte.

CAPÍTULO IV

INFRAESTRUCTURA E IMPACTO DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 44.- El Instituto en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, integrará la planeación territorial y urbana con la de movilidad desarrollando mecanismos de coordinación y cooperación administrativa para mejorar la eficiencia de los diferentes sistemas de movilidad.

ARTÍCULO 45.- El Instituto a través del Plan Sectorial de Movilidad y Transporte, establecerá los elementos rectores de planeación de la movilidad, transporte y sus infraestructuras en el Estado.

ARTÍCULO 46.- Los proyectos para la construcción de vialidades en el Estado deberán considerar espacios de calidad y con accesibilidad universal para la circulación en términos de la jerarquía de movilidad establecida en esta Ley, Plan Sectorial de Movilidad y Transporte y Programa Sectorial de Seguridad Vial.

ARTÍCULO 47.- Toda autorización para la realización de obras que por su naturaleza generen un impacto negativo a la movilidad, deben de estar sustentado con sus estudios de impacto ambiental y movilidad validados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 48.- El Instituto coadyuvará con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y con los Municipios, para que exista señalización vial y

nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular.

ARTÍCULO 49.- El Instituto en coordinación con los municipios autorizará y establecerá la ubicación y geometría de los cierres de circuito, terminales, lanzaderas, áreas de ascenso y descenso y demás elementos análogos, de acuerdo a los estudios que se realicen, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 50.- El Instituto en coordinación con los municipios, determinará los lugares donde los vehículos del servicio público de transporte deban realizar ascensos y descensos de los usuarios de acuerdo a las modalidades y necesidades del servicio.

En el caso de los Municipios donde operen sistemas integrados de transporte, los recorridos de las rutas suburbanas podrán realizarlo según la ubicación de las estaciones de transferencia que sean determinadas por la zona correspondiente, la cual podrá contar con diversas modalidades de transporte.

CAPÍTULO V

DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 51.- El Instituto promoverá y fomentará en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos.

ARTÍCULO 52.- El Instituto coordinará los programas y acciones necesarias en materia de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos los usuarios de la vialidad.

ARTÍCULO 53.- El Instituto promoverá ante las autoridades educativas la incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas de educación vial y movilidad urbana.

ARTÍCULO 54.- Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir cursos y clases de manejo, deberán obtener ante el Instituto el registro correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por este.

CAPÍTULO VI

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

ARTÍCULO 55.- El Instituto contará con un Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte, de carácter honorífico, con la participación de los sectores público, privado, académico y social que se integrará y funcionará en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, por lo que contará con atribuciones propositivas, mediante el cual podrá proponer políticas públicas para la implementación de las acciones de movilidad sustentables y transporte en el Estado.

ARTÍCULO 56.- El Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte podrá contar con consejos locales para consultar las particularidades de cada demarcación territorial en materia de movilidad sustentable y transporte por lo que los presidentes municipales del Estado podrán formar parte de dichos consejos locales.

TÍTULO IV

SISTEMAS DE MOVILIDAD

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 57.- Todo vehículo para ocupar o movilizarse en la vía pública, deberá cumplir con los requisitos, condiciones y elementos de identificación oficial, así como estar registrado en el Padrón de Movilidad y Transporte en los términos previstos en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 58.- Los vehículos de transporte público en sus distintas modalidades, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, deberán portar los rótulos y cromática que los identifiquen como prestadores del servicio conforme a su título de concesión, permiso o autorización, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley y a las normas técnicas aplicables.

ARTÍCULO 59.- Todo operador deberá portar la licencia de conducir vigente, de acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate y estará siempre visible para el usuario y las autoridades, conforme a la clasificación establecida en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 60.- Cualquier vehículo registrado en el Estado, otra entidad federativa o en el extranjero, deberán circular en esta Entidad, con la constancia o póliza de seguro vigente con

cobertura nacional que garantice el pago de daños y perjuicios contra terceros, en los términos de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 61.- Los vehículos con matrículas o placas extranjeras podrán circular en el Estado, siempre y cuando sus conductores acrediten tener licencia vigente de manejo del país donde este matriculado el vehículo y cuenten con identificación con la que acrediten su nacionalidad o residencia; en caso de prestar servicios de turismo o carga deberán de obtener las autorizaciones correspondientes conforme a lo establecido por el Reglamento de esta Ley y disposiciones aplicables, para estos casos, la autoridad correspondiente podrá solicitar a los conductores que acrediten la documentación para su legal circulación.

CAPÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO Y

LA SECRETARIA DE HACIENDA

ARTÍCULO 62.- El Instituto emitirá opiniones técnicas generales y específicas en relación a la expedición o revocación de los elementos de identificación vehicular tales como: placas, tarjetas de circulación y licencias, así como la emisión de políticas y medidas de urgente aplicación para salvaguardar el derecho a la movilidad, la seguridad vial y salud pública.

ARTÍCULO 63.- Para el cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo el Instituto y la Secretaria de Hacienda del Estado deberán expedir de manera conjunta los lineamientos de carácter general y específicos en la materia.

ARTÍCULO 64.- Para efectos de la expedición de los elementos de identificación vehicular tales como placas, tarjetas de circulación y licencias de particulares y del servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades el Instituto y la Secretaria de Hacienda estarán a lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

ARTÍCULO 65. - En coordinación con la Secretaria de Hacienda el Instituto llevará la administración del Padrón de Movilidad y Transporte.

ARTÍCULO 66.- La expedición de placas de circulación para vehículos de servicio público de transporte, se limitarán en número de conformidad con la concesión o permiso respectivo, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 67.- Las personas que porten una licencia o permiso para conducir expedido en el extranjero u otra entidad federativa, no podrán conducir vehículos de servicio de transporte empadronado en el Estado.

ARTÍCULO 68.- Las licencias vigentes que se expidan en otra entidad federativa o en el extranjero, tendrán la validez plena dentro de la jurisdicción estatal, siempre y cuando correspondan al tipo de vehículo particular de que se trate.

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD Y EL PADRÓN

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 69.- El Sistema de Información de Movilidad y el Padrón de Movilidad estarán a cargo del Instituto y tienen por objeto establecer una base de datos de los vehículos, conductores, operadores, propietarios, personas físicas o morales titulares de permisos o concesiones, los sistemas electrónicos y demás características que incidan en la movilidad.

El Sistema de Información de Movilidad y el Padrón de Movilidad, serán fuentes de consulta legal para las autoridades administrativas, judiciales y fiscales en el Estado de Baja California, respecto a los derechos de propiedad o de tenencia de los vehículos, y que estos cumplen con todas las obligaciones que le impone la presente Ley.

SECCIÓN II

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 70.- El Sistema de Información para la Movilidad, en lo sucesivo denominado como SIMOV, tiene por objeto integrar la información relacionada con la movilidad y el transporte cuyas secciones se establecen a continuación y se definirán conforme lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley:

I. Padrón de Movilidad y Transporte;

II. Concesiones, permisos y autorizaciones;

III. Empresas de redes de transporte;

IV. Empresas de servicios auxiliares y conexos;

V. Matrículas de vehículos de transporte en todas sus modalidades;

VI. Póliza de seguro o su equivalente vigente;

VII. Actas constitutivas, estatutos y representantes de concesionarios, permisionarios y empresas de redes de transporte;

VIII. Padrón de operadores del servicio público y de conductores;

IX. Tarjetones y gafetes de identificación;

X. Licencias para conducir;

XI. Infracciones, sanciones y comisión de delitos;

XII. Beneficiarios de tarifas preferenciales;

XIII. Personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el transporte por motivo de su especialidad a particulares y al Instituto;

XIV. Conductores y operadores activos y solicitantes de permiso o autorización;

XV. Insumos que se consideren necesarios para la planeación de la movilidad del Estado;

XVI. Sanciones; y

XVII. Las demás que señale el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 71.- La inscripción en el Padrón de Movilidad y Transporte correspondiente al servicio público de transporte y al transporte particular, se otorgará a las personas físicas o morales que cumplan los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de la presente Ley; en el cual se establecerá el procedimiento, términos, condiciones, vigencia, causas de extinción de la inscripción en el padrón, así como los casos en que se necesite autorización específica adicional para realizar transporte particular de pasajeros o de carga por utilizar un medio innovador de propulsión o del despliegue de un mando algorítmico.

ARTÍCULO 72.- La inscripción en el Padrón para vehículos de transporte de seguridad privada, se otorgará a las personas físicas o morales que cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 73.- Los operadores activos y conductores del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades deberán presentarse ante el Instituto cada seis meses, con la finalidad de mantener vigente y actualizado el Padrón de Movilidad y Transporte en los términos del Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN III

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN EL PADRÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ARTÍCULO 74.- Para efectos de esta Ley, los vehículos serán clasificados por peso, dimensión, capacidad, uso al que serán destinados y por su fuerza motriz conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 75.- El Servicio de Transporte en Baja California para los efectos de esta Ley, se clasifica en:

I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y

II. Servicio de Transporte de Carga.

ARTÍCULO 76.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en:

I.- Privado

a) Escolar;
b) De personal;
c) Especializado en todas sus modalidades; y,
d) Seguridad Privada

II.- Público

a) Masivo;

b) De personal;

c) Escolar;
d) Taxi; y,
e) Servicio de Turismo

III. Servicios prestados por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.

ARTÍCULO 77.- El Servicio de Transporte de Carga, se clasifica en:

I. Público:

a) Carga en general; y
b) Grúas de arrastre, salvamento o depósito para los fines de movilidad que establezca el Instituto.

II. Mercantil:

a) De valores y mensajería;
b) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;
c) Grúas de arrastre o salvamento; y
d) Carga especializada en todas sus modalidades.

III. Privado:

a) Para el servicio de una negociación o empresa;
b) De valores y mensajería;
c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;
d) Grúas de arrastre o salvamento; y
e) Carga especializada en todas sus modalidades.

IV. Servicios prestados por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.

ARTÍCULO 78.- Para los efectos de la presente Ley, se considera que no tienen carácter de servicio de transporte público:

I. El transporte de carga que realicen los productores agropecuarios o las agrupaciones de éstos, legalmente constituidas, en vehículos de su propiedad, para trasladar sus insumos o productos;

II. Los de servicios cuando atiendan única y exclusivamente a los fines de la propia empresa o institución;

III. El servicio de vehículos en arrendamiento, que se preste a personas físicas sin incluir en el contrato los servicios del conductor, mediante el pago de una renta por días, horas odistancia recorrida. Cuando se trate de vehículos que pertenezcan a empresas cuya actividad sea específicamente el arrendamiento de vehículos, tendrán la obligación de registrarlos ante el padrón de movilidad y transporte; y

IV. El transporte que realicen los particulares de carga ligera en vehículos de uso privado para transportar determinados bienes muebles o enseres de su propiedad.

ARTÍCULO 79.- En lo que respecta al peso, dimensiones y capacidad los vehículos de transporte de pasajeros, turismo y carga que transiten en el Estado, se deberán sujetar a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, y de manera supletoria se aplicarán las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes.

SECCIÓN IV

DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR

ARTÍCULO 80.- Para circular en las vías públicas de comunicación, los propietarios o conductores de vehículos, deberán atender lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como las normas, lineamientos especificaciones, prohibiciones y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 81.- Queda prohibido conducir vehículos por la vía pública bajo el influjo de bebidas alcohólicas o consumo de enervantes. Los conductores de vehículos del servicio público no deben presentar alguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, o síntomas simples de aliento alcohólico o estar bajo los efectos de narcóticos.

Los policías municipales, estatales e inspectores de movilidad pueden detener la marcha de un vehículo del servicio público de transporte, cuando se lleven a cabo programas para conductores de vehículos de control de uso o consumo de alcohol o de narcóticos para la prevención de accidentes.

ARTÍCULO 82.- Los inspectores y la autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito, deberán retirar de circulación los vehículos en los que se cometan infracciones graves a las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, así como las disposiciones normativas aplicables.

ARTÍCULO 83.- El Instituto y las autoridades competentes realizarán las acciones, medidas de seguridad y aplicarán las sanciones que se establecen en las leyes federales y estatales en materia de equilibrio eco

ARTÍCULO 84.- Queda prohibido llevar en un vehículo un número mayor de personas al que especifique la tarjeta de circulación respectiva, con excepción del servicio público masivo de

acuerdo con sus dimensiones y capacidad del vehículo. En el caso de los vehículos de servicio público de transporte y el especializado serán las autoridades de transporte competentes, las que determinen el número máximo de personas que pueden ser transportadas según el tipo de vehículos y servicio de que se trate conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 85.- Los motociclistas que circulen por las vías públicas de competencia Estatal o municipal deberán de utilizar en todo momento casco de protección que cumpla con las normas de seguridad vial.

ARTÍCULO 86.- En situaciones de emergencia que perturben la paz pública, o contingencia ambiental grave que afecte la salud pública, la Policía de Movilidad o en su caso, las autoridades de movilidad coadyuvaran con las autoridades competentes en la implementación de las medidas necesarias para regular y administrar la movilidad vehicular.

ARTÍCULO 87.- Por razones de interés público y seguridad vial, todas las configuraciones de transporte de carga deberán cumplir estrictamente con las especificaciones de pesos y dimensiones máximas establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 88.- Los permisionarios o concesionarios de autotransporte federal cuando utilicen vías de jurisdicción estatal, deberán solicitar al Instituto los permisos para realizar ascenso y descenso de pasajeros, carga o descarga de materiales, servicio de arrastre o para establecer terminales, sin menoscabo de lo dispuesto por la normatividad federal. El Instituto dispondrá la

expedición de estos permisos, cuidando la no afectación de las concesiones o permisos estatales, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO IV

DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 89.- Para dar de alta o hacer cambio de vehículo y poner en servicio los vehículos destinados al servicio de transporte se deberá cumplir con la revisión física mecánica correspondiente, conforme a lo previsto en el Reglamento de la presente Ley, previo trámite de verificación ambiental vehicular. Posteriormente, los referidos vehículos se someterán semestralmente a dicha revisión, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la contaminación ambiental.

ARTÍCULO 90.- Los vehículos destinados al servicio de transporte deberán prestar el servicio en la modalidad para la cual fueron diseñados de origen en su fabricación; y para la cual obtuvieron su permiso o concesión, quedando prohibido en todo momento modificar o hacer aditamentos a los mismos, conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 91.- Las modalidades del servicio de transporte presentes o futuras dispuestas en la presente Ley y su Reglamento podrán ser reguladas y autorizadas por zonas o municipios de acuerdo con las necesidades de la prestación de un servicio en específico.

ARTÍCULO 92.- Los servicios de transporte en motocicleta podrán prestarse en todas sus modalidades exceptuando el transporte público de pasajeros, incluyendo a las empresas de redes de transporte conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 93.- El Instituto podrá emitir una autorización temporal de alta por única vez, de un vehículo del servicio de transporte público con un plazo de hasta 60 días hábiles siguientes a la adquisición correspondiente cuando se trate de vehículo del año modelo en curso y 30 días para vehículos de otro año modelo.

SECCIÓN II

DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE DE CIUDAD O MUNICIPIO

ARTÍCULO 94.- Los Sistemas Integrados de Transporte de Ciudad son el conjunto de componentes que se encuentran integrados de manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto de prestar un servicio público de transporte confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios; con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en cada ciudad.

ARTÍCULO 95.- El Instituto desarrollará los programas específicos y las políticas para la integración de las diferentes modalidades de servicio de transporte público de pasajeros, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

El Instituto para tal fin establecerá los mecanismos de coordinación y las acciones correspondientes para la integración y operación conjunta de los sistemas.

ARTÍCULO 96.- Los concesionarios y permisionarios de las distintas modalidades de transporte público deberán incorporarse a los Sistemas Integrados de Transporte, cumpliendo con los requisitos de organización, operación e inversión requeridos para este sistema, en los términos y plazos que establezca el Instituto conforme lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, debiendo constituir un ente operador del servicio a través de un fideicomiso.

ARTÍCULO 97.- El Instituto determinará los esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan una recaudación centralizada de los recursos del pago de las tarifas a través de medios electrónicos, cámara de compensación y demás elementos necesarios en un modelo integrado, multimodal e interoperable de transporte.

Asimismo, el Instituto emitirá lineamientos y procesos para la integración de soluciones y sistemas tecnológicos en el pago electrónico de la prestación del servicio, así como la dispersión de las contraprestaciones.

SECCIÓN III

DE LOS SISTEMAS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 98.- Los Sistemas Metropolitanos de Transporte, son aquellos que se establecen para la prestación del servicio público de transporte entre los territorios de los Municipios declarados conurbados o zona metropolitana.

ARTÍCULO 99.- Los Sistemas Metropolitanos de Transporte Público están conformados a su vez por los siguientes componentes:

I. Rutas intermunicipales autorizadas por el Ejecutivo Estatal;

II. Régimen de traslados y trasbordos de pasajeros y usuarios;

III. Infraestructura especializada;

IV. Imagen e información, y

V. Régimen de recaudo de tarifas, así como la administración y dispersión de ingresos; El

contenido de dichos componentes se define en el Reglamento de la presente Ley.

El sistema y cada uno de los componentes, en caso de declaratoria de imposibilidad del Instituto, podrán ser concesionados en forma conjunta o separada.

ARTÍCULO 100.- La inspección y vigilancia de los Sistemas Metropolitanos de Transporte, corresponde al Instituto en los términos de la Ley y el Reglamento.

CAPÍTULO V

DE LAS CONCESIONES

ARTÍCULO 101.- Corresponde al Ejecutivo Estatal por conducto del Instituto la prestación del servicio público de transporte de pasajeros; una vez que de acuerdo con los estudios técnicos y operativos se haya determinado la necesidad de prestar este, evaluará si se encuentra en condiciones de realizarlo con medios propios o, ante la imposibilidad de hacerlo, realizar la declaratoria correspondiente y la necesidad de su concesión mediante una convocatoria de licitación pública. Esta declaratoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la Entidad.

ARTÍCULO 102.- Las personas morales interesadas en participar en la prestación del servicio público de transporte masivo, de personal o turístico, requerirán obtener concesión según corresponda, pagar los derechos y contribuciones correspondientes, y cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 103.- Las concesiones únicamente se otorgarán a personas morales, de nacionalidad mexicana, según el servicio de que se trate, constituidas conforme a las leyes del país, y en ellas no podrán participar accionistas o inversionistas extranjeros.

ARTÍCULO 104.- La vigencia de las concesiones será por un periodo mínimo de 6 y máximo de 30 años, y podrán ser prorrogados por periodos iguales y sucesivos, conforme a lo previsto en la presente Ley, siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos sus términos, las condiciones establecidas en la Concesión respectiva.

ARTÍCULO 105.- El concesionario deberá de presentar la solicitud de revalidación de su concesión ante el Instituto, cuando menos antes de 180 (ciento ochenta) días naturales previos al vencimiento efectivo de la concesión de que se trate.

ARTÍCULO 106.- El Instituto deberá realizar los estudios técnicos y operativos para determinar las necesidades de servicio público para el otorgamiento, modificación o revalidación de una concesión en base a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 107.- La declaratoria de necesidades de servicio de transporte público que emita la Junta de Gobierno respecto del otorgamiento de concesión, deberá contener lo siguiente:

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

II. La modalidad y el número de concesiones para expedir, en base a la necesidad acreditada en los estudios técnicos referidos en la fracción I de este artículo;

III. El tipo y características de los vehículos que se requieran, y,

IV. Los lineamientos generales para la prestación del servicio que corresponda.

ARTÍCULO 108.- Una vez emitida la declaratoria, en un plazo no mayor a diez días hábiles, se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, y en el Municipio y/o Zona Metropolitana en donde tenga efectos la declaratoria, anexando la convocatoria pública para la licitación de la concesión del servicio de transporte público, la cual deberá contener lo previsto por el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN I

DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 109.- El otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a la movilidad y de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos sancionados se realizará a través de convocatorias públicas, cuyas bases contendrán la información, datos y particularidades que establece el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO.110.- Los participantes de la convocatoria deberán examinar las condiciones y especificaciones que se determinan en las bases de dicha convocatoria, en la inteligencia de que si se omite proporcionar la información requerida la propuesta será rechazada.

ARTÍCULO 111.- Previo a la presentación de propuestas se podrá realizar una junta de aclaraciones que se celebrará en el lugar y fecha que se indique en la convocatoria respectiva.

La junta de aclaraciones tendrá por objeto que el Instituto aclare y conteste las preguntas sobre cualquier aspecto que pueda plantearse en esta etapa del proceso.

Al finalizar la junta de aclaraciones, se levantará un acta circunstanciada de hechos, de lo desahogado en dicha junta la cual deberá estar firmada por todos los participantes de la misma.

ARTÍCULO 112.- El Instituto como autoridad convocante tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas.

ARTÍCULO 113.- Los participantes deberán acreditar que cuentan con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para sustentar el servicio en la ruta propuesta presentando una validación de su crédito de la empresa armadora de los vehículos con los cuales participa en la licitación sin que esto vaya en perjuicio de otras áreas de servicio.

ARTÍCULO 114.- Los representantes legales de los participantes deberán acreditar su personalidad a través de poder notarial, en el cual se haga constar su capacidad jurídica de representación.

ARTÍCULO 115.- El acto de presentación de las propuestas de servicio se realizará en el día, lugar y hora definido en la convocatoria respectiva, las propuestas y todos los documentos requeridos deberán ser recibidos por el Instituto al inicio de este acto, en el que podrán participar los interesados que hayan sido inscritos.

ARTÍCULO 116.- Se deberá levantar acta de la ceremonia de presentación y apertura de propuestas, misma que deberá contener lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 117.- Para facilitar la evaluación de los participantes en su caso, el Instituto podrá solicitar por escrito aclaración sobre su propuesta. La respuesta de los participantes deberá formularse por escrito.

ARTÍCULO 118.- Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta finalizar el acto de fallo, no se permitirá a los participantes mantenerse en contacto con el Instituto en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta, salvo el caso en que el interesado sea requerido por el Instituto.

ARTÍCULO 119.- El Instituto podrá rechazar cualquier propuesta por incumplimiento o insuficiencia de algún requisito especificado, establecido en las bases de la convocatoria.

Asimismo, por causa justificada, el Instituto podrá declarar desierto el procedimiento en cualquier momento previo al otorgamiento de la autorización, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del interesado afectado por esta determinación.

ARTÍCULO 120.- En el acto de presentación y apertura de propuestas, o en el proceso de revisión y evaluación, el Instituto estará facultada para descalificar a los interesados participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

I. Por incumplir con los requisitos especificados en las bases de la convocatoria;

II. Presentar las propuestas en sobre abierto, sin contar con las medidas de seguridad previstas en las bases correspondientes;

III. La falta de acreditación de personalidad legal por parte del representante y/o apoderado del participante;

IV. Omitir firma, datos o documentos requeridos en las bases correspondientes; y

V. Proponer alternativas distintas a las condiciones establecidas en las bases correspondientes;

ARTÍCULO 121.- En el supuesto del artículo anterior, se asentará en un acta circunstanciada de hechos los motivos que generaron la descalificación y posteriormente se hará mención y anexará al fallo del Comité de Concesiones y Permisos cuya integración y atribuciones señaladas en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 122.- Se podrá declarar desierta la convocatoria en los siguientes casos:

I. Cuando ningún interesado se hubiere inscrito para participar en el acto de apertura de propuestas; y

II. Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases o que sus características no sean aceptables, previa investigación efectuada.

ARTÍCULO 123.- Concluido el acto de presentación y apertura de sobres, se realizará un análisis de la documentación legal y técnica de las propuestas, verificando que se cumplan los requerimientos, condiciones, calidad y características especificadas para el otorgamiento de la concesión.

ARTÍCULO 124.- El Instituto, dictaminará mediante un fallo, la propuesta que resulte vencedora.

En el supuesto de que más de un interesado cumpla con los requisitos especificados en la convocatoria, el Instituto deberá fallar a favor de la cual considere la más conveniente para la prestación de un servicio público en base al equipo, sustentabilidad, calidad del servicio, ubicación, características y capacidad de operación, según se describa en la propuesta presentada, asimismo se tomarán en cuenta las ofertas o contraprestaciones para la mejora en la prestación del servicio público de transporte.

ARTÍCULO 125.- En el caso que el interesado que resulte vencedor rechazara la asignación, al momento del fallo, el Instituto podrá designar a otro interesado que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria.

ARTÍCULO 126.- El fallo del proceso se dará a conocer por parte del Comité de Concesiones y Permisos en la fecha y lugar indicados en la convocatoria, en su caso, podrá optar por comunicarlo por escrito a cada uno de los interesados.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

A este acto serán invitados todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas, declarando cuál participante fue seleccionado para recibir la concesión correspondiente. Para constar el fallo se levantará acta, la que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma, conteniendo además de la declaración anterior, los datos de identificación de la convocatoria.

El acta de fallo se remitirá a la Junta de Gobierno para que esta emita la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 127.- Una vez declarado el participante vencedor, la Junta de Gobierno emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes, misma que será notificada al vencedor en los términos del Reglamento de esta Ley, procediendo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 128.- El término para iniciar la prestación del servicio público será determinado en la concesión respectiva, si transcurrido el término estipulado en la concesión, sin haberse iniciado la operación del servicio autorizado y acreditado este hecho mediante acta circunstanciada, la Junta de Gobierno dejará sin efecto la concesión otorgada, haciéndose efectiva la garantía de cumplimiento, notificando al afectado.

ARTÍCULO 129.- El título de concesión para la explotación del servicio de transporte público contendrá los elementos señalados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 130.- Los derechos derivados de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público no podrán ser transferidos, otorgados en garantía, ni ser embargados o constituirse sobre ellos gravamen alguno. Los medios de transporte, sus servicios auxiliares, accesorios, dependencias y bienes muebles e inmuebles adquiridos para la prestación de este, estarán en todo momento afectos al servicio público, quien solo podrá constituir garantía sobre ellos o enajenarlos, mediante el previo y expreso consentimiento del Instituto.

ARTÍCULO 131.- Sólo se podrán constituir garantías o gravámenes sobre los vehículos y demás bienes propiedad de la concesionaria por un término que en ningún caso comprenderán la última décima parte del total del tiempo por el que se haya otorgado la concesión y previo acuerdo del Instituto.

SECCIÓN II

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ARTÍCULO 132.- El servicio público de transporte masivo de personas es el que opera sujeto a itinerario, horario y tarifa fija, variable o integrada, es prestado en vehículos autobús u otro tipo de vehículos de mayor capacidad que requieran de su propia estructura y equipamiento

para su funcionamiento conforme a su título de concesión y el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 133.- Previa autorización del Instituto, los concesionarios y permisionarios podrán celebrar, entre sí o con terceros, los convenios y/o acuerdos de enlace, fusión, combinación de equipos y cualquier otro que tenga por objeto mejorar el servicio público de transporte tales como servicios conexos de pago o prepago compatibles en todo momento con los sistemas integrados de transporte, siempre y cuando comprueben en forma técnica, social y jurídica que dichos convenios sean transparentes, viables y sustentables, conforme la presentes Ley, su reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 134.- Las concesiones que otorgue el Instituto a las personas morales para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y usuarios, comprende las siguientes modalidades:

I. Masivo;

II. De personal; y

III. Turístico

ARTÍCULO 135.- Será necesario el otorgamiento de concesiones, en los siguientes casos:

I. Cuando por necesidades del servicio público de transporte de pasajeros se requieran de otras modalidades de carácter masivo;

II. En el caso de apertura de nuevas rutas, cuando el Instituto determine la necesidad de prestación de servicio y convoque a las empresas a una licitación para su otorgamiento;

III. Para continuar explotando una concesión, al concluir su vigencia, sujetándose a lo que para el caso disponga la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 136.- Los vehículos dados de alta por los concesionarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán cumplir con las normas generales de carácter técnico aplicables, en cada caso y contarán con cámaras de seguridad y video grabación para verificar

la seguridad de los usuarios y la conducción del operador conforme a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 137.- También deberán de contar con la instalación y tener en funcionamiento un sistema de monitoreo y seguimiento de posición global, también conocido como GPS por sus siglas en inglés. El sistema de monitoreo deberá estar enlazado en todo momento con el sistema del Instituto y por los mecanismos idóneos contemplados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 138.- Del número de vehículos registrados en las concesiones deberán de contar con al menos un diez por ciento en cada una de las rutas autorizadas con rampa o diversos mecanismos que permitan la accesibilidad de personas con discapacidad. Si de la aplicación del referido porcentaje resulta un número menor a dos, se habilitarán dos vehículos por ruta para este servicio.

SECCIÓN III

TRANSPORTE DE PERSONAL

ARTÍCULO 139.- El transporte de personal es el destinado al traslado de trabajadores de empresas, industrias o fuentes de trabajo, con horario, precio, origen, destino y recorridos específicos de acuerdo a las necesidades de las empresas contratantes y solo se justifican ante la falta de cobertura de transporte público masivo. Para el servicio se deben utilizar vehículos tipo autobús conforme a las capacidades autorizadas en el Reglamento de esta Ley, quedando prohibido modificar sus interiores para admitir mayor número de pasajeros al cupo diseñado de origen.

Los usuarios de este servicio podrán viajar con sus hijos menores de 4 años de edad, los cuales deberán contar con gafete expedido por la empresa, industria o fuente de trabajo.

Cuando se pretenda otorgar esta concesión sobre este tipo de transporte, los interesados deberán presentar ante el Instituto los estudios técnicos que deberán ser realizados por profesionales en la materia debidamente autorizados por dicho Instituto o bien solicitarle a este la realización de dichos estudios previo pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 140.- Esta modalidad de transporte debe circular en un horario que será de acuerdo al contrato celebrado entre el concesionario y la empresa a la que le preste el servicio, en los términos de la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 141.- Los concesionarios de este servicio deberán notificar al Instituto los recorridos principales a utilizarse como parte de las condiciones de la prestación del servicio pactado con el cliente. La notificación será por escrito, dentro del término de 15 (quince) días hábiles posteriores a la firma del contrato respectivo y a la notificación se le deberá acompañar el trazo de los recorridos principales, en los formatos por escrito o de manera electrónica que el Instituto establezca para tal efecto.

ARTÍCULO 142.- Los concesionarios deberán presentar y actualizar anualmente, ante el Instituto, el padrón de personas morales con las que hayan celebrado contrato para la prestación del servicio, con la finalidad de acreditar debidamente la continuidad de la prestación del mismo.

ARTÍCULO 143.- Los concesionarios deben abstenerse de transportar a personas ajenas a la persona moral a la que se le presta el servicio, debiendo de contener en los contratos de transporte cláusula que contenga tal disposición.

Los usuarios del servicio por su parte deberán de portar, en lugar visible, identificación o uniforme que los distinga como usuarios o dependientes del cliente.

Los concesionarios y operadores de esta modalidad de concesión se abstendrán en todo momento de realizar cobro directo de tarifa a usuario alguno, así como de realizar ascenso y descenso de pasaje en un solo sentido sobre rutas concesionadas al transporte masivo.

ARTÍCULO 144.- Los concesionarios podrán asociarse, convenir o realizar una actividad conexa, en beneficio de la prestación del servicio, absteniéndose de incurrir en prácticas restrictivas, previa autorización del Instituto.

ARTÍCULO 145.- Se entenderá por Práctica Restrictiva el hecho de que alguien, por sí, por interpósita persona, o en unión de otros concesionarios o terceros, realicen cualquiera de los siguientes actos:

I. Oferten, comercialicen, fomenten, vendan, contraten, acuerden o negocien sus servicios por debajo del precio real, entendiéndose por éste el integrado por los costos de operación del servicio, contribuciones, más la ganancia mínima razonable; incurrirán en práctica de competencia desleal y ruinosa, así como quienes realicen, fomenten, contribuyan, inciten, organicen, instiguen o coaliguen con la finalidad de realizar prácticas restrictivas de mercado.

II. Incurran en competencia desleal y ruinosa.

En los casos señalados con antelación, los infractores serán sujetos al procedimiento administrativo correspondiente y serán sancionados conforme a la gravedad de la acción, con una o más de las siguientes sanciones siendo enunciativas más no limitativas:

I. Revocación o cancelación de la concesión;

II. Multa de 4000 a 5000 UMAS;

III. Decomiso de los bienes utilizados, y

IV. El pago de daños y perjuicios que ocasiones a terceros, así como al erario estatal y/o municipal.

ARTÍCULO 146.- Incurre también en competencia desleal y ruinosa, toda aquella persona física o moral que oferte promocione, comercialice, explote o preste el servicio, sin contar con concesión expedida por el Instituto, sin perjuicio de los daños y perjuicios que ocasione a terceros o la comisión de un delito. Y será sujeta de procedimiento administrativo, por las omisiones en el pago de las contribuciones omitidas al Estado y se les sancionará según la gravedad con una o más de las siguientes sanciones siendo enunciativas más no limitativas:

I. En la comisión de un delito se dará vista a la autoridad competente;

II. Multa de 4000 a 5920 UMAS;

III. Decomiso de los bienes utilizados; y

IV. El pago de los daños y perjuicios que ocasionen a terceros, así como al erario estatal.

SECCIÓN IV

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

ARTÍCULO 147.- El Servicio de Transporte Turístico, es el destinado al traslado de personas a lugares de esparcimiento, excursión o de recreo con interés turístico y esparcimiento en general, mediante renta por tiempo, distancia o viaje. Se concederán concesión por un término

de 6 años y los vehículos podrán tener una antigüedad máxima de 10 años y de 2 años para el alta.

Se presta en vehículos microbús, minibús y autobús de distintas capacidades de pasajeros, también puede ser prestado en vehículos de tracción humana o animal acondicionados especialmente para brindar comodidad y seguridad a los usuarios de este servicio.

ARTÍCULO 148.- Los solicitantes de concesión, deberán anexar los estudios técnicos que justifiquen el servicio en los diferentes puntos de interés y la afluencia de turistas estimada, conforme a las disposiciones que marque el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 149.- Los concesionarios de esta modalidad no podrán:

I. Realizar recorridos a destinos o sitios distintos a los que tiene autorizado;

II. Realizar paradas de ascenso o descenso de pasajeros fuera de las zonas o sitios de interés autorizadas en la concesión circuito o en los sitios, y

III. Trasladar pasajeros de pie o fuera de su asiento o pasajeros que no cuenten con la contraseña o comprobante que ampara el recorrido del circuito.

ARTÍCULO 150.- Los operadores de los vehículos deberán presentar la constancia emitida por autoridad estatal en materia de turismo que acredite ante la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo que cuenta con la capacitación que se requiere para la adecuada prestación del servicio.

El sistema de cobro deberá amparar la totalidad del recorrido y en sitio de ascenso y descenso del pasaje o usuario en los diferentes puntos de interés señalados en la concesión correspondiente.

ARTÍCULO 151.- Los vehículos que prestan el servicio de transporte turístico deberán cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

ARTÍCULO 152.- Son derechos de los concesionarios:

I. Solicitar la revalidación de la concesión;

II. Solicitar ampliación o modificación de la concesión otorgada, sujetándose a las formalidades que para el efecto establece la presente Ley y su Reglamento;

III. Proponer enlaces o fusiones de sus servicios e instalaciones con las de otros concesionarios, permisionarios y otros medios de transporte; y

IV. Constituir fideicomisos, asociaciones o agrupaciones en cualquiera de las formas legalmente permitidas, con el propósito de mejorar y optimizar su operación y la prestación del servicio, compartiendo programas y sistemas, realizando adquisiciones en común para abatir costos, y cualquier otra acción o medida que procure la eficiencia y rentabilidad en la prestación del servicio para el beneficio del usuario. La constitución o modificación de estas figuras deberán ser autorizadas por el Instituto.

ARTÍCULO 153.- Son obligaciones de los concesionarios:

I. Prestar el servicio en los términos y modalidades de la concesión otorgada;

II. Aportar los datos técnicos e información específica que se requiera, para coadyuvar al mejoramiento del servicio público;

III. Proporcionar y registrar ante el Instituto un correo electrónico oficial, a efecto de recibir todo tipo de notificaciones;

IV. Efectuar el servicio con los vehículos autorizadas, no debiendo destinarlas a otros fines distintos a su modalidad;

V. Presentar al Instituto el padrón de operadores con sus actualizaciones correspondientes cada que lo requiera el mismo, o por lo menos cada 6 meses de manera obligatoria.

VI. Someter a los vehículos a que se refiera la concesión a una revisión física mecánica semestral de conformidad a los programas que el Instituto establezca al efecto, con objeto de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la contaminación ambiental;

VII. Llevar control en una bitácora de toda revisión que realice para verificar el estado físico, mecánico y eléctrico que guardan los vehículos conforme al Reglamento de la presente Ley;

VIII. Retirar de la circulación aquellos vehículos que no garanticen la seguridad del usuario, contaminen el medio ambiente o cuyo estado físico a juicio del Instituto, no cumpla con la calidad del servicio;

IX. Operar únicamente en las rutas autorizadas, debiendo cumplir con los horarios, itinerarios y tarifas aprobadas;

X. Enlazar sus servicios e instalaciones con la de otros, conforme lo disponga el Instituto, solo en caso de emergencia;

XI. Contar con terminales, encierros y demás servicios auxiliares que garanticen la adecuada prestación del servicio;

XII. Capacitar a los operadores, personal de operación y de servicios, así como proporcionarles los recursos, medios y accesorios adecuados para el desempeño de sus funciones;

XIII. Asegurarse que los operadores porten el uniforme correspondiente, así como la bitácora de inspección y mantenimiento, misma que deberá portarse en el vehículo durante los traslados;

XIV. Ser solidariamente responsable de que sus operadores no realicen su labor bajo los influjos del alcohol o sustancias tóxicas,

XV. Conservar el parque vehicular y las instalaciones terminales, en las mejores condiciones de higiene, funcionalidad, cumpliendo con las normas de seguridad y prevención de incendios de conformidad con las disposiciones que dicten las autoridades competentes;

XVI. Señalar en forma visible en el interior de los vehículos, las tarifas autorizadas;

XVII. Señalar en forma visible en el interior de los vehículos la prohibición de fumar o escupir dentro del vehículo, el nombre del operador, el domicilio y teléfono del Instituto, para recibir quejas y en el exterior portar el color o cromática autorizada;

XVIII. Señalar en forma visible al interior y exterior del vehículo el número económico y la ruta, de acuerdo con las modalidades que al efecto determine el Instituto;

XIX. Registrar ante el Instituto, cada uno de los vehículos autorizados para la explotación de la concesión, anexando la documentación que al efecto se determine en el Reglamento de esta Ley;

XX. Responder ante el Instituto, por los actos u omisiones del personal de su empresa que afecten el servicio público, independientemente de las sanciones que correspondan a las instancias jurídicas competentes;

XXI. Proporcionar al Instituto toda la información que se requiera sobre la explotación de la concesión, debiendo brindar las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones;

XXII. Contratar y mantener siempre vigente para cada vehículo la póliza de seguro para proteger a los pasajeros en su integridad física y contra daños a terceros, cuyo monto sea suficiente para cubrir cualquier siniestro que afecte a los usuarios, que garantice la atención médica y hospitalaria de todos los pasajeros, dicho seguro expedido por una empresa aseguradora o de una Sociedad Mutualista debidamente acreditadas y certificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad aplicable vigente;

XXIII. Tener instalado un sistema de monitoreo y seguimiento de posición global, también conocido como GPS por sus siglas en inglés. El sistema de monitoreo deberá estar enlazado en todo momento con el sistema del Instituto y por los mecanismos idóneos contemplados en la normatividad aplicable;

XXIV. Instalar y operar un sistema de control de abordaje y un sistema de pago y prepago, en caso de adherirse a un sistema integrado de transporte en los términos del Artículo 133 de la presente Ley; estos sistemas deberán estar enlazados con el sistema del Instituto y a los mecanismos idóneos contemplados en el Reglamento de esta Ley;

XXV. Transferir al Instituto los datos provenientes de sus sistemas de control de abordaje y pago electrónico en cada uno de sus vehículos y rutas concesionadas, por lo menos en lo que se refiere a número de ascensos y descensos, transbordos y tarifas aplicadas, conforme a lo dispuesto en la fracción anterior;

XXVI. Transferir al Instituto la información generada en el GPS instalado en cada vehículo y en cada una de las rutas concesionadas por lo menos respecto a número de vehículos y rutas en operación, velocidad, horarios, paradas, frecuencias de paso entre los vehículos, puntos específicos de ascensos y descensos, además de lo que le sea solicitado específicamente, conforme a la normatividad aplicable;

XXVII. Pagar las contribuciones que correspondan por los derechos derivados de su concesión; y

XXVIII. Las demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Al servicio público de transporte de personal no le aplicarán las fracciones IX, XVI, XXII, XXIV y XXV.

ARTÍCULO 154.- Las personas morales titulares de concesión o las que se lleguen a constituir, así como los miembros de la sociedad, serán los sujetos obligados, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la presente Ley y Reglamento.

ARTÍCULO 155.- Los operadores de transporte público tendrán las siguientes obligaciones:

I. Prestar el servicio con puntualidad en cada uno de los diferentes turnos asignados y de acuerdo con los horarios establecidos;

II. Portar en un lugar visible del interior del vehículo el gafete;

III. Cumplir con el horario asignado para el recorrido, no debiendo permanecer en las terminales de ruta más tiempo que el previamente señalado para ajuste de tiempo;

IV. Efectuar los recorridos de origen a destino en su totalidad, sin salirse de la ruta fijada, y en caso de presentarse una contingencia que obligue a su desvío, procurará incorporarse al trayecto autorizado en el punto más cercano posible.

V. Realizar las paradas de ascenso y descenso de pasajeros, exclusivamente en los espacios previamente determinados para tal fin, junto a las banquetas, y no se estacionarán más que por el tiempo necesario para tomar y dejar pasaje;

VI. Proporcionar a los usuarios los boletos correspondientes que acrediten el pago en efectivo del servicio del transporte;

VII. Abstenerse de fumar, tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes, leer, platicar y utilizar radios, teléfonos celulares u objetos de cualquier tipo que pueda distraer su atención durante la prestación del servicio;

VIII. No podrán llevar el aparato de sonido encendido con un volumen mayor a 60 decibeles, de tal forma que le permita escuchar el timbre e indicaciones diversas de los pasajeros, así como de la circulación del tránsito, quedando prohibido el transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito;

IX. Mantener el vehículo libre de adornos que distraigan, dificulten o impidan la visibilidad del conductor y los usuarios;

X. Atender a los pasajeros con respeto y cortesía, así como cuidar el uso del lenguaje, evitando proferir palabras obscenas u ofensivas;

XI. Realizar el servicio debidamente uniformado y en condiciones adecuadas de higiene, apariencia y presentación en todo momento durante su jornada laboral;

XII. Los conductores sólo permitirán viajar a las personas en el interior de los vehículos y no deben permitir que persona alguna o acompañante viaje en las escaleras de ascenso o descenso;

XIII. No pondrán en movimiento el vehículo antes de que el pasajero termine de subir o bajar;

XIV. Proporcionar a los inspectores del transporte o a los agentes de las instituciones policiales estatales y municipales, toda la información que les sea solicitada en el desempeño de sus funciones;

XV. No efectuarán reparación alguna, ni hacer labores de limpieza del vehículo en la vía pública;

XVI. Cumplir con todos los requisitos que acrediten su capacidad en la conducción de vehículos ante las autoridades competentes;

XVII. Cumplir con las disposiciones que señala la presente Ley y su Reglamento, así como las de policía y tránsito municipales;

XVIII. Los operadores de los vehículos del servicio de transporte público deberán someterse por lo menos de manera semestral y en forma extraordinaria al examen antidopaje aplicado por el Instituto;

XIX. Los operadores de los vehículos deberán impedir el ascenso a personas en estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes. Asimismo, se prohíbe que permanezcan abordo personas que, con palabras soeces, actos inmorales o que de alguna u otra forma alteren el orden público o causen molestias al pasaje;

XX. En el ejercicio de sus labores, los conductores serán directamente responsables de las infracciones que cometan; y

XXI. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN VI

DE LOS HORARIOS E ITINERARIOS

ARTÍCULO 156.- Los horarios e itinerarios y, cuando aplique, las paradas y las frecuencias, serán aprobados por el Instituto, tomando en cuenta el dictamen técnico emitido, conforme a las normas y procedimientos que se establezcan en el Reglamento.

El Instituto deberá incluir a estos itinerarios la implementación de transporte público nocturno, estableciendo para estos efectos un horario y una frecuencia que cubran las necesidades de los usuarios del servicio, en este turno.

CAPÍTULO VI

DE LOS PERMISOS DE TRANSPORTE

SECCIÓN I

DE LAS BASES GENERALES PARA OTORGAR PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 157.- El Instituto a través de la Junta de Gobierno, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá otorgar y expedir los permisos para la explotación del servicio público de transporte en los términos de esta Ley y su Reglamento, siendo los siguientes:

I. Taxi;

II. Transporte escolar;

III. Transporte de Carga en general, especializada y grúa; y

IV. Transporte de Carga privado.

ARTÍCULO 158.- El otorgamiento de permisos se limitará a la exigencia del interés público de conformidad con los estudios técnicos que realice el Instituto, atendiendo a lo siguiente:

I. La necesidad que justifique el servicio;

II. La capacidad del servicio adecuado a las necesidades, tomando en cuenta en general las exigencias de la población; y

III. Condiciones técnicas de prestación del servicio, en cuanto a la seguridad, eficiencia y costo.

ARTÍCULO 159.- Los estudios técnicos y operativos que se realicen con la finalidad de determinar la necesidad de prestación del servicio de transporte de taxi, serán realizados por el Instituto. Estos estudios deberán contener:

I. La demanda y programas de explotación, que soporten las características de la solicitud sujeta a permiso;

II. Infraestructura para la prestación del servicio;

III. Características del tipo de vehículo a utilizar, y

IV. Programa de protección al ambiente y atención al público.

ARTÍCULO 160.- Una vez que, de acuerdo con los estudios técnicos y operativos, se determine la necesidad de prestación y tipo del servicio, la Junta de Gobierno del Instituto emitirá un acuerdo mediante el cual establezca el servicio que se autoriza, el tipo y número de vehículos que deban cubrirla, la base tarifaria y demás condiciones y características que deban observarse.

Este acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en los municipios de que se trate.

SECCIÓN II

DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN PERMISO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 161.- Los interesados en obtener un permiso en cualquiera de sus modalidades, solo podrán presentar solicitud cuando exista convocatoria expresa emitida por el Instituto, debiendo pagar los derechos correspondientes y reunir además de lo establecido en la misma los requisitos que establece la presente Ley y normatividad aplicable.

La solicitud mencionada en el presente artículo deberá ir acompañado de la última declaratoria de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, así como la opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales.

ARTICULO 162.- El permiso para prestar el servicio público de pasajeros en la modalidad de taxi es personal y tendrá la naturaleza de patrimonio familiar, cuando se proceda con lo establecido por el Código Civil del Estado de Baja California, así como lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento. La naturaleza de patrimonio familiar solo aplicará para un solo permiso por titular, mismo que será inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

A un siendo personal el permiso se podrá aprovechar el mismo mediante un operador sustituto del permisionario que cuente con tarjetón otorgado por el Instituto, con el objeto de prestar el servicio de una manera continua conforme al Reglamento y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 163.- El Instituto, en caso de otorgamiento de nuevos permisos de taxi, podrá tomar en consideración la antigüedad, historial de servicio de los operadores como un factor preferencial, en los términos señalados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 164.- El permiso deberá contener los datos establecidos por el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 165.- Una vez obtenido el permiso, el permisionario deberá proporcionar y registrar ante el Instituto correo electrónico a efecto de recibir todo tipo de notificaciones para su entrada en operación, además de cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 166.- El Instituto no podrá otorgar permisos para la prestación del servicio de taxi, en los siguientes casos:

I. Cuando no acrediten la nacionalidad mexicana;

II. Cuando se declare saturado el servicio de que se trate, o se pueda generar una competencia ruinosa;

III. Cuando al solicitante ya se le hubieren otorgado hasta tres permisos de taxi en cualquiera de sus modalidades, y

IV. Cuando el solicitante sea un servidor público de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado.

ARTÍCULO 167.- El beneficiario de permisionario en todo momento deberá ser cónyuge o concubino conforme a la legislación aplicable o familiar en línea consanguínea directa hasta tercer grado, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 168.- La vigencia de los permisos será de 6 (seis) años y podrán ser revalidados por periodos iguales, siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos sus términos, las condiciones establecidas en el permiso otorgado.

ARTÍCULO 169.- Los interesados en obtener la revalidación del permiso, deberán presentarse personalmente, dentro de los tres meses previos a su vencimiento ante la Dirección que les corresponda, debiendo acreditar estar al corriente en el pago de los derechos correspondientes, salvo causa de fuerza mayor o debidamente justificada, así como acreditar la libertad de adeudos y gravámenes ante la Secretaría de Hacienda del Estado, así como la última declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria y la opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales.

En ninguna circunstancia se permitirá el trámite de revalidación de permiso por mediación de representante legal, apoderado, mandatario o cualquier otra figura de representación, de inicio a fin del trámite.

El trámite de permisionarios de 65 (sesenta y cinco) años o más de edad o de aquellas personas que sufran de alguna discapacidad física que les dificulte presentarse a las oficinas a realizar dicho trámite, deberán de hacer del conocimiento del Instituto, para que se provea una dispensa especial en los términos que establece el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 170.- Una vez concluido el término señalado en el artículo anterior se contarán sesenta días a partir de la fecha del vencimiento del permiso para solicitar la revalidación y si una vez agotado el término el permisionario aún no ha presentado su solicitud de revalidación, el Instituto turnara los permisos a la Junta de Gobierno para proceder a la cancelación de estos.

ARTÍCULO 171.- Las revalidaciones de permisos se solicitan por escrito dirigido al Instituto, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 172.- El Instituto deberá evaluar y dictaminar si la utilidad pública o la necesidad de servicio persisten, para estos efectos deberá determinar si mantiene, modifica o cancela la condición del permiso en la modalidad de taxi libre.

ARTICULO 173.- El Instituto deberá dar respuesta a la solicitud de revalidación en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de presentación de esta, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento, incluyendo el pago de los correspondientes derechos.

ARTÍCULO 174.- El Director, propondrá a la Junta de Gobierno la modificación de las condiciones en que fueron otorgados los permisos para la prestación del servicio de transporte público, cuando así lo determine el dictamen correspondiente.

ARTÍCULO 175.- Los permisionarios del servicio de transporte podrán asociarse, convenir, pactar, acordar o realizar una actividad análoga, con la finalidad de proteger sus intereses de grupo en beneficio de la prestación del servicio público por lo el Instituto deberá de reconocer la asociación, gremio o sindicato, así como su representación legal conforme al Reglamento de esta Ley, por lo que quedara prohibido en todo momento realizar prácticas restrictivas de comercio a efecto de observar la Ley Federal de Competencia Económica.

ARTÍCULO 176.- Las asociaciones, gremios o sindicatos podrán adherirse a sistemas o subsistemas de transporte público mediante la celebración de convenios con el Instituto a efecto de prestar sus servicios como alimentadores de los Sistemas Integrados de Transporte.

ARTÍCULO 177.- Son derechos de permisionarios del servicio público de transporte:

I. Solicitar al Instituto la renovación o revalidaciones del permiso para la prestación del servicio de transporte;

II. Solicitar al Instituto, la ampliación o modificación del permiso otorgado, sujetándose a las formalidades que para el efecto establezca el Reglamento de la presente Ley;

III. Aportar los datos técnicos e información específica que se requiera, para coadyuvar al mejoramiento del servicio del transporte,

IV. Solicitar al Instituto, la revisión de tarifas, el establecimiento de nuevas rutas y en su caso, la ampliación o modificación de las ya existentes, y

V. Así como otros derechos dispuestos la presente Ley y su Reglamento.

Los derechos inherentes y derivados de los permisos solo podrán ser transferidos con la autorización del Instituto, debiendo ser mediante comparecencia de los interesados ante el propio Instituto en los términos y condiciones que fije su Reglamento.

ARTÍCULO 178.- Son obligaciones de los permisionarios del servicio público de transporte:

I. Prestar el servicio exclusivamente en los vehículos autorizados por el Instituto de Movilidad Sustentable;

II. Inscribirse en el padrón vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

III. Prestar el servicio a cualquier persona que lo requiera, con excepción de los supuestos señalados en la presente ley y su reglamento;

IV. Tener siempre vigente la póliza de responsabilidad civil o constancia expedida por una o de una Sociedad Mutualista debidamente acreditada y certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que garantice daños materiales que se causen a terceros, la indemnización por muerte o lesiones; así como la reparación de daños a usuarios en su persona y patrimonio, conforme lo establece la ley y su reglamento;

V. Conservar los vehículos, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para dar un servicio eficiente y apropiado, evitar adornos y aditamentos que distraigan, dificulten o impidan la visibilidad del conductor y los usuarios; así como leyendas o calcomanías, salvo las autorizadas por el Instituto de Movilidad Sustentable y en su caso, incorporar las modificaciones que sobre aspectos técnicos y de seguridad se establezcan en los manuales autorizados;

VI. Tratar con amabilidad y respeto a los usuarios, dando un trato preferencial en el servicio, a las personas con capacidad diferentes, de la tercera edad y mujeres en estado de embarazo o con menores en brazos;

VII. Presentar los vehículos a la revisión mecánica, dentro del periodo establecido en la presente ley y su reglamento;

VIII. No destinar los vehículos a otros fines de lucro, distintos a la modalidad autorizada en el permiso;

IX. Contar con el equipamiento auxiliar de transporte que garantice la adecuada prestación del servicio;

X. Observar las disposiciones contenidas en los demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables que tengan injerencia en el servicio público de transporte;

XI. Portar el uniforme obligatorio, durante la prestación del servicio;

XII. Mostrar en lugar visible del interior de los vehículos en los que se preste el servicio, el tarjetón vigente, el número económico, teléfonos de quejas, las tarifas autorizadas; y en los casos de radio taxis y taxis de sitio que se encuentren prestando el servicio, deberá de

encontrarse en todo momento activo el taxímetro;

XIII. Recibir la capacitación por la institución educativa que el Instituto valide, para la prestación del servicio de transporte público;

XIV. Aceptar la intervención del Instituto en la administración del servicio en todos aquellos casos que existan amenazas de suspensión del propio servicio;

XV. No permitir la conducción de vehículos del servicio público de transporte a los operadores que no cuenten o no porten la licencia de la clasificación correspondiente, así como con el tarjetón, ambos vigentes;

XVI. El vehículo autorizado deberá contar con GPS registrado en el padrón del Instituto, funcionando en todo momento y transmitiendo los datos requeridos por el reglamento de esta Ley; y

XVII. Las demás que establezca la presente ley y su reglamento.

SECCIÓN III

DE LOS TAXIS

ARTÍCULO 179.- El servicio público de taxi es aquel destinado al transporte de personas, que se contrata para distintos servicios, por viaje o tiempo determinado.

ARTÍCULO 180.- El transporte de taxi comprenderá las modalidades de taxi de ruta, taxi de sitio, taxi libre, radio taxi, taxi ejecutivo, taxi mediante aplicación digital, cuyas características del servicio se especificarán en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 181.- Toda autorización que se otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún derecho real o posesorio de dominio sobre el mismos; tendrá la vigencia que en el documento señale, serán revocables y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito de acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados y en general, de cualquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

Quien ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligado a retirarlas por su cuenta, cuando la autoridad competente lo requiera, asimismo deberá mantener señales para evitar accidentes, con las características apropiadas al efecto.

ARTÍCULO 182.- El titular de una autorización para sitio en cualquier modalidad de transporte está obligado:

I. A impedir que en los lugares señalados para el sitio se hagan reparaciones o lavado de los vehículos;

II. A vigilar que los vehículos se estacionen precisamente dentro de la zona señalada al efecto;

III. A fijar, en lugar visible del sitio, una señal informativa en la que aparezca inscrito el número que se haya asignado al sitio. Dicha señal deberá tener las especificaciones que determine el Instituto;

IV. A conservar limpia el área designada para el sitio y las aceras correspondientes, así como evitar la obstrucción de la circulación de transeúntes y de vehículos;

V. A cuidar que el personal guarde la debida compostura y atienda al público de manera respetuosa,

VI. A dar aviso cuando suspenda temporal o definitivamente el servicio; y,

VII. Transferir al Instituto la información generada por el GPS o sistema de geolocalización satelital o coordenadas de redes de datos, conforme el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 183.- El Instituto podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio, revocar, cancelar o suspender los permisos respectivos, siguiendo el procedimiento previa audiencia del interesado, cuando se obstaculice la circulación de transeúntes, o se incumplan las obligaciones a cargo de los titulares de los permisos, o así resulte necesario para la implementación de programas de reordenamiento de transporte o vialidades, o por cualquier otra circunstancia que prevean las leyes aplicables, lo anterior en coordinación con las autoridades municipales.

ARTÍCULO 184.- Además de las causas a que se refieren las disposiciones anteriores, las autorizaciones de sitio podrán ser canceladas en los siguientes casos:

I. Cuando el servicio se preste en forma irregular o discontinua;

II. Cuando no se solicite la revalidación del permiso dentro del plazo establecido, y

III. Cuando se alteren las tarifas previamente autorizadas.

SECCIÓN IV

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ARTÍCULO 185. - Es el permiso que se otorga para el traslado de estudiantes de instituciones educativas que operan con itinerario y horario que satisfaga las necesidades particulares de la institución educativa, y el Instituto determinará la cantidad de vehículos que ampare cada permiso, conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 186.- El Instituto coordinará en todo momento las acciones para el uso de transporte escolar por las escuelas de los diferentes niveles educativos.

ARTÍCULO 187.- Las escuelas particulares deberán implementar o contratar el servicio de transporte escolar, una vez que el Instituto emita la declaratoria de necesidad del servicio a efecto de mejorar los servicios de movilidad y transporte, y evitar contaminación ambiental, contrarrestar o mitigar el cambio climático en determinada zona o municipio.

ARTÍCULO 188.- Los vehículos no deberán nunca utilizarse para un fin distinto al otorgado en el permiso respectivo.

ARTÍCULO 189.- Los vehículos deberán de contar con las medidas de seguridad necesarias tales como el localizador GPS, un sistema tecnológico de seguridad que pueda monitorear que los estudiantes se encuentren en el vehículo, así como las demás disposiciones establecidas en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN V

DEL TRANSPORTE DE CARGA

ARTÍCULO 190.- Servicio de transporte de carga público o privado es el que se presta en vehículos que reúnen las características adecuadas para transportar todo tipo de artículos,

mercancías o productos en los términos del Reglamento de la presente Ley, propiedad de personas físicas o moral, y se podrá prestar en las modalidades siguientes:

I. Servicio de transporte de carga en general;

II. Servicio de transporte de carga especializada y grúas; y

III. Servicio de transporte de carga privada.

Los interesados en obtener un permiso para prestar el servicio local de transporte de carga deberán presentar solicitud ante el Instituto en los términos señalados en el Reglamento de esta Ley, e indicar la modalidad del servicio para el cual lo solicitan.

Una vez que éste le haya sido otorgado deberá presentar póliza de seguro que cubra, cuando menos, la responsabilidad civil y los daños a terceros, con vigencia anual renovable por el mismo plazo, expedida por empresa reconocida y autorizada en el ramo, la cual deberá estar autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

ARTÍCULO 191.- Los permisos para transporte de carga deberán contener los datos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN VI

DEL SERVICIO DE CARGA EN GENERAL, CARGA ESPECIALIZADA Y GRÚAS

ARTÍCULO 192.- El transporte de carga comprende las siguientes modalidades: General, Especializado y de Grúa para carreteras estatales.

ARTÍCULO 193.- Los propietarios de los vehículos dedicados al transporte de arrastre de casas movibles, maquinaria de construcción y agrícola u otros objetos, cuyo peso y dimensiones ocasione lentitud en el tránsito, deberán de ajustarse a las disposiciones que establece el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 194.- El Instituto con la finalidad de garantizar la salud pública, seguridad vial, conservación de las vías estatales y municipales, así como el interés público en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, podrá restringir y ajustar los horarios y las vialidades de circulación al transporte de carga conforme a la circulación general en los términos del Reglamento de la presente Ley, así como los planes y programas en la materia.

ARTÍCULO 195.- El Instituto regulará el servicio de transporte de carga de sustancias, materiales y residuos peligrosos, y podrá prestarse siempre y cuando quien lo realice cuente con el permiso correspondiente de las autoridades federales y estatales competentes, para tal efecto deberá de cumplir también con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN VII

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PRIVADO

ARTÍCULO 196.- El Transporte de Carga Particular, es aquel que se presta en vehículos y/o remolques que son propiedad de personas físicas o morales que transportan sus propios bienes, mercancías y objetos en general. Por ningún motivo estos vehículos podrán utilizarse para dar servicio a terceros, en cuyo caso estarán sujetas a las sanciones que establecen la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 197.- Las modalidades del transporte de carga se clasifica en las siguientes:
empresarial o comercial y privado.

ARTÍCULO 198.- Queda prohibida la circulación de vehículos en vías públicas urbanas cuya carga útil exceda de tres mil quinientos kilogramos, para tales efectos deberá obtener la autorización correspondiente ante el Instituto conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 199.- Queda prohibida la utilización como vehículos de carga aquellos vehículos no autorizados, tales como tractores agrícolas, trascabos y demás maquinaria de la construcción o de movimientos de tierra, excepto mecanismos de acoplamiento entre semirremolque y remolque en cuyo caso estarán sujetas a las sanciones que establecen esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 200.- El Instituto podrá realizar inspecciones de verificación de los vehículos de carga, mismos que portarán en los costados del vehículo la información relativa al servicio que prestan, de acuerdo con las disposiciones que señala el Reglamento.

CAPÍTULO VII

DE LA REVOCACIÓN DE CONCESIONES Y CANCELACION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 201.- El Instituto podrá revocar las concesiones, y cancelar permisos o autorizaciones en base al procedimiento establecido para tal efecto en el Reglamento de la presente Ley, cuando el concesionario o permisionario incurra en alguna de las siguientes causales:

I. Cuando se oferte o realice un servicio distinto del autorizado, en los siguientes casos:

a) En la concesión de transporte masivo, cuando preste el servicio fuera de la ruta, tramo o itinerario autorizado, excepción hecha cuando existan cortes a la circulación o la imposibilidad de cumplir con su derrotero autorizado;

b) En el permiso en cualquiera de sus modalidades, según sea el caso, cuando realice servicio masivo o cobre con una tarifa distinta a la que se autorizó, y

c) En los casos de permisos, cuando de forma intencional se modifique o varíe la modalidad, vehículo, el fin, objeto o situación para el cual se le otorgó;

II. Cuando se realice transferencia o enajenación sin la previa autorización del Instituto para los siguientes casos:

a) La concesión, vehículo o vehículos materia de la concesión;

b) El permiso;

c) Tratándose de persona moral que sin previa autorización del Instituto realice fusiones, escisiones, sea sujetas a concurso mercantil y extinción de dominio.

d) Cuando el concesionario suspenda el servicio sin autorización del Instituto, por más de 7 (siete) días sin justificación alguna;

e) Cuando se reincida por más de dos veces en el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento;

f) Cuando no se inicie la prestación del servicio otorgado dentro del plazo fijado en la concesión, permiso o autorización, sin justificación plena;

g) Cuando el concesionario, permisionario o autorizado, no sustituya el vehículo que deba ser retirado del servicio por orden del Instituto, en virtud de no reunir los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento;

h) Cuando el concesionario o permisionario en su condición de tal, cometa algún delito doloso o preterintencional sobre el cual hubiere recaído sentencia condenatoria que cause ejecutoria;

i) A petición del titular o por extinción de la vigencia de la concesión o permiso;

j) Por cualquier irregularidad cometida en la prestación del servicio que sea calificada como grave, conforme al Reglamento de esta Ley;

k) Por violaciones a la presente Ley y a su Reglamento que alteren o afecten sustancialmente la prestación del servicio;

l) Por así demandarlo legalmente el interés público;

m) A los prestadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, por utilizar las placas asignadas en vehículo no autorizado, o bien, cuando utilicen placas vencidas o alteradas;

n) Por ser el servicio notoriamente deficiente o que los vehículos carezcan de los requisitos mínimos de seguridad, comodidad, higiene o no esté en condiciones mecánicas adecuadas para la prestación del servicio, conforme a las reglas y condiciones de calidad del servicio;

o) Cuando la documentación presentada ante el Instituto, a efecto de obtener la concesión, permiso o autorización sea falsa;

p) No cubrir las indemnizaciones por daños o perjuicios que se originen a los usuarios, peatones, operadores o terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte; y

q) Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 202.- Los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público, están obligados a contribuir, a petición del Instituto con la prestación del servicio en rutas que han sido objeto o que están en proceso de revocación, con la finalidad de evitar la interrupción o adecuada prestación del servicio.

ARTÍCULO 203.- El Instituto tendrá la atribución de cancelar el gafete de operador o conductor en los casos siguientes:

I. Cuando el conductor esté médicamente imposibilitado para conducir;

II. Cuando el conductor opere bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes en términos de la presente Ley, su Reglamento y la normatividad aplicable de orden estatal o municipal;

III. Por no revalidar licencia de conducir por un periodo mayor a cuatro años; IV.

Por no revalidar el gafete de operador o conductor semestralmente;

V. En el caso de los taxis o radiotaxis, cuando no utilicen el taxímetro o cuando cobren una tarifa distinta a la autorizada de acuerdo con la modalidad del servicio;

VI. Por presentar documentación falsa o que haya sufrido modificación; y

VII. Los demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO VIII

DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 204.- El Sistema Tarifario es el mecanismo de financiamiento del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, que se conforma por los ingresos provenientes de los pagos realizados por los usuarios, en los términos señalados por la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 205.- Las directrices del Sistema Tarifario denominadas tarifa técnica, pública y preferencial serán determinadas por el Instituto conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 206.- Las tarifas y sus modificaciones se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 207.- Los concesionarios y permisionarios de las distintas modalidades del servicio de transporte público de pasajeros, podrán solicitar al Instituto la aprobación de convenios con organizaciones magisteriales, estudiantiles, de trabajadores, turísticas, entre otras, que modifiquen las tarifas, reduciéndolas por casos de cooperación con aquellos organismos.

ARTÍCULO 208.- Las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros, se aplicarán uniformemente a todos los usuarios, a excepción de los niños de tres años o menores quienes viajarán sin costo alguno.

ARTÍCULO 209.- En los vehículos que prestan el servicio de transporte público masivo en todas sus modalidades, se cobrará el cincuenta por ciento de la tarifa a los estudiantes con credencial escolar en época de clases según el calendario escolar oficial, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, debiendo presentar cualquier documento que los acredite como tales, emitido por las autoridades federales, estatales o municipales, no siendo obligatoria la identificación de personas con discapacidad o edad visible.

ARTÍCULO 210.- En los vehículos viajarán sin costo alguno agentes de la policía estatal, municipal o inspectores de movilidad debidamente uniformados y en servicio, cuando no excedan de dos por vehículo y debidamente identificados.

CAPÍTULO IX

DE LAS AUTORIZACIONES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ARTÍCULO 211.- Derivado a su naturaleza, serán considerados como servicios especializados las siguientes modalidades:

I. Transporte de seguridad privada;

II. Servicio de transporte funerario;

III. Servicio de ambulancia;

IV. Servicio de limosina, y

V. Vehículos auto-escuela para el aprendizaje de manejo.

ARTÍCULO 212.- Las personas físicas o morales que presten los servicios mencionados en el artículo anterior, deberán solicitar la autorización respectiva ante el Instituto, previo pago de los derechos correspondientes, para la prestación del servicio en los términos del Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO X

DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (ERT)

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 213.- Es el servicio que se oferta y contrata a través de aplicaciones móviles promovidas o administradas por una empresa de redes de transporte a la cual el prestador del servicio se encuentre afiliado o registrado. Este servicio no tendrá ruta, ni paradas establecidas y la tarifa podrá ser determinada por la propia Empresa de Redes de Transporte o sus filiales. La gestión de sus servicios se pactará mediante la aplicación móvil de acuerdo con el origen y destino que establezca el usuario del servicio en dicha plataforma.

Por ningún motivo podrá hacer sitio, pudiendo únicamente detener su marcha en la vía pública el tiempo indispensable para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros del vehículo, observando lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN II

DE LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 214.- Son aquellas personas físicas o morales cuyo servicio se limita exclusivamente a intermediar vía electrónica la oferta, contratación y pago de servicios de transporte público o privado, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios con prestadores del servicio en cualquiera de sus modalidades autorizadas y registradas ante el Instituto.

También podrán ser consideradas como Empresas de Redes de Transporte aquellas sociedades mercantiles nacionales o extranjeras que, por virtud de acuerdos comerciales vigentes, promuevan el uso de tecnologías o aplicaciones tecnológicas, propias o de terceros que permitan a usuarios en el Estado acceder al servicio de transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles.

Las Empresas de Redes de Transporte tendrán prohibido ofrecer o contratar sus servicios a través de medios diversos a los previstos por esta Ley y su Reglamento. En cualquier caso, los conductores y/o las Empresas de Redes de Transporte deberán contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil de automóviles que cubra la responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de seguros autorizada para operar en México, respecto de todos los viajes que se realizan a través de la plataforma que promuevan o administren.

En caso de que dicha póliza no se encuentre vigente o no otorgue cobertura, las Empresas de Redes de Transporte serán consideradas obligados subsidiarios de los propietarios y conductores de los vehículos afectos al servicio de transporte, hasta por el monto de la póliza de seguro que debieron haber contratado según lo establecido por esta ley y reglamento.

ARTÍCULO 215.- Las Empresas de Redes de Transporte deberán solicitar la autorización por parte del Instituto e inscribirse en el Padrón como Empresas de Redes de Transporte mediante aplicaciones móviles previo pago de los derechos correspondientes. Las autorizaciones para su operación tendrán una duración de un año, las que podrán otorgarse y renovarse anualmente, siempre que éste se encuentre prestando el servicio, no se afecte el interés público, se cumplan los requisitos señalados por esta Ley y demás disposiciones aplicables, previo el pago de las contribuciones que para ello establezca la legislación aplicable, así como la suscripción del convenio de colaboración respectivo.

Las autorizaciones se otorgarán en los términos de la presente ley a las personas físicas o morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, y deberán contar con domicilio fiscal o sucursal establecida en el Estado de Baja California, cuyo objeto social sea el de operar como Empresas de Redes de Transporte o gestionar servicios de transporte mediante una aplicación móvil o plataforma tecnológica, de la cual sean titulares de los derechos de propiedad intelectual, o bien, el desarrollo de programas de cómputo o la prestación de servicios tecnológicos de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, que sirvan como intermediación entre particulares para realizar el servicio de transporte de punto a punto a través de plataformas independientes.

Queda prohibido que las Empresas de Redes de Transporte tengan un esquema mixto, es decir, que los vehículos y/o conductores afiliados operen bajo la modalidad de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles y a su vez se encuentren operando en otras modalidades contempladas en la presente Ley.

ARTÍCULO 216.- Las Empresas de Redes de Transporte deberán contar con autorización del Instituto, misma que tendrá una vigencia de un año, para lo que el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables de la presente Ley.

Asimismo, son obligaciones de las Empresas ante el Instituto las siguientes:

I. Presentar de manera mensual las bases de datos actualizadas o padrón que contengan la información de los propietarios o conductores y vehículos afiliados a la aplicación móvil que promuevan, intermedien o administren, que realizaron viajes con la aplicación durante el mes

inmediato anterior el número de vehículos que tiene cada uno, así como la que se señalen las disposiciones aplicables.

II. De manera mensual, dentro los primeros diez días de cada mes, la información relacionada con los viajes realizados en los términos de esta ley y las disposiciones aplicables.

III. Suscribir con el Instituto un convenio de colaboración mediante el cual se obliguen a realizar las contribuciones mensuales conforme a la legislación fiscal aplicable sobre los montos efectivamente cobrados por cada viaje iniciado, promovido, intermediado o administrado mediante aplicaciones móviles en el Estado acorde con la presente Ley y demás disposiciones aplicables, sin incluir en la base de lo efectivamente cobrado, el monto trasladado del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Empresa de Redes de Transporte deberá emitir y entregar al Instituto cada mes una carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que el monto pagado efectivamente corresponde al pago requerido conforme a la presente Ley.

ARTÍCULO 217.- La autorización como Empresa de Redes de Transporte será personalísimo e intransferible y no generará derechos reales o personales a favor de la Empresa de Redes de Transporte. Los actos mediante los cuales pretendan gravarse o enajenarse los registros de las Empresas de Redes de Transporte serán nulos y no producirán efecto legal alguno.

ARTÍCULO 218.- A fin de obtener la renovación de las autorizaciones, las Empresas de Redes de Transporte deberán de cumplir con el pago de las contribuciones correspondientes y con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

La falta de solicitud de la renovación en el plazo de 30 días posteriores a su vencimiento se considerará como renuncia al derecho de renovación.

ARTÍCULO 219.- La solicitud de renovación deberá incluir una declaración bajo protesta de decir verdad respecto a la veracidad y actualización de la información presentada al momento de obtener la autorización original, en caso de haber modificaciones se deberán notificar a la Instituto.

En caso de que la solicitud de renovación estuviere incompleta, el Instituto otorgará a la Empresa de Redes de Transporte un plazo improrrogable de 15 días naturales para que subsane su incumplimiento. En caso contrario la solicitud se tendrá por no presentada y se desechará.

ARTÍCULO 220.- Las Empresas de Redes de Transporte, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil de automóviles que cubra la responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de seguros autorizada para operar en México respecto de todos los viajes que se realizan a través de la plataforma que promuevan o administren.

II. Registrar y verificar que los vehículos y conductores que presten el servicio de transporte de pasajeros cumplan con los requisitos que para esa modalidad establece la presente Ley y las disposiciones aplicables;

III. Las tarifas de cobro, así como el catálogo de los vehículos deberán mantenerse en sus aplicaciones móviles y página web de manera visible, permanente y de fácil acceso, así como implementar un sistema de cálculo de tarifas cuando la modalidad del servicio contratado así lo permitan;

IV. Facilitar el acceso a la información que le requieran las autoridades federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones; en cumplimiento con la legislación en materia de protección de datos personales.

V. Someter a verificación del Instituto las condiciones físico-mecánicas y de seguridad previstas en las disposiciones aplicables, y

VI. En coordinación con el Instituto impartirán sesiones informativas a los conductores afiliados a la plataforma que promueva o administre, de primeros auxilios, servicio al cliente, control de ira, emergencias viales y de reglamento en los términos de la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 221.- Los servicios de gestión de transporte y plataformas tecnológicas o sistemas electrónicos para contratación, pago y prepago que implemente el Estado, tendientes a la mejora del servicio de transporte en todas sus modalidades, no serán considerados como una empresa de redes de transporte en cualquiera de sus modalidades.

SECCIÓN III

DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONDUCTORES AFILIADOS O REGISTRADOS EN EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 222.- Para el otorgamiento de autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, el solicitante deberá presentar ante el Instituto los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley, previo pago de los derechos correspondientes ante el Instituto.

Estos requisitos podrán presentarse ante la empresa de redes de transporte a la cual se encuentre registrada o afiliada cada prestador del servicio, siempre y cuando se compartan copias electrónicas de los documentos con el Instituto, para efecto de que puedan ser analizados y verificados.

Los documentos o copias de estos que se presenten para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos estarán sujetos a revisión y comprobación por parte del Instituto, aún y cuando se hubiese expedido la autorización correspondiente; por lo que podrán ser requeridos al conductor por el Instituto durante la vigencia de esta, a efecto de comprobar su autenticidad.

ARTÍCULO 223.- La autorización otorgada por el Instituto y las facultades que de las mismas se deriven no serán susceptibles de transmisión o sucesión alguna ya que serán personalísimas, por lo que al receptor de la autorización le queda estrictamente prohibida toda transmisión o cesión de los derechos que la misma le conceda; cualquier estipulación o pacto de voluntades en contrario quedará sin efectos.

Para efecto de que se analice la posibilidad por parte del Instituto de otorgar renovación de la autorización, se deberá tomar en consideración las infracciones que en su caso hubiere cometido el solicitante en contra de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 224.- El vehículo registrado para la prestación del servicio no podrá tener una antigüedad mayor a seis años a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar además la verificación física mecánica y ambiental que el Instituto le solicite.

ARTÍCULO 225.- Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante únicamente podrá registrar un solo vehículo y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 226.- Son causas de revocación de las autorizaciones:

I. El incumplimiento por parte del sujeto de autorización de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en la misma;

II. No contar con póliza o constancia vigente de seguro en los términos de la presente Ley y su Reglamento, ya sea contratada por él o por la empresa de redes de transporte ante la cual se encuentra registrado;

III. Cuando se exhiba documentación apócrifa o se proporcionen informes o datos falsos al Instituto;

IV. Incumplir con las disposiciones y normas de calidad del servicio establecidas por la empresa de redes de transporte a la que el prestador de servicios se encuentra afiliado o registrado;

V. No contar con la señalética, sello digital de identificación o QR oficial, mismo que deberá estar contenido en su autorización;

VI. No acudir en tiempo y forma a la revisión física mecánica ante el Instituto;

VII. Ofertar otra modalidad distinta;

VIII. Cuando se oferte el servicio fuera de aplicación, o simulando su uso, realicen sitio o base, o realizar ascenso dentro de las instalaciones o establecimientos donde se encuentren autorizados por el Instituto Sitio de Taxis, así como en terminales de transporte masivo u ofrecer el servicio de Transporte Colectivo.

SECCIÓN IV

DEL PADRÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 227.- Todo vehículo que se utilice para la prestación del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles deberá ser reportado por la Empresa de Redes de Transporte al Instituto, mediante la entrega de las bases de datos o padrón de propietarios o conductores que se menciona en el fracción I del Artículo 216 de la presente Ley y su Reglamento, así como de las demás disposiciones aplicables en otras leyes de carácter fiscal, de protección de datos y únicamente podrán operar y circular aquellos que tengan una antigüedad menor a seis años de su fecha de fabricación, con excepción de vehículos con tracción hibrida o eléctrica en cuyo caso la temporalidad será de 15 años.

ARTÍCULO 228.- Por cada vehículo reportado al Instituto por la Empresa de Redes de

Transporte, se requiere:

I. El pago de derechos correspondientes ante el Instituto, de conformidad con la normatividad aplicable de esta Ley;

II. Que los vehículos que presten este servicio sean de cuando menos cuatro plazas y no excedan de cinco plazas;

III. Que el valor del vehículo, en factura, sea mayor a 2300 (dos mil trescientos) veces la UMA (unidad de medida y actualización);

IV. Que cuenten con los requisitos dispuestos por la normatividad aplicable de esta Ley.

ARTÍCULO 229.- Los conductores del transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles deberán de sujetarse a las obligaciones que dispone el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 230.- Son derechos de los usuarios del transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles todos los dispuestos por el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO XI

DE LAS CONCESIONES DE ARRASTRE, GRÚAS,

Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 231.- Exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias Instituto en materia de grúas, arrastre y depósito de vehículos, podrá concesionar este servicio a terceros a efecto de que estos se encuentren siempre a disposición del Instituto por lo que este deberá proceder de la manera siguiente:

I. Convocar mediante licitación pública las concesiones del servicio público de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos;

II. Otorgar las concesiones para el servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos, sancionados por infracciones a la presente Ley y reglamento o bien por tratarse de vehículos abandonados o chatarra en vías públicas de jurisdicción estatal;

III. El Instituto podrá modificar, renovar y revocar concesiones en la materia, así como, ordenar la intervención de los concesionarios a efecto de aplicar una medida de seguridad y urgente aplicación;

IV. El Instituto determinara las tarifas por el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos, así como por salvamento y maniobras, así como la verificación que los procedimientos administrativos de adjudicación y remate de vehículos se realicen en tiempo y forma conforme a la presente Ley, su reglamento y disposiciones aplicables;

V. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley y disposiciones legales aplicables

ARTÍCULO 232.- La declaratoria de necesidad para concesionar el servicio público de la presente sección contendrá lo siguiente:

I. Relación sucinta de los antecedentes de la necesidad;

II. Las consideraciones técnicas o legales que justifiquen el otorgamiento de la concesión;

III. Delimitación del área territorial en la que se requiere el servicio;

IV. Tipo de servicio para satisfacer la necesidad pública;

V. Modalidad y número de concesiones a otorgar para satisfacer la necesidad del servicio;

VI. El tipo, características y cantidad de grúas y de espacios para almacenamiento de vehículos que se requieran;

VII. Las condiciones generales para la prestación del servicio;

VIII. Los demás datos que, a juicio de las autoridades, sean necesarios.

TÍTULO V

DE LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO I

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 232.- Corresponde al Instituto la vigilancia y aplicación de las disposiciones previstas en la presente Ley, para lo cual contará con Inspectores de Movilidad para verificar la calidad del servicio y condiciones de la operación del transporte en todas sus modalidades, incluyendo bienes muebles e inmuebles afectos a la movilidad, para garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley.

Serán autoridades auxiliares para el debido cumplimiento de la presente Ley, las instituciones policiales del estado y los municipios, incluyendo a las autoridades de vialidad y tránsito.

ARTÍCULO 233.- Los inspectores de movilidad, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Inspeccionar, verificar y vigilar los servicios públicos, privado de transporte, así como a los conductores afiliados a empresas de redes de transporte de competencia estatal;

II. Levantar las boletas de infracción y actas de inspección en el ámbito de su competencia;

III. Inspeccionar, verificar y vigilar al transporte de competencia estatal a efecto de sancionar a aquellos vehículos que no cumplan con la revisión mecánica y verificación ambiental vehicular;

IV. Ejecutar medidas de seguridad preventivas o correctivas de urgente aplicación;

V. Coadyuvar con las demás autoridades operativas, administrativas y policiacas relacionadas con la materia;

VI. Requerir en las inspecciones que realice a los autorizados, permisionarios y concesionarios regulados en la presente Ley y Reglamento la documentación que acredite la modalidad y condiciones otorgadas para la prestación del servicio; y

VII. Las demás contenidas en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 234.- Las inspecciones o verificación de vehículos en operación, por parte del Instituto se realizarán conforme a lo establecido en la presente Ley y la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 235.- Los titulares de las concesiones o permisos, así como los responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos, instalaciones o vehículos objeto de la inspección, estarán obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e informes a los inspectores para el cumplimiento de su función.

ARTÍCULO 236.- Los titulares de concesiones o permisos, o sus representantes legales, con quienes se practique o se haya practicado una inspección podrán formular observaciones y ofrecer pruebas en los términos previstos en la presente Ley y la normatividad aplicable:

I. En el mismo acto de la diligencia, lo cual deberá hacerse constar en el acta de la misma; y

II. Por escrito, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que el Instituto que haya ordenado la visita de inspección les comunique el resultado de la misma.

ARTÍCULO 237.- El Instituto al practicar la inspección, deberá comunicar al sujeto obligado el resultado de esta en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hubiere practicado la visita de inspección.

CAPITULO II

DE LA COADYUVANCIA Y COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 238.- Serán autoridades auxiliares del Instituto en la aplicación de esta Ley y su Reglamento las instituciones policiales estatales o municipales las cuales ejercerán las funciones siguientes:

I. Orientar, participar y colaborar en la prevención de accidentes viales, infracciones de tránsito y promoción de una cultura de la movilidad conforme a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento;

II. Cuidar de la seguridad y respeto al peatón, así como al ciclista en las vías públicas, dando siempre preferencia a estos sobre los vehículos;

III. Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia de movilidad, vialidad y transporte, a quienes transiten en las vías públicas;

IV. Coadyuvar con las demás autoridades operativas, administrativas y policiacas relacionadas con la movilidad y el transporte;

V. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, convenios, acuerdos y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 239.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con los Municipios del Estado para la coadyuvancia en el ejercicio de sus funciones de administración, control, supervisión, peritaje y en su caso, sanción del tránsito y el transporte en general.

CAPITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

ARTÍCULO 240.- El Instituto realizará las acciones de inspección, verificación o en su caso sanción, conforme lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

ARTÍCULO 241.- Para efectuar las revisiones, el Instituto, requerirá a los prestadores del servicio público y privado de transporte, que exhiban la documentación e información relacionada con la concesión, permiso o autorización otorgada, conforme lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 242.- A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, el Instituto en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo la verificación de estos conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 243.- El Instituto, para la emisión y ejecución de la visita de inspección y verificación, se sujetará a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Baja California y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 244.- El Instituto implementará en su caso las medidas cautelares y de seguridad a efecto de impedir la prestación del servicio, garantizando la seguridad de los usuarios en términos de lo dispuesto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 245.- Como resultado del desahogo del procedimiento de las visitas de inspección y verificación, en el ámbito de su competencia, el Instituto en su caso, aplicará las sanciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

TÍTULO VI

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, MEDIOS DE DEFENSA Y NOTIFICACIONES

CAPÍTULO I

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 246.- Cuando se realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o del interés público en contravención a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, el Instituto dictará medidas de seguridad de inmediata ejecución, mismas que se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

ARTÍCULO 247.- Son consideradas como medidas de seguridad las siguientes acciones:

I. El retiro de los vehículos de la circulación para dejarlos en depósito en las instalaciones designadas para estos efectos por el Instituto.

II. La suspensión temporal o definitiva, parcial o total, del servicio público de transporte servicios conexos, conforme al Reglamento de la presente Ley;

III. El aseguramiento de vehículos, instalaciones, equipamiento y mobiliario urbano que no se encuentren autorizados o cualquier otro de elemento que impida la movilidad, la prestación del servicio público de transporte o provoquen distracción de los conductores o inseguridad en la operación. El Instituto podrá retirarlos conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 248.- La autoridad competente para la aplicación de sanciones en materia de movilidad, transporte y del servicio público de transporte será el Instituto en los términos y montos que se determinen en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 249.- Podrán imponerse, en materia de transporte y movilidad, y en los términos de esta Ley y su Reglamento las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento;

II. Multa

a) Multa con el equivalente de 2 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso del servicio de taxi y a conductores de empresas de redes de transporte en los términos específicos que establezca el reglamento de esta ley;

b) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de pasajeros como el escolar, de personal, especializado y seguridad privada, así como el transporte público en su modalidad de transporte masivo, de personal, escolar, y servicios de turismo, así como empresas de redes de transporte, y servicios conexos del transporte a excepción del taxi y;

c) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de carga en sus modalidades de carga en general, grúas de arrastre o salvamento, el transporte mercantil, específicamente en sus modalidades de transporte de valores, transporte de mensajería, carga de sustancias toxicas o peligrosas, grúas de arrastre o salvamento y carga especializada,

d) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de carga privada para el servicio de un negocio o empresa, de valores y mensajería, carga de sustancias toxicas o peligrosas, grúas de arrastre o salvamento y carga especializada, así como las empresas de redes de transporte de carga, paquetería o entrega al menudeo.

III. Cancelación, suspensión o revocación de concesiones, permisos y autorizaciones; y,

IV. Arrastre, depósito o aseguramiento conforme a la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

Independientemente de la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad, dichas sanciones serán impuestas mediante boleta de infracción física o de manera electrónica, por el Instituto a través del Director General o los servidores públicos a los que le delegue de conformidad a la normatividad aplicable las funciones de inspección, vigilancia o policía administrativa, estos estarán autorizados para imponer sanciones a los infractores de la presente Ley, su Reglamento o demás disposiciones normativas aplicables, así como los procesos para la notificación de dichos procedimientos, medidas de seguridad y sanciones.

ARTÍCULO 250.- Independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los operadores y conductores de vehículos de servicio público, se procederá al retiro del gafete, autorización o tarjetón en los términos del Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 251.- El Instituto será la autoridad competente para calificar, revisar y ejecutar las infracciones a la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 252.- La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponerse la infracción.

ARTÍCULO 253.- En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, y en su caso, podrá proceder el arrastre del vehículo.

Los concesionarios o permisionarios serán responsables solidarios por sus operadores o conductores, únicamente por los daños y perjuicios que se cometan con motivo de la prestación del servicio de transporte público.

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 254.- Contra cualquiera de los actos y resoluciones administrativas que emita el Instituto, incluyendo la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad y sanciones, que se prevén en la presente Ley y su Reglamento, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad ante el mismo, cuyo efecto será revisar y en su caso confirmar, modificar o revocar los actos administrativos impugnados, cuyo procedimiento se sustanciara conforme al Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO IV

DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 255.- Las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, así como todo procedimiento, acuerdos o resoluciones, serán dictados de conformidad a esta Ley y su Reglamento y serán normas supletorias la Ley de Procedimientos de Actos Administrativos y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. - A la entrada en vigor de la presente Ley, queda abrogada la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 49. Sección I, Tomo CVIII del día 9 de noviembre de 2001, con sus reformas y adiciones.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que contravengan o se opongan a la presente Ley.

CUARTO.- A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, todas las menciones referentes a la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, en otras leyes del Estado, o disposición jurídica concurrente, se entenderán referidas a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, en un plazo de hasta 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO.- Los procedimientos administrativos relacionados con concesiones y permisos de transporte público que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se sustanciarán y concluirán conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio y serán resueltos por el Instituto conforme a las facultades conferidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

SÉPTIMO.- Se establece un plazo de hasta 100 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley en el Periódico Oficial del Estado, para que los Ayuntamientos de los municipios realicen las adecuaciones administrativas, modificaciones reglamentarias, programáticas,

presupuestales y de políticas públicas a efecto de adaptar sus atribuciones conforme al texto de este nuevo ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al mismo tiempo acordando con el Instituto los programas de desarrollo urbano, vialidad y tránsito que serán motivo de cooperación conjunta.

OCTAVO.- En el caso del Municipio de Mexicali, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, el Instituto podrá regularizar el transporte público en la modalidad de personal, previa acreditación de las empresas que prestan este servicio, demostrando estas su capacidad de operación, la existencia previa de contratos legalmente celebrados con empresas con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

NOVENO.- En todos los procedimientos judiciales y de justicia administrativa, en los que sean parte los Municipios, los Ayuntamientos, las secretarías y dependencias municipales, así como los organismos descentralizados de las administraciones públicas municipales que operan sistemas o subsistemas, integrados o no, de transporte público de pasajeros, ya sea en su carácter de autoridad o como parte celebrante de contratos, convenios u obligaciones extracontractuales; se deberán sustanciar por las autoridades antes referidas conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio.

DÉCIMO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California solo tendrá por válidos los permisos, autorizaciones y concesiones municipales de transporte público legalmente otorgados con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, si estos fueren sometidos al Instituto para su empadronamiento legal en los términos de la presente Ley.

Por lo anterior, en un término improrrogable de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, todos los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos de todas las modalidades del servicio de transporte público, legalmente expedidos o autorizados por los Ayuntamientos, que operan sistemas o subsistemas de transporte público; deberán de presentar ante el Instituto los originales de todos los títulos, contratos, convenios, autorizaciones y todos aquellos documentos que les otorguen derechos y obligaciones para su debido empadronamiento, cotejo, digitalización y captura de los datos que señale el Reglamento o la norma técnica emitida por el Instituto para este fin.

Para tal efecto, deberán señalar domicilio y/o correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos dentro de la circunscripción territorial que le corresponde, así como aquellos para acreditar la personalidad y representación respectiva, a fin de que el Instituto integre el Padrón de Movilidad conforme a la nueva legislación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de entrega recepción que realicen los Municipios al Instituto. Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, los permisos y concesiones que no sean empadronados, cotejados, digitalizados y capturados dentro del término establecido en el párrafo anterior dejarán de tener validez y se procederá a su cancelación sin mayor trámite.

DÉCIMO PRIMERO.- Las autorizaciones, permisos y concesiones de transporte público emitidos antes del 11 de diciembre de 2019 por los Ayuntamientos del Estado, que no se empadronen ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California en los términos del artículo Décimo Transitorio anterior, serán considerados nulos.

DÉCIMO SEGUNDO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California no podrá bajo ni una situación o circunstancia expedir nuevas concesiones o permisos del servicio público de transporte en la modalidad de taxis, masivo y de personal durante los próximos 10 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados de transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y el Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria su expedición por lo que al concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, no podrá autorizar modalidad del servicio público de transporte distintas a las ya autorizadas previamente en cada uno de los municipios del Estado de Baja California, durante los próximos 10 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados de transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y el Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria su expedición, por lo que al concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMO CUARTO.- Para los efectos legales y de funcionamiento del Organismo Municipal para la Operación del Sistema Integral de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT), quedarán vigentes los contratos, fideicomisos, empréstitos, acuerdos, convenios y cada uno de los instrumentos jurídicos que existan y se deriven de los antes mencionados.

El Municipio de Tijuana, Baja California tendrá la administración del mismo en tanto no se suscriban los convenios de transferencia al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, quedando vigentes los acuerdos de pago de créditos adquiridos por la paramunicipal quien tiene como aval al Municipio de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Para el traslado de garantías de bancos al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o a empresas de transporte, el Municipio de Tijuana, Baja California dentro de sus facultades podrá invertir recurso público para pago de subsidios, becas, apoyos, así como la contratación de pago por kilómetro recorrido con el fin de poder entregar al Gobierno del Estado, el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (SITT) en condiciones óptimas de operación.

DÉCIMO QUINTO.- Se concede un término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que el Instituto celebre los convenios con las Empresas de Redes de Transporte para la transferencia de información prevista, así como el registro de vehículos y conductores sin perjuicio ni excepción alguna para la prestación del servicio en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando acrediten fehacientemente que se encuentran afiliados a estas, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO SEXTO.- Se concede un término de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que los conductores que prestan sus servicios a través de Empresas de Redes de Transporte obtengan las autorizaciones correspondientes.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Continúan vigentes las disposiciones en materia de sanciones de los reglamentos de transporte público de los municipios del Estado hasta en tanto no se publique el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

DÉCIMO OCTAVO.- Se concede un plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, a efecto de que las escuelas particulares deban implementar o contar con el servicio de transporte escolar conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO NOVENA.- La Secretaria de Hacienda, realizará las acciones necesarias para proporcionar los recursos presupuestales necesarios al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California para el cumplimiento cabal de las atribuciones conferidas en la presente Ley.

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente *tabla indicativa* que describe de manera concreta la intención del legislador:

Gobernador del Estado Jaime Bonilla	Crear la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.	Contar con un nuevo marco jurídico en Baja California, regulador de la movilidad sustentable y el Transporte para nuestra región, que se distinga por su modernidad en beneficio del interés público colectivo.

IV. Análisis de constitucionalidad.

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el marco jurídico constitucional de la materia. La propuesta se sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente:

1. Debe analizarse su constitucionalidad. Toda norma que pretenda adquirir fuerza de ley debe ser sujeta a una cuestión de constitucionalidad. Se requiere una justificación que venza una sistemática presunción de inconstitucionalidad que debe imponer el legislador.

2. No cualquier diferencia al diseño constitucional implica inconstitucionalidad, pero las modificaciones legales deben pretender un objetivo constitucionalmente trascendente y no una finalidad simplemente admisible.

3. El diseño normativo debe privilegiar en lo posible, la libertad de los gobernados. En consecuencia, no deben incluirse más restricciones a la esfera jurídica del gobernado que las que resulten indispensables para la consecución de un fin social superior.

4. Por último, con la finalidad de no generar efectos no deseados, el legislador debe vigilar la congruencia normativa. Es preciso analizarse si la construcción gramatical de la porción normativa está efectivamente encaminada al cumplimiento del fin trascedente enunciado por el legislador en su exposición de motivos.

Esta Comisión se avoca al estudio de constitucionalidad del proyecto legislativo por el cual se pretende crear la Ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California.

El punto de partida de este estudio jurídico de constitucionalidad es y debe ser, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al respecto, el artículo 39 de la misma señala que la soberanía del pueblo reside esencial y originalmente en el pueblo, y que este tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

> **Artículo 39.** La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por su parte, el artículo 40 de nuestra norma fundamental, establece que nuestra República representativa está compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior.

> **Artículo 40.** Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Siguiendo con nuestro texto supremo, el diverso numeral 41 precisa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y por lo de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos establecidos en la Constitución Federal y las particulares de cada Estado, sin que en ningún caso se pueda contravenir al Pacto Federal.

> **Artículo 41.** El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
>
> […]

Tampoco se puede perder de vista que, el artículo 43 de la Constitución Federal establece con toda claridad que Baja California, es parte integrante de la Federación:

> **Artículo 43.** Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México.

De este modo, el artículo 116 de nuestro Constitución Federal señala que el poder público de los Estados se divide para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que los poderes de los Estados se organizan conforme a la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las directrices que establece la Carta Magna.

> **Artículo 116.** El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
>
> Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
>
> […]

Así el artículo 4 de la de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California señala con toda puntualidad que Baja California es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Federal, mientras que el numeral subsecuente (5) dispone expresamente que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este.

> **ARTÍCULO 4.-** El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
>
> **ARTÍCULO 5.-** Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

En orden de lo anterior, el segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de Baja California establece que el Gobierno del Estado se divide para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan separada y libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.

Así, el mismo numeral invocado (11) indica que corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de manera simultánea, el crecimiento económico, la equidad, la sustentabilidad ambiental y la competitividad la cual es definida o identificada como el

conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Sobre esta misma base constitucional (artículo 11) el multicitado artículo precisa que la planeación estatal del desarrollo es un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales con relación al desarrollo integral de la entidad y tenderá a alcanzar los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la particular de Baja California.

Aunado a lo anterior, el artículo 40 de nuestra Carta Local, establece que el Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, la cual será Centralizada y Paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso del Estado.

> **ARTÍCULO 40.-** El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.
>
> El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Hacienda, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.
>
> La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del titular de la entidad, y por un órgano de gobierno integrado con no menos de cinco ni más de trece integrantes propietarios, de los cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración pública.

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este órgano colegiado, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra en lo previsto por los artículos 39, 40, 41, 43, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación directa a los numerales 4, 5, 11 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

V. Consideraciones y fundamentos.

Esta Comisión considera jurídicamente procedente la propuesta legislativa planteada por el inicialista, en virtud de los siguientes razonamientos:

1. El Gobernador Constitucional de Baja California, presenta a esta Soberanía un nuevo instrumento jurídico denominado LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

En un primer examen de forma que se realizó al documento de mérito, es de advertirse que este cumple a cabalidad con las exigencias fijadas en norma positiva que rige el procedimiento legislativo pues, en primer término, el inicialista se encuentra legitimado para presentar iniciativas de ley o reformas ante este Congreso, tal como lo dispone la fracción II del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Baja California. Además, la iniciativa fue dirigida al Presidente del Congreso, a través de documento idóneo que cuenta con firma autógrafa de quien suscribe. Estructuralmente el documento cuenta con exposición de motivos donde se detalla de manera amplia y clara las consideraciones jurídicas, políticas, sociales y económicas que justifican e impulsan la creación de la Ley. También cuenta con un resolutivo que comprende el articulado de la Ley distribuido en Títulos, Capítulos, Secciones, artículos, fracciones e incisos, así como un apartado de disposiciones transitorias.

En tal virtud, el documento que se analiza cumple a cabalidad con las exigencias contenidas en los artículos 115 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.

2. La LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, cuenta con la siguiente estructura normativa:

- 255 artículos principales.
- 6 Títulos.
- 30 Capítulos
- 25 Secciones.

- 19 disposiciones transitorias.

Dicha composición queda visualizada esquemáticamente de la siguiente manera:

LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO I:

Disposiciones Generales.

CAPÍTULO I:

Generalidades; artículos 1 al 6.

CAPÍTULO II:

Derechos de las Personas en materia de Movilidad; artículos 7 al 12.

SECCIÓN I:

De los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículos 13 al 14.

CAPÍTULO III:

Obligaciones de las Personas en materia de Movilidad; artículos 15 al 18.

TÍTULO II:

De la Competencia de las Autoridades en materia de Movilidad.

CAPÍTULO I:

Disposiciones Generales; artículos 19 al 25.

CAPÍTULO II:

Del Instituto; artículos 26 al 31.

CAPÍTULO III:

De la Competencia y Atribuciones de los Municipios; artículos 32 al 33.

TÍTULO III:

De la Política de Movilidad Planeación e Infraestructura.

CAPÍTULO I:

Política de la Movilidad; artículos 34 al 35.

CAPÍTULO II:

De la Planeación en Materia de Movilidad; artículos 36 al 41.

CAPÍTULO III:

De la Coordinación del Estado con los Municipios; artículos 42 al 43.

CAPÍTULO IV:

Infraestructura e Impacto de Movilidad; artículos 44 al 50.

CAPÍTULO V:

De la Promoción de la Cultura de la Movilidad; artículos 51 al 54.

CAPÍTULO VI:

De la Participación Social en Movilidad Sustentable; artículos 55 al 56.

TÍTULO IV:

Sistema de Movilidad.

CAPÍTULO I:

Generalidades; artículos 57 al 61.

CAPÍTULO II:

De la Coordinación del Instituto y la Secretaría de Hacienda; artículos 62 al 68.

CAPÍTULO III:

Del Sistema de Información para la Movilidad y el Padrón.

SECCIÓN I:

Generalidades; artículo 69.

SECCIÓN II:

El Sistema de Información para la Movilidad; artículos 70 al 73.

SECCIÓN III:

Clasificación de Vehículos en el Padrón de Movilidad y Transporte; artículos 74 al 79.

SECCIÓN IV:

De la Circulación Vehicular; artículos 80 al 88.

CAPÍTULO IV:

De los Sistemas de Transporte.

SECCIÓN I:

Generalidades; artículos 89 al 93.

SECCIÓN II:

De los Sistemas Integrados de Transporte de Ciudad o Municipio; artículos 94 al 97.

SECCIÓN III:

De los Sistemas Metropolitanos de Transporte; artículo 98 al 100.

CAPÍTULO V:

De las Concesiones; artículos 101 al 108.

SECCIÓN I:

De las Bases Generales para el Otorgamiento de Concesiones para la Prestación del Servicio Público de Transporte; artículos 109 al 131.

SECCIÓN II:

Servicio Público de Transporte de Pasajeros; artículos 132 al 138.

SECCIÓN III:

Transporte de Personal; artículos 139 al 146.

SECCIÓN IV:

Del servicio de Transporte Turístico; artículos 147 al 151.

SECCIÓN V:

De los Derechos y Obligaciones de los Concesionarios; artículos 152 al 155.

SECCIÓN VI:

De los Horarios e Itinerarios; artículo 156.

CAPÍTULO VI:

De los Permisionarios de Transporte

SECCIÓN I:

De las Bases Generales para Otorgar Permisos para la Prestación del servicio Público de Transporte; artículos 157 al 160.

SECCIÓN II:

De las Condiciones y Requisitos para la Obtención de un Permiso para Prestar el Servicio de Transporte Público; artículos 161 al 178.

SECCIÓN III:

De los Taxistas; artículos 179 al 184.

SECCIÓN IV:

Del Servicio de Transporte Escolar; artículos 185 al 189.

SECCIÓN V:

Del Transporte de Carga; artículos 190 al 191.

SECCIÓN VI:

Del Servicio de Carga en General, Carga Especializada y Grúas; artículos 192 al 195.

SECCIÓN VII:

Del Servicio de Transporte de Carga Privado; artículos 196 al 200.

CAPÍTULO VII:

De la Revocación de Concesiones y Cancelación de Permisos y Autorizaciones; artículos 201 al 203.

CAPÍTULO VIII:

De las Tarifas del Transporte Público; artículos 204 al 210.

CAPÍTULO IX:

De las Autorizaciones a Servicios Especializados; artículos 211 al 212.

CAPÍTULO X:

De los Sistemas de Transporte por Medios Electrónicos (ERT)

SECCIÓN I:

Generalidades; artículo 213.

SECCIÓN II:

De las Empresas de Redes de Transporte; artículos 214 al 221.

SECCIÓN III:

De la Autorización para Conductores Afiliados o Registrados en Empresas de Redes de Transporte; artículos 222 al 227.

SECCIÓN IV:

Del Padrón de Empresas de Redes de Transporte; artículos 227 al 230.

CAPÍTULO XI:

De las Concesiones de Arrastre, Grúas y Depósito de Vehículos del Instituto; artículos 231 al 232.

TÍTULO V:

De la Vigilancia y Aplicación de la Ley.

CAPÍTULO I:

De la Inspección y Vigilancia; artículos 232 al 237.

CAPÍTULO II:

De la Coadyuvancia y Coordinación con las Instituciones Policiales del Estado y los Municipios; artículos 238 al 239.

CAPÍTULO III:

De los Procedimientos Administrativos Relacionados con la Movilidad y el Transporte; artículos 240 al 245.

TÍTULO VI:

De las Medidas de Seguridad, Sanciones, Medidas de Defensa y Notificaciones.

CAPÍTULO I:

De las medidas de Seguridad; artículo 246 al 247.

CAPÍTULO II:

De las Sanciones Administrativas de Movilidad, Transporte y del Servicio Público de Transporte; artículos 248 al 253.

CAPÍTULO III:

Del Recurso de Inconformidad; artículo 254.

CAPÍTULO IV:

De las Notificaciones y de los Procedimientos; artículo 255.

TRANSITORIOS:

Primero al Décimo noveno.

3. Al entrar al fondo del estudio del contenido de la Iniciativa de Ley, esta Comisión advierte que el instrumento que se propone se distingue cualitativamente por ser un instrumento jurídico moderno y vanguardista.

Esto es así por diversos aspectos que serán desarrollados a lo largo del presente estudio, sin embargo, en un primer acercamiento, diremos que la LEY GENERAL DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA que actualmente rige en nuestra entidad, data del año 2001. Es notoriamente evidente que las condiciones sociales, demográficas, tecnológicas y de infraestructura, entre el año 2001 y 2020 son diametralmente distintas, habida cuenta que el concepto de “movilidad” no existía en el orden jurídico, hoy en uno de los ejes principales de la acción legislativa, de ahí que se justifique plenamente contar con un instrumento moderno, acorde a nuestros tiempos y que se encuentre a la altura de las necesidades del pueblo de Baja California.

Otro aspecto con el que esta Comisión Dictaminadora coincide plenamente es el diagnóstico ofrecido por el inicialista en su exposición de motivos. A continuación mencionaremos sumariamente algunos de los valores principales que se encuentran en la exposición de motivos:

- El sustento jurídico para esta propuesta obedece al orden constitucional de Baja California, pues a través de reciente reforma a los artículos 7, 49, y 83 de nuestra Carta Local, se reconoció el derecho humano a la movilidad y se transfirió al Ejecutivo del Estado, la facultad de regular el transporte.

- Esta Ley garantiza el derecho humano a la movilidad, a través de acciones eficientes de planificación, administración, regulación y gestión de la movilidad de las personas y del transporte en las vías públicas, urbanas y metropolitanas de nuestro Estado.

- En el paso, algunas administraciones públicas de orden Estatal y Municipal han fracasado en materia de transporte por el hecho de no contar con instrumentos jurídicos eficientes.

- Los “sistemas de transporte” como uno de los ejes de movilidad no puede ser entendido exclusivamente a los vehículos, sino que existen otras formas como la circulación peatonal, ciclista, motocicletas, el transporte de carga.

- Debe existir (y esta ley lo regula) una coordinación institucional entre autoridades de orden estatal y municipal para que a través de los recursos humanos y tecnológicos más modernos de ingeniería de tránsito y movilidad se puedan sistematizar nuestras vías públicas.

- La movilidad en su concepto más amplio debe regular todos los aspectos de desplazamiento e interconexión, máxime cuando esto involucra el transporte masivo, uso de taxis, los servicios de transporte a través de plataformas digitales, áreas de acenso y descenso.

- La competencia desleal que se genera en el transporte público en Baja California no puede quedar inobservada por la autoridad estatal y menos aún por la legislación, sin embargo, esto es lo que ha prevalecido durante muchos años.

- El transporte público en Baja California, se verá fortalecido con elementos tecnológicos de última generación y en su servicio deberán incorporar sistemas de geolocalización en beneficio de la seguridad de los usuario.

- Movilidad y transporte sin discriminación, a favor de las personas con discapacidad.

- Reordenar el sistema de transporte en Baja California. En su momento, las rutas que se trazaron no contaron con estudios técnicos y menos aún diagnósticos previos, sino que obedecieron a decisiones discrecionales de naturaleza diversa por parte de las autoridades y hoy vemos los resultados de esas equivocadas decisiones.

- Un parque vehicular moderno; hoy en día en nuestra entidad prevalece un servicio de transporte público con unidades obsoletas e inseguras.

- Criterios técnicos y jurídicos para el otorgamiento de permisos y concesiones y no más decisiones opacas basadas en compromisos políticos.

- El proyecto legislativo fue socializado con distintos sectores de la población, por un lado con el gremio transportista en el Estado, a través de distintas reuniones de trabajo que se hicieron en diversos municipios. También contó con la aportación y enriquecimiento de asociaciones civiles, colegios especializados de profesionistas y cámaras empresariales.

- Derivado de las reuniones de trabajo que se celebraron con el sector transportista en el Estado, ellos desean participar activamente con el Instituto de Movilidad Sustentable para una eficiente y real coordinación.

- El servicio de transporte público contará con una regulación y vigilancia real que fortalezca la seguridad, calidad y el servicio eficiente en beneficio del pueblo de Baja California.

Aspectos con los que esta Comisión Dictaminadora coincide plenamente y acompaña al inicialista en su pretensión, pues solamente contando con un instrumento jurídico que se apoye en tales directrices podremos acercarnos a contar con una movilidad y un transporte de calidad en Baja California.

4. Al analizar detenidamente todas y cada una de las 255 disposiciones principales contenidas en la propuesta de Ley, esta Comisión Dictaminadora advierte y concluye que las mismas resultan jurídicamente procedente, destacando que la base constitucional para su procedencia jurídica se encuentra al amparo de lo establecido en los artículos 25, 26, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados directamente con numerales 7, 49 y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.

Dicho de otra manera, la procedencia jurídica del proyecto legislativo que nos ocupa resulta incuestionable toda vez que obedece al campo del derecho administrativo regulatorio y en ese sentido, el Ejecutivo del Estado se encuentra dotado constitucionalmente para ejercerlo.

Por otro lado, se hizo un examen constitucionalidad a cada una de las disposiciones contenidas en la iniciativa de ley, obteniendo como resultado que todos los artículos incluyendo sus incisos y fracciones, se encuentran dentro de los límites que fija la norma constitucional.

Esta Comisión en aras de ofrecer un estudio jurídico claro, didáctico y metodológicamente accesible, realizará una descripción sistematizada de los siguientes valores jurídicos contenidos en la Ley.

Tenemos que en el TÍTULO I particularmente en su CAPÍTULO I denominado Generalidades se contempla el objeto de la Ley que consiste en establecer las bases y directrices para planificar, regular, controlar, vigilar y gestionar la movilidad, el transporte público y privado de personas y bienes, en todas las modalidades, garantizando condiciones y derechos de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente. Al respecto, esta Comisión coincide plenamente con el objeto de la Ley, pues así se refrende la vocación democrática de Baja California a través de sus instituciones de derecho observando y garantizando los derechos fundamentales de las personas, reconocidos en los tratados internacionales y en nuestra Constitución Federal.

El artículo 2 de la Ley en estudio constituye la columna vertebral de dicho proyecto, pues el precitado artículo se compone de 87 fracciones que cada una de ellas ofrece conceptos jurídicos que son abordados y desarrollados en disposiciones subsecuentes de la Ley, sin embargo, lo que se debe destacar de momento es que, es en este artículo donde se advierten las primera novedades jurídicas que caracteriza a la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO, es decir, un bagaje jurídico amplio, con conceptos nuevos, debidamente definidos, lo que se traduce en seguridad jurídica para los destinatarios de la norma.

Por otro lado, también es importante destacar el acierto del inicialista en considerar como utilidad pública en materia de movilidad:

- La prestación del servicio público de transporte de personas, de carga y de distribución de bienes y mercancías.

- El establecimiento de infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar necesario para la prestación eficiente del servicio.

- Los derechos de los usuarios.

La LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO reserva un espacio muy importante (en cuanto a su ponderación) de los valores antes descritos. Establecerlo así en la norma traerá como consecuencia que su observancia, vigilancia y cumplimiento sea permanente, aspecto con el que se coincide plenamente.

Otro aspecto novedoso y altamente significativo es el hecho que esta Ley reconoce y protege a las personas con discapacidad. La Ley estableció diversos artículos protectores en favor de los derechos de las personas con discapacidad, entre los que se encuentran la no discriminación, la accesibilidad, la infraestructura, la seguridad, calidad y funcionalidad.

Como se ha argumentado en líneas anteriores, la autoridad rectora en la materia de transporte (por disposición constitucional) es el Gobernador del Estado, así el TÍTULO

II establece la competencia que habrá entre las diversas autoridades estatales y municipales en materia de movilidad y transporte.

Cabe resaltar que la Ley contempla al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá por objeto planificar, regular, controlar, administrar y gestionar la movilidad y el transporte público de personas y bienes, en todas sus modalidades, garantizando condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

El Instituto contará con una estructura administrativa, ejecutiva y operativa que se establecerá en la Ley y en su reglamento.

En otro orden de ideas, la política pública en materia de movilidad, comprende acciones de planificación y ejecución de acciones y recursos que debe abordar aspectos de:

- Peatones, en especial personas con discapacidad, población infantil, adultos mayores, mujeres embarazadas.
- Ciclistas.
- Usuarios de transporte no motorizados.
- Usuarios de transporte público de pasajeros.
- Usuarios de medios de transporte ecológicamente sustentables.
- Transporte de carga y distribución de bienes.
- Motocicletas.
- Transporte particular automotor.

En este sentido, la Ley también aporta referencias jurídicas muy claras sobre el Plan de Movilidad y Transporte y los aspectos que estos deben abordar, siendo entre ellos la gestión de la movilidad; la movilidad activa de grupos vulnerables; la educación vial y cultural de la movilidad; el transporte de personas, bienes y logística de mercancías y el transporte particular.

Destaca en la Ley una coordinación multidisciplinaria en materia de movilidad. El Instituto de Movilidad y la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, integrará la planeación territorial y urbana con la de movilidad, desarrollando mecanismos de coordinación y cooperación administrativa en beneficio del interés público. Además habrá una promoción cultural de la movilidad y una activa participación de la sociedad a través de un Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte de carácter honorifico.

Uno de los ejes principales de esta Ley se encuentra en la clasificación que hace del Servicio de Transporte (artículo 75) clasificándolo en servicio de transporte de pasajeros y servicio de transporte de carga.

El **Servicio de transporte de pasajeros** tiene a su vez 3 subclasificaciones:

1. Privado, que comprende:

- Escolar.
- De personal.
- Especializado en todas sus modalidades.
- Seguridad Privada.

2. Público, que comprende:

- Masivo.
- De personal.
- Escolar.
- Taxi.
- Servicio de Turismo.

3. Servicios prestados por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.

Por su parte el **servicio de transporte de carga** tiene 4 subclasificaciones:

1. Público, que comprende:

- Carga general.
- Grúas de arrastre.

2. Mercantiles, que comprende:

- De valores y mensajería.
- Carga de sustancias tóxicas o peligrosas.
- Grúas de arrastre.
- Carga especializada en todas sus modalidades.

3. Privado, que comprende:

- El servicio de una negociación o empresa.
- De valores y mensajería.
- Carga de sustancias tóxicas o peligrosas.

- Grúas de arrastre
- Carga especializada en todas sus modalidades.

4. El servicio prestado por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.
En otro orden de ideas, es importante destacar que los vehículos destinados al servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades deben cumplir con una revisión física mecánica, que será determinada en el reglamento correspondiente, además de sujetarse a una verificación ambiental y semestralmente a una revisión para garantizar la seguridad de los usuarios y del medio ambiente.

Las modalidades del servicio de transporte presentes y futuras serán reguladas y autorizadas por zonas o municipios de acuerdo a las necesidades específicas y obedecerán a criterios técnicos.

Por otro lado, un elemento de gran trascendencia es los sistemas metropolitanos de transporte, es decir aquellos que se encuentran conformados por rutas intermunicipales.

Por cuanto hace a las concesiones que otorgará el Ejecutivo del Estado para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, la Ley aporta grandes beneficios en este rubro, destacando los siguientes:

- Previamente debe contarse con estudios técnicos y operativos que justifiquen la necesidad de este.
- El Estado evaluará si se encuentra en condiciones de prestar el servicio con medios propios o a través de un tercero.
- En caso de imposibilidad el Ejecutivo emitirá la declaratoria correspondiente y lanzará convocatoria a licitación pública la cual se publicará en el Periódico Oficial del Estado y en diarios de alta circulación en el Estado.
- Solo podrán participar personas morales de nacionalidad mexicana que cuenten con la capacidad técnica, operacional y financiera suficiente.
- Las concesiones tendrán una vigencia mínima de 6 años y un máximo de 30 años. Cada 6 años podrán prorrogarse por periodos iguales siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en el reglamento.

Además de lo anterior, existe una amplia regulación jurídica en materia de licitación pública para este fin, lo cual se traduce en un mayor beneficio para Baja California.

El servicio de transporte público masivo de personas, se sujetará a itinerarios, horarios, tarifas, rutas y especificaciones vehiculares que fije el Instituto.

En cuanto al servicio de transporte de personal, para el traslado de trabajadores de empresas, industrias o fuentes de trabajo, solo se justificarán ante la falta de cobertura de cobertura de transporte público masivo. Para ello deberán utilizarse los vehículos tipo autobús autorizados por esta Ley y por el reglamento, quedando prohibido modificar su interior para admitir mayor número de pasajeros.

En todo caso previo al otorgamiento de concesión para la prestación de esta modalidad de servicio deberá mediar estudios técnicos elaborados por profesionales que justifiquen su necesidad.

Los concesionarios de transporte de personal:

- Deben presentar anualmente al Instituto el padrón de personas morales con las que haya celebrado contrato para este servicio.
- No podrán transportar a personas ajenas a la persona moral a la que presta el servicio.
- En ningún momento podrán realizar cobros directos o tarifas a ningún usuario.
- No podrán realizar ni promover prácticas restrictivas, como tampoco competencia desleal o ruinosa.

Como toda norma se distingue por una dualidad, por un lado, establece obligaciones, pero también otorga derechos y garantías. La Ley ofrece un catálogo amplio y descriptivo de los derechos y obligaciones que tienen los concesionarios.

En otro bloque analítico tenemos los permisos de transporte, para lo cual el Instituto a través de la Junta de Gobierno otorgará y expedirá los permisos para la explotación del servicio público de transporte en los términos de esta Ley, comprendiendo:

- Taxis.
- Transporte escolar.
- Transporte de carga en general, especializada y grúa.
- Transporte de carga privada.

En el otorgamiento de permisos se limitará a la exigencia del interés público con apoyo a los estudios técnicos que realice el Instituto, observándose lo siguiente:

- El Instituto emitirá convocatoria pública para esta modalidad.
- Los interesados deberán presentar solicitud en tiempo y forma así como pagar los derechos correspondientes, acompañando además su última declaración de impuestos.
- El permiso en modalidad de taxi tendrá la característica jurídica de ser patrimonio de familia. Solo aplicará un permiso por titular y el mismo será inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.
- Aun siendo personal el permiso se podrá aprovechar el mismo mediante un operador sustituto que cuente con tarjetón o acreditamiento por parte del Instituto.
- El beneficiario de permisionario debe ser familiar directo, cónyuge, concubina o familiar directo hasta el tercer grado.
- La vigencia del permiso será por 6 años y podrá ser revalidado por periodo igual siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la ley, reglamento y que se haya respetado las condiciones del permiso otorgado.

Además de las modalidades de transporte que se han analizado, la norma no omitió considerar también otra modalidad bajo la figura de SERVICIOS ESPECIALIZADOS, los cuales incluyen a:

- Transporte de seguridad privada.
- Servicios de transporte funerario.
- Servicios de ambulancia.
- Servicios de limosinas.
- Vehículos de auto-escuelas para el aprendizaje de manejo.

Otro aspecto de gran trascendencia es la previsión que la Ley hizo respecto al servicio que se oferta y contrata a través de aplicaciones móviles, promovidas y administradas por empresas de redes de transporte a la cual el prestador del servicio se encuentra afiliado o registrado. Este servicio no tendrá rutas, ni paradas establecidas y la tarifa podrá ser determinada por la empresa.

En artículos y capítulos posteriores se contempla una amplia regulación administrativa para los prestadores de este tipo de servicios, los cuales se encuentran todos ajustados a derecho.

En suma, el contenido de esta Ley es amplio, moderno, acorde a las necesidades de Baja California, se encuentra apegado a derecho, de ahí que esta Comisión Dictaminadora se oriente y declare la procedencia jurídica del mismo.

5. A manera de conclusión, la LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se crea como el instrumento principal del Estado que materializará las recientes reformas hechas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con las cuales se ha otorgado al Gobernador del Estado la facultad de formular y aplicar los programas de movilidad, así como la regulación de la prestación del servicio de transporte público, eliminando así la facultad que pertenecía a los municipios de la entidad en cuanto a la prestación y regulación del servicio de transporte público.

En ese sentido la nueva busca llevar a cabo las acciones tendientes a garantizar y salvaguardar el derecho humano que se ha consagrado en el artículo 7 de la Constitución de nuestra entidad tal como lo es el derecho a la movilidad, en el cual se ha asentado que toda persona debe disfrutar de una movilidad segura en las vialidades del Estado, lo

cual buscará consolidarse con la implementación de principios, acciones, políticas, programas de planeación, y la aplicación de normas que regulen, administren y sancionen aquellas actividades públicas y privadas que tengan como propósito la utilización del espacio público terrestre para la movilización de personas y cargas.

La movilidad ha quedado establecida como un derecho humano a la cual toda persona debe tener acceso, siguiendo los principios de accesibilidad universal, igualdad y no discriminación a través de los cuales la Ley propuesta deberá garantizar que cualquier persona pueda desplazarse a través del territorio estatal a través de medios de transporte público que no solamente cumplan con el propósito de trasladar geográficamente a una persona de un punto a otro dentro de la entidad, sino que el servicio utilizado por el usuario cumpla con los estándares establecidos de calidad, dándole a cada individuo un servicio acorde a la dignidad humana.

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

> "Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes."

En palabras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el derecho a la movilidad se refiere al deber del Estado de proporcionar los medios para que las personas puedan desplazarse, por ejemplo, a través de las distintas modalidades del transporte público o privado, estableciendo requisitos específicos para acceder al mismo.

Esta Ley de nueva creación va acorde a las directrices que ha señalado la CNDH en materia de movilidad, quien ha reconocido la importancia de este derecho humano para la dignidad humana, resaltando la innegable necesidad de toda persona de poder trasladarse de un punto a otro para sus diferentes objetivos, tales como el trabajo, la educación, la salud o el mero esparcimiento y recreación social, mismos que constituyen derechos humanos consagrados en la Constitución federal.

Es así como se ha destacado el derecho a la movilidad manteniendo una estrecha relación con el alcance y realización de otros derechos humanos en la vida de cada persona, tales como el derecho a la salud y gozar de un medio ambiente saludable para el desarrollo de las mismas.

Sin la existencia de un instrumento normativo que estandarice de forma cualitativa y cuantitativa las condiciones en las cuales debe de ser prestado el servicio de transporte público, no podría ser alcanzado el objetivo y obligación del Estado de garantizar la movilidad de cada individuo en forma digna, sin importar la condición de cada persona, sus capacidades, edad, género, religión, preferencia sexual, etc., así como tampoco el gozo de un medio ambiente saludable, el acceso a servicios de salud, a devengar un salario en la realización de su trabajo, a recibir educación escolar, razón por la cual la nueva LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE garantiza el cumplimiento de todas las acciones tendientes a consolidar el derecho de movilidad en sus diversificaciones.

La Ley que se dictamina se rige entre otros a través de estos tres principios fundamentales en nuestra época y que son en la actualidad de gran impacto e interés social, la igualdad, que garantiza el acceso a la movilidad para todas las personas, la perspectiva inclusiva, que aborda la no discriminación a través de la implementación de políticas públicas que promueven la equidad de género, la seguridad e integridad física, sexual y la no violencia; y la no discriminación como una prerrogativa hacia las personas históricamente afectadas por su vulnerabilidad, origen étnico o nacional, el género, condición social, de salud, discapacidades.

Estos principios vienen a fortalecer el derecho a la movilidad de las personas, dándole a éstas no solamente el acceso a su desplazamiento geográfico, sino a garantizar que el servicio que se otorgue para su cumplimiento sea en condiciones dignas para toda persona, atendiendo a las diversas problemáticas sociales de actualidad, buscando a través de dichos principios blindar de cualquier posible afectación y riesgo a los usuarios de un servicio de transporte público o privado, ya sea físico, económico, psicológico o de salud.

El instrumento normativo propuesto tiene como uno de sus principales enfoques el establecimiento de estándares jurídicos para el transporte público y privado que busca garantizar no solo una movilidad esencial sino de calidad.

De los objetivos que esta Ley se propone alcanzar es la promoción de la cultura de movilidad a través de medios de transporte públicos, por encima de la utilización de vehículos particulares de automotor lo cual trae un impacto negativo al medio ambiente, sin embargo, este objetivo puede ser alcanzado al garantizar a la población un transporte

público y privado de calidad, en condiciones óptimas, dotado de las tecnologías de la información del siglo XXI.

Otros beneficios paralelos a los estándares de calidad adecuados para el transporte público son la disminución del flujo vehicular, los tiempos de recorrido y la disminución de las probabilidades de accidentes viales, lo cual trae beneficios en cuanto a temas de salud física y psicológica para los usuarios, justificando con estos y otros tantos beneficios el principio de sustentabilidad por el cual se ha trazado la nueva Ley.

Uno de los atributos principales de esta nueva Ley es, la regulación del transporte privado, siendo una de las principales fortalezas, ya que advierte, regula y en su caso sanciona todas aquellas actividades que se opongan a la seguridad y al interés público.

Es un hecho que el desarrollo de las tecnologías ha significado avances muy importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, sin embargo, en muchas materias hemos visto que la legislación ha quedado rezagada. Con la Ley que se propone se aborda de manera eficiente la presencia de las nuevas formas de acceso a la prestación de servicios de movilidad de personas a través de plataformas digitales, lo de ninguna manera significa que deban quedarse al margen de la Ley y del estado de derecho pues forman parte de la realidad social de Baja California.

Para el logro de los objetivos pretendidos con la nueva legislación, la prestación del servicio de transporte privado no puede ir en una dirección distinta que la que se propone para el servicio público, por lo cual la iniciativa privada deberá dar cuentas al Estado del cumplimiento de sus obligaciones, desarrollando la prestación de su servicio con total transparencia y siguiendo los principios de accesibilidad universal, calidad, desarrollo económico, eficiencia, igualdad, innovación tecnológica, no discriminación, perspectiva inclusiva, seguridad, sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

La nueva Ley establece la Sustentabilidad, como un principio rector de sus acciones encaminadas al respeto y atención prioritaria del derecho de movilidad, considerando el impacto que tendrá en el desarrollo económico, social y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones futuras.

Estos tres factores que contempla la nueva Ley, son los que se establecen como los tipos de sustentabilidad y en base a ello se elaboran las estrategias precisas para alcanzar su cumplimiento.

Cuando hablamos de sustentabilidad se habla no solamente de la actualidad sino de generaciones futuras. Por otro lado, al hablar de sustentabilidad económica se debe prever la distribución de los recursos utilizados de forma estratégica para llegar al cumplimiento de los objetivos que se plantean tanto para preservar la calidad que se pretende en la prestación de los distintos servicios y la conservación de sus vialidades e infraestructura para las futuras generaciones.

En cuanto a la sustentabilidad ambiental, la planeación y desarrollo de infraestructura adecuada para la movilidad y el transporte juegan un papel de suma importancia tomando en cuenta los recursos naturales con los que se cuenta y que constituyen parte también del ecosistema el cual, de no tomarse en cuenta como piedra angular en el diseño de vialidades, rutas e infraestructura para su realización, podría representar un problema grave a futuro para el medio ambiente y la salud pública.

La nueva LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA se distingue por ser un instrumento moderno que ofrece soluciones a problemas estructurales del pasado, pero al mismo tiempo tiene un bagaje jurídico basto que permitirá enfrentar los retos futuros.

6. El presente Dictamen cubre el principio de exhaustividad del estudio, en virtud de que fueron analizados todas y cada una de las consideraciones y motivaciones hechas el inicialista.

7. Mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2020, signado por el Diputado Ramón Vázquez Valadez, en su calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de esta XXIII Legislatura, convocó a sus integrantes para el día 23 de marzo de 2020, a Comisión de trabajo.

En el orden del día de la referida convocatoria, se advierte enlistado en el numeral IV la iniciativa que aquí se atiende. Abiertos los trabajos en su parte conducente la Diputada Miriam Elizabeth Cano Núñez, realizó diversas observaciones y reflexiones al contenido del resolutivo, proponiendo al Presidente la Comisión realizar un receso por un tiempo suficiente, para poder atender dichas observaciones y generar canales de diálogo, lo cual fue aprobado por el resto de los integrantes.

Posteriormente, al reanudarse la sesión esta Comisión, el Presidente dio cuenta que después de un amplio dialogo celebrado con distintos sectores del gremio transportista, autoridades

estatales, así como distintas aportaciones de fortalecimiento que realizaron los Diputados Miriam Elizabeth, Cano Núñez, Julio Cesar Vázquez Castillo, así como el representante del Ejecutivo del Estado, acordando de conformidad realizar modificaciones al contenido de los artículos 91, 96, 97, 138, 139, 198, 201, 213, 220, transitorio DÉCIMO y la adición de un artículo transitorio VIGÉSIMO al contenido del Dictamen, mismas que al ser sometidas a la consideración de quienes suscribimos, estas fueron aprobadas, motivo por el cual habrán de incluirse en el resolutivo del presente Dictamen.

Es por todo lo anterior que tomando en cuenta los argumentos anteriormente vertidos en el presente estudio, el texto propuesto por el inicialistas, es acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden atender con la expedición de la nueva ley, lo que hace jurídicamente PROCEDENTE la iniciativa en los términos precisados en el cuerpo del presente dictamen.

VI. Propuestas de modificación.

No se advierte la necesidad de realizar modificaciones al resolutivo propuesto.

VII. Régimen Transitorio.

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio que propone la iniciativa de mérito.

VIII. Impacto Regulatorio.

La presente propuesta no contempla impacto regulatorio, por lo que no es necesario armonizar otros ordenamientos legislativos.

IX. Resolutivo.

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente punto:

RESOLUTIVO

Único. Se aprueba la creación de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, para quedar como sigue:

LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de observancia general en el Estado de Baja California, sus disposiciones son de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y directrices generales para planificar, regular, controlar, vigilar, gestionar la movilidad, el transporte público y privado de personas y bienes en todas sus modalidades, garantizando las condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

El servicio de transporte público está a cargo del Ejecutivo Estatal y lo prestará por conducto del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o previa declaratoria de imposibilidad lo podrá encomendar a personas físicas y morales mediante el otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones en los términos que señala esta Ley y su Reglamento, bajo los principios de equidad, justicia, igualdad, salud, medio ambiente, racionalización y modernización.

Los sujetos activos de la movilidad son las personas con discapacidad, peatones, ciclistas, usuarios de la movilidad no motorizada, motociclistas, conductor, usuarios del servicio de transporte, prestadores del servicio de transporte en todas sus modalidades, así como las empresas de redes de transporte.

Son sujetos de la aplicación de la presente Ley y de su Reglamento, las autoridades, las entidades y organismos públicos o privados, y las personas físicas o morales, permisionarias o concesionarias, que otorguen el servicio de traslado de pasajeros o de carga, o bajo cualquier modalidad realicen las actividades a que se refiere el presente ordenamiento y la reglamentación respectiva.

La aplicación de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento y el desarrollo de la política pública de movilidad y transporte del Estado, corresponde al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 2.- Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Acera o Banqueta: Camino a cada lado de una calle, generalmente más elevado que ésta, reservado para la circulación exclusiva de las personas con discapacidad, peatones y en su caso usuarios de la movilidad no motorizada cuando así se permita, excluyendo en todo momento al ciclista que pretenda utilizarla, con la excepción de los menores de edad acompañados de sus padres para efectos de recreación de los menores;

II. Aforo: Es el conteo de vehículos, usuarios o mercancías realizado durante un periodo de tiempo determinado, con el objetivo de determinar la cantidad de vehículos, usuarios o mercancías que efectivamente pasan por una determinada ruta, vía pública o lugares;

III. Alimentador Complementario: Es el concesionario y/o permisionario del transporte público que opera y presta el servicio en sus rutas autorizadas, mismas que sin ser parte integrante de un subsistema, convergen con el mismo con la finalidad de generar una movilidad efectiva para el público usuario; para lo cual deberá celebrar los acuerdos y/o convenios necesarios con los Sistemas Integrados de Transporte y con los operadores autorizados para la prestación del servicio público en el Subsistema que corresponda. Los acuerdos y/o convenios celebrados entre los operadores autorizados y quien pretende colaborar bajo la figura de alimentador complementario deberán ser autorizados expresamente por el Instituto;

IV. Algoritmos electrónicos: Es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenas y finitas que permiten solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades conexas o relacionas a la movilidad y el transporte;

V. Amonestación de Supervisión Mecánica: Prevención que se hace, en la hoja de revisión mecánica, a los concesionarios y permisionarios, para que procedan a efectuar las reparaciones o mejorar las condiciones físicas del vehículo revisado;

VI. Aplicación móvil: El programa informático o plataforma electrónica de geolocalización para la búsqueda, contacto virtual y validación real de prestadores del servicio de transporte con usuarios del servicio, así como para la contratación y pago de servicios de transporte; ejecutada u ofertada mediante dispositivos fijos o móviles mediante el uso de Internet o IOT (internet de las cosas por sus siglas en inglés), bajo la cual operan las empresas de redes de transporte o plataformas digitales;

VII. Autobús: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con diseño de fábrica, el cual cuenta con capacidad que determinará el Reglamento de esta Ley;

VIII. Autobús Foráneo: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con capacidad de origen o diseño de fábrica y que presta servicio de transporte a nivel nacional o internacional;

IX. Autorización: Acto administrativo del Instituto a través del cual concede al particular la prestación del servicio de transporte público, privado o actividades conexas, conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento por el tiempo y condiciones que ambos establecen;

X. Autorización Temporal: Acto administrativo del Instituto mediante el cual concede la prestación del servicio de transporte, en sus distintas modalidades, para atender por un tiempo determinado el incremento en la demanda por actividades derivadas de acontecimientos y festividades públicas o situaciones de emergencia; misma que no podrá exceder de un mes conforme lo establezca la presente Ley y su Reglamento;

XI. Bahía: Espacio exclusivo dentro de la vialidad fuera del carril de circulación, para realizar labores de ascenso y descenso de pasajeros, así como carga y descarga de mercancías;

XII. Bicicleta: Vehículo de tracción humana a pedales o asistida por tracción eléctrica;

XIII. Bicipuertos: Espacio físico y/o mobiliario urbano utilizado para sujetar, resguardar y/o custodiar bicicletas por tiempo determinado;

XIV. Calidad del servicio: Niveles cualitativos y cuantitativos de la eficiencia de la ruta y nivel de servicio ofrecido al usuario, en términos de tiempos de transportación, frecuencia de paso, accesibilidad, limpieza, comodidad del vehículo, manejo atención del conductor y en su caso sensación térmica del usuario. La calificación de la calidad del servicio es en base a una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos definidos en el Reglamento de la presente Ley;

XV. Calle completa: Las vialidades que por su diseño, construcción e implementación consideran las necesidades de movilidad de los peatones, ciclistas, personas que utilizan los medios de transportación masiva, conductores de vehículos de motor, personas de todas las edades y condiciones. Estas características incluyen, pero no se limitan a: aceras transitables, carriles exclusivos, rotulados para ciclistas, construcción de señales y estructuras como isletas, rotondas y cruces que den paso a que se comparta la vía pública, cortes de esquinas, aceras elevadas con rampas de acceso y la adopción de medidas de seguridad pública para control de tránsito;

XVI. Carril confinado: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la exclusividad de circulación la tienen los vehículos/vehículos del servicio público de transporte masivo de pasajeros, vehículos de emergencia y seguridad, así como los del servicio de transporte escolar que cuenten con autorización para operar en los horarios y tramos determinados por el Instituto;

XVII. Carril preferencial: Es el espacio de circulación, debidamente señalizado donde la preferencia la tienen los vehículos/vehículos del servicio público de transporte masivo de pasajeros que cuenten con la autorización del Instituto para operar y prestar el servicio público dentro del sistema de transporte masivo en el Estado de Baja California o cualquiera de los subsistemas que lo integren;

XVIII. Causa de utilidad pública: Es de utilidad pública e interés general, la prestación de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades ya sea a través de un organismo descentralizado, o bien, por conducto de personas físicas o jurídicas a quienes mediante concesiones, permisos y autorizaciones el Instituto, encomiende la realización de dichas actividades, en los términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; Asimismo, se considera de utilidad pública y beneficio general, el establecimiento y uso adecuado de las áreas susceptibles de tránsito vehicular y peatonal; señalización vial y nomenclatura y, en general, la utilización de los servicios, la infraestructura y los demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad de competencia del Estado y sus municipios, en términos de este ordenamiento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XIX. Chatarrización: El proceso mediante el cual se desechan los vehículos de transporte público y privado que han cumplido su vida útil, mediante la instrumentación de un programa institucional que la incentive;

XX. Centro de Transferencia Modal: Espacio físico con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte, que sirve de conexión a los usuarios entre dos o más rutas o modos de transporte;

XXI. Conductor: Es la persona física encargada de conducir o manejar un vehículo privado quien deberá obtener autorización del Instituto a efecto de realizar actividades económicas o de lucro conforme a la presente Ley y su Reglamento;

XXII. Ciclista: Al conductor de vehículo de tracción humana a pedales o asistido por tracción eléctrica;

XXIII. Cierre de Circuito: Son los espacios físicos permitidos en los que, sin realizar base, se efectúa el despacho de los vehículos destinadas al servicio público de transporte de pasajeros para iniciar o terminar su itinerario, incluyen maniobras de ascenso y descenso y en el que se controla el intervalo de salidas entre una y otra vehículo;

XXIV. Competencia desleal o ruinosa: Se considera competencia desleal y ruinosa la práctica ilegal de cualquier persona física o moral que oferte, promocione, comercialice, explote o preste el servicio de transporte, sin contar con permiso o concesión expedida por el Instituto. O bien cuando un prestador de servicio de transporte afecte indebidamente de manera directa en la prestación del servicio con consecuencias negativamente a su aforo a otro concesionario, permisionario o autorizado y que contravenga la presente Ley, su Reglamento o disposiciones aplicables;

XXV. Concesión: Acto administrativo por el cual el Instituto, autoriza a las personas morales, para prestar un servicio público de transporte, en los términos y condiciones que la propia Ley y su Reglamento señala. Su otorgamiento y las condiciones que se establezcan se consideran de utilidad pública y de interés general;

XXVI. Consejo: El Consejo Consultivo de Movilidad y Transporte;

XXVII. Derecho de vía: Zona afecta a una vía pública en ambos lados de ésta, con las medidas que determine el Reglamento de la presente Ley;

XXVIII. Elementos de Identificación Vehicular: Los aditamentos, documentos, gafetes o medios electrónicos expedidos por la Secretaría de Hacienda a través de la Oficina Recaudadora y en coordinación con el Instituto autorizadas para ello en los que constan la autorización, permisos, concesión e identificaciones para la movilidad sustentable que comprenden las calcomanías, placas y tarjetas de circulación, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y la normatividad aplicable.

XXIX. Empresas de redes de transporte: Empresas de Redes de Transporte: Son aquellas personas físicas o morales cuyo servicio se limita exclusivamente a intermediar vía electrónica la oferta, contratación y pago de servicios de transporte público o privado, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios con prestadores del servicio en cualquiera de sus modalidades autorizados y registrados por la autoridad competente.

XXX. Equipamiento vial o de transporte: El conjunto de espacios y edificaciones de uso predominantemente público donde se proporciona un servicio de movilidad y transporte a la población, que contribuye a su bienestar y a su desarrollo económico, social y cultural;

XXXI. Examen Toxicológico: Examen que certifica la presencia o ausencia de sustancias consideradas prohibidas en el cuerpo humano, tales como marihuana, opiáceos, benzodiacepinas, metanfetaminas, anfetaminas, cocaína y otras de naturaleza similar; también conocido como examen antidoping;

XXXII. Holograma o QR de verificación vehicular: formas únicas autorizadas y emitidas por el Instituto, con características de seguridad y colores determinados de acuerdo con el año, para verificar la autenticidad y vigencia de las autorizaciones, permisos o concesiones en cumplimiento al Reglamento de esta Ley;

XXXIII. Horario: Hora determinada por el Instituto de inicio y término a que deberá sujetarse la prestación del servicio de transporte de pasajeros o de carga ya sea pública o privada, conforme a los términos definidos en la presente Ley y su Reglamento;

XXXIV. Itinerario: Relación completa de las calles o lugares por los que transitan un vehículo del servicio de transporte público, al realizar el traslado de usuarios de terminal a terminal y puntos intermedios;

XXXV. Infracción: Es el incumplimiento de las disposiciones normativas a la presente Ley su Reglamento y disposiciones aplicables, la cual amerita una sanción, medida de seguridad o de urgente aplicación y en su caso arrastre y depósito de todos los vehículos incluyendo los del servicio público, privado o de servicios conexos de movilidad o transporte;

XXXVI. Infracción electrónica: Las infracciones a la Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables que sean formuladas a través de equipos o sistemas electrónicos a cargo del Instituto;

XXXVII. Infraestructura vial: Todos los sistemas de comunicación y transporte de personas, de organización y distribución de bienes;

XXXVIII. Instituto: El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California;

XXXIX. Intermodalidad: La característica de un sistema de transporte en la cual se utilizan de forma integrada al menos dos modos de transporte diferentes para completar la cadena de traslado puerta a puerta;

XL. Ley: Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California;

XLI. Maquinaria agrícola, de construcción o industrial: Es aquella autopropulsada o remolcada, que tiene como uso exclusivo las actividades y servicios agrícolas, de construcción e industriales y que transitan de manera eventual o excepcional en los

caminos, carreteras y autopistas de jurisdicción estatal y local; previa autorización del Instituto;

XLII. Menor de Edad: El conductor de vehículo o motocicleta, respectivamente, distinto a los reservados para operadores, con edad de 16 o 17 años;

XLIII. Minibús: Vehículo automotor diseñado y equipado para transporte público o privado de pasajeros con diseño de fábrica, el cual cuentan con capacidad que determinará el Reglamento de esta Ley;

XLIV. Mobiliario urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte de la imagen de las comunidades del Estado, los que, según su función, se aplican para el descanso, esparcimiento, deporte, comunicación, información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como aquellos otros muebles que determinen la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial;

XLV. Motociclista: El conductor de motocicletas, bicimotos, triciclos automotores, tetramotos, motonetas sea cual fuere la capacidad de los centímetros cúbicos del motor, ya sea para el uso personal, servicio particular o para el desempeño de un trabajo;

XLVI. Movilidad: Es un derecho humano que consiste en el desplazamiento de personas, bienes y cosas que se realizan en el Estado, a través de los diferentes medios, formas y modalidades de transporte que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso la movilidad tendrá como eje central a la persona;

XLVII. Multimodalidad: Ofrecer a los diferentes grupos de usuarios opciones de servicios y modos de transporte integrados, que proporcionen disponibilidad, velocidad, densidad y accesibilidad que permitan reducir la dependencia del uso del automóvil particular;

XLVIII. Movilidad no motorizada: Desplazamientos realizados a pie y a través de vehículos no motorizados;

XLIX. Nomenclatura: Conjunto de elementos y objetos visuales que se colocan en la vialidad para indicar los nombres de las colonias, pueblos, barrios, vías y espacios públicos de la Ciudad, con el propósito de facilitar su identificación por parte de las personas;

L. Número económico: Número de registro oficial asignado por el Instituto para todo vehículo que preste o explote el servicio de transporte en la modalidad de que se trate;

LI. Operador: Se entiende referido a una persona física cuando ésta conduzca o maneje un vehículo destinado al transporte público o privado de personas o carga con fines económicos o de lucro, ya sea en forma intermitente o permanente;

LII. Parada oficial de ascenso y descenso: elemento de equipamiento y mobiliario debidamente identificado que permiten a los usuarios de un sistema integrado de transporte realizar los ascensos, descensos o trasbordos necesarios para sus traslados, mismos que por su naturaleza son los únicos espacios habilitados para que los vehículos de este sistema realicen estas actividades;

LIII. Parque vehicular: Cantidad de vehículos autorizados en una concesión para la prestación del servicio público;

LIV. Padrón: Padrón de Movilidad y Transporte que es la base de datos sistemáticamente ordenada y administrada por el Instituto y que contiene la información de los sujetos y objetos regulados por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables;

LV. Peatón: Es la persona física que transita a pie por la vía pública;

LVI. Permiso: Documento que otorga el Ejecutivo estatal por conducto del Instituto a través del cual autoriza al particular a prestar un servicio de transporte en las modalidades y términos que establezca la Ley y su reglamento.

LVII. Permisionario: Persona física titular de un permiso para prestar un servicio de transporte en las modalidades y términos que establezca la Ley y su reglamento.

LVIII. Póliza de seguro: Documento expedido por una persona jurídica debidamente acreditada y certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad aplicable que ampare el aseguramiento del conductor, operador o propietario del vehículo automotor para responder por daños y perjuicios ocasionados a terceros;

LIX. Prácticas restrictivas del comercio aplicado a la movilidad y el transporte: Se considerarán ilícitas toda práctica monopólica o restrictiva del comercio aplicado a la movilidad cuando se pretenda fijar, elevar, concertar o manipular la oferta de servicios de transporte en perjuicio del usuario en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica;

LX. Prestadores del servicio de transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles: Propietarios del vehículo autorizado por el Instituto para prestar el servicio de transporte a través de una plataforma tecnológica operada por una empresa de redes de transporte en los términos de la presente Ley y su Reglamento;

LXI. Radio Taxi: Son los vehículos automotores de alquiler sin itinerario fijo que se contrata para viajes pactados consensualmente, equipados para el transporte de personas con capacidad conforme las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, el cual está conectado con una central de radio que comunica al operador con su usuario. La tarifa a pagar por el servicio prestado se determina atendiendo a la tarifa autorizada mediante el taxímetro o con algoritmos electrónicos administradas mediante plataformas de tecnologías; que tendrán una antigüedad menor a 6 años de su fecha de fabricación;

LXII. Recorrido: Descripción detallada de las vialidades por las que transitan los vehículos del servicio de transporte de personal;

LXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

LXIV. Responsabilidad civil del pasajero: Cláusula o cobertura amparada en un contrato de seguro mediante la cual el concesionario, permisionario o autorizado se encuentra asegurado mediante póliza de seguro por la cual se obliga a indemnizar hasta por un monto determinado a los pasajeros, por las lesiones, muerte o daños ocasionados al momento de un siniestro o accidente y con motivo de los servicios de transporte prestados;

LXV. Responsabilidad civil de daños a tercero: Cláusula o cobertura contenida en un contrato de seguro mediante la cual la empresa o institución aseguradora se obliga en nombre del asegurado y hasta por un monto determinado a responder por el pago de la responsabilidad civil en que incurra, con el consentimiento expreso o tácito del concesionario o permisionario, quien use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause daños a terceros en sus bienes, lesiones corporales o la muerte;

LXVI. Responsabilidad civil complementaria: Cláusula o cobertura de un contrato de seguro que cubre los costos que superan los límites de otras coberturas de seguro, en este caso opera en exceso de la cobertura de responsabilidad civil por daños a terceros y ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado con cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo y que a consecuencia de dicho uso cause lesiones corporales o la muerte a terceros;

LXVII. Ruta: El trayecto con origen y destino que podrá ser troncal, alimentadora, integrada a un corredor o formar parte de un sistema integrado de transporte o no, autorizadas o concesionadas por el Instituto;

LXVIII. Servicios conexos: Los servicios vinculados a la operación de los Sistemas Integrados de Transporte en el Estado, y que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, entre los que se podrán incluir: servicios de pre y post pago mediante tarjeta electrónica, monitoreo por sistemas de posicionamiento global o GPS, sistemas de semaforización inteligente, entre otros, que se definirán en la presente Ley y su Reglamento;

LXIX. Sistema de pago electrónico o prepago: Plataforma tecnológica para el pago, sea con elementos electrónicos o prepago de la tarifa autorizada; así como el conjunto de instrumentos, procedimientos bancarios y por lo general, sistemas interbancarios de transferencia de fondos que aseguran la circulación del dinero a través de sistemas electrónicos;

LXX. Sistema integrado de transporte: Conjunto de servicios de movilidad y transporte que incluyen de manera coordinada a concesionarios, infraestructura y usuarios de una ciudad o zona metropolitana con una organización de alta eficiencia, eficacia y sustentabilidad, facilitando la optimización de operaciones, reformulación de tarifas entre las distintas modalidades de transporte motorizado y no motorizado;

LXXI. Servicio metropolitano de transporte: Es el que se presta entre los Municipios declarados zona Metropolitana y sus zonas conurbadas en cualquiera de sus modalidades, con sujeción a las disposiciones del presente ordenamiento;

LXXII. Sistema de Movilidad: Es el conjunto de elementos ordenados y coordinados de infraestructura, equipamiento, mobiliario vehículos de transporte ya sean públicos o privados, así como los servicios conexos que facilitan el desplazamiento de personas y mercancías en un territorio.

LXXIII. Sistemas de control de tránsito: Todas las estrategias, equipamientos, mobiliario y servicios conexos orientados a prevenir la congestión vial, mejorar el flujo de tránsito, mantenimiento de la seguridad vial, priorización de la peatonalización, movilidad no motorizada y sistemas de transporte masivo de pasajeros;

LXXIV. Sistema de información para la Movilidad: La base de datos de los vehículos particulares o prestadores de servicio concesionado, conductores, operadores, propietarios, personas físicas o morales titulares de permisos o concesiones, los sistemas electrónicos y demás características que incidan en la movilidad;

LXXV. Sitio: El espacio en la vía pública o en propiedad privada, autorizado por la autoridad competente para estacionar vehículos de alquiler, no sujetos a itinerario y a donde el público usuario pueda acudir a contratar estos servicios;

LXXVI. Sociedad mutualista: Se conoce como Sociedad Mutualista a las asociaciones de personas debidamente constituidas que, sin dar pólizas o contratos, conceden a sus miembros coberturas en caso de accidentes o daños personales o contra terceros, las cuales se encuentran autorizadas obligatoriamente conforme a la Ley General de

Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros;

LXXVII. Subsistema: Es cada uno de los elementos ordenados y diferenciados por su tipología o función de un sistema de movilidad sea integrado o no, el cual podría ser de infraestructura, equipamiento, mobiliario, vehículos de transporte ya sean públicos o privados, así como los servicios conexos de movilidad que facilitan el desplazamiento de personas y mercancías en un territorio.

LXXVIII. Tarifa: Contraprestación a cargo de los usuarios, autorizada por el Instituto para la prestación del servicio de transporte en todas sus modalidades;

LXXIX. Terminal: Es la estación vehicular autorizada por el Instituto para iniciar o cerrar recorridos locales o foráneos previamente autorizados.

LXXX. Transporte escolar: Servicio de transporte público o privado destinado al transporte de estudiantes de las instituciones educativas y que opera en términos del permiso otorgado bajo esta modalidad. Este servicio se presta en autobuses y minibuses de distinta capacidad, diseñados de origen especialmente para tal fin.

LXXXI. Transporte de personal: Servicio de transporte público o privado destinado principalmente al traslado de trabajadores, dependientes o personas vinculadas a las empresas, industrias o fuentes de trabajo en que laboran, prestan sus servicios o mantienen relación comercial o profesional; con horario, precio, recorrido, origen y destino variables y dinámicos de acuerdo con las necesidades del cliente o usuario, y que opera en los términos del título concesión otorgado.

LXXXII. Transporte turístico: Servicio de transporte público destinado al transporte de personas a lugares de interés turístico o cultural en general; no está sujeto a horario y tarifa fija. Este servicio se presta en autobús y microbús de distinta capacidad o en su caso en vehículos automotor y de propulsión humana o animal acondicionados especialmente para tal fin.

LXXXIII. Trasbordo: La transferencia de bienes o personas de un vehículo de transporte a otra, dentro de un sistema integrado de transporte o de movilidad, los cuales deberán de compartir servicios conexos según lo disponga el Reglamento de esta Ley.

LXXXIV. UMA: La Unidad de Medida y Actualización (UMA);

LXXXV. Vehículo: Todo bien mueble identificado en su individualidad diseñado para el transporte terrestre de personas o cosas en la vía pública, que su movimiento sea generado por una fuerza motriz o de propulsión, así como aquellos destinados para ser remolcados;

LXXXVI. Vías públicas de comunicación local: Se refiere a las vías públicas, incluyendo sus construcciones de ingeniería como puentes, alcantarillas, pasos a desnivel y demás elementos de protección, monitoreo o control vía sistemas electrónicos a excepción de aquéllas que sean exclusivamente de jurisdicción de la Federación, que comuniquen al Estado con otra u otras entidades federativas, o las construidas en su totalidad o en su mayor parte por la Federación, siempre que éstas no se hubieren cedido al Estado o a los municipios;

LXXXVII. Vías Públicas: Las banquetas, ciclovías, calles, calzadas, avenidas, viaductos, carreteras, caminos y autopistas, así como las vialidades primarias y corredores de movilidad con prioridad al transporte público y, en general:

a) Los predios destinados a los fines públicos del tránsito peatonal, vehicular y al transporte masivo, así como para las diferentes modalidades de taxi;

b) Los caminos públicos de jurisdicción estatal y municipal destinados temporal o permanentemente al tránsito de personas y vehículos, incluyendo el área del derecho de vía de los mismos; así como las vialidades de uso común de los condóminos, cuando su ubicación geográfica permitan el libre tránsito peatonal, vehicular o de transporte, sea necesario para la unión entre dos o más puntos de intersección con zonas urbanas y metropolitanas.

ARTÍCULO 3.- La presente Ley garantizará que la administración pública estatal y las municipales al planear, diseñar, implementar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones en materia de movilidad observen los principios rectores siguientes:

I. Accesibilidad universal: Garantizar el derecho de las personas a elegir libremente la forma de desplazarse por las vías públicas sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición.

II. Calidad: Establecer criterios cualitativos y cuantitativos que aseguren que el servicio ofrecido al usuario cuente con un espacio apropiado y confortable para las personas, encontrarse en buen estado, en condiciones higiénicas, de seguridad y con

mantenimiento regular para proporcionar una adecuada experiencia de viaje, desplazamiento y orientación del servicio público de transporte.

III. Desarrollo económico: Garantizar que el ordenamiento de las vías públicas de comunicación minimice costos y tiempos de traslado de personas y bienes a fin de contribuir al bienestar social y desarrollo del Estado.

IV. Eficiencia: Fomentar la oferta multimodal de servicios, la administración de flujos de personas que se desplacen en los distintos medios de transporte, así como de los bienes, la articulación de redes metropolitanas, regionales e intermunicipales y el uso de la infraestructura y tecnologías sustentables;

V. Igualdad: Generar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la movilidad, y asegurar que ésta se encuentre al alcance de todas las personas, atendiendo especialmente a los grupos que por sus condiciones sean catalogados como vulnerables.

VI. Innovación tecnológica: Impulsar sistemas tecnológicos que permitan un desarrollo eficiente de la movilidad, generando eficiencia en los sistemas de transporte y el desplazamiento de personas y bienes.

VII. No discriminación: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

VIII. Perspectiva inclusiva: Asegurar que las políticas públicas estatales y municipales garanticen la no discriminación, igualdad, equidad de género, seguridad e integridad física, sexual y no violencia de quienes transiten por la vía pública y utilicen el servicio público y especial de transporte.

IX. Participación ciudadana: Tomar en consideración la opinión de los ciudadanos, en los diferentes componentes de la movilidad.

X. Respeto al medio ambiente: Fomentar a través de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular de motor de combustión interna, traslado peatonal y tracción física por aquellos de carácter masivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

XI. Seguridad: Proteger la integridad de las personas y evitar posibles afectaciones a sus bienes.

XII. Sustentabilidad: Dirigir las acciones al respeto y atención prioritaria del derecho a la movilidad, considerando el impacto que las mismas tendrán en el desarrollo social, económico y ambiental, a fin de no comprometer su disfrute por las generaciones futuras.

ARTÍCULO 4.- Las acciones relativas a la movilidad y el transporte se regulan mediante actos y procedimientos administrativos que se establecen en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 5.- Las disposiciones de la presente Ley regularán entre otros aspectos, de manera enunciativa y no limitativa, lo siguiente:

I. Las acciones tendientes para garantizar que la movilidad y el transporte de las personas se realicen en condiciones que satisfagan la libertad de tránsito, la seguridad, el libre acceso, así como los requisitos de calidad apropiados a cada tipo de servicio, de manera que no afecten el orden de las vías públicas de circulación local y la circulación vial respetando el medio ambiente;

II. Que los servicios de transporte público se presten garantizando puntualidad, higiene, orden, seguridad, generalidad, accesibilidad, uniformidad, continuidad, adaptabilidad, permanencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, sustentabilidad, medio ambiente y económico, conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

III. Que las acciones relativas a la construcción, administración y aprovechamiento de las obras de infraestructura previstas en esta Ley se orienten a facilitar la movilidad motorizada, no motorizada y medios de transporte sustentables;

IV. Las características de los vehículos y sus condiciones operativas, necesarias para permitir su circulación, con base en la normatividad aplicable;

V. Los requisitos, condiciones, términos y procedimientos para el otorgamiento, suspensión o cancelación de las concesiones, autorizaciones y permisos destinados a la prestación del servicio público de transporte en sus distintas modalidades, en la operación de servicios conexos, así como sistemas electrónicos;

VI. Los requisitos y condiciones para establecer y operar servicios conexos;

VII. La vigilancia, inspección, planeación, administración, control y sanción del servicio de transporte público y privado;

VIII. La competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad y transporte;

IX. Los derechos y obligaciones de los sujetos activos en materia de movilidad de personas, bienes y mercancías;

X. Las políticas, lineamientos, estrategias y disposiciones relativas a la planeación de la movilidad y la formulación de los planes y programas específicos de la materia;

XI. Los esquemas de coordinación institucional que deben ejecutar el Estado y los municipios, para integrar y administrar el servicio de transporte y vialidad de personas y de transporte de carga; y,

XII. La promoción y fomento en la población para la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sostenible y la prevención de accidentes que coadyuven a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular e impulsar el uso intensivo del transporte público y no motorizado.

ARTÍCULO 6.- En el Estado de Baja California se considera de utilidad pública en materia de movilidad:

I. La prestación de servicio público de transporte de personas, de transporte de carga y de distribución de bienes y mercancías;

II. El establecimiento de infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar necesarios para la prestación eficiente del servicio público; y,

III. Los derechos de los usuarios.

Los demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y demás normatividad jurídica aplicable.

CAPÍTULO II

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 7.- Para efectos de salvaguardar los derechos de las personas a la movilidad, se deberá de observar y garantizar lo siguiente:

I. El derecho de preferencia a los peatones, personas con discapacidad y sus perros guías, adultos mayores, mujeres embarazadas o con infantes, ciclistas y los usuarios del transporte público, quienes gozarán de preferencia sobre los vehículos en todos los cruceros o zonas de paso peatonal y se les brindarán obligatoriamente las facilidades necesarias para abordar el vehículo del transporte público en todas sus modalidades,

II. Establecer las medidas necesarias, que garanticen al usuario el derecho el servicio público de transporte en forma regular, continua, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia en apego a la normatividad aplicable;

III. Establecer los mecanismos de recepción de quejas y denuncias de los usuarios del servicio ante el Instituto de cualquier irregularidad en la prestación del servicio de transporte público o cualquier tema inherente a la movilidad en el Estado;

IV. Realizar las acciones necesarias a fin de que el sistema de movilidad no disminuya su capacidad operativa ante situaciones fortuitas o de fuerza mayor, que afecte a los usuarios; y

V. Las demás que se establezcan en la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 8.- Los usuarios del transporte público tendrán los siguientes derechos:

I. Recibir un servicio de transporte público de calidad moderno y que satisfaga sus necesidades por el pago de la tarifa;

II. Viajar con seguridad e higiene en el servicio, relativas al vehículo y conductor del servicio;

III. Recibir del conductor un trato digno y respetuoso;

IV. A que se cubra todo el recorrido de la ruta autorizada;

V. Al respeto y cumplimiento de las frecuencias en los horarios autorizados;

VI. Al respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que en su caso corresponda;

VII. Recibir boleto con seguro de pasajero el cual podrá ser de manera física o electrónica en servicios conexos de pago o prepago;

VIII. El ascenso y descenso en las paradas autorizadas;

IX. Ser indemnizado en el caso de cualquier accidente o imprevisto durante el uso del transporte por el prestador del servicio de transporte mediante póliza de seguros emitida por una sociedad mutualista debidamente acreditadas y certificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad aplicable;

X. A la prestación del servicio público de transporte en forma regular, continúa, uniforme, permanente e ininterrumpida y en las mejores condiciones, comodidad y eficiencia; y,

XI. Conocer y escoger la ruta o recorrido que considere más adecuado para su destino. Si el usuario no opta por decidir el recorrido concreto, el servicio siempre será aquel que siga la ruta previsiblemente más corta, señalando el conductor al usuario la distancia y el tiempo estimados de duración del servicio.

ARTÍCULO 9.- Los estudiantes tendrán el derecho de paso preferencial en todas las intersecciones y zonas señaladas para esos fines, próximos a los centros escolares, y tendrán prioridad para el ascenso y descenso en los vehículos de servicio público de transporte en general; en consecuencia, las autoridades competentes deberán proteger, mediante dispositivos, señalamientos e indicaciones convenientes, el tránsito de los estudiantes en los horarios y lugares establecidos.

ARTÍCULO 10.- Las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y los peatones tienen derecho y prioridad de tránsito en la vía pública debiendo cruzar las vías rápidas, primarias y de acceso controlado por las esquinas, puentes peatonales, pasos a desnivel o zonas marcadas para tal efecto, excepto en las calles locales, cuando exista solo un carril para la circulación, en las cuales podrán cruzar en cualquier punto, con precaución del tránsito vehicular, así como evitar el tránsito por superficies de circulación vehicular.

A efecto de garantizar la movilidad de los adultos mayores se promoverán convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público, asimismo el Ejecutivo del Estado podrá emitir decretos de exención en beneficio de esta población vulnerable.

ARTÍCULO 11.- Las aceras de las vías públicas, sólo deberán ser utilizadas para el tránsito de las personas con discapacidad y por los peatones, con las excepciones que determinen las autoridades dentro de su respectiva competencia y para dar espacio a la infraestructura ciclista, exceptuando aquella destinada para la circulación.

Para efecto de lo anterior, el Instituto tendrá la facultad de regular los colores en las guarniciones de las banquetas que prohíben o delimitan el estacionamiento, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la presente esta Ley.

ARTÍCULO 12.- Adicionalmente a los derechos que corresponden a los peatones en general, ciclistas y personas con discapacidad, tendrán preferencia de paso en todos los cruceros o zonas de paso peatonal.

Las autoridades y concesionarios deberán otorgar las facilidades necesarias para el abordaje de los vehículos de transporte público en los términos de la presente Ley.

SECCION I

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ARTÍCULO 13.- Los operadores del servicio público de transporte, tienen la obligación de auxiliar en el ascenso, transportación y descenso, a los usuarios que padezcan alguna discapacidad temporal o permanente y personas adultas mayores, por lo que el Instituto promoverá el derecho de las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al transporte, los sistemas y servicios conexos de pago y prepago,

particularmente aquellas que contribuyan a su independencia y desarrollo integral, para efecto de lo anterior se llevarán a cabo las siguientes acciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con autoridades competentes y empresas privadas, a fin de elaborar normas y programas que garanticen a las personas con discapacidad, la accesibilidad, seguridad, comodidad, calidad y funcionalidad en los medios de transporte de competencia estatal;

II. Promover que, en la concesión del servicio de transporte público, las vehículos e instalaciones garanticen a las personas con discapacidad la accesibilidad para el desplazamiento y los servicios, incluyendo especificaciones técnicas y antropométricas, apoyos técnicos o humanos y personal capacitado;

III. Promover en el ámbito de su competencia programas y campañas de educación vial, y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía y lugares públicos, así como para evitar cualquier tipo de discriminación en el uso del transporte público;

IV. Promover la suscripción de convenios con los concesionarios y permisionarios, para difundir una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de esta Ley y los derechos humanos.; y,

V. Promover convenios con los concesionarios del transporte público a fin de que las personas con discapacidad gocen de descuentos en las tarifas de los servicios de transporte público.

ARTÍCULO 14.- Los servicios públicos de transporte implementarán el uso de tecnología y aditamentos auxiliares que permitan a la comunidad con discapacidad visual o auditiva a ejercer sus derechos de movilidad.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 15.- Todas las personas que transiten por las vías públicas están obligadas a cumplir, en lo que a ellos concierne, las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como las disposiciones, planes, programas y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 16.- Los operadores, conductores, motociclistas, ciclistas, peatones y usuarios del sistema de transporte estarán obligados a vigilar y cumplir los lineamientos de

establecen esta Ley y su Reglamento, así como las disposiciones establecidas en planes, programas y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 17.- El transporte público tiene preferencia de tránsito sobre el transporte particular, estando el particular obligado a respetar los carriles de circulación exclusivos, paradas oficiales de ascenso y descenso de pasajeros, dar preferencia de paso a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y niños, y proteger el espacio de circulación vial compartido con ciclistas. El transporte público en todas sus modalidades garantizará la intermodalidad con el transporte privado y en bicicletas.

ARTÍCULO 18.- Los usuarios del transporte público tendrán las obligaciones siguientes:

I. Pagar la tarifa del servicio público de transporte;

II. No fumar, ni ingerir bebidas alcohólicas en el interior de los

vehículos; III. No arrojar basura u objetos a la vía pública;

IV. No podrá sacar del vehículo parte del cuerpo u objetos;

V. No podrá exigir al conductor su ascenso y descenso fuera de los lugares establecidos para ese efecto;

VI. Abstenerse de realizar actos que ocasionen molestias a los demás pasajeros y al operador;

VII. Queda prohibido el uso de bocinas que reproduzcan sonidos estridentes; y

VIII. No hacer uso de los asientos reservados para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores, cuando algunas de estas personas viajen de pie.

TÍTULO II

DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE MOVILIDAD

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 19.- En la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, concurrirán el Gobernador del Estado, el Instituto y los Ayuntamientos, en los ámbitos de sus respectivas competencias conforme a las atribuciones que establecen dichos ordenamientos. Las atribuciones y facultades que en esta Ley se asignan al Ejecutivo Estatal, serán desempeñadas por conducto del Instituto, salvo aquellas que, por razones constitucionales o legales, le correspondan en exclusiva al Gobernador del Estado.

ARTÍCULO 20.- En el ejercicio de sus atribuciones, los Municipios observarán las disposiciones de esta Ley y su Reglamento y aplicarán las normas generales de carácter técnico, operacionales, y reglamentos locales en la materia.

ARTÍCULO 21.- Son autoridades facultadas para aplicar la presente Ley y vigilar su cumplimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias las siguientes:

I. El Gobernador del Estado;

II. La Secretaría General de Gobierno del Estado de Baja California;

III. La Secretaria de Hacienda del Estado de Baja California;

IV. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;

V. El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California;

VI. Los Municipios; y

VII. Las demás que señalen la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 22.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde al Gobernador del Estado las facultades y atribuciones en la Constitución del Estado, en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 23.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde al Secretario General de Gobierno, las atribuciones previstas en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley, en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 24.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secretaría de Hacienda, realizar las acciones administrativas y legales previstas en la normativa estatal para la ejecución y aplicación de la presente Ley en coordinación con todas las autoridades competentes en materia de movilidad y transporte.

ARTÍCULO 25.- Para el debido cumplimiento de la presente Ley corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, las atribuciones previstas en la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II

DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 26.- El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de decisión, el cual tiene por objeto planificar, regular, controlar, administrar y gestionar la movilidad y el transporte público de personas y bienes en todas sus modalidades, garantizando las condiciones y derechos para el desplazamiento de las personas de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente.

Para la eficiente atención de sus asuntos, el Instituto contará con la estructura, administrativa, ejecutiva y operativa que considere necesaria, para el cumplimiento de las atribuciones señaladas en la presente Ley y su Reglamento, coordinándose con los diferentes órdenes de Gobierno.

La vigilancia del Instituto quedará a cargo de un Órgano Interno de Control en los términos de la Ley aplicable.

ARTÍCULO 27.- Además de las atribuciones previstas en su Decreto de Creación, el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, contará con las atribuciones que disponga la presente Ley, su Reglamento y más disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 28.- El Instituto se regirá por una Junta de Gobierno la cual será la autoridad administrativa superior del Instituto, que quedará integrada por un presidente que será el Secretario General de Gobierno, como coordinador del sector correspondiente; un Secretario Técnico que será el Director General del Instituto y cinco vocales titulares de las siguientes dependencias:

I. Secretaría General Gobierno;

II. Secretaría de Hacienda del Estado;

III. Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial;

IV. Secretaría de Economía Sustentable y Turismo; y,

V. Secretaría de Cultura.

La Junta de Gobierno podrá invitar a instituciones, organizaciones sociales y privadas y otras autoridades a las reuniones que realice cuando así lo considere oportuno, mismas que participarán con voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 29.- Además de las atribuciones y obligaciones previstas en su Decreto de Creación, el Director General del Instituto contará con las atribuciones dispuestas en la presente Ley, su Reglamento y más disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 30.- Al frente del Instituto habrá un Director General, quién será nombrado y removido por el Gobernador del Estado, conforme a los términos establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Baja California.

ARTÍCULO 31.- El Director General es mandatario con representación, investido de atribuciones ejecutivas y administrativas por lo que será responsable del funcionamiento del Instituto, conforme lo dispuesto en el Decreto de Creación del Instituto, la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III

DE LA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DE LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 32.- En el ámbito de su competencia en materia de vialidad, movilidad y transporte las atribuciones de los Municipios del Estado se delimitarán conforme a las siguientes bases:

I. Observar y garantizar desde el ámbito de su competencia el Plan Sectorial de Movilidad y Transporte que el Instituto emita como el instrumento rector en la formulación y aplicación de programas de movilidad, transporte, desarrollo urbano y seguridad, en lo que incidan su ámbito territorial;

II. Coadyuvar con el Instituto, con el fin de verificar la factibilidad de los proyectos de infraestructura y equipamiento vial y servicios conexos a la movilidad, en lo relativo a su territorio, localización y aprovechamiento de áreas, conforme a la normatividad aplicable de carácter técnico y de ordenamiento territorial;

III. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley, su Reglamento, así como las demás disposiciones en la materia.

IV. Celebrar convenios con el Instituto a efecto de coordinarse y cooperar para hacer eficiente y sustentable la movilidad, los servicios de transporte, y el tránsito.

V. Ordenar, regular y administrar los servicios y obras de vialidad y tránsito en los centros de población ubicados en su territorio y en las vías públicas de jurisdicción municipal, conforme a las disposiciones de esta Ley en sus reglamentos respectivos.

VI. Dictar medidas para mejorar la infraestructura vial y los sistemas de control de tránsito de jurisdicción municipal en términos de esta Ley;

VII. Ejecutar las acciones relativas a la ingeniería de tránsito y al señalamiento de las vialidades en los centros de población de su jurisdicción;

VIII. Implementar las directrices, políticas, y normas de observancia general que emita el Instituto respecto a las características específicas y la ubicación que deberán tener los dispositivos y señales para la regulación del tránsito, conforme a las normas generales de carácter técnico;

IX. Coordinarse con el Instituto y con los otros Municipios de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley;

X. Coadyuvar con el Instituto, en la determinación de las rutas de acceso y paso de los vehículos del servicio público de transporte de pasajeros, suburbano, foráneos y de carga; así como los itinerarios y horarios para los vehículos de carga, con el fin de que el Instituto otorgue las autorizaciones correspondientes;

XI. Coadyuvar con el Instituto, para la localización y ubicación del equipamiento para el transporte, tanto para la operación de las terminales de autobuses de pasajeros, como de las terminales de carga, a efecto de tramitar las concesiones, permisos y autorizaciones que en su caso correspondan;

XII. Coadyuvar con el Instituto, para autorizar la ubicación de los lugares para el establecimiento de los sitios de transporte público;

XIII. Coadyuvar con el Instituto, con el fin de que este último autorice la localización de las obras de infraestructura y equipamiento vial;

XIV. Determinar y solicitar, en su jurisdicción territorial, la instalación de los espacios destinados para la ubicación de estacionamientos, ascenso y descenso exclusivo de personas con discapacidad, en lugares preferentes y de fácil acceso a los edificios o espacios públicos, particulares o de Gobierno, cuyo uso esté destinado o implique la concurrencia del público en general;

XV. Solicitar al Instituto asesoría y apoyo para realizar los estudios técnicos y acciones en materia de movilidad urbana, vialidad y tránsito;

XVI. En el ámbito de su respectiva competencia, determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta Ley y a su Reglamento; y

XVII. Promover en el ámbito de su respectiva competencia las acciones para el uso racional del espacio vial, teniendo como prioridad a los peatones, y medios de transporte masivo de pasajeros; así como garantizar espacios delimitados para la guarda de bicicletas y similares.

ARTÍCULO 33.- Los Municipios ejercerán sus atribuciones técnicas y administrativas en materia de vialidad y tránsito, e intervendrán en la formulación y aplicación efectiva de los programas de movilidad y transporte.

TÍTULO III

DE LA POLÍTICA DE MOVILIDAD, PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO I

POLÍTICA DE LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 34.- Para la implementación de la política pública en materia de movilidad, se dará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía de movilidad:

I. Peatones, en especial personas con discapacidad o con movilidad limitada, la cual se refiere a los sectores de la población con necesidades especiales, tales como la población infantil, adultos mayores, mujeres en período de gestación o personas acompañadas de niños pequeños;

II. Ciclistas;

III. Usuarios de transporte no motorizado;

IV. Usuarios de transporte público de pasajeros;

V. Usuarios de medios de transporte ecológicamente sustentables y sostenibles;

VI. Transporte de carga y distribución de bienes;

VII. Motociclistas; y,

VIII. Personas que usan el transporte particular automotor.

ARTÍCULO 35.- La prelación contenida en el artículo anterior debe ser observada en cualquier acción de las autoridades estatales o municipales, relacionada directamente con la movilidad de las personas, bienes y mercancías o que esté vinculada con el objeto de la presente Ley.

CAPÍTULO II

DE LA PLANEACIÓN EN MATERIA DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 36.- El objetivo de la planeación y estudio de la movilidad es el desarrollo de las políticas públicas en la materia, las cuales deberán estar apegadas al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y demás programas relativos, garantizando de forma eficiente y segura la movilidad de las personas, bienes y mercancías.

Son instrumentos de planeación en materia de movilidad:

I. Plan Sectorial de Movilidad y Transporte;

II. Programa Sectorial de Seguridad Vial;

III. Programas especiales; y,

IV. Programas Municipales de Movilidad.

Estos instrumentos deberán apegarse al resto de los instrumentos en materia de planeación, ordenamiento territorial e infraestructura.

ARTÍCULO 37.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte es el instrumento de planeación, gestión, control y evaluación, por medio del cual, el Poder Ejecutivo del Estado establece las bases, objetivos, metas y acciones a seguir en materia de movilidad por lo menos en los siguientes rubros:

I. Gestión de la movilidad;

II. Movilidad activa y grupos vulnerables;

III. Educación vial y cultura de la

movilidad; IV. Transporte de personas;

V. Transporte de bienes y logística de mercancías; y

VI. Transporte particular automotor.

El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte será aplicable en todo el territorio estatal y tiene naturaleza de plan sectorial, para los efectos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo.

ARTÍCULO 38.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte tendrá como objetivos primordiales los siguientes:

I. Disponer de un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente;

II. Impulsar el desarrollo del trasporte para garantizar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, con el fin de elevar la calidad de vida;

III. Mejorar la infraestructura vial en el Estado, partiendo de un diagnóstico de las necesidades, así como un estudio de las vialidades;

IV. Disponer de un sistema de transporte que cubra las necesidades de los usuarios;

V. Implementación de tecnologías de la información en la gestión pública de la movilidad, gestión institucional, y transporte público;

VI. Promover políticas que fomenten la movilidad institucional, entendida como aquella realizada por el sector público y privado o instituciones académicas orientadas a racionalizar el uso del automóvil entre quienes acuden a sus instalaciones, incluyendo sistema de auto compartido, fomento del uso de la bicicleta, y todo tipo de innovación en el sector privado encaminada a dichos fines; y

VII. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 39.- El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte en el Estado de Baja California, deberá considerar todas las medidas técnicas, administrativas y operativas que garanticen el adecuado funcionamiento del Sistema de Movilidad y las políticas conducentes.

El Plan Sectorial de Movilidad y Transporte fomentará la movilidad no motorizada y los medios de transporte masivo, incluyendo, pero no limitándose a las rutas, horarios, frecuencias y los elementos necesarios del sistema de transporte sustentable para lograr los objetivos del Plan; asimismo, implementará sistemas de movilidad, urbanos, suburbanos y rurales.

ARTÍCULO 40.- El Programa Sectorial de Seguridad Vial debe incluir en forma enunciativa, pero no limitativa los siguientes rubros:

I. El diagnóstico;

II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Plan Sectorial de Movilidad en el Estado;

III. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución;

IV. Las acciones de coordinación con dependencias federales, entidades federativas y municipios;

V. Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su caso, corrección del Programa; y,

VI. Los demás que establezca el Reglamento.

ARTÍCULO 41.- Los Programas especiales y Programas Municipales de Movilidad, deberán incluir los elementos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley

CAPÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN DEL ESTADO CON LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 42.- Las autoridades estatales y municipales deberán:

I. Promover la participación de la sociedad en los programas que tengan como objeto conservar, mejorar y optimizar los sistemas de movilidad y transporte, la difusión, sensibilización y adopción de las medidas de prevención y la seguridad vial;

II. Coadyuvar en la formulación y ejecución de los planes y programas en materia de movilidad y transporte con las entidades Federales, Estatales y Municipales que se determinen necesarias.

Los programas y proyectos de movilidad y transporte de alcance intermunicipal en las zonas metropolitanas se definirán y ejecutarán con la participación y coordinación entre los municipios y el Instituto, por lo cual este último determinara las directrices correspondientes.

ARTÍCULO 43.- El Estado y los Municipios, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de vialidad y tránsito a efecto de que:

I. Asesoría y apoye para realizar acciones y estudios técnicos en materia de movilidad, tránsito y seguridad vial;

II. Promoción de una movilidad sustentable, adopción de nuevas tecnologías para el control y administración del tránsito y modos de transporte no motorizados, equipamientos y servicios conexos; y

III. Las demás que sean necesarios para el cumplimiento de la presente Ley y la garantía de al derecho de la movilidad y el transporte.

CAPÍTULO IV

INFRAESTRUCTURA E IMPACTO DE MOVILIDAD

ARTÍCULO 44.- El Instituto en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, integrará la planeación territorial y urbana con la de movilidad desarrollando mecanismos de coordinación y cooperación administrativa para mejorar la eficiencia de los diferentes sistemas de movilidad.

ARTÍCULO 45.- El Instituto a través del Plan Sectorial de Movilidad y Transporte, establecerá los elementos rectores de planeación de la movilidad, transporte y sus infraestructuras en el Estado.

ARTÍCULO 46.- Los proyectos para la construcción de vialidades en el Estado deberán considerar espacios de calidad y con accesibilidad universal para la circulación en términos

de la jerarquía de movilidad establecida en esta Ley, Plan Sectorial de Movilidad y Transporte y Programa Sectorial de Seguridad Vial.

ARTÍCULO 47.- Toda autorización para la realización de obras que por su naturaleza generen un impacto negativo a la movilidad, deben de estar sustentado con sus estudios de impacto ambiental y movilidad validados por las autoridades competentes.

ARTÍCULO 48.- El Instituto coadyuvará con la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial y con los Municipios, para que exista señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular.

ARTÍCULO 49.- El Instituto en coordinación con los Municipios autorizará y establecerá la ubicación y geometría de los cierres de circuito, terminales, lanzaderas, áreas de ascenso y descenso, y demás elementos análogos, de acuerdo a los estudios que se realicen, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 50.- El Instituto en coordinación con los Municipios, determinará los lugares donde los vehículos del servicio público de transporte deban realizar ascensos y descensos de los usuarios de acuerdo a las modalidades y necesidades del servicio.

En el caso de los Municipios donde operen sistemas integrados de transporte, los recorridos de las rutas suburbanas podrán realizarlo según la ubicación de las estaciones de transferencia que sean determinadas por la zona correspondiente, la cual podrá contar con diversas modalidades de transporte.

CAPÍTULO V

DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 51.- El Instituto promoverá y fomentará en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos.

ARTÍCULO 52.- El Instituto coordinará los programas y acciones necesarias en materia de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de todos los usuarios de la vialidad.

ARTÍCULO 53.- El Instituto promoverá ante las autoridades educativas la incorporación a los planes de estudio de cursos, talleres o materias que contengan temas de educación vial y movilidad urbana.

ARTÍCULO 54.- Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a impartir cursos y clases de manejo, deberán obtener ante el Instituto el registro correspondiente, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos por este.

CAPÍTULO VI

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA MOVILIDAD SUSTENTABLE

ARTÍCULO 55.- El Instituto contará con un Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte, de carácter honorífico, con la participación de los sectores público, privado, académico y social que se integrará y funcionará en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento, por lo que contará con atribuciones propositivas, mediante el cual podrá proponer políticas públicas para la implementación de las acciones de movilidad sustentables y transporte en el Estado.

ARTÍCULO 56.- El Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte podrá contar con consejos locales para consultar las particularidades de cada demarcación territorial en materia de movilidad sustentable y transporte por lo que los presidentes municipales del Estado podrán formar parte de dichos consejos locales.

TÍTULO IV

SISTEMAS DE MOVILIDAD

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 57.- Todo vehículo para ocupar o movilizarse en la vía pública, deberá cumplir con los requisitos, condiciones y elementos de identificación oficial, así como estar registrado en el Padrón de Movilidad y Transporte en los términos previstos en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 58.- Los vehículos de transporte público en sus distintas modalidades, además de los requisitos señalados en el artículo anterior, deberán portar los rótulos y cromática que los identifiquen como prestadores del servicio conforme a su título de concesión, permiso o autorización, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley y a las normas técnicas aplicables.

ARTÍCULO 59.- Todo operador deberá portar la licencia de conducir vigente, de acuerdo con el tipo de vehículo de que se trate y estará siempre visible para el usuario y las autoridades, conforme a la clasificación establecida en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 60.- Cualquier vehículo registrado en el Estado, otra entidad federativa o en el extranjero, deberán circular en esta Entidad, con la constancia o póliza de seguro vigente con cobertura nacional que garantice el pago de daños y perjuicios contra terceros, en los términos de la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 61.- Los vehículos con matrículas o placas extranjeras podrán circular en el Estado, siempre y cuando sus conductores acrediten tener licencia vigente de manejo del país donde este matriculado el vehículo y cuenten con identificación con la que acrediten su nacionalidad o residencia; en caso de prestar servicios de turismo o carga deberán de obtener las autorizaciones correspondientes conforme a lo establecido por el Reglamento de esta Ley y disposiciones aplicables, para estos casos, la autoridad correspondiente podrá solicitar a los conductores que acrediten la documentación para su legal circulación.

CAPÍTULO II

DE LA COORDINACIÓN DEL INSTITUTO Y

LA SECRETARIA DE HACIENDA

ARTÍCULO 62.- El Instituto emitirá opiniones técnicas generales y específicas con relación a la expedición o revocación de los elementos de identificación vehicular tales como: placas, tarjetas de circulación y licencias, así como la emisión de políticas y medidas de urgente aplicación para salvaguardar el derecho a la movilidad, la seguridad vial y salud pública.

ARTÍCULO 63.- Para el cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo el Instituto y la Secretaría de Hacienda del Estado deberán expedir de manera conjunta los lineamientos de carácter general y específicos en la materia.

ARTÍCULO 64.- Para efectos de la expedición de los elementos de identificación vehicular tales como placas, tarjetas de circulación y licencias de particulares y del servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades el Instituto y la Secretaría de Hacienda estarán a lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y la Ley que Regula los Servicios de Control Vehicular en el Estado de Baja California.

ARTÍCULO 65.- En coordinación con la Secretaría de Hacienda, el Instituto llevará la administración del Padrón de Movilidad y Transporte.

ARTÍCULO 66.- La expedición de placas de circulación para vehículos de servicio público de transporte, se limitarán en número de conformidad con la concesión o permiso respectivo, en los términos del Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 67.- Las personas que porten una licencia o permiso para conducir expedido en el extranjero u otra entidad federativa, no podrán conducir vehículos de servicio de transporte empadronado en el Estado.

ARTÍCULO 68.- Las licencias vigentes que se expidan en otra entidad federativa o en el extranjero, tendrán la validez plena dentro de la jurisdicción estatal, siempre y cuando correspondan al tipo de vehículo particular de que se trate.

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD Y EL PADRÓN

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 69.- El Sistema de Información de Movilidad y el Padrón de Movilidad estarán a cargo del Instituto y tienen por objeto establecer una base de datos de los vehículos, conductores, operadores, propietarios, personas físicas o morales titulares de permisos o concesiones, los sistemas electrónicos y demás características que incidan en la movilidad.

El Sistema de Información de Movilidad y el Padrón de Movilidad, serán fuentes de consulta legal para las autoridades administrativas, judiciales y fiscales en el Estado de

Baja California, respecto a los derechos de propiedad o de tenencia de los vehículos, y que estos cumplen con todas las obligaciones que le impone la presente Ley.

SECCIÓN II

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA MOVILIDAD

ARTÍCULO 70.- El Sistema de Información para la Movilidad, en lo sucesivo denominado como SIMOV, tiene por objeto integrar la información relacionada con la movilidad y el transporte cuyas secciones se establecen a continuación y se definirán conforme lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley:

I. Padrón de Movilidad y Transporte;

II. Concesiones, permisos y autorizaciones;

III. Empresas de redes de transporte;

IV. Empresas de servicios auxiliares y conexos;

V. Matrículas de vehículos de transporte en todas sus modalidades;

VI. Póliza de seguro o su equivalente vigente;

VII. Actas constitutivas, estatutos y representantes de concesionarios, permisionarios y empresas de redes de transporte;

VIII. Padrón de operadores del servicio público y de conductores;

IX. Tarjetones y gafetes de identificación;

X. Licencias para conducir;

XI. Infracciones, sanciones y comisión de delitos;

XII. Beneficiarios de tarifas preferenciales;

XIII. Personas físicas o morales que presten servicios profesionales relacionados con el transporte por motivo de su especialidad a particulares y al Instituto;

XIV. Conductores y operadores activos y solicitantes de permiso o autorización;

XV. Insumos que se consideren necesarios para la planeación de la movilidad del Estado;

XVI. Sanciones; y

XVII. Las demás que señale el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 71.- La inscripción en el Padrón de Movilidad y Transporte correspondiente al servicio público de transporte y al transporte particular, se otorgará a las personas físicas o morales que cumplan los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de la presente Ley; en el cual se establecerá el procedimiento, términos, condiciones, vigencia, causas de extinción de la inscripción en el padrón, así como los casos en que se necesite autorización específica adicional para realizar transporte particular de pasajeros o de carga por utilizar un medio innovador de propulsión o del despliegue de un mando algorítmico.

ARTÍCULO 72.- La inscripción en el Padrón para vehículos de transporte de seguridad privada, se otorgará a las personas físicas o morales que cumplan con los requisitos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 73.- Los operadores activos y conductores del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades deberán presentarse ante el Instituto cada seis meses, con la finalidad de mantener vigente y actualizado el Padrón de Movilidad y Transporte en los términos del Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN III

DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN

EL PADRÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ARTÍCULO 74.- Para efectos de esta Ley, los vehículos serán clasificados por peso, dimensión, capacidad, uso al que serán destinados y por su fuerza motriz conforme a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 75.- El Servicio de Transporte en Baja California para los efectos de esta Ley, se clasifica en:

I. Servicio de Transporte de Pasajeros, y

II. Servicio de Transporte de Carga.

ARTÍCULO 76.- El Servicio de Transporte de Pasajeros se clasifica en:

I.- Privado

a) Escolar;

b) De personal;
c) Especializado en todas sus modalidades; y,
d) Seguridad Privada.

II.- Público

a) Masivo;
b) De personal;
c) Escolar;
d) Taxi; y,
e) Servicio de Turismo.

III. Servicios prestados por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.

ARTÍCULO 77.- El Servicio de Transporte de Carga, se clasifica en:

I. Público:

a) Carga en general; y
b) Grúas de arrastre, salvamento o depósito para los fines de movilidad que establezca el Instituto.

II. Mercantil:

a) De valores y mensajería;
b) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;
c) Grúas de arrastre o salvamento; y
d) Carga especializada en todas sus modalidades.

III. Privado:

a) Para el servicio de una negociación o empresa;
b) De valores y mensajería;
c) Carga de sustancias tóxicas o peligrosas;
d) Grúas de arrastre o salvamento; y
e) Carga especializada en todas sus modalidades.

IV. Servicios prestados por empresas de redes de transporte y plataformas tecnológicas.

ARTÍCULO 78.- Para los efectos de la presente Ley, se considera que no tienen carácter de servicio de transporte público:

I. El transporte de carga que realicen los productores agropecuarios o las agrupaciones de éstos, legalmente constituidas, en vehículos de su propiedad, para trasladar sus insumos o productos;

II. Los de servicios cuando atiendan única y exclusivamente a los fines de la propia empresa o institución;

III. El servicio de vehículos en arrendamiento, que se preste a personas físicas sin incluir en el contrato los servicios del conductor, mediante el pago de una renta por días, horas o distancia recorrida. Cuando se trate de vehículos que pertenezcan a empresas cuya actividad sea específicamente el arrendamiento de vehículos, tendrán la obligación de registrarlos ante el padrón de movilidad y transporte; y

IV. El transporte que realicen los particulares de carga ligera en vehículos de uso privado para transportar determinados bienes muebles o enseres de su propiedad.

ARTÍCULO 79.- En lo que respecta al peso, dimensiones y capacidad los vehículos de transporte de pasajeros, turismo y carga que transiten en el Estado, se deberán sujetar a lo establecido en el Reglamento de esta Ley, y de manera supletoria se aplicarán las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes.

SECCIÓN IV

DE LA CIRCULACIÓN VEHICULAR

ARTÍCULO 80.- Para circular en las vías públicas de comunicación, los propietarios o conductores de vehículos, deberán atender lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento, así como las normas, lineamientos especificaciones, prohibiciones y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 81.- Queda prohibido conducir vehículos por la vía pública bajo el influjo de bebidas alcohólicas o consumo de enervantes. Los conductores de vehículos del servicio público no deben presentar alguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire espirado, o síntomas simples de aliento alcohólico o estar bajo los efectos de narcóticos.

Los policías municipales, estatales e inspectores de movilidad pueden detener la marcha de un vehículo del servicio público de transporte, cuando se lleven a cabo programas para conductores de vehículos de control de uso o consumo de alcohol o de narcóticos para la prevención de accidentes.

ARTÍCULO 82.- Los inspectores y la autoridad municipal en materia de vialidad y tránsito, deberán retirar de circulación los vehículos en los que se cometan infracciones graves a las normas establecidas en la presente Ley y su Reglamento, así como las disposiciones normativas aplicables.

ARTÍCULO 83.- El Instituto y las autoridades competentes realizarán las acciones, medidas de seguridad y aplicarán las sanciones que se establecen en las leyes federales y estatales en materia de equilibrio ecológico.

ARTÍCULO 84.- Queda prohibido llevar en un vehículo un número mayor de personas al que especifique la tarjeta de circulación respectiva, con excepción del servicio público masivo de acuerdo con sus dimensiones y capacidad del vehículo. En el caso de los vehículos de servicio público de transporte y el especializado serán las autoridades de transporte competentes, las que determinen el número máximo de personas que pueden ser transportadas según el tipo de vehículos y servicio de que se trate conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 85.- Los motociclistas que circulen por las vías públicas de competencia Estatal o municipal deberán de utilizar en todo momento casco de protección que cumpla con las normas de seguridad vial.

ARTÍCULO 86.- En situaciones de emergencia que perturben la paz pública, o contingencia ambiental grave que afecte la salud pública, la Policía de Movilidad o en su caso, las autoridades de movilidad coadyuvaran con las autoridades competentes en la implementación de las medidas necesarias para regular y administrar la movilidad vehicular.

ARTÍCULO 87.- Por razones de interés público y seguridad vial, todas las configuraciones de transporte de carga deberán cumplir estrictamente con las especificaciones de pesos y dimensiones máximas establecidas en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 88.- Los permisionarios o concesionarios de autotransporte federal cuando utilicen vías de jurisdicción estatal, deberán solicitar al Instituto los permisos para realizar ascenso y descenso de pasajeros, carga o descarga de materiales, servicio de arrastre o para establecer terminales, sin menoscabo de lo dispuesto por la normatividad federal. El Instituto dispondrá la expedición de estos permisos, cuidando la no afectación de las concesiones o permisos estatales, en términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO IV

DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 89.- Para dar de alta o hacer cambio de vehículo y poner en servicio los vehículos destinados al servicio de transporte se deberá cumplir con la revisión física mecánica correspondiente, conforme a lo previsto en el Reglamento de la presente Ley, previo trámite de verificación ambiental vehicular. Posteriormente, los referidos vehículos se someterán semestralmente a dicha revisión, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la contaminación ambiental.

ARTÍCULO 90.- Los vehículos destinados al servicio de transporte deberán prestar el servicio en la modalidad para la cual fueron diseñados de origen en su fabricación; y para

la cual obtuvieron su permiso o concesión, quedando prohibido en todo momento modificar o hacer aditamentos a los mismos, conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 91.- Las modalidades del servicio de transporte presentes o futuras dispuestas en la presente Ley y su Reglamento **serán** reguladas y autorizadas por zonas **metropolitanas** o municipios de acuerdo con las necesidades de la prestación de un servicio en específico.

ARTÍCULO 92.- Los servicios de transporte en motocicleta podrán prestarse en todas sus modalidades exceptuando el transporte público de pasajeros, incluyendo a las empresas de redes de transporte conforme lo dispuesto por la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 93.- El Instituto podrá emitir una autorización temporal de alta por única vez, de un vehículo del servicio de transporte público con un plazo de hasta 60 días hábiles siguientes a la adquisición correspondiente cuando se trate de vehículo del año modelo en curso y 30 días para vehículos de otro año modelo.

SECCIÓN II

DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE DE CIUDAD O MUNICIPIO

ARTÍCULO 94.- Los Sistemas Integrados de Transporte de Ciudad son el conjunto de componentes que se encuentran integrados de manera física, operacional, informativa, iconográfica y tarifaria, con el objeto de prestar un servicio público de transporte confiable, eficiente, cómodo y seguro, que permita movilizar a sus usuarios; con altos estándares de calidad, acceso y cobertura en cada ciudad.

ARTÍCULO 95.- El Instituto desarrollará los programas específicos y las políticas para la integración de las diferentes modalidades de servicio de transporte público de pasajeros, en los términos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

El Instituto para tal fin establecerá los mecanismos de coordinación y las acciones correspondientes para la integración y operación conjunta de los sistemas.

ARTÍCULO 96.- Tratándose de los Sistemas Integrados de Transporte de los municipios, los concesionarios y permisionarios de las modalidades de transporte público podrán

incorporarse a los Sistemas Integrados de Transporte, cumpliendo con los requisitos de organización, operación e inversión requeridos para este sistema, en los términos y plazos que establezca el Instituto conforme lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley, debiendo constituir un ente operador del servicio a través de un fideicomiso o la figura jurídica que se acuerde con el Instituto, conforme a las necesidades de cada municipio.

ARTÍCULO 97.- El Instituto en conjunto con el Consejo de Movilidad Sustentable y Transporte, emitirán los lineamientos para la regulación de los esquemas financieros y propuestas tecnológicas que permitan una recaudación o ingreso centralizado de los recursos del pago de las tarifas a través de medios electrónicos, cámara de compensación y demás elementos necesarios en un modelo integrado, multimodal e interoperable de transporte, a efecto de que sean compatibles estatalmente, conforme al Reglamento en la materia. Los sistemas de pago y prepago serán administrados y operados por los propios concesionarios adheridos al Sistema Integrado de Transporte.

Asimismo, el Instituto emitirá lineamientos y procesos para la integración de soluciones y sistemas tecnológicos en el pago electrónico de la prestación del servicio, así como la dispersión de las contraprestaciones.

SECCIÓN III

DE LOS SISTEMAS METROPOLITANOS DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 98.- Los Sistemas Metropolitanos de Transporte, son aquellos que se establecen para la prestación del servicio público de transporte entre los territorios de los Municipios declarados conurbados o zona metropolitana.

ARTÍCULO 99.- Los Sistemas Metropolitanos de Transporte Público están conformados a su vez por los siguientes componentes:

I. Rutas intermunicipales autorizadas por el Ejecutivo Estatal;

II. Régimen de traslados y trasbordos de pasajeros y usuarios;

III. Infraestructura especializada;

IV. Imagen e información, y

V. Régimen de recaudo de tarifas, así como la administración y dispersión de ingresos. El

contenido de dichos componentes se define en el Reglamento de la presente Ley.

El sistema y cada uno de los componentes, en caso de declaratoria de imposibilidad del Instituto, podrán ser concesionados en forma conjunta o separada.

ARTÍCULO 100.- La inspección y vigilancia de los Sistemas Metropolitanos de Transporte, corresponde al Instituto en los términos de la Ley y el Reglamento.

CAPÍTULO V

DE LAS CONCESIONES

ARTÍCULO 101.- Corresponde al Ejecutivo Estatal por conducto del Instituto la prestación del servicio público de transporte de pasajeros; una vez que de acuerdo con los estudios técnicos y operativos se haya determinado la necesidad de prestar este, evaluará si se encuentra en condiciones de realizarlo con medios propios o, ante la imposibilidad de hacerlo, realizar la declaratoria correspondiente y la necesidad de su concesión mediante una convocatoria de licitación pública. Esta declaratoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la Entidad.

ARTÍCULO 102.- Las personas morales interesadas en participar en la prestación del servicio público de transporte masivo, de personal o turístico, requerirán obtener concesión según corresponda, pagar los derechos y contribuciones correspondientes, y cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 103.- Las concesiones únicamente se otorgarán a personas morales, de nacionalidad mexicana, según el servicio de que se trate, constituidas conforme a las leyes del país, y en ellas no podrán participar accionistas o inversionistas extranjeros.

ARTÍCULO 104.- La vigencia de las concesiones será por un periodo mínimo de 6 y máximo de 30 años, y podrán ser prorrogados por periodos iguales y sucesivos, conforme a lo previsto en la presente Ley, siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos sus términos, las condiciones establecidas en la Concesión respectiva.

ARTÍCULO 105.- El concesionario deberá de presentar la solicitud de revalidación de su concesión ante el Instituto, cuando menos antes de 180 (ciento ochenta) días naturales previos al vencimiento efectivo de la concesión de que se trate.

ARTÍCULO 106.- El Instituto deberá realizar los estudios técnicos y operativos para determinar las necesidades de servicio público para el otorgamiento, modificación o revalidación de una concesión en base a lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 107.- La declaratoria de necesidades de servicio de transporte público que emita la Junta de Gobierno respecto del otorgamiento de concesión, deberá contener lo siguiente:

I. Los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento;

II. La modalidad y el número de concesiones para expedir, en base a la necesidad acreditada en los estudios técnicos referidos en la fracción I de este artículo;

III. El tipo y características de los vehículos que se requieran; y,

IV. Los lineamientos generales para la prestación del servicio que corresponda.

ARTÍCULO 108.- Una vez emitida la declaratoria, en un plazo no mayor a diez días hábiles, se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado y en dos de los diarios de mayor circulación en la entidad, y en el Municipio y/o Zona Metropolitana en donde tenga efectos la declaratoria, anexando la convocatoria pública para la licitación de la concesión del servicio de transporte público, la cual deberá contener lo previsto por el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN I

DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 109.- El otorgamiento de concesiones para la prestación del servicio público de transporte, servicios conexos a la movilidad y de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos sancionados se realizará a través de convocatorias públicas, cuyas bases

contendrán la información, datos y particularidades que establece el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO.110.- Los participantes de la convocatoria deberán examinar las condiciones y especificaciones que se determinan en las bases de dicha convocatoria, en la inteligencia de que si se omite proporcionar la información requerida la propuesta será rechazada.

ARTÍCULO 111.- Previo a la presentación de propuestas se podrá realizar una junta de aclaraciones que se celebrará en el lugar y fecha que se indique en la convocatoria respectiva.

La junta de aclaraciones tendrá por objeto que el Instituto aclare y conteste las preguntas sobre cualquier aspecto que pueda plantearse en esta etapa del proceso.

Al finalizar la junta de aclaraciones, se levantará un acta circunstanciada de hechos, de lo desahogado en dicha junta la cual deberá estar firmada por todos los participantes de la misma.

ARTÍCULO 112.- El Instituto como autoridad convocante tendrá la facultad de prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas.

ARTÍCULO 113.- Los participantes deberán acreditar que cuentan con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para sustentar el servicio en la ruta propuesta presentando una validación de su crédito de la empresa armadora de los vehículos con los cuales participa en la licitación sin que esto vaya en perjuicio de otras áreas de servicio.

ARTÍCULO 114.- Los representantes legales de los participantes deberán acreditar su personalidad a través de poder notarial, en el cual se haga constar su capacidad jurídica de representación.

ARTÍCULO 115.- El acto de presentación de las propuestas de servicio se realizará en el día, lugar y hora definido en la convocatoria respectiva, las propuestas y todos los documentos requeridos deberán ser recibidos por el Instituto al inicio de este acto, en el que podrán participar los interesados que hayan sido inscritos.

ARTÍCULO 116.- Se deberá levantar acta de la ceremonia de presentación y apertura de propuestas, misma que deberá contener lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 117.- Para facilitar la evaluación de los participantes en su caso, el Instituto podrá solicitar por escrito aclaración sobre su propuesta. La respuesta de los participantes deberá formularse por escrito.

ARTÍCULO 118.- Desde el momento de la apertura de la propuesta hasta finalizar el acto de fallo, no se permitirá a los participantes mantenerse en contacto con el Instituto en cuanto a ningún aspecto relativo a su propuesta, salvo el caso en que el interesado sea requerido por el Instituto.

ARTÍCULO 119.- El Instituto podrá rechazar cualquier propuesta por incumplimiento o insuficiencia de algún requisito especificado, establecido en las bases de la convocatoria.

Asimismo, por causa justificada, el Instituto podrá declarar desierto el procedimiento en cualquier momento previo al otorgamiento de la autorización, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del interesado afectado por esta determinación.

ARTÍCULO 120.- En el acto de presentación y apertura de propuestas, o en el proceso de revisión y evaluación, el Instituto estará facultada para descalificar a los interesados participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

I. Por incumplir con los requisitos especificados en las bases de la convocatoria;

II. Presentar las propuestas en sobre abierto, sin contar con las medidas de seguridad previstas en las bases correspondientes;

III. La falta de acreditación de personalidad legal por parte del representante y/o apoderado del participante;

IV. Omitir firma, datos o documentos requeridos en las bases correspondientes; y

V. Proponer alternativas distintas a las condiciones establecidas en las bases correspondientes;

ARTÍCULO 121.- En el supuesto del artículo anterior, se asentará en un acta circunstanciada de hechos los motivos que generaron la descalificación y posteriormente se hará mención y anexará al fallo del Comité de Concesiones y Permisos cuya integración y atribuciones señaladas en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 122.- Se podrá declarar desierta la convocatoria en los siguientes casos:

I. Cuando ningún interesado se hubiere inscrito para participar en el acto de apertura de propuestas; y

II. Cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos establecidos en las bases o que sus características no sean aceptables, previa investigación efectuada.

ARTÍCULO 123.- Concluido el acto de presentación y apertura de sobres, se realizará un análisis de la documentación legal y técnica de las propuestas, verificando que se cumplan los requerimientos, condiciones, calidad y características especificadas para el otorgamiento de la concesión.

ARTÍCULO 124.- El Instituto, dictaminará mediante un fallo, la propuesta que resulte vencedora.

En el supuesto de que más de un interesado cumpla con los requisitos especificados en la convocatoria, el Instituto deberá fallar a favor de la cual considere la más conveniente para la prestación de un servicio público en base al equipo, sustentabilidad, calidad del servicio, ubicación, características y capacidad de operación, según se describa en la propuesta presentada, asimismo se tomarán en cuenta las ofertas o contraprestaciones para la mejora en la prestación del servicio público de transporte.

ARTÍCULO 125.- En el caso que el interesado que resulte vencedor rechazara la asignación, al momento del fallo, el Instituto podrá designar a otro interesado que cumpla con los requisitos establecidos en la convocatoria.

ARTÍCULO 126.- El fallo del proceso se dará a conocer por parte del Comité de Concesiones y Permisos en la fecha y lugar indicados en la convocatoria, en su caso, podrá optar por comunicarlo por escrito a cada uno de los interesados.

Contra la resolución que contenga el fallo, no procederá recurso alguno.

A este acto serán invitados todos los participantes cuyas propuestas hayan sido admitidas, declarando cuál participante fue seleccionado para recibir la concesión correspondiente. Para constar el fallo se levantará acta, la que firmarán los asistentes, a quienes se les entregará copia de la misma, conteniendo además de la declaración anterior, los datos de identificación de la convocatoria.

El acta de fallo se remitirá a la Junta de Gobierno para que esta emita la resolución correspondiente.

ARTÍCULO 127.- Una vez declarado el participante vencedor, la Junta de Gobierno emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes, misma que será notificada al vencedor en los términos del Reglamento de esta Ley, procediendo a su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 128.- El término para iniciar la prestación del servicio público será determinado en la concesión respectiva, si transcurrido el término estipulado en la concesión, sin haberse iniciado la operación del servicio autorizado y acreditado este hecho mediante acta circunstanciada, la Junta de Gobierno dejará sin efecto la concesión otorgada, haciéndose efectiva la garantía de cumplimiento, notificando al afectado.

ARTÍCULO 129.- El título de concesión para la explotación del servicio de transporte público contendrá los elementos señalados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 130.- Los derechos derivados de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público no podrán ser transferidos, otorgados en garantía, ni ser embargados o constituirse sobre ellos gravamen alguno. Los medios de transporte, sus servicios auxiliares, accesorios, dependencias y bienes muebles e inmuebles adquiridos para la prestación de este, estarán en todo momento afectos al servicio público, quien solo podrá constituir garantía sobre ellos o enajenarlos, mediante el previo y expreso consentimiento del Instituto.

ARTÍCULO 131.- Sólo se podrán constituir garantías o gravámenes sobre los vehículos y demás bienes propiedad de la concesionaria por un término que en ningún caso comprenderán la última décima parte del total del tiempo por el que se haya otorgado la concesión y previo acuerdo del Instituto.

SECCIÓN II

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ARTÍCULO 132.- El servicio público de transporte masivo de personas es el que opera sujeto a itinerario, horario y tarifa fija, variable o integrada, es prestado en vehículos autobús u otro tipo de vehículos de mayor capacidad que requieran de su propia estructura y equipamiento para su funcionamiento conforme a su título de concesión y el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 133.- Previa autorización del Instituto, los concesionarios y permisionarios podrán celebrar, entre sí o con terceros, los convenios y/o acuerdos de enlace, fusión, combinación de equipos y cualquier otro que tenga por objeto mejorar el servicio público de transporte tales como servicios conexos de pago o prepago compatibles en todo momento con los sistemas integrados de transporte, siempre y cuando comprueben en forma técnica, social y jurídica que dichos convenios sean transparentes, viables y sustentables, conforme la presentes Ley, su reglamento y disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 134.- Las concesiones que otorgue el Instituto a las personas morales para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y usuarios, comprende las siguientes modalidades:

I. Masivo;

II. De personal; y

III. Turístico

ARTÍCULO 135.- Será necesario el otorgamiento de concesiones, en los siguientes casos:

I. Cuando por necesidades del servicio público de transporte de pasajeros se requieran de otras modalidades de carácter masivo;

II. En el caso de apertura de nuevas rutas, cuando el Instituto determine la necesidad de prestación de servicio y convoque a las empresas a una licitación para su otorgamiento;

III. Para continuar explotando una concesión, al concluir su vigencia, sujetándose a lo que para el caso disponga la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 136.- Los vehículos dados de alta por los concesionarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros deberán cumplir con las normas generales de carácter técnico aplicables, en cada caso y contarán con cámaras de seguridad y video grabación para verificar la seguridad de los usuarios y la conducción del operador conforme a lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 137.- También deberán de contar con la instalación y tener en funcionamiento un sistema de monitoreo y seguimiento de posición global, también conocido como GPS por sus siglas en inglés. El sistema de monitoreo deberá estar enlazado en todo momento con el sistema del Instituto y por los mecanismos idóneos contemplados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 138.- A efecto de garantizar la movilidad a personas con discapacidad, los vehículos registrados en las concesiones deberán de contar con mecanismos que permitan la accesibilidad en el porcentaje y rutas que determine el Plan de Movilidad y Transporte.

Las autoridades municipales y estatales en materia de movilidad deberán de garantizar la infraestructura mínima para el cumplimiento de la presente disposición.

SECCIÓN III

TRANSPORTE DE PERSONAL

ARTÍCULO 139.- El transporte de personal es el destinado al traslado de trabajadores de empresas, industrias o fuentes de trabajo, con horario, precio, origen, destino y recorridos específicos de acuerdo con las necesidades de las empresas contratantes. Para el servicio se deben utilizar vehículos tipo autobús conforme a las capacidades autorizadas en el Reglamento de esta Ley, quedando prohibido modificar sus interiores para admitir mayor número de pasajeros al cupo diseñado de origen.

Los usuarios de este servicio podrán viajar con sus hijos menores de 4 años de edad, los cuales deberán contar con gafete expedido por la empresa, industria o fuente de trabajo.

Cuando se pretenda otorgar esta concesión sobre este tipo de transporte, los interesados deberán presentar ante el Instituto los estudios técnicos que deberán ser realizados por profesionales en la materia debidamente autorizados por dicho Instituto o bien solicitarle a este la realización de dichos estudios previo pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 140.- Esta modalidad de transporte debe circular en un horario que será de acuerdo con el contrato celebrado entre el concesionario y la empresa a la que le preste el servicio, en los términos de la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 141.- Los concesionarios de este servicio deberán notificar al Instituto los recorridos principales a utilizarse como parte de las condiciones de la prestación del servicio pactado con el cliente. La notificación será por escrito, dentro del término de 15 (quince) días hábiles posteriores a la firma del contrato respectivo y a la notificación se le deberá acompañar el trazo de los recorridos principales, en los formatos por escrito o de manera electrónica que el Instituto establezca para tal efecto.

ARTÍCULO 142.- Los concesionarios deberán presentar y actualizar anualmente, ante el Instituto, el padrón de personas morales con las que hayan celebrado contrato para la prestación del servicio, con la finalidad de acreditar debidamente la continuidad de la prestación del mismo.

ARTÍCULO 143.- Los concesionarios deben abstenerse de transportar a personas ajenas a la persona moral a la que se le presta el servicio, debiendo de contener en los contratos de transporte cláusula que contenga tal disposición.

Los usuarios del servicio por su parte deberán de portar, en lugar visible, identificación o uniforme que los distinga como usuarios o dependientes del cliente.

Los concesionarios y operadores de esta modalidad de concesión se abstendrán en todo momento de realizar cobro directo de tarifa a usuario alguno, así como de realizar ascenso y descenso de pasaje en un solo sentido sobre rutas concesionadas al transporte masivo.

ARTÍCULO 144.- Los concesionarios podrán asociarse, convenir o realizar una actividad conexa, en beneficio de la prestación del servicio, absteniéndose de incurrir en prácticas restrictivas, previa autorización del Instituto.

ARTÍCULO 145.- Se entenderá por Práctica Restrictiva el hecho de que alguien, por sí, por interpósita persona, o en unión de otros concesionarios o terceros, realicen cualquiera de los siguientes actos:

I. Oferten, comercialicen, fomenten, vendan, contraten, acuerden o negocien sus servicios por debajo del precio real, entendiéndose por éste el integrado por los costos de operación del servicio, contribuciones, más la ganancia mínima razonable; incurrirán en práctica de competencia desleal y ruinosa, así como quienes realicen, fomenten,

contribuyan, inciten, organicen, instiguen o coaliguen con la finalidad de realizar prácticas restrictivas de mercado;

II. Incurran en competencia desleal y ruinosa;

En los casos señalados con antelación, los infractores serán sujetos al procedimiento administrativo correspondiente y serán sancionados conforme a la gravedad de la acción, con una o más de las siguientes sanciones siendo enunciativas más no limitativas:

a. Revocación o cancelación de la concesión;

b. Multa de 4000 a 5000 UMAS;

c. Decomiso de los bienes utilizados; y,

d. El pago de daños y perjuicios que ocasiones a terceros, así como al erario estatal y/o municipal.

ARTÍCULO 146. - Incurre también en competencia desleal y ruinosa, toda aquella persona física o moral que oferte promocione, comercialice, explote o preste el servicio, sin contar con concesión expedida por el Instituto, sin perjuicio de los daños y perjuicios que ocasione a terceros o la comisión de un delito. Y será sujeta de procedimiento administrativo, por las omisiones en el pago de las contribuciones omitidas al Estado y se les sancionará según la gravedad con una o más de las siguientes sanciones siendo enunciativas más no limitativas:

I. En la comisión de un delito se dará vista a la autoridad competente;

II. Multa de 4000 a 5920 UMAS;

III. Decomiso de los bienes utilizados; y,

IV. El pago de los daños y perjuicios que ocasionen a terceros, así como al erario estatal.

SECCIÓN IV

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TURÍSTICO

ARTÍCULO 147.- El Servicio de Transporte Turístico, es el destinado al traslado de personas a lugares de esparcimiento, excursión o de recreo con interés turístico y esparcimiento en general, mediante renta por tiempo, distancia o viaje. Se concederán concesión por un término de 6 años y los vehículos podrán tener una antigüedad máxima de 10 años y de 2 años para el alta.

Se presta en vehículos microbús, minibús y autobús de distintas capacidades de pasajeros, también puede ser prestado en vehículos de tracción humana o animal acondicionados especialmente para brindar comodidad y seguridad a los usuarios de este servicio.

ARTÍCULO 148.- Los solicitantes de concesión, deberán anexar los estudios técnicos que justifiquen el servicio en los diferentes puntos de interés y la afluencia de turistas estimada, conforme a las disposiciones que marque el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 149.- Los concesionarios de esta modalidad no podrán:

I. Realizar recorridos a destinos o sitios distintos a los que tiene autorizado;

II. Realizar paradas de ascenso o descenso de pasajeros fuera de las zonas o sitios de interés autorizadas en la concesión circuito o en los sitios; y,

III. Trasladar pasajeros de pie o fuera de su asiento o pasajeros que no cuenten con la contraseña o comprobante que ampara el recorrido del circuito.

ARTÍCULO 150.- Los operadores de los vehículos deberán presentar la constancia emitida por autoridad estatal en materia de turismo que acredite ante la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo que cuenta con la capacitación que se requiere para la adecuada prestación del servicio.

El sistema de cobro deberá amparar la totalidad del recorrido y en sitio de ascenso y descenso del pasaje o usuario en los diferentes puntos de interés señalados en la concesión correspondiente.

ARTÍCULO 151.- Los vehículos que prestan el servicio de transporte turístico deberán cumplir con los requisitos previstos en el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN V

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCESIONARIOS

ARTÍCULO 152.- Son derechos de los concesionarios:

I. Solicitar la revalidación de la concesión;

II. Solicitar ampliación o modificación de la concesión otorgada, sujetándose a las formalidades que para el efecto establece la presente Ley y su Reglamento;

III. Proponer enlaces o fusiones de sus servicios e instalaciones con las de otros concesionarios, permisionarios y otros medios de transporte; y,

IV. Constituir fideicomisos, asociaciones o agrupaciones en cualquiera de las formas legalmente permitidas, con el propósito de mejorar y optimizar su operación y la prestación del servicio, compartiendo programas y sistemas, realizando adquisiciones en común para abatir costos, y cualquier otra acción o medida que procure la eficiencia y rentabilidad en la prestación del servicio para el beneficio del usuario. La constitución o modificación de estas figuras deberán ser autorizadas por el Instituto.

ARTÍCULO 153.- Son obligaciones de los concesionarios:

I. Prestar el servicio en los términos y modalidades de la concesión otorgada;

II. Aportar los datos técnicos e información específica que se requiera, para coadyuvar al mejoramiento del servicio público;

III. Proporcionar y registrar ante el Instituto un correo electrónico oficial, a efecto de recibir todo tipo de notificaciones;

IV. Efectuar el servicio con los vehículos autorizadas, no debiendo destinarlas a otros fines distintos a su modalidad;

V. Presentar al Instituto el padrón de operadores con sus actualizaciones correspondientes cada que lo requiera el mismo, o por lo menos cada 6 meses de manera obligatoria;

VI. Someter a los vehículos a que se refiera la concesión a una revisión física mecánica semestral de conformidad a los programas que el Instituto establezca al efecto, con objeto de garantizar la seguridad de los usuarios y evitar la contaminación ambiental;

VII. Llevar control en una bitácora de toda revisión que realice para verificar el estado físico, mecánico y eléctrico que guardan los vehículos conforme al Reglamento de la presente Ley;

VIII. Retirar de la circulación aquellos vehículos que no garanticen la seguridad del usuario, contaminen el medio ambiente o cuyo estado físico a juicio del Instituto, no cumpla con la calidad del servicio;

IX. Operar únicamente en las rutas autorizadas, debiendo cumplir con los horarios, itinerarios y tarifas aprobadas;

X. Enlazar sus servicios e instalaciones con la de otros, conforme lo disponga el Instituto, solo en caso de emergencia;

XI. Contar con terminales, encierros y demás servicios auxiliares que garanticen la adecuada prestación del servicio;

XII. Capacitar a los operadores, personal de operación y de servicios, así como proporcionarles los recursos, medios y accesorios adecuados para el desempeño de sus funciones;

XIII. Asegurarse que los operadores porten el uniforme correspondiente, así como la bitácora de inspección y mantenimiento, misma que deberá portarse en el vehículo durante los traslados;

XIV. Ser solidariamente responsable de que sus operadores no realicen su labor bajo los influjos del alcohol o sustancias tóxicas;

XV. Conservar el parque vehicular y las instalaciones terminales, en las mejores condiciones de higiene, funcionalidad, cumpliendo con las normas de seguridad y prevención de incendios de conformidad con las disposiciones que dicten las autoridades competentes;

XVI. Señalar en forma visible en el interior de los vehículos, las tarifas autorizadas;

XVII. Señalar en forma visible en el interior de los vehículos la prohibición de fumar o escupir dentro del vehículo, el nombre del operador, el domicilio y teléfono del Instituto, para recibir quejas y en el exterior portar el color o cromática autorizada;

XVIII. Señalar en forma visible al interior y exterior del vehículo el número económico y la ruta, de acuerdo con las modalidades que al efecto determine el Instituto;

XIX. Registrar ante el Instituto, cada uno de los vehículos autorizados para la explotación de la concesión, anexando la documentación que al efecto se determine en el Reglamento de esta Ley;

XX. Responder ante el Instituto, por los actos u omisiones del personal de su empresa que afecten el servicio público, independientemente de las sanciones que correspondan a las instancias jurídicas competentes;

XXI. Proporcionar al Instituto toda la información que se requiera sobre la explotación de la concesión, debiendo brindar las facilidades necesarias para el desempeño de sus funciones;

XXII. Contratar y mantener siempre vigente para cada vehículo la póliza de seguro para proteger a los pasajeros en su integridad física y contra daños a terceros, cuyo monto sea suficiente para cubrir cualquier siniestro que afecte a los usuarios, que garantice la atención médica y hospitalaria de todos los pasajeros, dicho seguro expedido por una

empresa aseguradora o de una Sociedad Mutualista debidamente acreditadas y certificadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en los términos de la normatividad aplicable vigente;

XXIII. Tener instalado un sistema de monitoreo y seguimiento de posición global, también conocido como GPS por sus siglas en inglés. El sistema de monitoreo deberá estar enlazado en todo momento con el sistema del Instituto y por los mecanismos idóneos contemplados en la normatividad aplicable;

XXIV. Instalar y operar un sistema de control de abordaje y un sistema de pago y prepago, en caso de adherirse a un sistema integrado de transporte en los términos del Artículo 133 de la presente Ley; estos sistemas deberán estar enlazados con el sistema del Instituto y a los mecanismos idóneos contemplados en el Reglamento de esta Ley;

XXV. Transferir al Instituto los datos provenientes de sus sistemas de control de abordaje y pago electrónico en cada uno de sus vehículos y rutas concesionadas, por lo menos en lo que se refiere a número de ascensos y descensos, transbordos y tarifas aplicadas, conforme a lo dispuesto en la fracción anterior;

XXVI. Transferir al Instituto la información generada en el GPS instalado en cada vehículo y en cada una de las rutas concesionadas por lo menos respecto a número de vehículos y rutas en operación, velocidad, horarios, paradas, frecuencias de paso entre los vehículos, puntos específicos de ascensos y descensos, además de lo que le sea solicitado específicamente, conforme a la normatividad aplicable;

XXVII. Pagar las contribuciones que correspondan por los derechos derivados de su concesión; y,

XXVIII. Las demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

Al servicio público de transporte de personal no le aplicarán las fracciones IX, XVI, XXII, XXIV y XXV.

ARTÍCULO 154.- Las personas morales titulares de concesión o las que se lleguen a constituir, así como los miembros de la sociedad, serán los sujetos obligados, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la presente Ley y Reglamento.

ARTÍCULO 155.- Los operadores de transporte público tendrán las siguientes obligaciones:

I. Prestar el servicio con puntualidad en cada uno de los diferentes turnos asignados y de acuerdo con los horarios establecidos;

II. Portar en un lugar visible del interior del vehículo el gafete;

III. Cumplir con el horario asignado para el recorrido, no debiendo permanecer en las terminales de ruta más tiempo que el previamente señalado para ajuste de tiempo;

IV. Efectuar los recorridos de origen a destino en su totalidad, sin salirse de la ruta fijada, y en caso de presentarse una contingencia que obligue a su desvío, procurará incorporarse al trayecto autorizado en el punto más cercano posible.

V. Realizar las paradas de ascenso y descenso de pasajeros, exclusivamente en los espacios previamente determinados para tal fin, junto a las banquetas, y no se estacionarán más que por el tiempo necesario para tomar y dejar pasaje;

VI. Proporcionar a los usuarios los boletos correspondientes que acrediten el pago en efectivo del servicio del transporte;

VII. Abstenerse de fumar, tomar bebidas alcohólicas o estupefacientes, leer, platicar y utilizar radios, teléfonos celulares u objetos de cualquier tipo que pueda distraer su atención durante la prestación del servicio;

VIII. No podrán llevar el aparato de sonido encendido con un volumen mayor a 60 decibeles, de tal forma que le permita escuchar el timbre e indicaciones diversas de los pasajeros, así como de la circulación del tránsito, quedando prohibido el transmitir o reproducir material discográfico musical que promueva la cultura de la violencia o haga apología al delito;

IX. Mantener el vehículo libre de adornos que distraigan, dificulten o impidan la visibilidad del conductor y los usuarios;

X. Atender a los pasajeros con respeto y cortesía, así como cuidar el uso del lenguaje, evitando proferir palabras obscenas u ofensivas;

XI. Realizar el servicio debidamente uniformado y en condiciones adecuadas de higiene, apariencia y presentación en todo momento durante su jornada laboral;

XII. Los conductores sólo permitirán viajar a las personas en el interior de los vehículos y no deben permitir que persona alguna o acompañante viaje en las escaleras de ascenso o descenso;

XIII. No pondrán en movimiento el vehículo antes de que el pasajero termine de subir o bajar;

XIV. Proporcionar a los inspectores del transporte o a los agentes de las instituciones policiales estatales y municipales, toda la información que les sea solicitada en el desempeño de sus funciones;

XV. No efectuarán reparación alguna, ni hacer labores de limpieza del vehículo en la vía pública;

XVI. Cumplir con todos los requisitos que acrediten su capacidad en la conducción de vehículos ante las autoridades competentes;

XVII. Cumplir con las disposiciones que señala la presente Ley y su Reglamento, así como las de policía y tránsito municipales;

XVIII. Los operadores de los vehículos del servicio de transporte público deberán someterse por lo menos de manera semestral y en forma extraordinaria al examen antidopaje aplicado por el Instituto;

XIX. Los operadores de los vehículos deberán impedir el ascenso a personas en estado notable de ebriedad o que se encuentren bajo el influjo de estupefacientes. Asimismo, se prohíbe que permanezcan abordo personas que, con palabras soeces, actos inmorales o que de alguna u otra forma alteren el orden público o causen molestias al pasaje;

XX. En el ejercicio de sus labores, los conductores serán directamente responsables de las infracciones que cometan; y,

XXI. Dar cumplimiento a todas las disposiciones que establezca el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN VI

DE LOS HORARIOS E ITINERARIOS

ARTÍCULO 156.- Los horarios e itinerarios y, cuando aplique, las paradas y las frecuencias, serán aprobados por el Instituto, tomando en cuenta el dictamen técnico emitido, conforme a las normas y procedimientos que se establezcan en el Reglamento.

El Instituto deberá incluir a estos itinerarios la implementación de transporte público nocturno, estableciendo para estos efectos un horario y una frecuencia que cubran las necesidades de los usuarios del servicio, en este turno.

CAPÍTULO VI

DE LOS PERMISOS DE TRANSPORTE

SECCIÓN I

DE LAS BASES GENERALES PARA OTORGAR PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 157.- El Instituto a través de la Junta de Gobierno, para el cumplimiento de sus atribuciones, podrá otorgar y expedir los permisos para la explotación del servicio público de transporte en los términos de esta Ley y su Reglamento, siendo los siguientes:

I. Taxi;

II. Transporte escolar;

III. Transporte de Carga en general, especializada y grúa; y,

IV. Transporte de Carga privado.

ARTÍCULO 158.- El otorgamiento de permisos se limitará a la exigencia del interés público de conformidad con los estudios técnicos que realice el Instituto, atendiendo a lo siguiente:

I. La necesidad que justifique el servicio;

II. La capacidad del servicio adecuado a las necesidades, tomando en cuenta en general las exigencias de la población; y,

III. Condiciones técnicas de prestación del servicio, en cuanto a la seguridad, eficiencia y costo.

ARTÍCULO 159.- Los estudios técnicos y operativos que se realicen con la finalidad de determinar la necesidad de prestación del servicio de transporte de taxi, serán realizados por el Instituto. Estos estudios deberán contener:

I. La demanda y programas de explotación, que soporten las características de la solicitud sujeta a permiso;

II. Infraestructura para la prestación del servicio; III.

Características del tipo de vehículo a utilizar; y,

IV. Programa de protección al ambiente y atención al público.

ARTÍCULO 160.- Una vez que, de acuerdo con los estudios técnicos y operativos, se determine la necesidad de prestación y tipo del servicio, la Junta de Gobierno del Instituto emitirá un acuerdo mediante el cual establezca el servicio que se autoriza, el tipo y número de vehículos que deban cubrirla, la base tarifaria y demás condiciones y características que deban observarse.

Este acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en un diario de mayor circulación en los municipios de que se trate.

SECCIÓN II

DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN PERMISO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 161.- Los interesados en obtener un permiso en cualquiera de sus modalidades, solo podrán presentar solicitud cuando exista convocatoria expresa emitida por el Instituto, debiendo pagar los derechos correspondientes y reunir además de lo establecido en la misma los requisitos que establece la presente Ley y normatividad aplicable.

La solicitud mencionada en el presente artículo deberá ir acompañado de la última declaratoria de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, así como la opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales.

ARTICULO 162.- El permiso para prestar el servicio público de pasajeros en la modalidad de taxi es personal y tendrá la naturaleza de patrimonio familiar, cuando se proceda con lo establecido por el Código Civil del Estado de Baja California, así como lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento. La naturaleza de patrimonio familiar solo aplicará para un solo permiso por titular, mismo que será inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

A un siendo personal el permiso se podrá aprovechar el mismo mediante un operador sustituto del permisionario que cuente con tarjetón otorgado por el Instituto, con el objeto de prestar el servicio de una manera continua conforme al Reglamento y normatividad aplicable.

ARTÍCULO 163.- El Instituto, en caso de otorgamiento de nuevos permisos de taxi, podrá tomar en consideración la antigüedad, historial de servicio de los operadores como un factor preferencial, en los términos señalados en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 164.- El permiso deberá contener los datos establecidos por el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 165.- Una vez obtenido el permiso, el permisionario deberá proporcionar y registrar ante el Instituto correo electrónico a efecto de recibir todo tipo de notificaciones para su entrada en operación, además de cumplir con los requisitos que establece el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 166.- El Instituto no podrá otorgar permisos para la prestación del servicio de taxi, en los siguientes casos:

I. Cuando no acrediten la nacionalidad mexicana;

II. Cuando se declare saturado el servicio de que se trate, o se pueda generar una competencia ruinosa;

III. Cuando al solicitante ya se le hubieren otorgado hasta tres permisos de taxi en cualquiera de sus modalidades; y,

IV. Cuando el solicitante sea un servidor público de la administración pública, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta, sin limitación de grado.

ARTÍCULO 167.- El beneficiario de permisionario en todo momento deberá ser cónyuge o concubino conforme a la legislación aplicable o familiar en línea consanguínea directa hasta tercer grado, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 168.- La vigencia de los permisos será de 6 (seis) años y podrán ser revalidados por periodos iguales, siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos sus términos, las condiciones establecidas en el permiso otorgado.

ARTÍCULO 169.- Los interesados en obtener la revalidación del permiso, deberán presentarse personalmente, dentro de los tres meses previos a su vencimiento ante la Dirección que les corresponda, debiendo acreditar estar al corriente en el pago de los derechos correspondientes, salvo causa de fuerza mayor o debidamente justificada, así como acreditar la libertad de adeudos y gravámenes ante la Secretaría de Hacienda del Estado, así como la última declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria y la opinión de cumplimiento positivo de obligaciones fiscales.

En ninguna circunstancia se permitirá el trámite de revalidación de permiso por mediación de representante legal, apoderado, mandatario o cualquier otra figura de representación, de inicio a fin del trámite.

El trámite de permisionarios de 65 (sesenta y cinco) años o más de edad o de aquellas personas que sufran de alguna discapacidad física que les dificulte presentarse a las oficinas a realizar dicho trámite, deberán de hacer del conocimiento del Instituto, para que se provea una dispensa especial en los términos que establece el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 170.- Una vez concluido el término señalado en el artículo anterior se contarán sesenta días a partir de la fecha del vencimiento del permiso para solicitar la revalidación y si una vez agotado el término el permisionario aún no ha presentado su solicitud de revalidación, el Instituto turnara los permisos a la Junta de Gobierno para proceder a la cancelación de estos.

ARTÍCULO 171.- Las revalidaciones de permisos se solicitan por escrito dirigido al Instituto, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 172.- El Instituto deberá evaluar y dictaminar si la utilidad pública o la necesidad de servicio persisten, para estos efectos deberá determinar si mantiene, modifica o cancela la condición del permiso en la modalidad de taxi libre.

ARTICULO 173.- El Instituto deberá dar respuesta a la solicitud de revalidación en un plazo no mayor a noventa días contados a partir de la fecha de presentación de esta, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento, incluyendo el pago de los correspondientes derechos.

ARTÍCULO 174.- El Director, propondrá a la Junta de Gobierno la modificación de las condiciones en que fueron otorgados los permisos para la prestación del servicio de transporte público, cuando así lo determine el dictamen correspondiente.

ARTÍCULO 175.- Los permisionarios del servicio de transporte podrán asociarse, convenir, pactar, acordar o realizar una actividad análoga, con la finalidad de proteger sus intereses de grupo en beneficio de la prestación del servicio público por lo el Instituto deberá de reconocer la asociación, gremio o sindicato, así como su representación legal conforme al Reglamento de esta Ley, por lo que quedara prohibido en todo momento realizar prácticas restrictivas de comercio a efecto de observar la Ley Federal de Competencia Económica.

ARTÍCULO 176.- Las asociaciones, gremios o sindicatos podrán adherirse a sistemas o subsistemas de transporte público mediante la celebración de convenios con el Instituto a efecto de prestar sus servicios como alimentadores de los Sistemas Integrados de Transporte.

ARTÍCULO 177.- Son derechos de permisionarios del servicio público de transporte:

I. Solicitar al Instituto la renovación o revalidaciones del permiso para la prestación del servicio de transporte;

II. Solicitar al Instituto, la ampliación o modificación del permiso otorgado, sujetándose a las formalidades que para el efecto establezca el Reglamento de la presente Ley;

III. Aportar los datos técnicos e información específica que se requiera, para coadyuvar al mejoramiento del servicio del transporte,

IV. Solicitar al Instituto, la revisión de tarifas, el establecimiento de nuevas rutas y en su caso, la ampliación o modificación de las ya existentes; y,

V. Así como otros derechos dispuestos la presente Ley y su Reglamento.

Los derechos inherentes y derivados de los permisos solo podrán ser transferidos con la autorización del Instituto, debiendo ser mediante comparecencia de los interesados ante el propio Instituto en los términos y condiciones que fije su Reglamento.

ARTÍCULO 178.- Son obligaciones de los permisionarios del servicio público de transporte:

I. Prestar el servicio exclusivamente en los vehículos autorizados por el Instituto de Movilidad Sustentable;

II. Inscribirse en el padrón vehicular del Instituto de Movilidad Sustentable, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento;

III. Prestar el servicio a cualquier persona que lo requiera, con excepción de los supuestos señalados en la presente ley y su reglamento;

IV. Tener siempre vigente la póliza de responsabilidad civil o constancia expedida por una o de una Sociedad Mutualista debidamente acreditada y certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que garantice daños materiales que se causen a terceros, la indemnización por muerte o lesiones; así como la reparación de daños a usuarios en su persona y patrimonio, conforme lo establece la ley y su reglamento;

V. Conservar los vehículos, equipos e instalaciones en óptimas condiciones para dar un servicio eficiente y apropiado, evitar adornos y aditamentos que distraigan, dificulten o impidan la visibilidad del conductor y los usuarios; así como leyendas o calcomanías, salvo las autorizadas por el Instituto de Movilidad Sustentable y en su caso, incorporar las modificaciones que sobre aspectos técnicos y de seguridad se establezcan en los manuales autorizados;

VI. Tratar con amabilidad y respeto a los usuarios, dando un trato preferencial en el servicio, a las personas con capacidad diferentes, de la tercera edad y mujeres en estado de embarazo o con menores en brazos;

VII. Presentar los vehículos a la revisión mecánica, dentro del periodo establecido en la presente ley y su reglamento;

VIII. No destinar los vehículos a otros fines de lucro, distintos a la modalidad autorizada en el permiso;

IX. Contar con el equipamiento auxiliar de transporte que garantice la adecuada prestación del servicio;

X. Observar las disposiciones contenidas en los demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables que tengan injerencia en el servicio público de transporte;

XI. Portar el uniforme obligatorio, durante la prestación del servicio;

XII. Mostrar en lugar visible del interior de los vehículos en los que se preste el servicio, el tarjetón vigente, el número económico, teléfonos de quejas, las tarifas autorizadas; y en los casos de radio taxis y taxis de sitio que se encuentren prestando el servicio, deberá de encontrarse en todo momento activo el taxímetro;

XIII. Recibir la capacitación por la institución educativa que el Instituto valide, para la prestación del servicio de transporte público;

XIV. Aceptar la intervención del Instituto en la administración del servicio en todos aquellos casos que existan amenazas de suspensión del propio servicio;

XV. No permitir la conducción de vehículos del servicio público de transporte a los operadores que no cuenten o no porten la licencia de la clasificación correspondiente, así como con el tarjetón, ambos vigentes;

XVI. El vehículo autorizado deberá contar con GPS registrado en el padrón del Instituto, funcionando en todo momento y transmitiendo los datos requeridos por el reglamento de esta Ley; y,

XVII. Las demás que establezca la presente ley y su reglamento.

SECCIÓN III

DE LOS TAXIS

ARTÍCULO 179.- El servicio público de taxi es aquel destinado al transporte de personas, que se contrata para distintos servicios, por viaje o tiempo determinado.

ARTÍCULO 180.- El transporte de taxi comprenderá las modalidades de taxi de ruta, taxi de sitio, taxi libre, radio taxi, taxi ejecutivo, taxi mediante aplicación digital, cuyas características del servicio se especificarán en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 181.- Toda autorización que se otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de las vías públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún derecho real o posesorio de dominio sobre el mismos; tendrá la vigencia que en el documento señale, serán revocables y en ningún caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito de acceso a los predios colindantes, de los servicios públicos instalados y en general, de cualquiera de los fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

Quien ocupe con obras o instalaciones la vía pública estará obligado a retirarlas por su cuenta, cuando la autoridad competente lo requiera, asimismo deberá mantener señales para evitar accidentes, con las características apropiadas al efecto.

ARTÍCULO 182.- El titular de una autorización para sitio en cualquier modalidad de transporte está obligado:

I. A impedir que en los lugares señalados para el sitio se hagan reparaciones o lavado de los vehículos;

II. A vigilar que los vehículos se estacionen precisamente dentro de la zona señalada al efecto;

III. A fijar, en lugar visible del sitio, una señal informativa en la que aparezca inscrito el número que se haya asignado al sitio. Dicha señal deberá tener las especificaciones que determine el Instituto;

IV. A conservar limpia el área designada para el sitio y las aceras correspondientes, así como evitar la obstrucción de la circulación de transeúntes y de vehículos;

V. Cuidar que el personal guarde la debida compostura y atienda al público de manera respetuosa,

VI. A dar aviso cuando suspenda temporal o definitivamente el servicio; y,

VII. Transferir al Instituto la información generada por el GPS o sistema de geolocalización satelital o coordenadas de redes de datos, conforme el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 183.- El Instituto podrá cambiar la ubicación de cualquier sitio, revocar, cancelar o suspender los permisos respectivos, siguiendo el procedimiento previa audiencia del interesado, cuando se obstaculice la circulación de transeúntes, o se incumplan las obligaciones a cargo de los titulares de los permisos, o así resulte necesario para la implementación de programas de reordenamiento de transporte o vialidades, o por cualquier otra circunstancia que prevean las leyes aplicables, lo anterior en coordinación con las autoridades municipales.

ARTÍCULO 184.- Además de las causas a que se refieren las disposiciones anteriores, las autorizaciones de sitio podrán ser canceladas en los siguientes casos:

I. Cuando el servicio se preste en forma irregular o discontinua;

II. Cuando no se solicite la revalidación del permiso dentro del plazo establecido; y,

III. Cuando se alteren las tarifas previamente autorizadas.

SECCIÓN IV

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

ARTÍCULO 185.- Es el permiso que se otorga para el traslado de estudiantes de instituciones educativas que operan con itinerario y horario que satisfaga las necesidades particulares de la institución educativa, y el Instituto determinará la cantidad de vehículos que ampare cada permiso, conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 186.- El Instituto coordinará en todo momento las acciones para el uso de transporte escolar por las escuelas de los diferentes niveles educativos.

ARTÍCULO 187.- Las escuelas particulares deberán implementar o contratar el servicio de transporte escolar, una vez que el Instituto emita la declaratoria de necesidad del servicio a efecto de mejorar los servicios de movilidad y transporte, y evitar contaminación ambiental, contrarrestar o mitigar el cambio climático en determinada zona o municipio.

ARTÍCULO 188.- Los vehículos no deberán nunca utilizarse para un fin distinto al otorgado en el permiso respectivo.

ARTÍCULO 189.- Los vehículos deberán de contar con las medidas de seguridad necesarias tales como el localizador GPS, un sistema tecnológico de seguridad que pueda monitorear que los estudiantes se encuentren en el vehículo, así como las demás disposiciones establecidas en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN V

DEL TRANSPORTE DE CARGA

ARTÍCULO 190.- Servicio de transporte de carga público o privado es el que se presta en vehículos que reúnen las características adecuadas para transportar todo tipo de artículos, mercancías o productos en los términos del Reglamento de la presente Ley, propiedad de personas físicas o moral, y se podrá prestar en las modalidades siguientes:

I. Servicio de transporte de carga en general;

II. Servicio de transporte de carga especializada y

grúas; y, III. Servicio de transporte de carga privada.

Los interesados en obtener un permiso para prestar el servicio local de transporte de carga deberán presentar solicitud ante el Instituto en los términos señalados en el Reglamento de esta Ley, e indicar la modalidad del servicio para el cual lo solicitan.

Una vez que éste le haya sido otorgado deberá presentar póliza de seguro que cubra, cuando menos, la responsabilidad civil y los daños a terceros, con vigencia anual renovable por el mismo plazo, expedida por empresa reconocida y autorizada en el ramo, la cual deberá estar autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

ARTÍCULO 191. - Los permisos para transporte de carga deberán contener los datos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN VI

DEL SERVICIO DE CARGA EN GENERAL, CARGA ESPECIALIZADA Y GRÚAS

ARTÍCULO 192.- El transporte de carga comprende las siguientes modalidades: General, Especializado y de Grúa para carreteras estatales.

ARTÍCULO 193.- Los propietarios de los vehículos dedicados al transporte de arrastre de casas movibles, maquinaria de construcción y agrícola u otros objetos, cuyo peso y dimensiones ocasione lentitud en el tránsito, deberán de ajustarse a las disposiciones que establece el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 194.- El Instituto con la finalidad de garantizar la salud pública, seguridad vial, conservación de las vías estatales y municipales, así como el interés público en coordinación con las autoridades municipales correspondientes, podrá restringir y ajustar los horarios y las vialidades de circulación al transporte de carga conforme a la circulación general en los términos del Reglamento de la presente Ley, así como los planes y programas en la materia.

ARTÍCULO 195.- El Instituto regulará el servicio de transporte de carga de sustancias, materiales y residuos peligrosos, y podrá prestarse siempre y cuando quien lo realice cuente con el permiso correspondiente de las autoridades federales y estatales competentes, para tal efecto deberá de cumplir también con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

SECCIÓN VII

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PRIVADO

ARTÍCULO 196.- El Transporte de Carga Particular, es aquel que se presta en vehículos y/o remolques que son propiedad de personas físicas o morales que transportan sus propios bienes, mercancías y objetos en general. Por ningún motivo estos vehículos podrán utilizarse para dar servicio a terceros, en cuyo caso estarán sujetas a las sanciones que establecen la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 197.- Las modalidades del transporte de carga se clasifica en las siguientes:

empresarial o comercial y privado.

ARTÍCULO 198.- Queda prohibida la circulación de vehículos en vías públicas urbanas cuya carga útil exceda de tres mil quinientos kilogramos, para tales efectos deberá obtener la autorización o empadronamiento correspondiente ante el Instituto conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 199.- Queda prohibida la utilización como vehículos de carga aquellos vehículos no autorizados, tales como tractores agrícolas, trascabos y demás maquinaria de la construcción o de movimientos de tierra, excepto mecanismos de acoplamiento entre semirremolque y remolque en cuyo caso estarán sujetas a las sanciones que establecen esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 200.- El Instituto podrá realizar inspecciones de verificación de los vehículos de carga, mismos que portarán en los costados del vehículo la información relativa al servicio que prestan, de acuerdo con las disposiciones que señala el Reglamento.

CAPÍTULO VII

DE LA REVOCACIÓN DE CONCESIONES Y CANCELACION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 201.- El Instituto podrá revocar las concesiones, y cancelar permisos, autorizaciones o empadronamiento, con base al procedimiento establecido para tal efecto en el Reglamento de la presente Ley, cuando el concesionario o permisionario incurra en alguna de las siguientes causales:

I. Cuando se oferte o realice un servicio distinto del autorizado, en los siguientes casos:

a) En la concesión de transporte masivo, cuando preste el servicio fuera de la ruta, tramo o itinerario autorizado, excepción hecha cuando existan cortes a la circulación o la imposibilidad de cumplir con su derrotero autorizado;

b) En el permiso o empadronamiento, en cualquiera de sus modalidades, según sea el caso, cuando realice servicio masivo o cobre con una tarifa distinta a la que se autorizó, y

c) En los casos de permisos o empadronamiento, cuando de forma intencional se modifique o varíe la modalidad, vehículo, el fin, objeto o situación para el cual se le otorgó.

II. Cuando se realice transferencia o enajenación sin la previa autorización del Instituto para los siguientes casos:

a) La concesión, vehículo o vehículos materia de la concesión;

b) El permiso o empadronamiento;

c) Tratándose de persona moral que sin previa autorización del Instituto realice fusiones, escisiones, sea sujetas a concurso mercantil y extinción de dominio;

d) Cuando el concesionario suspenda el servicio sin autorización del Instituto, por más de 7 (siete) días sin justificación alguna;

e) Cuando se reincida por más de dos veces en el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley y su Reglamento;

f) Cuando no se inicie la prestación del servicio otorgado dentro del plazo fijado en la concesión, permiso o autorización, sin justificación plena;

g) Cuando el concesionario, permisionario, empadronado o autorizado, no sustituya el vehículo que deba ser retirado del servicio por orden del Instituto, en virtud de no reunir los requisitos exigidos por esta Ley y su Reglamento;

h) Cuando el concesionario, empadronado o permisionario en su condición de tal, cometa algún delito doloso o preterintencional sobre el cual hubiere recaído sentencia condenatoria que cause ejecutoria;

i) A petición del titular o por extinción de la vigencia de la concesión, empadronado o permiso;

j) Por cualquier irregularidad cometida en la prestación del servicio que sea calificada como grave, conforme al Reglamento de esta Ley;

k) Por violaciones a la presente Ley y a su Reglamento que alteren o afecten sustancialmente la prestación del servicio;

l) Por así demandarlo legalmente el interés público;

m) A los prestadores del servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, por utilizar las placas asignadas en vehículo no autorizado, o bien, cuando utilicen placas vencidas o alteradas;

n) Por ser el servicio notoriamente deficiente o que los vehículos carezcan de los requisitos mínimos de seguridad, comodidad, higiene o no esté en condiciones mecánicas adecuadas para la prestación del servicio, conforme a las reglas y condiciones de calidad del servicio;

o) Cuando la documentación presentada ante el Instituto, a efecto de obtener la concesión, permiso, empadronamiento o autorización sea falsa;

p) No cubrir las indemnizaciones por daños o perjuicios que se originen a los usuarios, peatones, operadores o terceros, con motivo de la prestación del servicio público de transporte; y,

q) Las demás que señale la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 202.- Los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público, están obligados a contribuir, a petición del Instituto con la prestación del servicio en rutas que han sido objeto o que están en proceso de revocación, con la finalidad de evitar la interrupción o adecuada prestación del servicio.

ARTÍCULO 203.- El Instituto tendrá la atribución de cancelar el gafete de operador o conductor en los casos siguientes:

I. Cuando el conductor esté médicamente imposibilitado para conducir;

II. Cuando el conductor opere bajo el influjo de bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas o estupefacientes en términos de la presente Ley, su Reglamento y la normatividad aplicable de orden estatal o municipal;

III. Por no revalidar licencia de conducir por un periodo mayor a cuatro

años; IV. Por no revalidar el gafete de operador o conductor

semestralmente;

V. En el caso de los taxis o radiotaxis, cuando no utilicen el taxímetro o cuando cobren una tarifa distinta a la autorizada de acuerdo con la modalidad del servicio;

VI. Por presentar documentación falsa o que haya sufrido modificación; y,

VII. Los demás que establezca la presente Ley y su Reglamento.

CAPÍTULO VIII

DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ARTÍCULO 204.- El Sistema Tarifario es el mecanismo de financiamiento del servicio de transporte público en sus diferentes modalidades, que se conforma por los ingresos provenientes de los pagos realizados por los usuarios, en los términos señalados por la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 205.- Las directrices del Sistema Tarifario denominadas tarifa técnica, pública y preferencial serán determinadas por el Instituto conforme a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 206.- Las tarifas y sus modificaciones se aplicarán a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO 207.- Los concesionarios y permisionarios de las distintas modalidades del servicio de transporte público de pasajeros, podrán solicitar al Instituto la aprobación de convenios con organizaciones magisteriales, estudiantiles, de trabajadores, turísticas, entre otras, que modifiquen las tarifas, reduciéndolas por casos de cooperación con aquellos organismos.

ARTÍCULO 208.- Las tarifas del servicio de transporte público de pasajeros, se aplicarán uniformemente a todos los usuarios, a excepción de los niños de tres años o menores quienes viajarán sin costo alguno.

ARTÍCULO 209.- En los vehículos que prestan el servicio de transporte público masivo en todas sus modalidades, se cobrará el cincuenta por ciento de la tarifa a los estudiantes con credencial escolar en época de clases según el calendario escolar oficial, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, debiendo presentar cualquier documento que los acredite como tales, emitido por las autoridades federales, estatales o municipales, no siendo obligatoria la identificación de personas con discapacidad o edad visible.

ARTÍCULO 210.- En los vehículos viajarán sin costo alguno agentes de la policía estatal, municipal o inspectores de movilidad debidamente uniformados y en servicio, cuando no excedan de dos por vehículo y debidamente identificados.

CAPÍTULO IX

DE LAS AUTORIZACIONES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

ARTÍCULO 211.- Derivado a su naturaleza, serán considerados como servicios especializados las siguientes modalidades:

I. Transporte de seguridad privada;

II. Servicio de transporte

funerario; III. Servicio de

ambulancia;

IV. Servicio de limosina; y,

V. Vehículos autoescuela para el aprendizaje de manejo.

ARTÍCULO 212.- Las personas físicas o morales que presten los servicios mencionados en el artículo anterior, deberán solicitar la autorización respectiva ante el Instituto, previo pago de los derechos correspondientes, para la prestación del servicio en los términos del Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO X

DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (ERT)

SECCIÓN I

GENERALIDADES

ARTÍCULO 213.- Es el servicio de traslado por medios propios o ajenos de personas, mercancías o paquetería de cualesquier tipo que se oferta y contrata a través de aplicaciones móviles promovidas o administradas por una empresa de redes de transporte a la cual el prestador del servicio se encuentre afiliado o registrado.

Se entenderá como traslado la acción realizada por medios propios o ajenos cuyo efecto sea transportar a personas, mercancías o paquetería de cualquier tipo desde un punto geográfico determinado o determinable como origen, hacía otro lugar o punto geográfico de destino final del traslado.

Para el traslado de pasajeros, este servicio no tendrá ruta, ni paradas establecidas y la tarifa podrá ser determinada por la propia Empresa de Redes de Transporte o sus filiales. La gestión de sus servicios se pactará mediante la aplicación móvil de acuerdo con el origen y destino que establezca el usuario del servicio y dicha plataforma.

Por ningún motivo podrá hacer sitio, pudiendo únicamente detener su marcha en la vía pública el tiempo indispensable para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros del vehículo, observando lo establecido en el Reglamento de esta Ley.

SECCIÓN II

DE LAS EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 214.- Son aquellas personas físicas o morales cuyo servicio se limita exclusivamente a intermediar vía electrónica la oferta, contratación y pago de servicios de transporte público o privado, vinculando a través de dicha aplicación a usuarios con prestadores del servicio en cualquiera de sus modalidades autorizadas y registradas ante el Instituto.

También podrán ser consideradas como Empresas de Redes de Transporte aquellas sociedades mercantiles nacionales o extranjeras que, por virtud de acuerdos comerciales vigentes, promuevan el uso de tecnologías o aplicaciones tecnológicas,

propias o de terceros que permitan a usuarios en el Estado acceder al servicio de transporte bajo demanda mediante aplicaciones móviles.

Las Empresas de Redes de Transporte tendrán prohibido ofrecer o contratar sus servicios a través de medios diversos a los previstos por esta Ley y su Reglamento. En cualquier caso, los conductores y/o las Empresas de Redes de Transporte deberán contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil de automóviles que cubra la responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de seguros autorizada para operar en México, respecto de todos los viajes que se realizan a través de la plataforma que promuevan o administren.

En caso de que dicha póliza no se encuentre vigente o no otorgue cobertura, las Empresas de Redes de Transporte serán consideradas obligados subsidiarios de los propietarios y conductores de los vehículos afectos al servicio de transporte, hasta por el monto de la póliza de seguro que debieron haber contratado según lo establecido por esta ley y reglamento.

ARTÍCULO 215.- Las Empresas de Redes de Transporte deberán solicitar la autorización por parte del Instituto e inscribirse en el Padrón como Empresas de Redes de Transporte mediante aplicaciones móviles previo pago de los derechos correspondientes. Las autorizaciones para su operación tendrán una duración de un año, las que podrán otorgarse y renovarse anualmente, siempre que éste se encuentre prestando el servicio, no se afecte el interés público, se cumplan los requisitos señalados por esta Ley y demás disposiciones aplicables, previo el pago de las contribuciones que para ello establezca la legislación aplicable, así como la suscripción del convenio de colaboración respectivo.

Las autorizaciones se otorgarán en los términos de la presente ley a las personas físicas o morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, y deberán contar con domicilio fiscal o sucursal establecida en el Estado de Baja California, cuyo objeto social sea el de operar como Empresas de Redes de Transporte o gestionar servicios de transporte mediante una aplicación móvil o plataforma tecnológica, de la cual sean titulares de los derechos de propiedad intelectual, o bien, el desarrollo de programas de cómputo o la prestación de servicios tecnológicos de su propiedad o de sus subsidiarias o filiales, que sirvan como intermediación entre particulares para realizar el servicio de transporte de punto a punto a través de plataformas independientes.

Queda prohibido que las Empresas de Redes de Transporte tengan un esquema mixto, es decir, que los vehículos y/o conductores afiliados operen bajo la modalidad de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles y a su vez se encuentren operando en otras modalidades contempladas en la presente Ley.

ARTÍCULO 216.- Las Empresas de Redes de Transporte deberán contar con autorización del Instituto, misma que tendrá una vigencia de un año, para lo que el solicitante deberá cumplir con los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables de la presente Ley.

Asimismo, son obligaciones de las Empresas ante el Instituto las siguientes:

I. Presentar de manera mensual las bases de datos actualizadas o padrón que contengan la información de los propietarios o conductores y vehículos afiliados a la aplicación móvil que promuevan, intermedien o administren, que realizaron viajes con la aplicación durante el mes inmediato anterior el número de vehículos que tiene cada uno, así como la que se señalen las disposiciones aplicables.

II. De manera mensual, dentro los primeros diez días de cada mes, la información relacionada con los viajes realizados en los términos de esta ley y las disposiciones aplicables.

III. Suscribir con el Instituto un convenio de colaboración mediante el cual se obliguen a realizar las contribuciones mensuales conforme a la legislación fiscal aplicable sobre los montos efectivamente cobrados por cada viaje iniciado, promovido, intermediado o administrado mediante aplicaciones móviles en el Estado acorde con la presente Ley y demás disposiciones aplicables, sin incluir en la base de lo efectivamente cobrado, el monto trasladado del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Empresa de Redes de Transporte deberá emitir y entregar al Instituto cada mes una carta bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste que el monto pagado efectivamente corresponde al pago requerido conforme a la presente Ley.

ARTÍCULO 217.- La autorización como Empresa de Redes de Transporte será personalísimo e intransferible y no generará derechos reales o personales a favor de la Empresa de Redes de Transporte. Los actos mediante los cuales pretendan gravarse o enajenarse los registros de las Empresas de Redes de Transporte serán nulos y no producirán efecto legal alguno.

ARTÍCULO 218.- A fin de obtener la renovación de las autorizaciones, las Empresas de Redes de Transporte deberán de cumplir con el pago de las contribuciones correspondientes y con los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley.

La falta de solicitud de la renovación en el plazo de 30 días posteriores a su vencimiento se considerará como renuncia al derecho de renovación.

ARTÍCULO 219.- La solicitud de renovación deberá incluir una declaración bajo protesta de decir verdad respecto a la veracidad y actualización de la información presentada al momento de obtener la autorización original, en caso de haber modificaciones se deberán notificar a la Instituto.

En caso de que la solicitud de renovación estuviere incompleta, el Instituto otorgará a la Empresa de Redes de Transporte un plazo improrrogable de 15 días naturales para que subsane su incumplimiento. En caso contrario la solicitud se tendrá por no presentada y se desechará.

ARTÍCULO 220.- Las Empresas de Redes de Transporte, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil de automóviles que cubra la responsabilidad civil de un conductor frente a terceros, incluyendo pasajeros, con una compañía de seguros autorizada para operar en México respecto de todos los viajes que se realizan a través de la plataforma que promuevan o administren.

II. Registrar y verificar que los vehículos y conductores que presten el servicio de transporte de pasajeros, mercancías o paquetería de cualesquier tipo cumplan con los requisitos que para esa modalidad establece la presente Ley y las disposiciones aplicables;

III. Las tarifas de cobro, así como el catálogo de los vehículos deberán mantenerse en sus aplicaciones móviles y página web de manera visible, permanente y de fácil acceso, así como implementar un sistema de cálculo de tarifas cuando la modalidad del servicio contratado así lo permitan;

IV. Facilitar el acceso a la información que le requieran las autoridades federales, estatales y municipales, en el ejercicio de sus funciones; en cumplimiento con la legislación en materia de protección de datos personales;

V. Someter a verificación del Instituto las condiciones físico-mecánicas y de seguridad previstas en las disposiciones aplicables; y,

VI. En coordinación con el Instituto impartirán sesiones informativas a los conductores afiliados a la plataforma que promueva o administre, de primeros auxilios, servicio al cliente, control de ira, emergencias viales y de reglamento en los términos de la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 221.- Los servicios de gestión de transporte y plataformas tecnológicas o sistemas electrónicos para contratación, pago y prepago que implemente el Estado, tendientes a la mejora del servicio de transporte en todas sus modalidades, no serán considerados como una empresa de redes de transporte en cualquiera de sus modalidades.

SECCIÓN III

DE LA AUTORIZACIÓN PARA CONDUCTORES AFILIADOS O REGISTRADOS EN EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 222.- Para el otorgamiento de autorizaciones para prestar servicios de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles, el solicitante deberá presentar ante el Instituto los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley, previo pago de los derechos correspondientes ante el Instituto.

Estos requisitos podrán presentarse ante la empresa de redes de transporte a la cual se encuentre registrada o afiliada cada prestador del servicio, siempre y cuando se compartan copias electrónicas de los documentos con el Instituto, para efecto de que puedan ser analizados y verificados.

Los documentos o copias de estos que se presenten para acreditar el cumplimiento de los anteriores requisitos estarán sujetos a revisión y comprobación por parte del

Instituto, aún y cuando se hubiese expedido la autorización correspondiente; por lo que podrán ser requeridos al conductor por el Instituto durante la vigencia de esta, a efecto de comprobar su autenticidad.

ARTÍCULO 223.- La autorización otorgada por el Instituto y las facultades que de las mismas se deriven no serán susceptibles de transmisión o sucesión alguna ya que serán personalísimas, por lo que al receptor de la autorización le queda estrictamente prohibida toda transmisión o cesión de los derechos que la misma le conceda; cualquier estipulación o pacto de voluntades en contrario quedará sin efectos.

Para efecto de que se analice la posibilidad por parte del Instituto de otorgar renovación de la autorización, se deberá tomar en consideración las infracciones que en su caso hubiere cometido el solicitante en contra de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 224.- El vehículo registrado para la prestación del servicio no podrá tener una antigüedad mayor a seis años a partir de su fecha de fabricación, debiendo presentar además la verificación física mecánica y ambiental que el Instituto le solicite.

ARTÍCULO 225.- Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante únicamente podrá registrar un solo vehículo y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 226.- Son causas de revocación de las autorizaciones:

I. El incumplimiento por parte del sujeto de autorización de cualquiera de las obligaciones que se establezcan en la misma;

II. No contar con póliza o constancia vigente de seguro en los términos de la presente Ley y su Reglamento, ya sea contratada por él o por la empresa de redes de transporte ante la cual se encuentra registrado;

III. Cuando se exhiba documentación apócrifa o se proporcionen informes o datos falsos al Instituto;

IV. Incumplir con las disposiciones y normas de calidad del servicio establecidas por la empresa de redes de transporte a la que el prestador de servicios se encuentra afiliado o registrado;

V. No contar con la señalética, sello digital de identificación o QR oficial, mismo que deberá estar contenido en su autorización;

VI. No acudir en tiempo y forma a la revisión física mecánica ante el Instituto;

VII. Ofertar otra modalidad distinta; y,

VIII. Cuando se oferte el servicio fuera de aplicación, o simulando su uso, realicen sitio o base, o realizar ascenso dentro de las instalaciones o establecimientos donde se encuentren autorizados por el Instituto Sitio de Taxis, así como en terminales de transporte masivo u ofrecer el servicio de Transporte Colectivo.

SECCIÓN IV

DEL PADRÓN DE EMPRESAS DE REDES DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 227.- Todo vehículo que se utilice para la prestación del servicio de transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles deberá ser reportado por la Empresa de Redes de Transporte al Instituto, mediante la entrega de las bases de datos o padrón de propietarios o conductores que se menciona en el fracción I del Artículo 216 de la presente Ley y su Reglamento, así como de las demás disposiciones aplicables en otras leyes de carácter fiscal, de protección de datos y únicamente podrán operar y circular aquellos que tengan una antigüedad menor a seis años de su fecha de fabricación, con excepción de vehículos con tracción hibrida o eléctrica en cuyo caso la temporalidad será de 15 años.

ARTÍCULO 228.- Por cada vehículo reportado al Instituto por la Empresa de Redes de

Transporte, se requiere:

I. El pago de derechos correspondientes ante el Instituto, de conformidad con la normatividad aplicable de esta Ley;

II. Que los vehículos que presten este servicio sean de cuando menos cuatro plazas y no excedan de cinco plazas;

III. Que el valor del vehículo, en factura, sea mayor a 2300 (dos mil trescientos) veces la UMA (unidad de medida y actualización); y,

IV. Que cuenten con los requisitos dispuestos por la normatividad aplicable de esta Ley.

ARTÍCULO 229.- Los conductores del transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles deberán de sujetarse a las obligaciones que dispone el Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 230.- Son derechos de los usuarios del transporte de pasajeros bajo demanda mediante aplicaciones móviles todos los dispuestos por el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO XI

DE LAS CONCESIONES DE ARRASTRE, GRÚAS,

Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS DEL INSTITUTO

ARTÍCULO 231.- Exclusivamente para el desarrollo de las funciones propias Instituto en materia de grúas, arrastre y depósito de vehículos, podrá concesionar este servicio a

terceros a efecto de que estos se encuentren siempre a disposición del Instituto por lo que este deberá proceder de la manera siguiente:

I. Convocar mediante licitación pública las concesiones del servicio público de grúas, arrastre y almacenamiento de vehículos;

II. Otorgar las concesiones para el servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos, sancionados por infracciones a la presente Ley y reglamento o bien por tratarse de vehículos abandonados o chatarra en vías públicas de jurisdicción estatal;

III. El Instituto podrá modificar, renovar y revocar concesiones en la materia, así como, ordenar la intervención de los concesionarios a efecto de aplicar una medida de seguridad y urgente aplicación;

IV. El Instituto determinara las tarifas por el servicio de arrastre y almacenamiento de vehículos, así como por salvamento y maniobras, así como la verificación que los procedimientos administrativos de adjudicación y remate de vehículos se realicen en tiempo y forma conforme a la presente Ley, su reglamento y disposiciones aplicables; y,

V. Las demás que establezca el Reglamento de esta Ley y disposiciones legales aplicables

ARTÍCULO 232.- La declaratoria de necesidad para concesionar el servicio público de la presente sección contendrá lo siguiente:

I. Relación sucinta de los antecedentes de la necesidad;

II. Las consideraciones técnicas o legales que justifiquen el otorgamiento de la concesión;

III. Delimitación del área territorial en la que se requiere el

servicio; IV. Tipo de servicio para satisfacer la necesidad

pública;

V. Modalidad y número de concesiones a otorgar para satisfacer la necesidad del servicio;

VI. El tipo, características y cantidad de grúas y de espacios para almacenamiento de vehículos que se requieran;

VII. Las condiciones generales para la prestación del servicio; y,

VIII. Los demás datos que, a juicio de las autoridades, sean necesarios.

TÍTULO V

DE LA VIGILANCIA Y APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO I

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 233.- Corresponde al Instituto la vigilancia y aplicación de las disposiciones previstas en la presente Ley, para lo cual contará con Inspectores de Movilidad para verificar la calidad del servicio y condiciones de la operación del transporte en todas sus modalidades, incluyendo bienes muebles e inmuebles afectos a la movilidad, para garantizar el debido cumplimiento de la presente Ley.

Serán autoridades auxiliares para el debido cumplimiento de la presente Ley, las instituciones policiales del estado y los municipios, incluyendo a las autoridades de vialidad y tránsito.

ARTÍCULO 234.- Los inspectores de movilidad, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Inspeccionar, verificar y vigilar los servicios públicos, privado de transporte, así como a los conductores afiliados a empresas de redes de transporte de competencia estatal;

II. Levantar las boletas de infracción y actas de inspección en el ámbito de su competencia;

III. Inspeccionar, verificar y vigilar al transporte de competencia estatal a efecto de sancionar a aquellos vehículos que no cumplan con la revisión mecánica y verificación ambiental vehicular;

IV. Ejecutar medidas de seguridad preventivas o correctivas de urgente aplicación;

V. Coadyuvar con las demás autoridades operativas, administrativas y policiacas relacionadas con la materia;

VI. Requerir en las inspecciones que realice a los autorizados, permisionarios y concesionarios regulados en la presente Ley y Reglamento la documentación que acredite la modalidad y condiciones otorgadas para la prestación del servicio; y,

VII. Las demás contenidas en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 235.- Las inspecciones o verificación de vehículos en operación, por parte del Instituto se realizarán conforme a lo establecido en la presente Ley y la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 236.- Los titulares de las concesiones o permisos, así como los responsables, encargados u ocupantes de los establecimientos, instalaciones o vehículos objeto de la inspección, estarán obligados a permitir el acceso y dar las facilidades e informes a los inspectores para el cumplimiento de su función.

ARTÍCULO 237.- Los titulares de concesiones o permisos, o sus representantes legales, con quienes se practique o se haya practicado una inspección podrán formular observaciones y ofrecer pruebas en los términos previstos en la presente Ley y la normatividad aplicable:

I. En el mismo acto de la diligencia, lo cual deberá hacerse constar en el acta de esta; y

II. Por escrito, dentro de un plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la fecha en que el Instituto haya ordenado la visita de inspección, les comunique el resultado de la misma.

ARTÍCULO 238.- El Instituto al practicar la inspección, deberá comunicar al sujeto obligado el resultado de esta en un plazo no mayor de quince días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hubiere practicado la visita de inspección.

CAPITULO II

DE LA COADYUVANCIA Y COORDINACIÓN CON LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS

ARTÍCULO 239.- Serán autoridades auxiliares del Instituto en la aplicación de esta Ley y su Reglamento las instituciones policiales estatales o municipales las cuales ejercerán las funciones siguientes:

I. Orientar, participar y colaborar en la prevención de accidentes viales, infracciones de tránsito y promoción de una cultura de la movilidad conforme a las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento;

II. Cuidar de la seguridad y respeto al peatón, así como al ciclista en las vías públicas, dando siempre preferencia a estos sobre los vehículos;

III. Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia de movilidad, vialidad y transporte, a quienes transiten en las vías públicas;

IV. Coadyuvar con las demás autoridades operativas, administrativas y policiacas relacionadas con la movilidad y el transporte; y,

V. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, convenios, acuerdos y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 240.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación y colaboración con los Municipios del Estado para la coadyuvancia en el ejercicio de sus funciones de administración, control, supervisión, peritaje y en su caso, sanción del tránsito y el transporte en general.

CAPITULO III

DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

ARTÍCULO 241.- El Instituto realizará las acciones de inspección, verificación o en su caso sanción, conforme lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, a fin de comprobar que los prestadores de los servicios de transporte en cualquiera de sus modalidades proporcionen el servicio en los términos y condiciones señaladas en las concesiones o permisos otorgados, así como el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia.

ARTÍCULO 242.- Para efectuar las revisiones, el Instituto, requerirá a los prestadores del servicio público y privado de transporte, que exhiban la documentación e información relacionada con la concesión, permiso o autorización otorgada, conforme lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 243.- A fin de comprobar que la infraestructura y elementos incorporados a la vialidad cumplan con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, el Instituto en el ámbito de sus atribuciones, llevará a cabo la verificación de estos conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 244.- El Instituto, para la emisión y ejecución de la visita de inspección y verificación, se sujetará a lo dispuesto por la Ley del Procedimiento para los Actos de la Administración Pública del Baja California y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

ARTÍCULO 245.- El Instituto implementará en su caso las medidas cautelares y de seguridad a efecto de impedir la prestación del servicio, garantizando la seguridad de los usuarios en términos de lo dispuesto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO 246.- Como resultado del desahogo del procedimiento de las visitas de inspección y verificación, en el ámbito de su competencia, el Instituto en su caso, aplicará las sanciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

TÍTULO VI

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES, MEDIOS DE DEFENSA Y NOTIFICACIONES

CAPÍTULO I

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

ARTÍCULO 247.- Cuando se realicen acciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas o del interés público en contravención a la presente Ley y demás disposiciones aplicables, el Instituto dictará medidas de seguridad de inmediata ejecución, mismas que se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en su caso correspondan.

ARTÍCULO 248.- Son consideradas como medidas de seguridad las siguientes acciones:

I. El retiro de los vehículos de la circulación para dejarlos en depósito en las instalaciones designadas para estos efectos por el Instituto.

II. La suspensión temporal o definitiva, parcial o total, del servicio público de transporte servicios conexos, conforme al Reglamento de la presente Ley; y,

III. El aseguramiento de vehículos, instalaciones, equipamiento y mobiliario urbano que no se encuentren autorizados o cualquier otro de elemento que impida la movilidad, la prestación del servicio público de transporte o provoquen distracción de los conductores o inseguridad en la operación. El Instituto podrá retirarlos conforme lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO II

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 249.- La autoridad competente para la aplicación de sanciones en materia de movilidad, transporte y del servicio público de transporte será el Instituto en los términos y montos que se determinen en esta Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 250.- Podrán imponerse, en materia de transporte y movilidad, y en los términos de esta Ley y su Reglamento las siguientes sanciones:

I. Apercibimi

ento; II.

Multa

a) Multa con el equivalente de 2 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización en el caso del servicio de taxi y a conductores de empresas de redes de transporte en los términos específicos que establezca el reglamento de esta ley;

b) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de pasajeros como el escolar, de personal, especializado y seguridad privada, así como el transporte público en su modalidad de transporte masivo, de personal, escolar, y servicios de turismo, así como empresas de redes de transporte, y servicios conexos del transporte a excepción del taxi;

c) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de carga en sus modalidades de carga en general, grúas de arrastre o salvamento, el transporte mercantil, específicamente en sus modalidades de transporte de valores, transporte de mensajería, carga de sustancias toxicas o peligrosas, grúas de arrastre o salvamento y carga especializada; y,

d) Multa con el equivalente de 2 a 6000 veces la Unidad de Medida y Actualización, para el transporte de carga privada para el servicio de un negocio o empresa, de valores y mensajería, carga de sustancias toxicas o peligrosas, grúas de arrastre o salvamento y carga especializada, así como las empresas de redes de transporte de carga, paquetería o entrega al menudeo.

III. Cancelación, suspensión o revocación de concesiones, permisos y autorizaciones; y,

IV. Arrastre, depósito o aseguramiento conforme a la presente Ley y otras disposiciones aplicables.

Independientemente de la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad, dichas sanciones serán impuestas mediante boleta de infracción física o de manera electrónica, por el Instituto a través del Director General o los servidores públicos a los que le delegue de conformidad a la normatividad aplicable las funciones de inspección, vigilancia o policía administrativa, estos estarán autorizados para imponer sanciones a los infractores de la presente Ley, su Reglamento o demás disposiciones normativas aplicables, así como los procesos para la notificación de dichos procedimientos, medidas de seguridad y sanciones.

ARTÍCULO 251.- Independientemente de las sanciones a que se hagan acreedores los operadores y conductores de vehículos de servicio público, se procederá al retiro del gafete, autorización o tarjetón en los términos del Reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 252.- El Instituto será la autoridad competente para calificar, revisar y ejecutar las infracciones a la presente Ley y su Reglamento.

ARTÍCULO 253.- La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de imponerse la infracción.

ARTÍCULO 254.- En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto, y en su caso, podrá proceder el arrastre del vehículo.

Los concesionarios o permisionarios serán responsables solidarios por sus operadores o conductores, únicamente por los daños y perjuicios que se cometan con motivo de la prestación del servicio de transporte público.

CAPÍTULO III

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 255.- Contra cualquiera de los actos y resoluciones administrativas que emita el Instituto, incluyendo la imposición de cualquiera de las medidas de seguridad y sanciones, que se prevén en la presente Ley y su Reglamento, los afectados podrán interponer el recurso de inconformidad ante el mismo, cuyo efecto será revisar y en su caso confirmar, modificar o revocar los actos administrativos impugnados, cuyo procedimiento se sustanciara conforme al Reglamento de esta Ley.

CAPÍTULO IV

DE LAS NOTIFICACIONES Y DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 256.- Las notificaciones, citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos, así como todo procedimiento, acuerdos o resoluciones, serán dictados de conformidad a esta Ley y su Reglamento y serán normas supletorias la Ley de Procedimientos de Actos Administrativos y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. - A la entrada en vigor de la presente Ley, queda abrogada la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado número 49. Sección I, Tomo CVIII del día 9 de noviembre de 2001, con sus reformas y adiciones.

TERCERO. - Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que contravengan o se opongan a la presente Ley.

CUARTO. - A la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, todas las menciones referentes a la Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California, en

otras leyes del Estado, o disposición jurídica concurrente, se entenderán referidas a la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

QUINTO.- El Ejecutivo del Estado deberá expedir el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, en un plazo de hasta 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

SEXTO.- Los procedimientos administrativos relacionados con concesiones y permisos de transporte público que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la presente Ley, se sustanciarán y concluirán conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio y serán resueltos por el Instituto conforme a las facultades conferidas en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

SÉPTIMO.- Se establece un plazo de hasta 100 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley en el Periódico Oficial del Estado, para que los Ayuntamientos de los municipios realicen las adecuaciones administrativas, modificaciones reglamentarias, programáticas, presupuestales y de políticas públicas a efecto de adaptar sus atribuciones conforme al texto de este nuevo ordenamiento, en el ámbito de sus respectivas competencias. Al mismo tiempo acordando con el Instituto los programas de desarrollo urbano, vialidad y tránsito que serán motivo de cooperación conjunta.

OCTAVO.- En el caso del Municipio de Mexicali, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la presente Ley, el Instituto podrá regularizar el transporte público en la modalidad de personal, previa acreditación de las empresas que prestan este servicio, demostrando estas su capacidad de operación, la existencia previa de contratos legalmente celebrados con empresas con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

NOVENO.- En todos los procedimientos judiciales y de justicia administrativa, en los que sean parte los Municipios, los Ayuntamientos, las secretarías y dependencias municipales, así como los organismos descentralizados de las administraciones públicas municipales que operan sistemas o subsistemas, integrados o no, de transporte público de pasajeros, ya sea en su carácter de autoridad o como parte celebrante de contratos, convenios u obligaciones extracontractuales; se deberán

sustanciar por las autoridades antes referidas conforme a la normatividad que se encontraba vigente en el momento de su inicio.

DÉCIMO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California solo tendrá por válidos los permisos, autorizaciones, recorridos o rutas y concesiones otorgados a permisionarios de taxis o concesiones de transporte masivo legalmente otorgados por la autoridad competente con anterioridad al 11 de diciembre de 2019, si estos fueren sometidos al Instituto para su empadronamiento legal en los términos de la presente Ley.

Por lo anterior, en un término improrrogable de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, todos los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones, convenios y contratos de todas las modalidades del servicio de transporte público, legalmente expedidos o autorizados por los Ayuntamientos, que operan sistemas o subsistemas de transporte público; deberán de presentar ante el Instituto los originales de todos los títulos, contratos, convenios, autorizaciones y todos aquellos documentos que les otorguen derechos y obligaciones para su debido empadronamiento, cotejo, digitalización y captura de los datos que señale el Reglamento o la norma técnica emitida por el Instituto para este fin.

Para tal efecto, deberán señalar domicilio y/o correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos dentro de la circunscripción territorial que le corresponde, así como aquellos para acreditar la personalidad y representación respectiva, a fin de que el Instituto integre el Padrón de Movilidad conforme a la nueva legislación. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de entrega recepción que realicen los Municipios al Instituto. Salvo caso fortuito o de fuerza mayor, los permisos y concesiones que no sean empadronados, cotejados, digitalizados y capturados dentro del término establecido en el párrafo anterior dejarán de tener validez y se procederá a su cancelación sin mayor trámite.

DÉCIMO PRIMERO.- Las autorizaciones, permisos y concesiones de transporte público emitidos antes del 11 de diciembre de 2019 por los Ayuntamientos del Estado, que no se empadronen ante el Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California en los términos del artículo Décimo Transitorio anterior, serán considerados nulos.

DÉCIMO SEGUNDO. - El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California no podrá bajo ni una situación o circunstancia expedir nuevas concesiones

o permisos del servicio público de transporte en la modalidad de taxis, masivo y de personal durante los próximos 10 años contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados de transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y el Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria su expedición por lo que al concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO TERCERO.- El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, no podrá autorizar modalidad del servicio público de transporte distintas a las ya autorizadas previamente en cada uno de los municipios del Estado de Baja California, durante los próximos 10 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, excepto en aquellos supuestos en los que el Instituto realice el reordenamiento e implementación de los sistemas integrados de transporte público del Estado con base en los planes y programas de movilidad sustentable y el Plan Estatal de Desarrollo, que resulte necesaria su expedición, por lo que al concluir este periodo se estará a lo dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

DÉCIMO CUARTO.- Para los efectos legales y de funcionamiento del Organismo Municipal para la Operación del Sistema Integral de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana (SITT), quedarán vigentes los contratos, fideicomisos, empréstitos, acuerdos, convenios y cada uno de los instrumentos jurídicos que existan y se deriven de los antes mencionados.

El Municipio de Tijuana, Baja California tendrá la administración del mismo en tanto no se suscriban los convenios de transferencia al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, quedando vigentes los acuerdos de pago de créditos adquiridos por la paramunicipal quien tiene como aval al Municipio de la ciudad de Tijuana, Baja California.

Para el traslado de garantías de bancos al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California, o a empresas de transporte, el Municipio de Tijuana, Baja California dentro de sus facultades podrá invertir recurso público para pago de subsidios, becas, apoyos, así como la contratación de pago por kilómetro recorrido con el fin de poder entregar al Gobierno del Estado, el Organismo Municipal para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (SITT) en condiciones óptimas de operación.

DÉCIMO QUINTO.- Se concede un término de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que el Instituto celebre los convenios con las Empresas de Redes de Transporte para la transferencia de información prevista, así como el registro de vehículos y conductores sin perjuicio ni excepción alguna para la prestación del servicio en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, siempre y cuando acrediten fehacientemente que se encuentran afiliados a estas, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO SEXTO.- Se concede un término de 90 días hábiles contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, para que los conductores que prestan sus servicios a través de Empresas de Redes de Transporte obtengan las autorizaciones correspondientes.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Continúan vigentes las disposiciones en materia de sanciones de los reglamentos de transporte público de los municipios del Estado hasta en tanto no se publique el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California.

DÉCIMO OCTAVO.- Se concede un plazo de tres años contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la presente Ley, a efecto de que las escuelas particulares deban implementar o contar con el servicio de transporte escolar conforme lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.

DÉCIMO NOVENA.- La Secretaria de Hacienda, realizará las acciones necesarias para proporcionar los recursos presupuestales necesarios al Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California para el cumplimiento cabal de las atribuciones conferidas en la presente Ley.

VIGÉSIMO.- A efecto de garantizar la movilidad a personas con discapacidad, el Instituto realizará un diagnóstico de las necesidades de rutas e infraestructura dentro de los 160 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para efecto de implementar un plan de infraestructura y equipamiento por Municipio, así como para determinar el porcentaje de unidades rutas e infraestructura así como los tiempos de implementación y compromisos de las autoridades en materia de movilidad y transporte a nivel Estatal y Municipal.

Dado en la Sala de Comisiones “Octavio Paz” de este edificio del Poder Legislativo del Estado, a los 23 días del mes de marzo de 2020.

COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA,

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DICTAMEN No. 1

DIPUTADO / A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. RAMÓN VÁZQUEZ VALADEZ **PRESIDENTE**			
DIP. JUAN MELENDREZ ESPINOZA **SECRETARIO**			

DIP. CLAUDIA JOSEFINA

AGATÓN MUÑÍZ

VOCAL

DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO

NUÑEZ

VOCAL

DIP. JULIO CESAR VÁZQUEZ

CASTILLO **VOCAL**			

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Ramón Vázquez, se declara abierto el debate del Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo; toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal el Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, y Comunicaciones y Transportes.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal el Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Ruvalcaba Flores David, a favor, en lo general y en lo particular también.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor y celebrando que este es un paso a la modernidad y con una reserva.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor en lo general y con una reserva en lo particular que será presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Presidente.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor, apoyando la reserva que menciona la compañera Claudia Agatón.

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención.

- Quintero Quintero Loreto, en abstención.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor y apoyando las reservas del compañero Diputado Aníbal y los compañeros del Grupo Parlamentario del PT.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
DICTAMEN NÚMERO 1			
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN E INFRAESTRUCTURA, Y COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María			**X**
Quintero Quintero Loreto			**X**
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		

Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**23**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**2**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 23 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones, 2 reservas.**

- EL C. PRESIDENTE: Primeramente, que nos explique las abstenciones, por favor.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Si claro, con gusto Presidente, es un documento cuya Iniciativa apenas se presentó hace una semana, hoy se dio cuenta de su presentación, el Dictamen bueno recién se acaba de circular y a mí me parece que esta Iniciativa y este Dictamen regulan aspectos pues mucho y muy importantes y novedosos, es un documento muy extenso, que a mi juicio debió de haber ser motivo de análisis y mesa de trabajo en la que pudieran concurrir tanto todos los grupos de transportistas como los Ayuntamientos del Estado, por ello y al

no tener toda esta estudio derivado de esas mesas que considero hubieran sido importante realizar, es por ello el sentido de mi voto en abstención.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, ¿alguien más?

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Perdón, también yo estimo insuficiente el tiempo que se consideró para el análisis del Dictamen, además de contener temas que ameritan una mayor participación de autoridades municipales y los propios transportistas, es por eso que mi voto es abstención.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, Diputada Claudia Agatón Muñiz, si nos puede; haber ¿Diputado Otáñez? Perdón, adelante Diputado, es su reserva, adelante.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Si, gracias Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicito se adicione el siguiente Título denominado "VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS", en virtud de los del Capítulo y artículos citados deberá quedar de la siguiente forma:

TÍTULO.- VII

VEHICULOS NO MOTORIZADOS

Articulo 257.- Los vehículos no motorizados para la movilidad son bicicletas, patinetas o "scooters" eléctricos, "segways", entre otros dispositivos de tracción eléctrica análoga o de tracción humana o animal que se utilicen como medio de transporte a personas de un sitio determinado de origen a otro determinado o determinable por el usuario o el beneficiario del servicio de transporte.

Articulo 258.- Las empresas que deseen instalar bases para prestar el servicio de alquiler de estos vehículos no motorizados de la movilidad al público en general o suscriptores, deberán registrarse en el Padrón del Instituto de Movilidad, así como tener y obtener los permisos respectivos y suscribir un Convenio con el mismo Instituto de Movilidad para el cumplimiento de las distintas obligaciones contenidas en la presente Ley y la normatividad aplicable en materia de movilidad sustentable.

Los propietarios, promotores, intermediarios o comisionistas de estas estos servicios no motorizados de movilidad registraran el tipo de vehículo no motorizado al ser utilizado con sus colores, marcas registradas, siluetas o características que sean distintivas y entregar al Instituto de Movilidad Estatal, los medios de identificación vehicular que caractericen describan los medios de control y monitoreo, los talleres donde pernoctan y los depósitos temporales o mantenimiento o de resguardo.

Articulo 259.- Los propietarios, promotores, intermediarios o comisionistas de estos servicios no motorizados de movilidad obtendrán un permiso para establecer una o distintas bases en el Estado de acuerdo con la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Los servicios no motorizados de movilidad se podrán contratar mediante contrato de alquiler suscrito por convenio privado, o mediante convenios de prestación de servicios de movilidad no motorizada por tiempo determinado o determinable aunque este sea promovido, intermediado, comisionado mediante la utilización de aplicaciones móviles de teléfonos inteligentes, u otros medios innovadores a través de sistemas de computacionales, sea vía internet "Wifi" o mediante internet de las

cosas, mejor conocido como "IoT", independientemente de que se empleen otros medios de acumulación o transmisión de datos para la gestión, uso de ese tipo de vehículos.

Cuando el vehículo no motorizado sea tipo bicicleta sin medios de propulsión eléctrica, esta actividad se regirá de acuerdo con la Ley de Fomento para el uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista para el Estado. Las empresas de alquiler de bicicletas e instalen los Bici puertos deberán cumplir con los lineamientos del Reglamento de la misma Ley de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Presidencia, se someta a consideración de esta Legislatura la siguiente reserva.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día de su presentación.

Es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA RESERVA PRESENTADA POR EL DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Rodrigo A. Otáñez Licona, Diputado por el Partido de Baja California me permito solicitar que en la discusión del Dictamen 1 de la **Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes** con fundamento en el artículo 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se reserve para su discusión en esta sesión la **LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** para adicionar el siguiente Título denominado "VEHICULOS NO MOTORIZADOS" con la finalidad de darle seguridad jurídica a otros actores de la movilidad que no han sido incluidos en dicho dictamen; todo esto a razón de que hay que contemplar las nuevas tecnologías que fungen con la función de trasladarse.

En esa virtud, el capitulado artículos citados deberán quedar redactados de la siguiente forma:

RESERVA

A DICTAMEN 01 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

TÍTULO.- VII

VEHICULOS NO MOTORIZADOS

Articulo 257.- Los vehículos no motorizados para la movilidad son las bicicletas, patinetas o "scooters" eléctricos, "segways", otros dispositivos de tracción eléctrica análogos o de tracción humana o animal que se utilicen como medio para transportar a personas de un sitio determinado de origen a otro determinado o determinable por el usuario o el beneficiario del servicio de transporte.

Articulo 258.- Las empresas que deseen instalar bases para prestar el servicio de alquiler de estos vehículos no motorizados de la movilidad al publico en general o a sus suscriptores, deberán registrarse en el Padrón del Instituto de Movilidad, así como tendrán que obtener el permiso respectivo y suscribir un Convenio con el

Instituto para el cumplimiento de las distintas obligaciones contenidas en la presente Ley y la normatividad aplicable en materia de movilidad sustentable.

Los propietarios, promotores, intermediarios o comisionistas de estas estos servicios no motorizados de movilidad registraran el tipo de vehículo no motorizado a ser utilizado con sus colores, marcas registradas, siluetas o características que le sean distintivas y entregar al Instituto, los medios de identificación vehicular que los caractericen describan los medios de control y monitoreo y los talleres o pernoctas para su deposito temporal para mantenimiento o resguardo.

Articulo 259.- Los propietarios, promotores, intermediarios o comisionistas de estas estos servicios no motorizados de movilidad obtendrán un permiso para establecer una o distintas bases en el Estado de acuerdo con la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Los servicios no motorizados de movilidad se podrán contratar mediante contrato de alquiler suscrito por convenio privado, o mediante convenios de prestación de servicios de movilidad no motorizada por tiempo determinado o determinable aunque este sea promovido, intermediado, comisionado mediante la utilización o no de aplicaciones móviles de telefonía inteligente, u otros medios innovadores a través de sistemas computacionales, sea vía redes de internet "Wifi" o mediante internet de las cosas, conocidos en como "IoT", independientemente de que se empleen otros medios de acumulación o transmisión de datos para la gestión y uso de este tipo de vehículos.

Cuando el vehículo no motorizado sea del tipo bicicleta sin medios de propulsión eléctrica, esta actividad se regirá de acuerdo con la Ley de Fomento para el uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista para el Estado. Las empresas que alquilen bicicletas e instalen los Bici puertos deberán cumplir con los lineamientos del Reglamento de la Ley de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Presidencia que se someta a consideración la siguiente reserva.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día de su presentación.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado; perdón Diputado Fausto Gallardo.

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Un receso breve de cinco minutos.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Secundo.

- EL C. PRESIDENTE: Declaramos un receso de cinco minutos.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, reanudamos la sesión y le pido a la Secretaria pase lista de asistencia.

- LA C. SECRETARIA: Procedemos al pase de lista a los asistentes iniciando con: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez

Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Del Villar Casas Rosina, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio Cesar, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa", damos cuenta de la llegada de Julia Andrea González Quiroz; es cuanto Diputado Presidente, tenemos quorum legal.

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, vamos a continuar con la sesión.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Diputado Presidente le solicitaría se someta a votación esta primer reserva para a continuación presentar la segunda ante esta soberanía.

- EL C. PRESIDENTE: De acuerdo Diputado Otáñez; se declara abierto el debate de la reserva presentada por el Diputado Rodrigo Otáñez, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la reserva; toda vez que no hay oradores en contra; se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la reserva presentada por el Diputado Rodrigo Otáñez.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal la reserva número 1 presentada por el Diputado Rodrigo Otáñez al Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo

Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención y de una vez razono que es por el mismo sentido y en congruencia por la abstención en el fondo.

- Quintero Quintero Loreto, en abstención y por lo mismo lo razono de una vez, en congruencia con mi votación anterior.

- Del Villar Casas Rosina, a favor

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar?

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
RESERVA AL DICTAMEN NÚMERO 1			
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón	**X**		
Ruvalcaba Flores David			
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli			
Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		

Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María			**X**
Quintero Quintero Loreto			**X**
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo			
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel,	**X**		
Total de votos a favor	**20**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**2**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación, es 20 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, continua con el uso de la voz el Diputado Rodrigo Otáñez para que nos diga en que consiste su reserva.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Claro que si Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicito reservar el siguiente artículo de la presente ley en secuencia.

El texto actual dice:

El Artículo 225. Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante únicamente podrá registrar un solo vehículo y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.

La propuesta de la reserva debe decir:

El Artículo 225. Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante podrá registrar hasta tres vehículos y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.

Es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA RESERVA PRESENTADA POR EL DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Rodrigo A. Otáñez Licona, Diputado por el Partido de Baja California me permito solicitar que en la discusión del Dictamen 1 de la **Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes** con fundamento en el artículo 130 y 131 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se reserven para su discusión en esta sesión de la **LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA** el artículo 225:

En esa virtud, los artículos citados deberán quedar redactados de la siguiente forma:

Artículo DOSCIENTOS VEINTICINCO del Dictamen de LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	
TEXTO DEL DICTAMEN DICE:	PROPUESTA DE RESERVA DEBE DECIR:
• **Artículo 225.** Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante únicamente podrá registrar un solo vehículo y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.	• **Artículo 225.** Las autorizaciones tendrán una vigencia anual, el solicitante podrá registrar **hasta tres vehículos** y la solicitud de renovación deberá presentarse conforme al Reglamento de esta Ley.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Presidencia que se someta a consideración la siguiente reserva.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día de su presentación.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la reserva, toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la reserva presentada por el Diputado Rodrigo Otáñez.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal la reserva, la segunda reserva del Diputado Aníbal Otáñez, al Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; iniciando por la derecha.

- EL C. PRESIDENTE: Diputada, antes de votar van a dar cuenta con un Diputado.

- LA C. SECRETARIA: Si de la llegada del Diputado Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, presente.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, a favor y hacer un pequeño y breve comentario de que en esta Ley de Movilidad Sustentable y Transporte se les hizo de su conocimiento a los transportistas el cual se les tomó, se fueron escuchados inclusive les hago los comentarios, las compañeras Diputadas que los transportistas, inclusive tenían hasta la ley que la compañera Diputada Claudia Agatón se los proporcionó, entonces si hubo tiempo para poder tener conocimiento de la ley, es cuánto.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, a favor.

- Topete Robles Elí, a favor.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, a favor.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, a favor.

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención por los argumentos vertidos en la reserva anterior.

- Quintero Quintero Loreto, en abstención, igualmente, por congruencia.

- Del Villar Casas Rosina, a favor.

- Villalobos Ávila María Luisa, a favor.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, a favor.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, a favor.

- Molina García Juan Manuel, a favor.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, a favor.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, a favor.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, a favor.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, a favor.

- Morán Hernández Víctor Manuel, a favor.

- LA C. SECRETARIA: Haber, damos cuenta de la llegada del Diputado, Ruvalcaba Flores David, ahora si emita su voto.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Llegando y votando Diputada.

- EL C. PRESIDENTE: Por favor su voto Diputado.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Si Usted me lo pide, claro que sí Presidente, a favor.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
RESERVA AL DICTAMEN NÚMERO 1			
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón			
Ruvalcaba Flores David	**X**		
Bujanda Ruíz Miguel Ángel	**X**		
Geraldo Núñez Araceli			

Topete Robles Elí	**X**		
Otañez Licona Rodrigo Anibal	**X**		
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María			**X**
Quintero Quintero Loreto			**X**
Del Villar Casas Rosina	**X**		
Villalobos Ávila María Luisa	**X**		
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda	**X**		
Cano Núñez Miriam Elizabeth	**X**		
Molina García Juan Manuel	**X**		
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan	**X**		
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis	**X**		
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia	**X**		
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea	**X**		
Morán Hernández Víctor Manuel	**X**		
Total de votos a favor	**21**		
Total de votos en Contra		**0**	
Total de Abstenciones			**2**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el resultado de la votación, **es 21 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Escrutadora, se le concede el uso de la voz a la Diputada Claudia Agatón Muñiz, para presentar su reserva.

- LA C. DIP. CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ: Con su venia Presidente, Buenas tardes compañeros Diputados y Diputadas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo trae a esta máxima tribuna del pueblo, la voz de los transportistas que a través de los años, pues han venido buscando dignificar sus derechos, en estos días lograron reunirse los cinco municipios con el Gobernador del Estado, mismo que dio apertura a sus propuestas a través de las mesas de trabajo que fueron llevadas a cabo en las oficinas de la Secretaría General de Gobierno en días anteriores, por lo cual solicitamos que las reservas que hoy se presentan en nombre de los transportistas, Diputados y Diputadas sean valoradas de manera consiente y objetiva en beneficio de la ciudadanía de Baja California.

En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 131, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento reserva en lo particular al Dictamen Número de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aprobado en la sesión de comisión celebrada el día 23 de marzo de 2020, el cual contiene, Iniciativa por la que se Crea la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California para quedar como sigue:

ÚNICO: Reserva en lo particular a los artículos 99, fracción I, 104, 135, 139 y 153 para quedar de la siguiente forma:

Artículo 99, párrafo primero queda igual; se modifica la fracción I, para quedar como sigue; en la fracción I.- "Rutas intermunicipales autorizadas (entra la palabra) por la Junta de Gobierno"; de la II a la V queda igual; párrafo segundo queda igual; párrafo tercero queda igual.

Esta reserva compañeros Diputados, busca que la decisión de autorizar las nuevas rutas no recaiga en una sola figura, sino por el contrario que se abra democráticamente a los titulares de las Secretarías de Estado que integran la Junta de Gobierno.

La siguiente reserva es al Artículo 104, "La vigencia de las concesiones será por un periodo de 30 años y podrá ser prorrogados por periodos iguales y sucesivos como lo previsto en la presente ley, siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos sus términos las condiciones establecidas en la concesión respectiva".

Lo anterior Diputadas y Diputados, es con la finalidad de dar certeza en cuanto a la inversión y capital humano a largo plazo, pues de no ser así, dejarlo como está actualmente en el dictamen, de seis años como mínimo y máximo de treinta, se dejaría al arbitrio y sin ninguna garantía de inversión a los concesionarios que brindan el servicio de transporte público, máxime que se va a exigir la renovación de unidades de transporte con sistema de geolocalización, es decir, se requería o se requerirá de una inversión considerable.

La reserva al Artículo 135, el primer párrafo (queda igual); del I al III (queda igual); aquí se adiciona un último párrafo para quedar como sigue: "En los supuestos en el que el Instituto o que la Junta de Gobierno requieran expedir nuevas concesiones al servicio público de transporte masivo de personas, se deberá previamente que valorar y dar prioridad a quienes ya cuenten con concesiones, a efectos de determinar si pueden estos cubrir la ruta".

Con esta reserva Diputadas y Diputados se pretende dar prioridad a en la asignación de nuevas rutas, porque hay quienes ya cuentan con las concesiones y permisos, pues en muchas de las ocasiones ellos ya tienen la capacidad y experiencias para que puedan brindar el servicio de las nuevas rutas y claro está que esto se debe de valorar y analizar, si cumple también pues con los requisitos y las necesidades planteadas para que en su caso se asigne las nuevas rutas, la pretensión es no hacer crecer más el número de concesiones, cuando pueden ser resueltas por los ya existentes por los transportistas locales.

La siguiente reserva, antepenúltima es el Artículo 139, primer párrafo (queda igual); segundo párrafo (queda igual); tercer párrafo (queda igual); Se adiciona el cuarto párrafo, "Los concesionarios del Servicio Público de Transporte Masivo de personas podrán otorgar el servicio de transporte de personal, debiendo cumplir para ello con los requisitos señalados para dicha concesión".

Por ejemplo Diputados, existe el transporte masivo que ya cuenta con las unidades y capacidad técnica, es decir, los que transportan de manera natural o normal a gente, tienen autobuses y el conocimiento, pero no pueden ofertar el servicio de

traslado a empresas particulares, por lo que con esta visión daremos oportunidad a que empresas bajacalifornianas que ya existen y que están aparte ya reguladas puedan ofrecer el servicio, porque actualmente se contratan a empresas privadas o empresas que son de otras entidades de nuestro país y esto no afectaría el servicio que brindan diariamente.

El Artículo 153 y último, párrafo primero (queda igual); del I al XXVIII (queda igual); se elimina del último párrafo la fracción XXII, para quedar como sigue: "Al servicio público de transporte de personal no le aplicaran las fracciones IX, XVI, XIV y XV".

Lo anterior es así ya que todo servicio público de transporte debe de estar obligado a contar con una póliza de seguro para proteger a los pasajeros y daños a terceros, actualmente nadie está obligado a tener un seguro, aunque viajes tú de manera normal dentro del transporte público, por lo que, de no aprobarse esta reserva, se estaría autorizando a que las empresas de transporte de personal, pues no tengan la obligación, por ejemplo, de contar con dicha póliza de seguro.

Dado en el salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García", del H. Congreso del Estado, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA RESERVA PRESENTADA POR LA DIP. CLAUDIA AGATÓN MUÑIZ)

C. DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ.

PRESIDENTE DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

PRESENTE.-

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 131, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento RESERVA EN LO PARTICULAR AL DICTAMEN NÚMERO 1 DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACION, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, aprobado en la sesión de comisión celebrada el día 23 de marzo de 2020, el cual contiene INICIATIVA POR LA QUE SE CREA LA LEY DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, para quedar como sigue:

ÚNICO.- RESERVA EN LO PARTICULAR A LOS ARTÍCULOS 99 Fracción I, 104, 135, 139 y 153, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA:

ARTÍCULO 99.-...

I. Rutas intermunicipales autorizadas por la Junta de Gobierno;

II a la V.-...

ARTÍCULO 104.- La vigencia de las concesiones será por un periodo de 30 años, y podrán ser prorrogados por periodos iguales y sucesivos, conforme a lo previsto en la presente siempre que se hubiere cumplido y respetado en todos términos, las condiciones establecidas en la Concesión respectiva.

ARTÍCULO 135.-...

I a la III.-...

En los supuestos en que el Instituto o la Junta de Gobierno requieran expedir nuevas concesiones al servicio público de transporte masivo de personas, se deberá previamente que valorar y dar prioridad a quienes ya cuentan con concesiones, a efectos de determinar si pueden estos cubrir las rutas.

ARTÍCULO 139.-...

Los concesionarios de servicio público de transporte masivo de personas, podrán otorgar el servicio de transporte de personal, debiendo cumplir para ello con los requisitos señalados para dicha concesión.

ARTÍCULO 153.-...

I al XXVIII.-...

Al servicio público de transporte de personal no le aplicarán las fracciones IX, XVI, XXIV y XXV.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a la fecha de su presentación.

"Democracia y Justicia Social"

Dip. Claudia J. Agatón Muniz

Integrante del Partido del Trabajo

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Claudia Agatón Muñiz, en consecuencia, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra del mismo, toda vez que no hay oradores en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación nominal la reserva presentada por la Diputada Claudia Agatón Muñiz; adelante Diputado.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Una observación a la promovente, de por si es complicado, porque tiene muchos artículos la ley, es muy difícil poder evaluar, los efectos de cada uno de los mismos y más las reservas, las escuche, en algunas puedo coincidir en otras no, entonces se hace una sola presentación de diversas, diversos artículos, entonces quisiera yo preguntar si, ¿si es en paquete, o se van a votar por separado? Que me diga Señor Presidente, para poder tomar yo una decisión.

- EL C. PRESIDENTE: Es una sola reserva.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Gracias Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, adelante Diputada Escrutadora.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: En seguimiento a sus instrucciones Diputado Presidente, se somete a votación nominal la reserva presentada por la Diputada Claudia Agatón al Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; iniciando por la derecha.

- Vázquez Valadez Ramón, en contra y comentar Diputado Presidente, de que se tomó en cuenta a los concesionarios el día de la comisión, dimos oportunidad, ellos explicaban otros motivos, también dimos cuenta de la sociedad, entonces estamos evitando cosas raras, corrupción, entonces mi voto es, en contra.

- Ruvalcaba Flores David, pues dicho lo anterior, coincidí con algunas presentadas, con otras no, pero como es paquete con la pena mi voto es, en contra.

- Bujanda Ruíz Miguel Ángel, en contra.

- Geraldo Núñez Araceli, a favor.

- Topete Robles Elí, en contra.

- Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, en contra.

- Agatón Muñiz Claudia Josefina, a favor.

- Vázquez Castillo Julio César, quiero analizar, quiero aquí hacer mención de algo, no puedo creer que nuestros compañeros Diputados no puedan aprobar algunas de estas, porque por ejemplo, en esta del Artículo 153 habla de la obligatoriedad del servicio público de transporte, a tener seguro de gastos médicos en accidentes para los pasajeros y daños a terceros, y resulta que aquí se lo están quitando al transporte de personal que le da servicio a las empresas, estamos desprotegiendo al usuario, al empleado, al trabajador que está en la maquila y que todos los días utiliza ese transporte para ir y venir a su trabajo, creo que es irresponsable el hecho de no tomar en cuenta esto, que está garantizando el, la atención en caso de siniestro de los empleados de cualquier maquiladora, Baja California tiene miles y miles de empleados en maquiladora y este Congreso no lo está tomando en cuenta y en este consejo que se está formando, pues resulta que hay mucha bondades para el

consejo de transporte, una de ellas hasta rebasa por encima de los Ayuntamientos, por eso es importante y para mí era muy importantes estas reservas, porque vienen a proteger sobre todo en este caso a los trabajadores de la maquila que aquí no le estamos dando la importancia que son miles en Baja California, yo por eso estoy a favor de estas reservas, y pues en contra de tomar en cuenta a los trabajadores, protegiéndolos en este sentido.

- Vásquez Hernández Eva María, en abstención y precisamente con lo que aquí se está vertiendo, me doy cuenta y confirmo que este tema debió de haber sido más socializado.

- Quintero Quintero Loreto, en abstención.

- Del Villar Casas Rosina, en contra.

- Villalobos Ávila María Luisa, en contra.

- Caballero Ramírez Monserrat, a favor.

- Rodríguez Eva Gricelda, en contra.

- Cano Núñez Miriam Elizabeth, analizando el tema del transporte masivo, yo difiero de lo que comentan Diputado, ellos toman en cuenta que los trabajadores de la maquila vallan con seguro, así está trabajando el transporte de personal, así que voy en contra.

- Molina García Juan Manuel, solo para precisión, para que quede bien estipulado, la observación está cubierta Diputado, porque en los términos de la Ley Federal del Trabajo y de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, y por ser una prestación que las empresas prestan a los trabajadores, el traslado del punto

de donde son recogidos hasta el lugar donde son entregados y la vuelta de regreso, ese traslado es considerado si algo llegara a suceder como un riesgo de trabajo y la empresa es la que cumple con las obligaciones de cualquier situación de contingencia, ellos en ese momento son considerados como dentro de la jornada laboral y cualquier situación que le pudiera pasar, además que la ley si previene la situación que está sucediendo materialmente, entonces yo diría que esos trabajadores van doblemente asegurados; por esa razón mi voto es en contra de la reserva.

- Navarro Gutiérrez Víctor Hugo, a favor.

- Melendrez Espinoza Juan, en contra.

- Gallardo García Fausto, a favor.

- Luis Moreno Hernández, en contra.

- **LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA:** ¿Algún Diputado que falta por votar? ¿alguna Diputada que falta por votar? continuamos con la Mesa Directiva.

- López Montes Gerardo, a favor, yo entiendo lo que comenta el Presidente de la comisión, de que se escuchó a los transportistas, yo también hice lo propio, los escuché, yo les puede decir que en un tiempo de treinta años no se recupera una inversión a un vehículo de los que se van a pedir, de los que se van a solicitar para el nuevo transporte, son vehículos muy caros, muy costosas las reparaciones y deben de tomar en cuenta eso, el tiempo es muy corto, las reparaciones, el chofer, etcétera, etcétera, no dan los lapsos long económicos para poder reparar una unidad, a favor de las reservas.

- Hernández Carmona Carmen Leticia, en abstención, necesito conocer más a detalle la propuesta, para poder decidir si voto a favor o en contra.

- Vaca Chacón María Trinidad, a favor.

- González Quiroz Julia Andrea, en contra.

- Morán Hernández Víctor Manuel, en contra.

SESIÓN ORDINARIA DE CLAUSURA DE FECHA: 25 DE MARZO DE 2020			
RESERVA AL DICTAMEN NÚMERO 1			
COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO, CONURBACIÓN, INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			
SENTIDO DE LA VOTACIÓN	**A FAVOR**	**EN CONTRA**	**ABSTENCIÓN**
Vázquez Valadez Ramón		**X**	
Ruvalcaba Flores David		**X**	
Bujanda Ruíz Miguel Ángel		**X**	
Geraldo Núñez Araceli	**X**		
Topete Robles Elí		**X**	
Otañez Licona Rodrigo Anibal		**X**	
Agatón Muñiz Claudia Josefina	**X**		
Vázquez Castillo Julio César	**X**		
Vásquez Hernández Eva María			**X**
Quintero Quintero Loreto			**X**
Del Villar Casas Rosina		**X**	
Villalobos Ávila María Luisa		**X**	
Caballero Ramírez Monserrat	**X**		
Rodríguez Eva Gricelda		**X**	
Cano Núñez Miriam Elizabeth		**X**	

Molina García Juan Manuel		**X**	
Navarro Gutiérrez Víctor Hugo	**X**		
Meléndrez Espinoza Juan		**X**	
Gallardo García Fausto	**X**		
Moreno Hernández Luis		**X**	
López Montes Gerardo	**X**		
Hernández Carmona Carmen Leticia			**X**
Vaca Chacón María Trinidad	**X**		
González Quiroz Julia Andrea		**X**	
Morán Hernández Víctor Manuel		**X**	
Total de votos a favor	**8**		
Total de votos en Contra		**14**	
Total de Abstenciones			**3**

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se le informa Diputado Presidente que el **resultado de la votación es, 8 votos a favor, 14 votos en contra, 3 abstenciones**.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se declara aprobado en lo general el Dictamen Número 1 de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y se aprueban las reservas presentadas por el Diputado Rodrigo Otáñez; y se desecha la reserva presentada por la Diputada Claudia Agatón Muñiz.

- EL C. PRESIDENTE: Se continua con el siguiente apartado **"Proposiciones",** haciendo un atento recordatorio a los compañeros Diputados, para que la lectura de

las mismas sea por un máximo de cinco minutos; se le concede el uso de la voz a la Diputada Eva María Vásquez Hernández para presentar su Proposición.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Con su venia Diputado Presidente, compañeros Diputados, primero que nada, solicito se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria; y se someta a consideración la dispensa de trámite respectiva.

- EL C. PRESIDENTE: Se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del acuerdo y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite; de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse a manifestarlo levantando su mano; **por mayoría Diputado Presidente.**

- EL C. PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la voz, Diputada Eva María Vásquez.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Gracias Presidente.

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ, Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

La suscrita EVA MARIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en mi calidad de Diputada; con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido

en el Artículo 110 fracción III, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta tribuna, Proposición con Punto de Acuerdo Económico, mediante el cual se solicita:

"El Poder Legislativo del Estado, remite atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a los cinco Ayuntamientos, para que en cumplimiento a lo previsto por los Artículos Primero y Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la protección amplia del derecho de todos los Bajacalifornianos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, protección de la salud, disposición de agua, intereses superior del menor entre otros, realicen, concierten e implementen las medidas preventivas para garantizar que con motivo de la PANDEMIA conocida por CORONAVIRUS – COVID 19, se OTORGUEN APOYOS para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, así como albergues, estancias y casas hogares de niños, jóvenes y adultos mayores, manteniendo vías de comunicación efectiva para coadyuvar a satisfacer necesidades fundamentales, además de las sanitarias y de salud pertinentes. Solicitando, asimismo, se emita una MORATORIA GENERAL en materia de pagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos derivados del ejercicio de las potestades tributarias del Estado y Municipios, privilegiando la no suspensión de servicios, así como la no afectación patrimonial para los ciudadanos durante los siguientes meses de abril y mayo del veinte veinte; todo lo anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es ya muy evidente el intenso grado de peligro por el que atraviesan los Bajacalifornianos con motivo de la reciente PANDEMIA COVID 19.

Nuestra responsabilidad como representantes populares, se advierte en la vigilancia y cumplimiento del Estado de Derecho, dentro del cual es evidente la potestad del Estado y de los Municipios en el ejercicio concurrente y coordinado de facultades para garantizar la salubridad general de la población, pero también, la protección subsidiaria para personas y familias en condición vulnerable.

El impacto a nivel mundial de esta PANDEMIA, ha propiciado la activación de medidas drásticas que significan examinar, prevenir y controlar el crecimiento y expansión de este poderoso virus.

Nuestros vecinos del Norte y diversos países del mundo que han logrado controlar la expansión del COVID 19, sostienen que para luchar contra esta pandemia se tiene que saber con certeza que lo principal es evitar que ingrese, que se propague, que se multiplique y para esto es necesario activar los protocolos que permitan:

Primero: Detectar cualquier caso.

Segundo: Prevenir su propagación.

Tercero: Reforzar medidas sanitarias que permitan proteger a la población más vulnerable.

Cuarto: Evitar poner en riesgo en lo posible las actividades del Estado buscando implementar medidas alternativas en sectores como el de abasto de productos

básicos, salud, alimentación para personas sin posibilidades, educación y regulación de actividades masivas.

Para nosotros no pasa tampoco desapercibida la propuesta de estímulos fiscales que podrían formar parte de los protocolos que implemente el Gobierno de Baja California, mismos que han sido propuestos por COPARMEX en seis puntos específicos, mismos que se adjunta a la presente proposición para que formen parte de esta exhortación.

Pero también, consideramos altamente importante se emita una moratoria general en el pago de tributos, que permitan a los Bajacalifornianos transitar por este amargo periodo con las menores afectaciones posibles en sus patrimonios.

Gran parte de nuestra economía se sustenta en actividades, negocios y empresas, así como trabajadores que viven al día y que ante las circunstancias por las que atravesamos, no habrá día remunerado, financieramente hablando.

Por tanto, resulta necesario que junto con la moratoria general se tomen dentro de esta medidas hacendarias que impliquen conceder estímulos durante este periodo de emergencia y junto con ello, se mantengan apoyos para quien más lo necesite, dentro de lo que entran sin duda organismos de la sociedad civil con diversas causas humanitarias atienden a la niñez, juventud, adultos mayores y otros especializados como lo son migrantes, casas hogares, y centros de protección para la mujer en peligro, en ambos casos solo se pueden referir dos ejemplos CAVIM y CAHOVA.

Considerando lo previsto por el Artículo 49 Fracción XXII concerniente a la potestad del Gobernador de celebrar con la federación convenios para atender lo relativo a la salubridad pública, en correlación con el Articulo 106, referente a la obligación del Estado de vigilar y cooperar con el Gobierno Federal en la observancia de la salud pública para prevenir y combatir enfermedades, en vinculación con lo regulado por el Articulo 83, el que previene la responsabilidad de los Municipios para garantizar la sustentabilidad en el desarrollo para la adecuada prestación de servicios sociales en coordinador y concertación de acciones con los Gobiernos Federal y Estatal, estos últimos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentamos proposición:

Es por lo expuesto que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicitando se someta a consideración como ya se hizo la DISPENSA DE TRÁMITE correspondiente, me permito presentar PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en los términos siguientes:

ÚNICO: "El Poder Legislativo del Estado, remite atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a los cinco Ayuntamientos, para que en cumplimiento a lo previsto por los Artículos Primero y Cuarto de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la protección amplia del derecho de todos los Bajacalifornianos a la alimentación nutritiva, suficiente de calidad, protección de la salud, disposición de agua, e intereses superior del menor entre otros, realicen, concierten e implementen las MEDIDAS PREVENTIVAS para garantizar que con motivo de la PANDEMIA conocida por

CORONAVIRUS – COVID 19, SE OTORGUEN APOYOS para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, así como albergues, estancias y casas hogares de niños, jóvenes y adultos mayores, manteniendo vías de comunicación efectiva para coadyuvar a satisfacer las necesidades fundamentales. Solicitando, asimismo, se emita una MORATORIA GENERAL en materia de pagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos derivados del ejercicio de las potestades tributarias del Estado y Municipios, privilegiando la no suspensión de servicios, así como la no afectación patrimonial para los ciudadanos durante los siguientes meses de abril y mayo del dos mil veinte".

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN.

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos".

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Diputada Eva María Vásquez.

Muchas gracias compañeros Diputados, este es un esfuerzo más, que como comentábamos en las anteriores intervenciones sobre esta pandemia, pues realmente lo que busca es privilegiar en todo momento en orden fundamental, primero la salud y después también proteger en todo caso a los más vulnerables y proteger la economía de las familias Baja Californianas, muchísimas gracias.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ)

DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo

Presente:

La suscrita EVA MARIA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en mi calidad de Diputada; con fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como por lo establecido en el Artículo 110 fracción III, 114, 119 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta tribuna, Proposición con Punto de Acuerdo Económico, mediante el cual se solicita:

"El Poder Legislativo del Estado, remite atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a los cinco Ayuntamientos, para que en cumplimiento a lo previsto por los Artículos Primero y Cuarto de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la protección amplia del derecho de todos los Bajacalifornianos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, protección de la salud, disposición de agua, intereses superior del menor, realicen, concerten e implementen las medidas preventivas para garantizar que con motivo de la

PANDEMIA conocida por CORONAVIRUS – COVID 19*, se *OTORGUEN APOYOS para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, así como albergues, estancias y casas hogares de niños, jóvenes y adultos mayores, manteniendo vías de comunicación efectiva para coadyuvar a satisfacer necesidades fundamentales, además de las sanitarias y de salud. Solicitando, asimismo, se emita una MORATORIA GENERAL en materia de pagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos derivados del ejercicio de las potestades tributarias del Estado y Municipios, privilegiando la no suspensión de servicios, así como la no afectación patrimonial para los ciudadanos durante los siguientes meses de Abril y Mayo de 2020"; todo lo anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es ya muy evidente el intenso grado de peligro por el que atraviesan los Bajacalifornianos con motivo de la reciente PANDEMIA COVID 19.

Nuestra responsabilidad como representantes populares, se advierte en la vigilancia y cumplimiento del Estado de Derecho, dentro del cual es evidente la potestad del Estado y de los Municipios en el ejercicio concurrente y coordinado de facultades para garantizar la salubridad general de la población, pero también, la protección subsidiaria para personas y familias en condición vulnerable.

El impacto a nivel mundial de esta PANDEMIA, ha propiciado la activación de medidas drásticas que significan examinar y examinar, prevenir y controlar el crecimiento y expansión de este poderoso virus.

Nuestros vecinos del Norte y diversos países del mundo que han logrado controlar la expansión del COVID 19, sostienen que para luchar contra esta pandemia se tiene que saber con certeza que lo principal es evitar que ingrese, que se propague, que se multiplique y para esto es necesario activar los protocolos que permitan:

Primero: Detectar cualquier caso.

Segundo: Prevenir su propagación.

Tercero: Reforzar medidas sanitarias que permitan proteger a la población más vulnerable.

Cuarto: Evitar poner en riesgo en lo posible las actividades del Estado buscando implementar medidas alternativas en sectores como el de abasto de productos básicos, salud, alimentación para personas sin posibilidades, educación y regulación de actividades masivas.

Para nosotros no pasa tampoco desapercibida la propuesta de estímulos fiscales que podrían formar parte de los protocolos que implemente el Gobierno de Baja California, mismos que han sido propuestos por COPARMEX en seis puntos específicos, mismos que se adjunta a la presente proposición para que formen parte de esta exhortación.

Pero también, consideramos altamente importante se emita una moratoria general en el pago de tributos, que permitan a los Bajacalifornianos transitar por este amargo periodo con las menores afectaciones posibles en sus patrimonios.

Gran parte de nuestra economía se sustenta en actividades, negocios y empresas, así como trabajadores que viven al día

y que ante las circunstancias por las que atravesamos, no habrá día remunerado, financieramente hablando.

Por tanto, resulta necesario que junto con la moratoria general se tomen dentro de esta medidas hacendarias que impliquen conceder estímulos durante este periodo de emergencia y junto con ello, se mantengan apoyos para quien mas lo necesite, dentro de lo que entran sin duda organismos de la sociedad civil con diversas causas humanitarias atienden a la niñez, juventud, adultos mayores y otros especializados como lo son adicciones, migrantes, casas hogares, y centros de protección para la mujer en peligro, en ambos casos solo por referir dos ejemplos CAVIM y CAHOVA.

Considerando lo previsto por el Artículo 49 Fracción XXII concerniente a la potestad del gobernador de celebrar con la federación convenios para atender lo relativo a la salubridad pública, en correlación con el Articulo 106, referente a la obligación del Estado de vigilar y cooperar con el gobierno federal en la observancia de la salubridad pública para prevenir y combatir enfermedades, en vinculación con lo regulado por el Articulo 83, el que previene la responsabilidad de los Municipios para garantizar la sustentabilidad en el desarrollo para la adecuada prestación de servicios sociales en

coordinación y concertación de acciones con los gobiernos federal y estatal, estos últimos preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, presentamos proposición:

Es por lo expuesto que**,** con fundamento en el artículo 119 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, solicitando se someta a consideración de esta Soberanía la **DISPENSA DE TRÁMITE** correspondiente, me permito presentar PROPOSICIÓN **CON PUNTO DE ACUERDO**, en los términos siguientes:

ÚNICO: "El Poder Legislativo del Estado, remite atento exhorto al Gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, así como a los cinco Ayuntamientos, para que en cumplimiento a lo previsto por los Artículos Primero y Cuarto de la Constitución Politice de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la protección amplia del derecho de todos los Bajacalifornianos a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, protección de la salud, disposición de agua, intereses superior del menor, realicen, concerten e implementen las MEDIDAS

PREVENTIVAS para garantizar que con motivo de la PANDEMIA conocida por CORONAVIRUS – COVID 19, SE OTORGUEN APOYOS para personas y familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, así como albergues, estancias y casas hogares de niños, jóvenes y adultos mayores, manteniendo vías de comunicación efectiva para coadyuvar a satisfacer necesidades fundamentales. Solicitando, asimismo, se emita una MORATORIA GENERAL en materia de pagos de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos derivados del ejercicio de las potestades tributarias del Estado y Municipios, privilegiando la no suspensión de servicios, así como la no afectación patrimonial para los ciudadanos durante los siguientes meses de Abril y Mayo de 2020.”

DADO EN EL RECINTO PARLAMENTARIO DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL DÍA DE SU PRESENTACIÓN.

ATENTAMENTE

"Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos"

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Eva María Vásquez Hernández

Coordinador

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. SECRETARIA: Diputado Presidente, damos cuenta de la llegada de la Diputada, Araceli Geraldo.

- EL C. PRESIDENTE: Se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma; Diputada Miriam tiene el uso de la voz.

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Muchísimas gracias Diputado Presidente, con su permiso, entendemos que el día, en esta ocasión es cuando debemos estar más unidos, pero también queda claro que el actual Gobierno del Estado y el actual Gobierno Federal han dado muestras de que para este Gobierno primero los pobres y también han hecho trabajos extraordinarios para atender las diferentes fases que se atraviesan de esta pandemia, entonces desde mi punto de vista resulta irrelevante que se haga un exhorto por parte de este Congreso, por lo tanto adelanto y mi voto es en contra.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Nada más si me permite.

- EL C. PRESIDENTE: Si, ¿alguien más? Haber, me permite nomás que primero sea el Diputado Gerardo.

- EL C. DIP. GERARDO LÓPEZ MONTES: Amiga Cano, Miriam Cano, de hecho el tema es para fortalecer el tema de las medidas necesarias para el tema de la pandemia, tal es el caso que en Tijuana tuvimos un ejemplo el fin de semana, donde las playas estaban saturadas y ciudadanos que no tomaron la responsabilidad necesaria para cumplir con las medidas de higiene que está proponiendo la Secretaría de Salud, y por eso es el Exhorto, incluso lo platicábamos con la compañera Eva, de que se ponga el Municipio, los cinco Municipios a trabajar en equipo para evitar esto que está ocurriendo, en Playas tenemos casos ya de personas con coronavirus y el fin de semana estaba saturado, entonces es la intención de exhortar a los Alcaldes, para que trabajen en ese tema y hagan saber al ciudadano que estamos en una crisis de salud y no sean omisos en ese sentido, ese es el sentido.

- LA C. DIP. MIRIAM ELIZABETH CANO NÚÑEZ: Diputado Presidente, yo creo que esto sería irrelevante de hecho el Exhorto, porque los esfuerzos se están haciendo, la población se está informando, pero ya quedaría eso bajo la responsabilidad de la población, no necesariamente de exhortar al Gobierno del Estado, ni al Gobierno Federal en estos esfuerzos.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputada.

- LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ: Si, gracias Presidente, a mí me parece que es un tema sumamente importante y que aquí no se podría, yo difiero del comentario de mi compañera Diputada, porque considero que aquí lo que, lo que abunde nos va ayudar, nos va ayudar, porque primero genera conciencia en los ciudadanos, número dos, es congruente con las iniciativas que ya se presentaron en esta misma sesión, va con un claro mensaje de la preocupación, pero también de la ocupación que todos los integrantes de esta XXIII Legislatura estamos tratando enviar como un mensaje de unidad, como un mensaje de apoyo a las familias Baja Californianas, estamos en una etapa, no quisiera decir que primaria, pero si en una etapa donde aún podemos mandar los mensajes adecuados, primero de apoyo a la economía, de apoyo a la salud y que esta información baje a través de las diversas autoridades, se trata de un exhorto que me parece viene a ser congruente con todo lo que aquí ya se ha dicho entorno a este tema, que más allá de colores nos une el amor por nuestro Estado, les pido compañeros Diputados que en congruencia de todas las votaciones de los asuntos anteriores, no le den un voto a un Exhorto presentado por una fracción, le den un voto a la salud, al bienestar y a la ciudadanía Baja Californiana, gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la Proposición presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; **por mayoría Diputado Presidente**.

- EL C. PRESIDENTE: Se declara aprobada la Proposición leída por la Diputada Eva María Vásquez Hernández. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Loreto Quintero Quintero, para presentar Proposición.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Buenas tardes compañeros, solicito a esta presidencia dispensar la lectura total del documento y se inserte íntegro en cada uno de los instrumentos del registro parlamentario por favor.

HONORABLE ASAMBLEA:

La enfermedad del coronavirus 2019, es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en la región de Wuhan, China. Al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dado a dicho brote el término de pandemia, al tratarse de una enfermedad epidémica que se ha extendido a varios países del mundo de manera simultánea, incluido México.

En Baja California, las autoridades sanitarias confirmaron en días pasados los primeros casos llegando ya a catorce hasta el día de ayer a nivel Estatal, estamos ya en fase dos de la contingencia que se da al existir contagio locales de persona a persona.

Ello ha motivado, la adopción de diversas medidas preventivas, destacándose la suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como el cese de las actividades deportivas, recreativas y culturales, y en general, de cualquier evento masivo o con concentración de personas.

De avanzar dicha contingencia sanitaria en las próximas semanas, aumentando el número de casos registrados, podría adoptarse la suspensión de labores en los centros de trabajo. Este escenario, pone en duda la situación que vivirían los empleados de las empresas en relación al pago de sus salarios en caso de que éstas tuvieran que hacer un paro parcial o total de actividades.

Asimismo, esta situación genera interrogantes en los patrones, ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo deben proceder legalmente? ¿Cómo se afectan los derechos de sus trabajadores? Lo anterior, a fin de no incurrir en responsabilidad por el cierre injustificado de una fuente de trabajo.

Como Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de esta XIII Legislatura, considero fundamental la difusión de información oficial sobre este supuesto, a fin de no generar desinformación, y preservar el clima de estabilidad y tranquilidad laboral que siempre ha caracterizado a nuestro Estado.

Al respecto, con motivo de lo acontecido por la epidemia de la influenza H1N1 en el 2019, desde el 2012 nuestra Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 bis, 427, 428 y 429, contempla un marco regulatorio para enfrentar una emergencia sanitaria, estableciendo disposiciones a observar en caso de que las labores de una empresa deban suspenderse por tal situación. De dichos numerales, se destacan los siguientes aspectos:

Debe existir necesariamente, una declaración de contingencia sanitaria de una autoridad competente, conforme a las disposiciones aplicables, en dicho y donde señale la suspensión de las labores y sus alcances.

La suspensión de actividades puede ser individual (un grupo de trabajadores), o bien colectiva (en donde los trabajadores de la empresa).

El patrón no tiene que pedir autorización o dar aviso a la autoridad laboral, para realizar la suspensión de actividades, ya que procede a partir de la declaratoria de las autoridades sanitarias.

El patrón estará obligado a pagar una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la zona de que se trate, por cada día que dure la suspensión, sin que exceda de un mes.

La relación laboral subsiste, ya que solo queda suspendida temporalmente, por lo que las condiciones generales de trabajo no pueden ser modificadas (antigüedad, vacaciones, primas, etc.), y menos aún puede despedirse a trabajadores bajo este supuesto.

Una vez que termina la contingencia, ya sea que se señale una fecha exacta en la declaración de contingencia sanitaria o que se emita un nuevo comunicado oficial señalando esta circunstancia, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus actividades.

Es importante destacar, que, en caso de una suspensión de relación laboral por contingencia sanitaria, si el patrón pide a los trabajadores realizar actividades,

aunque sea desde casa, está obligado a cubrir el salario completo como si estos acudieran al centro de trabajo.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:

RESOLUTIVO.

ÚNICO. El H. Congreso del Estado de Baja California, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a la dependencia a su cargo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que difunda de manera preventiva, ante la pandemia generada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), información oficial de manera clara y sencilla entre los trabajadores y patrones, de los supuestos en que procede legalmente la suspensión de labores en una empresa o establecimiento, en caso de una contingencia sanitaria determinada por la autoridad competente, acorde a lo previsto por los artículo 42 bis, 427, 428 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, de los derechos y obligaciones que entre dichas partes de la relación laboral, se generan y subsisten, en caso de presentarse una declaratoria de tal naturaleza.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

Presidente solicito la dispensa de trámite de la misma, por obvia razón.

Atentamente.

Diputada Loreto Quintero Quintero.

Presidenta.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR LA DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO)

DIP. VÍCTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
PRESENTE:

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita **DIPUTADA LORETO QUINTERO QUINTERO**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Vigésima Tercera Legislatura Constitucional, en uso de las facultades previstas en los Artículos 110 fracción III, 114, 119 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, comparezco ante esta Soberanía en uso de la Tribuna para presentar **PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO,** al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que causa el COVID-19 se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en la región de Wuhan, China. Al día de hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dado a dicho brote el término de pandemia, al tratarse de una

enfermedad epidémica que se ha extendido a **varios países del mundo** de manera simultánea, incluido México.

La situación actual en nuestro país arroja un total de 118 casos confirmados (al 19-03-2020), 314 casos sospechosos, y desafortunadamente, la primera defunción registrada por este padecimiento, encontrándonos aún en la fase uno de dicha contingencia. En Baja California, las autoridades sanitarias han confirmado los primeros dos casos de coronavirus en la ciudad de Mexicali, además de haberse presentado otros 61 casos sospechosos de portar dicha enfermedad.

Ello ha motivado, la adopción de diversas medidas preventivas, destacándose la suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como el cese de las actividades deportivas, recreativas y culturales, y en general, de cualquier evento masivo o con concentración de personas.

De avanzar dicha contingencia sanitaria en las próximas semanas, aumentando el número de casos registrados, podría adoptarse la suspensión de labores en los centros de trabajo. Este escenario, pone en duda la situación que vivirían los empleados de las empresas en relación al pago de sus salarios en caso de que éstas tuvieran que hacer un paro parcial o total de actividades.

Asimismo, esta situación genera interrogantes en los patrones, ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cómo deben proceder legalmente? ¿Cómo se afectan los derechos de sus trabajadores? Lo anterior, a fin de no incurrir en responsabilidad por el cierre injustificado de una fuente de trabajo.

Como Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social de esta XIII Legislatura, considero fundamental la difusión de información oficial sobre este supuesto, a fin de no generar desinformación, y preservar el clima de estabilidad y tranquilidad laboral que siempre ha caracterizado a nuestro Estado.

Al respecto, con motivo de lo acontecido por la epidemia de la influenza H1N1 en el 2009, desde el 2012 nuestra Ley Federal del Trabajo en sus artículos 42 bis, 427, 428 y 429, contempla un marco regulatorio para enfrentar una emergencia sanitaria, estableciendo disposiciones a observar en caso de que las labores de una empresa deban suspenderse por tal situación. De dichos numerales, se destacan los siguientes aspectos:

1. Debe existir necesariamente, una declaración de contingencia sanitaria de una autoridad competente, conforme a las disposiciones aplicables, en donde señale la suspensión de las labores y sus alcances, esto es, los términos y actividades a suspender, para determinar la forma en que debe operar exactamente la hipótesis de suspensión, pudiendo ser de carácter municipal, estatal o federal, en el ámbito de sus competencias.

2. La suspensión de actividades puede ser individual (un grupo de trabajadores), o bien colectiva (todos los trabajadores de la empresa). Puede decretarse también en toda la empresa o establecimiento, o solo en parte de ella, o en alguna de sus sucursales o agencias.

3. El patrón no tiene que pedir autorización o dar aviso a la autoridad laboral, para realizar la suspensión de actividades, ya que procede a partir de la declaratoria de las autoridades sanitarias.

4. El patrón estará obligado a pagar una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente en la zona de que se trate, por cada día que dure la suspensión, sin que exceda de un mes.

5. La relación laboral subsiste, ya que solo queda suspendida temporalmente, por lo que las condiciones generales de trabajo no pueden ser modificadas (antigüedad, vacaciones, primas, etc), y menos aún puede despedirse a trabajadores bajo este supuesto.

6. Una vez que termina la contingencia, ya sea que se señale una fecha exacta en la declaración de contingencia sanitaria o que se emita un nuevo comunicado oficial señalando esta circunstancia, los trabajadores estarán obligados a reanudar sus actividades.

Es importante destacar, que en caso de una suspensión de relación laboral por contingencia sanitaria, si el patrón pide a los trabajadores realizar actividades, aunque sea desde casa, está obligado a cubrir el salario completo como si estos acudieran al centro de trabajo.

Es por ello, que se propone exhortar al Ejecutivo Estatal a fin de que, por conducto de la dependencia a su cargo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, difunda de manera preventiva, ante la pandemia generada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), información oficial de manera clara y sencilla entre trabajadores y patrones, de los supuestos en que procede legalmente la suspensión de labores en una empresa o establecimiento, en caso de una contingencia sanitaria determinada por la autoridad competente, acorde a lo previsto por los artículos 42 bis, 427, 428 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, de los derechos y obligaciones que entre dichas partes de la relación laboral, se generan y subsisten, en caso de presentarse una declaratoria de tal naturaleza.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, el siguiente **PUNTO DE ACUERDO**:

RESOLUTIVO.

ÚNICO. El H. Congreso del Estado de Baja California, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que instruya a la dependencia a su cargo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de que difunda de manera preventiva, ante la pandemia generada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), información oficial de manera clara y sencilla entre trabajadores y patrones, de los supuestos en que procede legalmente la suspensión de labores en una empresa o establecimiento, en caso de una contingencia sanitaria determinada por la autoridad competente, acorde a lo previsto por los artículo 42 bis, 427, 428 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, y por ende, de los derechos y obligaciones que entre dichas partes de la relación laboral, se generan y subsisten, en caso de presentarse una declaratoria de tal naturaleza.

DADO en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a la fecha de su presentación.

ATENTAMENTE

DIPUTADA LORETO QUINTERO QUINTERO

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Claro que sí Diputada, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados y a las Diputadas si desean intervenir en contra de la

dispensa de trámite, de no ser así se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Siguiendo sus instrucciones compañera Presidenta, se somete a votación económica la dispensa de tramite presentada, las y los Diputados que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; **por mayoría Diputada Presidenta.**

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados y a las Diputadas si desean intervenir en contra de la misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. SECRETARIA ESCRUTADORA: Se somete a votación económica la Proposición Presentada, las y los Diputados que estén a favor sírvanse manifestarlo levantando su mano; **por mayoría Diputada Presidenta.**

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA: Se declara aprobada la Proposición leída por la Diputada Loreto Quintero Quintero. Continuando con la sesión, se le concede el uso de la voz al Diputado Julio César Vázquez Castillo para presentar su Proposición.

- EL C. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Buenas tardes, solicito a esta presidencia se me autorice la dispensa de lectura total del Punto de Acuerdo Económico, con la finalidad de dar lectura a los puntos más importantes de la misma,

solicitando, además, inserte de manera íntegra en la Versión Estenográfica, así como en la Gaceta Parlamentaria.

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ.

PRESIDENTE DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

COMPAÑERAS DIPUTADAS

COMPAÑEROS DIPUTADOS.

HONORABLE ASAMBLEA.

PUEBLO DE BAJA CALIFORNIA.

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO, ME PERMITO PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA HONORABLE LEGISLATURA LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO BAJO LAS SIGUIENTES:

CONSIDERACIONES

Durante este inicio de año 2020, hemos sido testigos de un caos Internacional, del cual hemos sido un tanto pasivos en el actuar, y me refiero al virus denominado COVID-19, mejor conocido como CORONAVIRUS.

Quienes no tienen conocimiento de este virus, les comento que los primeros casos ocurrieron entre el 12 y 29 de diciembre de 2019, según las autoridades de salud de Wuhan, haciendo conocimiento de ello y actuando en consecuencia.

Por lo que el 1 de enero de este año, las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de HUANAN, después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos podrían ser la fuente del virus.

Acto seguido, el 5 de enero, China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no corresponden al SARS ni al MERS. En un comunicado la Comisión de Salud Municipal de Wuhan dice que desde el inició una investigación retrospectiva sobre el brote. Siendo el 7 del mismo mes y año, cuando las autoridades chinas CONFIRMAN que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-nCoV por la Organización Mundial de la Salud.

El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa.

El 12 de enero, China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diagnóstico. Y el 13 de enero, las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavirus, el hombre infectado era un ciudadano chino que había llegado de Wuhan.

El 16 de enero, en Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés que viajo a WUHAN, fue identificado con el virus. El 17 de enero, funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país de Estados Unidos,

responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles.

Para el 10 de febrero, el coronavirus cobro la vida de 1,000 personas, en la gran mayoría en China continental. Y en esta misma fecha, cruceros Norteamericanos, después de sospechas por el coronavirus lo mantuvieran atracado y sus pasajeros esperaron durante días, y hasta el 11 de febrero cuando la Organización Mundial de la Salud nombra al virus COVID-19.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud categorizó el virus COVID-19 como pandemia, ya que refiere una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea, subrayando que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas.

Compañeros, al día de hoy 25 de marzo, hemos tomado medidas de prevención tardías, lo cual significa, que debemos emprender acciones más estrictas en beneficio de toda la sociedad, hagamos consciencia y apliquemos todas las medidas de prevención que las autoridades sanitarias INTERNACIONALES y en particular las de nuestro Estado nos están pidiendo tomar.

Ahora bien, esta problemática de salud, ha ocasiona entre otros, un problema grave en la economía internacional, y desde luego, a la economía de los Bajacalifornianos.

Pues como es sabido en días pasados, diversas cámaras de comerciantes como lo son entre otras CANIRAC y la Asociación China en Baja California, emitieron

comunicados, a través del cual, anunciaron el cierre de diversas negociaciones, por razones de prevención a favor de la sociedad en general.

Al respecto, se debe destacar que con estas acciones, dan una muestra de su SOLIDARIDAD y compromiso con el Pueblo Bajacaliforniano, ya que, no obstante las pérdidas económicas que ello puede y está generándoles, han participado con las prevenciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, como lo es entre otras, el evitar la concurrencia a lugares públicos, con la finalidad de reducir la propagación del COVID-19 y mitigar su impacto.

Asimismo, debe destacarse que las acciones de prevención, que se han venido tomando a nivel Internacional, ha ocasionado en la población un caos, haciendo de ello, una notable disminución de consumo en los comercios, originando una notable disminución en las ventas, que ha provocado un choque en cadena en la economía, pues muchos negocios se han visto en la necesidad de reducir a su personal, dejando en estos momentos de pánico, sin sustento económico a las distintas jefas y jefes de familia.

De igual forma, los Coordinadores Nacionales Síndicos de Síndicos del Contribuyente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicio y Turismo (CONCANACO-SERVITUR), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A.C., solicitaron el apoyo a nivel Federal, para el otorgamiento de facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Es por ello, que en retribución al apoyo de la sociedad y la sensatez Gubernamental, es necesario y urgente, que el Gobierno del Estado, emita un Decreto que coadyuve al saneamiento económico que la población y en particular de los comercios Bajacalifornianos enfrentan en estos momentos de Riesgo de pandemia del Coronavirus.

Por lo anteriormente, es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, que someto a consideración de esta Honorable Vigésima Tercer Legislatura la siguiente Proposición de Acuerdo Económico, para que por obvia y urgente resolución se apruebe, bajo el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Esta Honorable Legislatura exhorta respetuosamente, al Gobernador JAIME BONILLA VALDEZ, de Baja California, a efecto de que emita Decreto de Estímulos Fiscales a favor de las personas físicas y Morales, durante el periodo de la prevención de contagio del COVID-19.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso del Estado, a la fecha de su presentación.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO)

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO CON DISPENSA DE TRÁMITE, POR EL QUE SE EXHORTA AL INGENIERO JAIME BONILLA VALDEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO, A EFECTOS DE QUE EMITA DECRETO DE ESTIMULOS

FISCALES A FAVOR DE LOS COMERCIANTES BAJACALIFORNIANOS, DURANTE EL PERIODO QUE DURE LA PREVENCION CONTRA EL VIRUS COVID-19.

C. DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ.

PRESIDENTE DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.

COMPAÑERAS DIPUTADAS

COMPAÑEROS DIPUTADOS.

HONORABLE ASAMBLEA.

PUEBLO DE BAJA CALIFORNIA.

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 22 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 110 FRACCIÓN III, 114, 117 Y 119 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ME PERMITO PRESENTAR A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA HONORABLE LEGISLATURA PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO ECONOMICO **CON DISPENSA DE TRÁMITE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:**

C O N S I D E R A C I O N E S

Durante este inicio de año 2020, hemos sido testigos de un caos Internacional, del cual hemos sido un tanto pasivos en el actuar, y me refiero al virus denominado COVID-19, mejor conocido como CORONAVIRUS.

Quienes no tienen conocimiento de este virus, les comento que los primeros casos ocurrieron entre el 12 y 29 de diciembre de 2019, según las autoridades de salud de Wuhan, haciendo conocimiento de ello y actuando en consecuencia.

Por lo que el 1 de enero de este año, las autoridades sanitarias de China cierran el mercado mayorista de HUANAN, después de que se descubriera que los animales salvajes vendidos podrían ser la fuente del virus.

Acto seguido, el 5 de enero, China anuncia que los casos desconocidos de neumonía en Wuhan no corresponden al SARS ni al MERS. En un comunicado la Comisión de Salud Municipal de Wuhan dice que se inició una investigación retrospectiva sobre el brote. Siendo el 7 del mismo mes y año, cuando las autoridades chinas CONFIRMAN que han identificado el virus como un nuevo coronavirus, inicialmente llamado 2019-nCoV por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 11 de enero, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Un hombre de 61 años, expuesto al virus en el mercado de mariscos, falleció el 9 de enero después de una insuficiencia respiratoria a raíz una neumonía severa.

El 12 de enero, China comparte la secuencia genética del coronavirus para que los países desarrollen kits de diagnóstico. Y el 13 de enero, las autoridades de Tailandia reportan un caso de infección del coronavirus, el hombre infectado era un ciudadano chino que había llegado de Wuhan.

El 16 de enero, en Japón, las autoridades confirman que un hombre japonés que viajo a WUHAN, fue infectado con el virus. Y el 17 de enero, funcionarios de salud de China confirman que una segunda persona murió en el país. Estados Unidos, responde al brote implementando exámenes de detección de síntomas en los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles.

Para el 10 de febrero, el coronavirus cobro la vida de 1,000 personas, la gran mayoría en China continental. Y en esta misma fecha, cruceros Norteamericanos, después de sospechas por el coronavirus lo mantuvieran atracado y sus pasajeros esperaron durante días, y es hasta el 11 de febrero cuando la OMS nombra al virus COVID-19.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud categorizó el virus COVID-19 como pandemia, ya que refiere a una enfermedad epidémica que se extiende en varios países del mundo de manera simultánea, subrayando que el número de casos de coronavirus fuera de China aumentó 13 veces y que el número de países afectados se triplicó en las últimas dos semanas.

Compañeros, al día de hoy 25 de marzo, hemos tomado medidas de prevención tardías, lo cual significa, que debemos emprender acciones más estrictas en beneficio de toda la sociedad, hagamos consciencia y apliquemos todas las medidas de prevención que las autoridades sanitarias INTERNACIONALES y en particular las de nuestro Estado nos están pidiendo tomar.

Ahora bien, esta problemática de salud, ha ocasiona entre otros, un problema grave en la economía internacional, y desde luego, a la economía de los Bajacalifornianos.

Pues como es sabido en días pasados, diversas cámaras de comerciantes como lo son entre otras CANIRAC y la Asociación China en Baja California, emitieron comunicados, a través del cual, anunciaron el cierre de diversas negociaciones, por razones de prevención a favor de la sociedad en general.

Al respecto, se debe destacar que con estas acciones, dan muestra de su SOLIDARIDAD y compromiso con el Pueblo Bajacaliforniano, ya que no obstante las pérdidas económicas que ello puede y esta generándoles, han participado con las prevenciones emitidas por la OMS, como lo es entre otras, el evitar la concurrencia a lugares públicos, con la finalidad de reducir la propagación del COVID-19 y mitigar su impacto.

Asimismo, debe destacarse que las acciones de prevención, que se han venido tomando a nivel Internacional, ha ocasionado en la población un caos, haciendo de ello, una notable disminución de consumo en los comercios, originando una notable disminución en las ventas, que ha provocado un choque en cadena en la economía, pues muchos negocios se han visto en la necesidad de reducir a su personal, dejando en estos momentos de pánico, sin sustento económico a distintas jefas y jefes de familia.

De igual forma, los Coordinadores Nacionales de Síndicos del Contribuyente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicio y Turismo (CONCANACO-SERVITUR), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Federación Nacional de Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, A.C. (FNAMCP), solicitaron el apoyo a nivel Federal, para el otorgamiento de facilidades en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Es por ello, que en retribución al apoyo de la sociedad y sensatez Gubernamental, que es necesario y urgente, que el Gobierno del Estado, emita un Decreto que coadyuve al saneamiento económico que la población y en particular los comercios Bajacalifornianos enfrentan en estos momentos de Riesgo de pandemia del Coronavirus.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales invocadas, que someto a consideración de esta Honorable Vigésima Tercer Legislatura la siguiente Proposición de Acuerdo Económico, para que por urgente y obvia resolución sea aprobada, bajo el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. - Esta Honorable Legislatura exhorta respetuosamente, al C. JAIME BONILLA VALDEZ, Gobernador del Estado de Baja California, a efecto de que emita Decreto de Estímulos Fiscales a favor de las personas físicas y Morales, durante el periodo que dure la prevención de contagio del COVID-19.

Dado en el salón de sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado, a su fecha de presentación.

ATENTAMENTE

DIP. JULIO CESAR VAZQUEZ CASTILLO

GRUPO PARLAMENTARIO PT.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados y Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; se le informa Diputado Presidente que la votación **es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, se declara abierto el debate de la Proposición y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Presidente, se somete a votación económica la Proposición presentada, los Diputados y Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; se le informa Diputado Presidente que **el resultado es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Bien, se declara aprobada la Proposición leída por el Diputado Julio César Vázquez Castillo; y se le concede el uso de la voz al Diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, para presentar Proposición.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Gracias Diputado Presidente.

Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, Diputado por el Partido de Baja California y en uso de las facultades conferidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I y 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante esta H. Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, ASI COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DRA. GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, PARA QUE ELABOREN UN PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA ECONÓMICA QUE RESPALDE TANTO LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS COMO LA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE SE VEN AFECTADAS POR LA SITUACION ACTUAL DEL COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido de Baja California nos preocupamos por la situación actual que atraviesan los habitantes de este Estado fronterizo, generado por la crisis económica y de salud provocada por la pandemia, en esta ocasión todo México se vuelve vulnerable ante

una situación de Emergencia, misma que la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ha declarado por el COVID-19.

La psicosis generada tanto en el vecino país como en Baja California provoca un caos social. La inoperancia, así como la ligereza de las autoridades federales de tomar acción en materia de económica es algo delicado.

Las compras de pánico han escaseado ya algunos productos de la canasta básica y vemos que la ciudadanía está actuando, de tal manera que la mayoría esta resguardada en casa para evitar la provocación de este virus. Sin embargo, lo que como ciudadano y representante del pueblo Baja Californiano me preocupa es la falta de un plan de apoyo de parte del Gobierno Federal para las micro y medianas empresas, los comerciantes, la economía familiar.

Con simples acciones como postergar las declaraciones anuales, los pagos de recibos básicos de luz, que es federal, y la eliminación de intereses de la banca privada por incurrir en pagos en mora, son acciones que ayudan a no empeorar la economía de las y los baja californianos.

Ante esta situación le proponemos al Gobierno Federal que tome las siguientes acciones:

- Que se giren Escritos Requisitorios al Servicio de Administración Tributaria (el SAT) para que se modifiquen las fechas de las declaraciones de impuestos, para que la sociedad cumpla con su obligación a, debido tiempo.

- Que se realicen convenios con la Banca Privada, para que cambien las fechas de corte de las Tarjetas de Crédito, para que los Ciudadanos que no pueden pagar, puedan pagar en tiempo y forma, así como lo estamos haciendo en Baja California.

- Que se giren Escritos Requisitorios a la Comisión Federal de Electricidad para que no se realicen cortes de Electricidad a los hogares durante estos meses.

- Qué se forme, que se fomente la inversión Local y Extranjera al primer momento que la Organización Mundial de la Salud declare terminada esta pandemia.

Es importante hablar con expertos en los temas, y consultarlos y tomarlos en cuenta, el Gobierno Federal tiene muchas personas expertas, hay que ser, hay que escucharlas y tomarlas en cuenta para tomar las decisiones pertinentes.

Por lo antes expuesto, Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, presento una: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE para quedar como sigue:

PUNTO ÚNICO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DRA. GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, SOLICITANDOLES QUE SE HAGA LO NECESARIO ANTE ESTA CRISIS, PARA QUE ELABOREN UN PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA ECONÓMICA QUE RESPALDE A LA ECONOMÍA FAMILIAR, A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR EL BIENESTAR SOCIAL.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

RODRIGO OTAÑEZ.

Es cuanto Diputado Presidente.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO
DE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA:

Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, Diputado por el Partido de Baja California y en uso de las facultades conferidas en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 y 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en los artículos 110 fracción I, 112, 115 fracción I y 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, presento ante esta H. Asamblea la siguiente **PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, ASI COMO A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DRA. GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, PARA QUE ELABOREN UN PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA ECONÓMICA QUE RESPALDE TANTO LA ECONOMIA FAMILIAR COMO LA DE LAS**

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS QUE SE VEN AFECTADAS POR LA SITUACION ACTUAL DEL COVID-19.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Partido de Baja California nos preocupamos por la situación actual que atraviesan los habitantes de este Estado fronterizo con la incertidumbre generada por la crisis económica y de salud provocada por la pandemia, en esta ocasión todo México se vuelve vulnerable ante una situación de Emergencia, misma que la **ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD** ha declarado por el **COVID-19.**

La psicosis generada tanto en el vecino país como en Baja California provoca el caos social. La inoperancia asi como la ligereza de las autoridades federales de tomar acción generan que la crisis económica actual se acelere aunado a la crisis en materia de salud.

Las compras de pánico han escaseado ya algunos productos de la canasta básica y vemos que la ciudadanía esta actuando, a tal manera que la mayoría esta resguardada en casa para evitar la provocación de este virus. Sin embargo, lo que como ciudadano y representante del pueblo Baja Californiano me preocupa es la falta de un plan que apoye la economía familiar, a las MIPYMES, a los comerciantes, pero sobre todo a las y los baja californianos.

Con simples acciones como postergar las declaraciones anuales, los pagos de recibos de servicios básicos como lo son el agua y la electricidad, y eliminar los interéses por incurrir los pagos en mora son acciones que ayudan a no empeorar la economía de las y los baja californianos.

Me parece irresponsable aun no contar con el plan de contingencia cuando simplemente el Condado de San Diego se ha declarado en cuarentena ante la confirmación de personas contagiadas por el COVID-19. Somos frontera con California, vemos las medidas preventivas que han tomado como el cierre de las fronteras para actividades no esenciales. Debemos actuar y prevenir por que con la salud del pueblo baja californiano no se juega.

Se nota el miedo ante tal situación pues que casi no hay gente en las calles, los negocios están solos o cerrados, emprendedores en pausa con sus proyectos y una crisis económica regional que ya se nota. Por ello, debemos contar con un plan de acción económico que respalde la economía familiar y a las MIPYMES para que los efectos de esta crisis sean menores.

Ante esto le proponemos al Gobierno Federal que tome las siguientes acciones:

- Que se giren Escritos Requisitorios al Servicio de Administración Tributaria para que se modifiquen las fechas de las declaraciones de impuestos, para que la sociedad cumpla con su obligación con el debido tiempo.

- Que se realicen convenios con la Banca Privada, para que se cambien las fechas de corte de los pagos de las Tarjetas de Crédito, para que los Ciudadanos que no pudieron trabajar por causa de la Contingencia puedan realizar sus pagos cuando la situación vuelva a la regularidad.

- Que se giren Escritos Requisitorios a la Comisión Federal de Electricidad para que no se realicen cortes de Electricidad a los hogares de los Mexicanos mientras atravesamos esta crisis Mundial, esto para no dejar desprotegidos los hogares de todos aquellos que están en situaciones difíciles.

- Qué se fomente la inversión Local y Extranjera al primer momento en que la Organización Mundial de la Salud declare por terminada esta pandemia.

Es importante hablar con expertos en los temas, no creer que sabemos todo y buscar asesorías con los expertos, buscando los datos que favorezcan más a **TODOS** los mexicanos, porque **TODOS** estamos en esto.

Por lo antes expuesto, Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente: **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE** para quedar como sigue:

ÚNICO. - QUE ESTA HONORABLE XXIII LEGISLATURA GIRE UN ATENTO EXHORTO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, LIC. ARTURO HERRERA GUTIÉRREZ, ASI COMO

AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, DRA. GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN, SOLICITANDOLES QUE SE HAGA LO NECESARIO EN ESTA CRISIS, PARA QUE ELABOREN UN PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA ECONÓMICA QUE RESPALDE TANTO LA ECONOMÍA FAMILIAR COMO LA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR SU BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO.

Dado en el salón de sesiones "Lic. Benito Juárez García" en la ciudad de Mexicali, Baja California, al día de su presentación.

POR EL PARTIDO DE BAJA CALIFORNIA

DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA.

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se preguntan a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Como lo indica el Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados y Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano; se le informa Diputado Presidente que **el resultado de la votación es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Perfecto, se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma.

-EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ: Diputado Presidente, me podría permitir pedir un receso de tres minutitos, por favor.

- EL C. PRESIDENTE: Tres minutitos, ¿alguien secunda?

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Yo secundo, secundo.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, tres minutos.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, ya son los tres minutos, continuamos con la sesión, y le pido a la Secretaria favor de pasar lista de asistencia.

- LA C. SECRETARIA: En atención a la petición que se me hace, paso de nueva cuenta lista de asistencia: "Agatón Muñiz Claudia Josefina, Bujanda Ruiz Miguel Ángel, Caballero Ramírez Monserrat, Cano Núñez Miriam Elizabeth, Gallardo García Fausto, Geraldo Núñez Araceli, González Quiroz Julia Andrea, Hernández Carmona Carmen Leticia, López Montes Gerardo, Melendrez Espinoza Juan, Molina García Juan Manuel, Morán Hernández Víctor Manuel, Moreno Hernández Luis, Otáñez Licona Rodrigo Aníbal, Quintero Quintero Loreto, Rodríguez Eva Gricelda, Ruvalcaba Flores David, Topete Robles Elí, Vaca Chacón María Trinidad, Vásquez Hernández Eva María, Vázquez Castillo Julio Cesar, Vázquez Valadez Ramón, Villalobos Ávila María Luisa". Gracias, tenemos quorum legal Diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Si, gracias Diputada, en consecuencia, se declara abierto el debate de la Proposición, y se pregunta a los Diputados si desean intervenir en

contra de la misma, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación económica la Proposición presentada, los Diputados y Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; se le informa Diputado Presidente, que **el resultado de la votación es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Se declara aprobada la Proposición leída por el Diputado Rodrigo Aníbal Otáñez Licona; se le concede el uso de la voz al Diputado David Ruvalcaba Flores para presentar Proposición.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Compañeros y Compañeras Diputadas, Honorable Asamblea, el suscrito Diputado David Ruvalcaba Flores, integrante de la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL y propio, con fundamento en lo dispuesto a las leyes de la materia, me permito someter a consideración del Pleno de esta Honorable Legislatura, la siguiente PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, de la cual Señor Presidente, solicite se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria, para permitirme leer lo siguiente:

La compleja situación de salud por la que atravesamos en nuestro país, urge de medidas económicas, políticas y sociales que nos permitan hacer frente a esta contingencia.

Como autoridades debemos atender en todo momento los requerimientos de la sociedad, sin embargo, el día de hoy los insto a despojarnos de ideologías políticas, de colores, actuando de manera responsable y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar mayores contagios del COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud ha colocado a México en la fase 2 de esta pandemia, lo que significa que la propagación del COVID-19, no solo se da por casos importados de otros países, si no que la trasmisión de la enfermedad es local.

Lo anterior implica que se deben de tomar una serie de medidas para proteger la salud de todos los seres humanos, medidas que han sido bastante publicitadas en los medios de comunicación y en las diversas redes sociales.

Sin embargo, como gobierno aún nos falta mucho por hacer todavía, necesitamos ser contundentes y darles la certeza jurídica a los ciudadanos de que no perderán su empleo al quedarse en casa, a los empresarios darles la certeza de que no serán sancionados por incumplir los créditos fiscales dentro del periodo de contingencia. Debemos apoyar a quienes más lo necesitan, estos momentos son de unidad y de mostrar empatía con los más vulnerables.

Existen un sinfín de posibilidades para mitigar los efectos que esta pandemia dejara en nuestro Estado, entre ellos, podemos señalar la reducción de impuestos estatales,

otorgar mayor recurso al sector salud para facilitar el acceso a pruebas de COVID-19, abastecer de insumos médicos entre otros. Debemos darles la certeza a los habitantes de nuestro Estado, que los servicios de salud están disponibles sin restricción alguna, debemos generar un ambiente de tranquilidad, donde se vea que el gobierno, desde los diversos ámbitos, está atento y ocupado de contener el conflicto de salud por el que estamos pasando.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, con dispensa de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor de los siguientes:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, Ing. Jaime Bonilla Valdez, a que realice sin demora alguna un plan de contingencia para las pequeñas y medianas empresas que les permitan afrontar el pago de impuestos estatales una vez que se haya restituido la salud pública.

SEGUNDO: De igual forma se exhorta a los presidentes Municipales de cada uno de los Ayuntamientos del Estado, a realizar un plan de contingencia, para fin de busca la suspensión de cobros en los impuestos municipales, así como el pago de derechos, tanto a las personas físicas como morales, hasta en tanto pase la contingencia COVID-19.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García", del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Mexicali, a los 25 días del Mes de Marzo.

Y adiciono algo Señor Presidente, si me permite, para mayor claridad de lo antes expuesto; lo que se pretende con esta iniciativa, no es que el Gobierno de manera automática deje de percibir recursos, que regale a lo mejor los mismos o que los condone, es un exhorto a que las autoridades estatales y municipales hagan un plan de contingencia, para que una vez pasada o pasado el problema de salud que seguramente vamos a lograrlo, pues entonces la empresas, las pequeñas o grandes empresas puedan restituirle al Gobierno lo que bajo pues estos planes de contingencia se puedan elaborar; puntualizado el punto, les agradezco mucho su atención.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL DIP. DAVID RUVALCABA FLORES)

DIPUTADO VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. XXIII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

COMPAÑERAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS

HONORABLE ASAMBLEA

El suscrito Diputado David Ruvalcaba Flores, integrante de la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en nombre del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22 y 28 Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y artículos 110 Fracción III, 114, 117, 119 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, me permito someter a

consideración del Pleno de esta Honorable Legislatura, la siguiente **PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO** al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La compleja situación de salud por la que atravesamos en nuestro país, urge de medidas económicas, políticas y sociales que nos permitan hacer frente a esta contingencia.

Como autoridades debemos atender en todo momento los requerimientos de la sociedad, sin embargo, el día de hoy los insto a despojarnos de ideologías políticas, de colores, actuando de manera responsable y hacer todo lo que este a nuestro alcance para evitar mayores contagios del COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud ha colocado a México en la fase 2 de esta pandemia, lo que significa que la propagación del COVID-19, no solo se da por casos importados de otros países, si no que la trasmisión de la enfermedad es local.

Lo anterior implica que se deben de tomar una serie de medidas para proteger la salud de todos los seres humanos, medidas que han sido bastante publicitadas en los medios de comunicación y en redes sociales.

Sin embargo, como gobierno aun nos falta mucho, necesitamos ser contundentes y darles la certeza jurídica a los ciudadanos de que no perderán su empleo al quedarse en casa, a los empresarios darles la certeza de que no serán sancionados por incumplir los créditos fiscales dentro del periodo de contingencia. Debemos apoyar a quienes más lo necesitan, estos momentos son de unidad y de mostrar empatía con los más vulnerables.

Existe un sinfín de posibilidades para mitigar los efectos que esta pandemia dejara en nuestro Estado, entre ellos, podemos señalar la reducción de impuestos estatales, otorgar mayor recurso al sector salud para facilitar el acceso a pruebas de COVID-19, abastecer insumos médicos. Debemos darles la certeza a los habitantes de nuestro Estado, que los servicios de salud están disponibles sin restricción alguna, debemos generar un ambiente de tranquilidad, donde se vea que el gobierno, desde los diversos ámbitos, esta atento y ocupado de contener el conflicto de salud por el que estamos pasando.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, con dispensa de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente:

RESOLUTIVOS

PRIMERO: Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, Ing. Jaime Bonilla Valdez, a que realice sin demora alguna un plan de contingencia para las pequeñas y medianas empresas que les permita afrontar el pago de impuestos estatales una vez que se haya restituido la salud pública.

SEGUNDO: Se exhorta los presidentes Municipales de cada uno de los Ayuntamientos del Estado, que efectúen la suspensión de cobros en los impuestos municipales, así como el pago de derechos, tanto a las personas físicas como morales, hasta en tanto pase la contingencia por el COVID-19.

Dado en el Salón de Sesiones Benito Juárez del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Baja California a los 25 días del Mes de Marzo del año 2020.

ATENTAMENTE

Dip. David Ruvalcaba Flores

“ Democracia y Justicia Social”

Partido Revolucionario Institucional

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado David Ruvalcaba, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite; adelante Diputado.

- EL C. DIP. GERADO LÓPEZ MONTES: David Ruvalcaba, Diputado ojala me permita sumarme a ese Exhorto, como ya lo comentó el compañero Juan Manuel Molina y este virus no va a excluir a nadie, todos somos parejos, todos vamos a ser afectados de alguna manera por esta pandemia, desde los obreros, las pequeñas y medianas empresas van a sufrir graves afectaciones económicas y lo que propone es acertado y urgente, para que nuestro Gobernador del Estado tome cartas en el asunto y brinde un apoyo de manera inmediata a las medianas, chicas y medianas empresas, si me permites me quiero sumar a tu Exhorto, tomando en consideración lo que se está viviendo.

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Si, Gerardo López con mucho gusto.

- EL C. PRESIDENTE: Bien continuamos, de no ser así, se solicita; Diputada adelante.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Si, como no, Diputado también si me permites sumarme a tu Exhorto, es lo mismo que estamos viendo (inaudible).

- EL C. DIP. DAVID RUVALCABA FLORES: Encantado, es un problema de todos y todos debemos colaborar, coadyuvarnos, por su puesto.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, ¿nos sumamos todos? nos sumamos todos. Bien, pues entonces continuamos, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Con gusto Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados y Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano; le informo Diputado Presidente que **el resultado de la votación es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Perfecto, se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma.

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Diputado Presidente, para precisión.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado Molina,

- EL C. DIP. JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA: Estamos de acuerdo con el planteamiento que hace el Diputado Ruvalcaba, inclusive en mi intervención en tribuna, hace un rato, comenté, Mexicali ya se nos adelantó a este Exhorto, inclusive ya generaron, aprobaron en cabildo una serie de condonaciones, exenciones e inclusive suspensiones de impuestos, obviamente respeto su autonomía municipal presupuestaria, pero es correcto que el resto del cabildo deban de tomar medidas

similares, entonces estamos de acuerdo, Mexicali, Mexicali se nos adelantó y eso es bueno, ojala se tomen esas providencias en otros rubros de Gobierno, seguramente así será, seguramente; es cuánto.

- EL C. PRESIDENTE: Claro, continuamos, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Como lo indica el Diputado Presidente, se somete a votación económica la Proposición presentada, los Diputados y las Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano; se le informa Diputado Presidente que **el resultado de la votación es a favor por mayoría.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobada la Proposición leída por el Diputado David Ruvalcaba Flores; se le concede el uso de voz al Diputado Elí Topete Robles, para presentar su Proposición, tiene el uso de la voz Diputado.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Si me permite Presidente, y si me permite este Honorable Congreso, voy a dar lectura a este, a esta Proposición con Punto de Acuerdo, pero me gustaría hacerlo a nombre de todos los Diputados de la presente Legislatura, no a nombre de una fracción parlamentaria, aquí hemos venido los antecesores comentando que aquí lo que nos une es el bien común, que queremos ahorita en la contingencia que estamos enfrentando, entonces en ese sentido,

nosotros de parte de Movimiento Ciudadano lo queremos hacer en nombre de todos, si me lo permite.

En representación de esta H. Legislatura con fundamento en lo previsto en los artículos 110, fracción III y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos someter a su consideración, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo basado en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la geografía de Baja California con los Estados Unidos, dentro de la franja fronteriza, el flujo de dólares es común dentro del territorio, sin embargo, cuando el dólar está ganando territorio frente al peso, se genera golpe fuerte a la economía de las familias del estado.

Es por ello que ese flujo, se debe ajustar a leyes vigente de nuestra nación y estado, y sobre todo cuando la ciudadanía tiene la imperiosa necesidad de rentar un inmueble para casa, habitación o local comercial y se obligan a pactar la renta en dólares, pese a que su ingreso sea en moneda nacional, lo cual representa evidentemente un afectación y desproporción económica al bolsillo de los bajacalifornianos.

Además, la renta en dólares se contrapone con lo dispuesto en la constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 Constitucional.

Si bien es cierto que hay criterios jurisprudenciales que fijan que la obligación, también es cierto que la misma ley monetaria establece como primicia que la moneda extranjera no tendrá curso legal en la república, salvo a los casos en que la ley determine otra cosa.

En la práctica los arrendadores por costumbre o conveniencia, rentan mensualmente en dólares en nuestro Estado, sin respetar el actual artículo 2273 del Código Civil, dejando sin elementos jurídicos al arrendatario para reclamar la recisión del contrato.

Sabemos que la voluntad de las partes es lo que determina la creación, modificación o extensión de obligaciones, por lo que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, bajo el sentido de que los contratos obligan a lo pactado, así como a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso o a la Ley, con lo que se obtiene que no se le puede otorgar validez a lo pactado, cuando es contrario a la ley.

Por estos motivos, les presento este exhorto que tiene por objetivo que se cumpla el artículo 2273 del Código Civil del Estado, a fin de que se haga valer la forma de arrendamiento tanto para casa habitación como para locales, bodegas y diversos inmuebles comerciales, cuya intención legislativa es que en caso de que se fije el arrendamiento en dólares, se entienda como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que se celebró el contrato respectivo, y de no cumplirse lo dicho, será motivo de recisión del contrato respectivo.

La renta convenida en el arrendamiento, debe hacerse en moneda nacional. En caso de que se fije en moneda extranjera, se entenderá como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que se celebró el contrato.

Debo mencionar de manera puntual que el Presidente de la CANIRAC y otros Organismos empresariales, se presentaron con su servidor para solicitar la intervención de esta H. Legislatura con el objeto de que se les brinde apoyo en el cumplimiento del artículo en mención, ya que, la actual crisis económica por la que atraviesan, se ha visto recrudecida por las medidas preventivas de FASE 2, con miras a defender la pandemia provocada por el COVID-19.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, habiendo demostrado su pertinencia legal y su necesidad social; someto a consideración de este Pleno, con dispensa de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente Punto de Acuerdo:

ÚNICO: Se solicita a esta H. Soberanía para que en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a destinar los procesos necesarios para el cumplimiento del Artículo 2273 del Código Civil del Estado de Baja California, para que la cantidad de arrendamiento en dólares, se entienda como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que se celebró el contrato.

Mexicali, Baja California, Dado en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García", del Poder Legislativo de Baja California. el día 25 del mes de marzo del 2020.

Es cuanto Presidente.

(SE INSERTA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL DIP. ELÍ TOPETE ROBLES)

DIP. VICTOR MANUEL MORAN HERNÁNDEZ
Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del
Congreso del Estado de Baja California.

P R E S E N T E.-

Diputado Elí Topete Robles, representante de esta H. Legislatura con fundamento en lo previsto en los artículos 110, fracción III y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos permitimos someter a su consideración, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo basado en la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Por la geografía de Baja California con los Estados Unidos, dentro de la franja fronteriza, el flujo de dólares es común dentro del territorio, sin embargo, cuando el dólar esta ganando territorio frente al peso, se genera golpe fuerte a la economía de las familias del estado.

Es por ello que ese flujo, se debe ajustar a leyes vigente de nuestra nación y estado, y sobre todo cuando la ciudadanía tiene la imperiosa necesidad de rentar un inmueble para casa, habitación ó local comercial y se obligan a pactar la renta en dólares, pese a que su ingreso sea en moneda nacional, lo cual representa evidentemente un afectación y desproporción económica al bolsillo de los bajacalifornianos.

Además, la renta en dólares se contrapone con lo dispuesto en la constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, según lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 Constitucional.

Si bien es cierto que hay criterios jurisprudenciales que fijan que la obligación, también es cierto que la misma ley monetaria establece como primicia que la

moneda extranjera no tendrá curso legal en la república, salvo en los casos en que la ley determine otra cosa.

En la práctica los arrendadores por costumbre ó conveniencia, rentan mensualmente en dólares en nuestro estado, sin respetar el actual artículo 2273 del Código Civil, dejando sin elementos jurídicos al arrendatario para reclamar la recesión del contrato.

Sabemos que la voluntad de las partes es lo que determina la creación, modificación ó extensión de obligaciones, por lo que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, bajo el sentido de que los contratos obligan a lo pactado, así como a las consecuencias que sean conforme a la buena fe, al uso ó a la Ley, con lo que se obtiene que no se le puede otorgar validez a lo pactado, cuando es contrario a la ley.

Por estos motivos, les presento este exhorto que tiene por objetivo que se cumpla el artículo 2273 del Código Civil del estado, a fin de que se haga valer la forma de arrendamiento tanto para casa habitación como para locales, bodegas y diversos inmuebles comerciales, cuya intención legislativa es que en caso de que se fije el arrendamiento en dólares, se entienda como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de vigente en la fecha en que se celebró el contrato respectivo, y de no cumplirse lo dicho, será motivo de recisión del contrato respectivo.

La renta convenida en el arrendamiento, debe hacerse en moneda nacional. En caso de que se fije en moneda extranjera, se entenderá como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de cambio vigente en la fecha en que se celebró el contrato.

Debo mencionar de manera puntual que el Presidente de la CANIRAC y otros Organismos empresariales, se presentaron con su servidor para solicitar la intervención de esta H. Legislatura con el objeto de que se les brinde apoyo en el cumplimiento del artículo en mención ya que , la actual crisis económica por la que

atraviesan , se ha visto recrudecida por las medidas preventivas de FASE 2 , con miras a detener la pandemia provocada por el COVID-19.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, habiendo demostrado su pertinencia legal y su necesidad social; someto a consideración de este Pleno, con dispensa de trámite legislativo para su aprobación, el siguiente Punto de Acuerdo:

ÚNICO: Se solicita a esta H. Soberanía para que en ejercicio de las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a destinar los procesos necesarios para el cumplimiento del Artículo 2273 del Código Civil del Estado de Baja California, para que la cantidad de arrendamiento en dólares, se entienda como pactada en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo de vigente en la fecha en que se celebró el contrato.

Mexicali, Baja California, en el salón de sesiones del Congreso del Estado, Benito Juárez García del Poder Legislativo al día de su presentación del mes de Marzo del 2020.

A T E N T A M E N T E

DIP. ELÍ TOPETE ROBLES

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Elí Topete, se declara abierto el debate de la dispensa de trámite del Acuerdo, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la dispensa de trámite, de no ser así, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la dispensa de trámite.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Como lo indica el Diputado Presidente, se somete a votación económica la dispensa de trámite presentada, los Diputados y las Diputadas que estén a favor, sírvanse

manifestarlo levantando su mano; se le informa Diputado Presidente que **el resultado de la votación es a favor por mayoría.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma; adelante Diputado Moreno.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Yo sé que ha sido una sesión muy larga y que hemos discutido, bueno más bien analizado más que discutido, muchos temas de mucha relevancia social, pero en particular este tema yo si considero que sería muy oportuno que una vez que sea aprobado, que entiendo va ser aprobado por todas las fuerzas políticas, porque ya se discutió ayer en JUCOPO, también pueda integrarse dentro de los comunicados que están acudiendo al Congreso del Estado, porque el tema de la renta en dólares es un tema muy sensible para la sociedad, muchas personas que rentan, como ya se dijo en la exposición, sus casas, pero también negocios, locales comerciales, pero que ganan en pesos y pagan en dólares, haberse disparado el dólar, haberse incrementado de cuando se firmaron los contratos, hay contrato de año, año y medio, hasta de dos años cuando el dólar estaba a dieciocho, ahora que está a veinticuatro son impagables, y eso lo que va a lograr o lo que va a provocar es una profunda crisis en el bolsillo familiar, lo que va a provocar es que no paguen y lo que va a provocar es que vengan juicios y vengan desahucios, que se judicialicen procesos que van a hondar en el resentimiento social, la confrontación en la comunidad, cosa que no queremos, bueno, ¿qué propongo? Primero, pues felicitar al Diputado, pero segundo, que una vez que sea aprobada

este exhorto pueda ser enviado inmediatamente por los canales de comunicación del Congreso, para que se sepa que esta Legislatura también se está solidarizando con los sectores básicos de la sociedad en una medida como esta que pretende pues evitar que la disparidad cambiaria siga afectando la economía familiar.

- EL C. PRESIDENTE: Diputado, así será, vamos a subir esta Proposición, así como las otras también que también van por el mismo camino, claro que sí.

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Realmente, digo ya lo acabas de abordar el tema Presidente, nada más era secundar la propuesta que hace y refuerza el documento que hizo el favor de leer el Diputado Topete, gracias.

- EL C. DIP. ELÍ TOPETE ROBLES: Muchas gracias Diputados.

- EL C. PRESIDENTE: Así será, así va ser, de inmediato vamos a subirla a los medios; bien, se declara abierto el debate de la Proposición, se pregunta a los Diputados si desean intervenir en contra de la misma, ya hicieron uso de la voz, toda vez que no hay intervenciones en contra, se solicita a la Diputada Secretaria Escrutadora someta a votación económica la Proposición.

- LA C. VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE SECRETARIA ESCRUTADORA: Como lo indica el Diputado Presidente, se somete a votación económica la Proposición presentada, los Diputados y las Diputadas que estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano; se le informa Diputado Presidente que **el resultado de la votación es a favor por unanimidad.**

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, se declara aprobada la Proposición leída por el Diputado Elí Topete Robles; continuamos con el último punto del orden del día que son los **posicionamientos;** haciendo un atento recordatorio a los compañeros Diputados o a la compañera Diputada, que la lectura será por un máximo de cinco minutos.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Gracias Diputado Presidente.

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ.

Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Compañeras y Compañeros Diputados

La suscrita Diputada CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA, en nombre propio y representación del Grupo Parlamentario de MORENA, de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de esta Tribuna para presentar el siguiente POSICIONAMIENTO, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

ANTE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES RESPECTO A LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO, MUY ESPECIALMENTE EN RELACIÓN A NUESTROS ADULTOS MAYORES E INDÍGENAS QUE RADICAN EN EL ESTADO.

En los últimos días nos hemos enfrentado como sociedad ante una crisis de salud mundial que al inicio parecía lejana, sin embargo recientemente nos ha alcanzado, y me refiero a la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (también conocido como: COVID – 19), dicha situación de salud, ha provocado que la mayoría de la población del país y en este caso del Estado, entre en pánico, por lo cual las autoridades debemos estar atentas, para actuar de manera pronta, eficaz y en la medida de lo posible disminuir el riesgo de contagio, sobre todo en la población que es más vulnerable: me refiero también a nuestros adultos mayores y a los grupos Indígenas.

Por lo cual desde este Congreso XXIII hago una sincero reconocimiento a nuestras autoridades Sanitarias por las medidas preventivas tomadas respecto a la PANDEMIA, estamos atravesando por una situación difícil y en la cual se hace un cordial exhorto para que continúen trabajando arduamente como hasta ahora, todo esto dando un combate a la propagación del virus, informando a la población sobre las medidas preventivas necesarias, para lograr evitar que nuestros adultos mayores que son los más vulnerables, así como los pueblos Indígenas de nuestro Estado sean afectados, y para en caso de ser así, que se les de todas las facilidades y atención adecuada para llevar a buen término la PANDEMIA, todo ello para disminuir las pérdidas humanas, que sin importar si están o no afiliados a una Institución de Salud, para el caso de verse afectados, éstos sean atendidos sin temor a ser rechazados por no contar con la afiliación correspondiente.

En esta sentido respetuosamente también hago un llamado a las autoridades competentes para que presten atención y tomen las medidas pertinentes respecto a

todos aquellos establecimientos o personas físicas que tengan a la venta los insumos básicos para la prevención del contagio de este virus, y no eleven sus costos de manera desorbitante aprovechándose de la población en general, pero sobre todo de la más vulnerable que es aquella también, que vive al día con sus gastos, y sin lugar a dudas uno de estos sectores son los adultos mayores, así como los Indígenas que se encuentran apartados de las zonas urbanas por lo regular y por ende son más susceptibles a ser afectados tanto física como económicamente.

De igual forma reconozco en esta participación el invaluable esfuerzo realizado por cada uno de los Alcaldes de todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado para mantener a la población informada, segura y en la medida de lo posible en un ambiente de tranquilidad al saber que cuentan con gobernantes respetuosos y conscientes de la responsabilidad que el cargo que ostentan les confiere.

Compañeras y Compañeros Diputados:

La motivación de este posicionamiento radica fundamentalmente en que las autoridades competentes, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos en el Estado, en esta crisis de Salud, que como cualquier crisis es temporal, y que al combinar esfuerzos entre autoridades de todos los ámbitos, lograremos ser un ejemplo de trabajo en conjunto por el bien de nuestra sociedad, pero sobre todo por el bien de aquellos grupos que son más vulnerables a los contagios, de nueva cuenta preciso a los adultos mayores y nuestros Indígenas.

De igual forma yo quiero abundar por el lado de lo que corresponde a la observación que podemos hacer en otras comunidades cercanas, a mí me preocupa el hecho de que en Estados Unidos ya la gente en algunos Estados, está comprando armas, preocupante también que en alguno de nuestros lugares del país ya están saqueando tiendas, esta es la consecuencia de la desesperación en la que no tenemos que caer, por eso el guardar la serenidad, y el considerar que como latinoamericanos no tenemos, incluso, ni físicamente la condición de los habitantes de otros países europeos, con la alimentación distinta que nos prepara en nuestra dieta también con otras defensas y que tomemos en cuenta que los estados de ánimo en el ser humano influye notablemente en la baja de defensas naturales, si alguien está ansioso, deprimido, aprensivo, generalmente puede tener esa disminución y ser impactado de manera inevitable y si ellos han caído en esa crisis, no repitamos los patrones de conducta de otros países, somos diferentes, tenemos otra naturaleza, somos países pacifistas, somos mediadores, hemos históricamente siendo, hemos destacado entre otros países del mundo por albergar gente en refugio, entonces tenemos esa otra naturaleza y confiemos en ella para que nos dé esa solidez que necesitamos reafirmar como mexicanidad y patriotismo.

(SE INSERTA POSICIONAMIENTO PRESENTADO POR LA DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA)

DIPUTADO VICTOR MANUEL MORAN HERNANDEZ.
Presidente de la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Compañeras y Compañeros Diputados

La suscrita Diputada **CARMEN LETICIA HERNANDEZ CARMONA,** en nombre propio y representación del Grupo Parlamentario de MORENA, de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, hago uso de esta Tribuna para presentar el siguiente **POSICIONAMIENTO**, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

POSICIONAMIENTO DE LA DIPUTADA CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA ANTE LOS ACONTECIMIENTOS ACTUALES RESPECTO A LA PANDEMIA QUE ESTAMOS VIVIENDO, MUY ESPECIALMENTE EN RELACIÓN A NUESTROS ADULTOS MAYORES E INDÍGENAS QUE RADICAN EN EL ESTADO.

En los últimos días nos hemos enfrentado como sociedad ante una crisis de salud mundial que al inicio parecía lejana, sin embargo recientemente nos ha alcanzado, me refiero a la **PANDEMIA DEL CORONAVIRUS** (también conocido como: **COVID – 19**), dicha situación de salud, ha provocado que la mayoría de la población del país y en este caso del Estado, entre en pánico, por lo cual las autoridades debemos estar atentas, para actuar de manera pronta, eficaz y en la medida de lo posible disminuir el riesgo de contagio, sobre todo en la población que es más vulnerable: me refiero a nuestros adultos mayores y a nuestros Indígenas.

Por lo cual desde este Congreso XXIII hago una sincero reconocimiento a nuestras autoridades Sanitarias por las medidas preventivas tomadas respecto a la **PANDEMIA** por la cual estamos atravesando y las exhorto para que continúen trabajando arduamente como hasta ahora, en el combate a la propagación de este virus, informando a la población sobre las medidas preventivas necesarias, para lograr evitar que nuestros adultos mayores, así como nuestros Indígenas sean afectados, y para el caso de ser así, que se les de todas las facilidades y atención adecuada para llevar a buen término la PANDEMIA sin tener pérdidas humanas, que sin importar si están o no afiliados a una Institución de Salud, para el caso de verse afectados, éstos sean atendidos sin temor a ser rechazados por no contar con la afiliación correspondiente.

En esta sentido respetuosamente también hago un llamado a las autoridades competentes para que presten atención y tomen las medidas pertinentes respecto de aquellos establecimientos o personas físicas que tengan a la venta los insumos básicos para la prevención del contagio de este virus **CORONAVIRUS** (también conocido como **COVID - 19**), y no eleven sus costos de una manera desorbitante aprovechándose de la población en general, pero sobre todo de la más vulnerable que es aquella también, que vive al día con sus gastos, y sin lugar a dudas uno de

estos sectores son los adultos mayores, así como los Indígenas que se encuentran apartados de las zonas urbanas por lo regular y por ende son más susceptibles a ser afectados tanto física como económicamente.

De igual forma me permito reconocer el invaluable esfuerzo realizado por cada uno de los Alcaldes de todos y cada uno de los Ayuntamientos del Estado para mantener a la población informada, segura y en la medida de lo posible en un ambiente de tranquilidad al saber que cuentan con gobernantes respetuosos y conscientes de la responsabilidad que el cargo que ostentan les confiere.

Compañeras y Compañeros Diputados:

La motivación de este posicionamiento radica fundamentalmente en que las autoridades competentes, realicen las acciones necesarias para salvaguardar la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos del Estado, en esta crisis de Salud, que como cualquier crisis es temporal, y que al combinar esfuerzos entre autoridades de todos los ámbitos, lograremos ser un ejemplo de trabajo en conjunto por el bien de nuestra sociedad, pero sobre todo por el bien de aquellos grupos que son más vulnerables a los contagios, como son nuestros adultos mayores y nuestros Indígenas.

Es cuanto.

Dado en el Salón de Sesiones "Lic. Benito Juárez García "
del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Mexicali,
Baja California a la fecha de su presentación.

A t e n t a m e n t e

CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Muy bien Diputada a continuación procederemos a pasar al siguiente punto del orden del día **"Informes",** antes de tomar la tribuna les presentamos el siguiente video (transmisión de video) (aplausos y felicitaciones).

- EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Diputada Vicepresidenta, tome mi lugar para hacer uso de la tribuna y presentar el informe de esta presidencia.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, Diputadas y Diputados que integran la Honorable XXIII Legislatura del Estado de Baja California, medio de comunicación que nos siguen a través de las redes sociales, ciudadanas y ciudadanos, buenas tardes; hoy concluye el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio legislativo de esta XXIII Legislatura, por ello y en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, acudo a esta tribuna para informar sobre la labor realizada por su servidor durante este periodo.

Somos una Legislatura que le correspondió ser parte de un histórico periodo de transición, de un cambio social y político en nuestro país, pero sobre todo en nuestro Estado, un cambio trascendental que no se presentaba desde hace treinta años y que sin duda alguna el Congreso del Estado de Baja California es parte fundamental de esta transformación, toda vez que como representante del pueblo transformamos su deseos, sus peticiones y hasta sus anhelos en hechos concretos a través de nuestro trabajo legislativo; siendo consciente de esta coyuntura histórica y tal como me comprometí al inicio de mi encomienda, fue un periodo de puertas abiertas, donde se escucharon todas las voces, tanto de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de proyectos legislativos, llevando acabo sesiones, reuniones y mesas de trabajo de manera pacífica y de manera ordenada, respetando a todas las fuerzas políticas anteponiendo el respeto en los debates, dialogo vertidos, resaltando y agradeciendo de igual forma la coordinación y comunicación constante con el

Poder Ejecutivo Estatal; así mismo aprovecho el espacio para reconocer el esfuerzo, la visión y el profesionalismo de mis compañeros y compañeras Legisladores, que a través de las diversas comisiones llevaron a cabo el estudio, consultas, supervisión vigilancia, investigación, opinión y dictaminación de los asuntos que les corresponden; así como sesiones ordinarias y extraordinarias de pleno, haciendo lo posible durante este segundo periodo ordinario, la aprobación de Decretos, Iniciativas, Dictámenes, Puntos de Acuerdos y Exhortos, que han sido de suma importancia para los Bajacalifornianos tal y como se expuso en el video que se proyectó.

Ciertamente, las reformas constitucionales, legales aprobadas por esta XXIII Legislatura han contribuido en la actualización y modernización del marco legislativo estatal, que sin duda alguna benefician diversos sectores del Estado; de igual forma me permito informar, que se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con diferentes instancias gubernamentales, actos de representación del Congreso del Estado, en actos cívicos, así como en eventos de Gobierno, donde se crearon diálogos con diversos grupos ciudadanos, que construyeron a los proceso y programas legislativos.

Hoy concluyo este periodo como Presidente de la Mesa Directiva con gran satisfacción con todos los avances legislativos que se obtuvieron; aprovecho la ocasión para expresarles a todas y a todos los Diputados que integran esta Legislatura mi agradecimiento al otórgame la confianza de presidir la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura del Estado de Baja California, en su segundo periodo ordinario

de sesiones, especialmente a mis compañeros integrantes de esta Mesa Directiva, la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, la Diputada Carmen Leticia Hernández Carmona, el Diputado Gerardo López Montes y a la Diputada Julia Andrea González Quiroz, muchas gracias. (aplausos)

(SE INSERTA INFORME DE LA MESA DIRECTIVA PRESENTADO POR EL DIP. VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ)

Concluimos el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de esta XXIII Legislatura, por ello, en mi calidad de Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado, acudo a esta Tribuna para informar sobre la labor realizada por su servidor durante este periodo.

Somos una legislatura que le correspondió ser parte de un histórico periodo de transición, de un cambio social y político en nuestro país pero sobre todo en nuestro estado, un cambio trascendental que no se presentaba desde hace 30 años y que sin duda alguna el congreso del estado de Baja California es parte fundamental de esta transformación, toda vez que como representantes del pueblo transformamos sus deseos, sus peticiones y hasta sus anhelos en hechos concretos, a través de nuestro trabajo legislativo.

Siendo consciente de esta coyuntura histórica, y tal como me comprometí al inicio de mi encomienda, fue un periodo de "puertas abiertas", donde se escucharon todas las voces, tanto de quienes estaban a favor y quienes estaban en contra de diversos proyectos legislativos, llevando a cabo reuniones y mesas de trabajo de manera pacífica y de manera ordenada, respetando a todas las fuerzas políticas anteponiendo el respeto en los debates y diálogos vertidos.

Aprovecho esta tribuna para reconocer el esfuerzo, la visión y profesionalismo de mis compañeras y compañeros legisladores que han hecho posible durante este segundo periodo de sesiones la

aprobación de Iniciativas, Puntos de Acuerdo y Exhortos, que han sido de suma importancia para los Bajacalifornianos.

Me permito informar a esta Honorable Asamblea que en este periodo ordinario se realizaron 10 sesiones ordinarias; 4 extraordinarias, fueron presentadas en Oficialía de Partes 57 Iniciativas, en el Pleno se presentaron 61 Iniciativas, 49 proposiciones de Punto de Acuerdo; 9 posicionamientos; 19 Acuerdos de Órganos de Gobierno, resultando un total de 195 acciones legislativas, asimismo se publicaron 36 Decretos y fueron aprobados 45 dictámenes.

Dentro de las reformas legales que fueron aprobadas se encuentran la modificación a la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California, la Ley del Régimen Municipal, la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California, entre otras, que benefician a diversos sectores sociales.

DESCRIPCIÓN	**FECHA PLENO**	**PUBLICADO**
Mediante el cual se aprueba la transferencia de recursos por $334,076 (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019.	5/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba la Reforma el Capítulo XIX, se adicionan las Secciones Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 156-8 BIS, 156-8 TER, 156-8 QUATER, 156-9 BIS, 156-9 TER, 156-10 BIS, 156-10 TER, 156-10 QUATER, 156-12 BIS, 156-12 TER y se reforman los Artículos 156-8, 156-9, 156- 10, 156-11, 156-12, 156-13, 156-14, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.	5/12/2019	SI
Mediante el cual aprueba la reforma a las fracciones XI, XII, XIII, así como la adición de una fracción XIV al artículo 26 de la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Baja California.	5/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba la adición de un artículo 31 BIS a la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California.	5/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba la transferencia de recursos por $8,351,691 (OCHO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEICIENTOS	10/12/2019	SI

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2019.		
Mediante el cual se aprueba la Iniciativa de Decreto para autorizar al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para llevar a cabo operaciones para reestructura y/o refinanciamiento, a través de financiamientos bancarios, así como para afectar las participaciones federales que le correspondan al Estado de Baja California conforme a la legislación aplicable, como fuente de pago de los financiamientos y demás operaciones autorizadas y constituir fideicomisos de administración, garantía y fuente de pago.	10/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba la transferencia de recursos por $768,867 (SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), del Presupuesto de Egresos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California.	10/12/2019	SI
Mediante la cual se crea la Ley de Impulso al Conocimiento Científico, Tecnológico y a la Innovación para el Desarrollo del Estado de Baja California.	10/12/2019	Se solicitó su publicación mediante oficio
Mediante el cual se aprueba Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Tijuana, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020, que se establece en el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias de la materia.	31/12/2019	SI
Mediante le cual se aprueba el Otorgamiento de Estímulos Fiscales en Contribuciones Municipales para el Municipio de Tijuana, Baja California, para el Ejercicio Fiscal 2020, que se establece en el Artículo 85 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberno de Baja California, 12, 18 y 27 de la Ley de Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias de la materia.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba la Iniciativa de Decreto para autorizar al Municipio de Tijuana, Baja California para que contrate deuda pública en una o varias etapas hasta por la cantidad de $2,620,646,194.00 (dos mil seiscientos veinte millones seiscientos cuarenta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), para destinarla al refinanciamiento y/o	31/12/2019	SI

reestructuración de deuda pública municipal, más los costos y gastos adicionales.		
Mediante el cual se aprueba Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020, que se establece en el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 12, 18 y 27 de la Ley de Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias de la materia.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba Tabla de Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Ensenada, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020, que se establece en el Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, 12, 18 y 27 de la Ley de Catastro Inmobiliario del Estado de Baja California, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias de la materia.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se aprueba Tabla e Valores Catastrales Unitarios, Base del Impuesto Predial del Municipio de Mexicali, Baja California, para el ejercicio fiscal del 2020, que se establece en el Artículo 85 de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, y de las demás disposiciones legales y reglamentarias de la materia.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se modifican los plazos señalados en los Artículos Quinto del Decreto contenido en el Acuerdo Segundo y Sexto del Decreto contenido en el Acuerdo Tercero, del Decreto número 335, publicado el 12 de abril de 2019, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se reforma el articulo 28 y se adiciona el Título V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se presenta Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforman los Artículos 133,134,135,136 y se reforma el Titulo Segundo y Adiciona el Capítulo XXII, las Secciones Primera, Segunda, Tercera y los Artículos 156-46, 156-47, 156-48 y 156-49 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California.	31/12/2019	SI
Mediante el cual se presenta Iniciativa de Decreto por medio de la cual se reforman diversos artículos de la	31/12/2019	SI

Ley de Ingresos para el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2020.		
Mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.		SI
Mediante el cual se habilita como Recinto Parlamentario en el que el Pleno de la XXIII Legislatura sesionará el día miércoles 29 de enero de 2020, en el Restaurante Misión Santa Isabel, con domicilio en Carretera Transpeninsular Kilómetro 189 en la Delegación de San Quintín del Municipio de Ensenada, Baja California.		SI
Mediante el cual se reforma el artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.	30/12/2019	SI
Mediante el cual se Declara Recinto Parlamentario el Restaurante Misión Santa Isabel, con domicilio en Carretera Transpeninsular kilómetro 189, en la Delegación de San Quintín del Municipio de Ensenada, Baja California; para llevar a cabo Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Estado, el día miércoles 12 de febrero de 2020.	29/01/2020	SI
Mediante el cual se crea la Ley de Impulso al Conocimiento Científico, Tecnológico y a la Innovación para el Desarrollo del Estado de Baja California.	29/01/2020	Se solicitó su publicación mediante oficio
Mediante el cual se aprueba la Creación del Municipio de San Quintín, Baja California. 12/02/2020 SI Mediante el cual aprueba la reforma que adiciona al artículo 250 QUARTER del Código Penal para el Estado de Baja California.	26/02/2020	SI
Mediante el cual se aprueba la creación de la Ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California. 26/02/2020 SI Mediante el cual se aprueba la reforma a los artículos 14, 24 y 46 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Baja California.	11/03/2020	Se solicitó su publicación mediante oficio
Mediante el cual se aprueba la reforma de Servicio Públicos del Estado de Baja California; la reforma a los artículos 2 y 17, y adición de una Fracción IV al Artículo 96, de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California; y la adición del Articulo 14 BIS del Código Fiscal para el Estado de Baja California.	18/03/2020	Se solicitó su publicación mediante oficio

Ciertamente, las reformas constitucionales aprobadas por esta XXIII Legislatura han llevado a la actualización y modernización del marco legislativo estatal, cito de manera especial la municipalización de San Quintín, convirtiéndose en el sexto Municipio del Estado, cuya creación era aclamada por los habitantes de dicha región desde hace varios años, por lo que sin lugar a dudas, es un hecho histórico que beneficia a la sociedad bajacaliforniana y especialmente, a la población que habita esta región.

Asimismo, se analizaron, modificaron y aprobaron las propuestas de Leyes de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los presupuestos de egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los Organismos Públicos Autónomos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, con responsabilidad y apegados al principio de austeridad.

Se destaca también, las modificaciones a la Constitución Local, en el tema electoral y su respectiva Ley, estableciendo la austeridad como principio rector, recorriendo el inicio del proceso electoral, contribuyendo con ello a un ahorro significativo en el costo que representa dicho proceso.

De igual forma y derivado de la reformas constitucionales en el ámbito federal, en el Estado de Baja California se instauro un Grupo Interinstitucional conformado por dependencias del Poder Ejecutivo así como con la participación de los Poderes Legislativo y Judicial, con la finalidad de cumplir con lo establecido en las reformas laborales ya mencionadas y con ello podamos contar con un sistema de impartición de justicia laboral moderno, ágil y eficiente, donde tome protesta como integrante como representante del Poder Legislativo.

También, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo con diferentes instancias gubernamentales, actos de representación del Congreso del Estado en actos cívicos, así como en eventos de gobierno, se crearon diálogos con grupos ciudadanos, contribuyendo a los procesos y programas legislativos.

Hoy concluyo este periodo como Presidente de la Mesa Directiva con gran satisfacción por todos los avances legislativos mencionados, aprovecho la ocasión para expresarles a todas y todos los diputados, mi agradecimiento al otorgarme la confianza de presidir la Mesa Directiva de esta XXIII Legislatura en su Segundo Periodo Ordinario, especialmente a mis compañeros integrantes de esta Mesa Directiva, la Diputada María Trinidad Vaca Chacón, Carmen Leticia Hernández Carmona, Gerardo López Montes y Julia Andrea González Quiroz.

¡¡Muchas Gracias!!

Dado en el Salón de Sesiones de Pleno "Lic. Benito Juárez García" del Congreso del Estado de Baja California, a los días de su presentación.

ATENTAMENTE
POR EL GRUPO PARLAMENT O MORENA

DIP. VICTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ

(CONCLUYE DOCUMENTO)

- EL C. PRESIDENTE: Vamos a continuar, agotado el orden del día, se cita a los Diputados.

- EL C. DIP. MIGUEL ÁNGEL BUJANDA RUÍZ: Felicidades Presidente, me permites un momento, por favor; quiero hacer una felicitación Presidente a toda tu Mesa Directiva, por la conclusión de este periodo, también decirles a los nuevos integrantes de la próxima Legislatura, que van a tener todo el apoyo que continuar con la Presidenta de la Junta de Coordinación Política también muchas felicidades y que van a encontrar un aliado aquí y muchas felicidades por concluir estos trabajos.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Bujanda, se agradece. Adelante Diputado.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Igualmente Diputado Presidente, por parte de Movimiento Ciudadano te felicitamos y reconocemos que siempre estuviste en buena disposición al margen de la fracción, al margen del color político, lo agradecemos y sobre todo más como amigo, la verdad felicidades y me sumo a lo que dice el Diputado Bujanda, felicidades a la Presidenta de la Coordinación Política felicidades Diputada, al nuevo Presidente, a la nueva Mesa Directiva, a los que salen muchas felicidades y mi reconocimiento, un abrazo.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Elí Topete. Adelante Diputada.

- **LA C. DIP. EVA MARÍA VÁSQUEZ HERNÁNDEZ:** Diputado Presidente, felicitarte por tu desempeño durante esta presidencia, es importante decir, bueno, te conozco ya de hace algo de tiempo y esto, bueno creo que ha sido un esfuerzo importante que Ustedes han hecho, mis felicitaciones a todos los integrantes de esta Mesa Directiva saliente, gracias por esa entrega y ese trabajo dedicado y entregado en favor de la imagen de esta Legislatura; y a la nueva Mesa Directiva también pues reiterar toda la disposición de trabajo conjunto en beneficio de Baja California, muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Al contrario, Muchas gracias Diputada Vásquez. Adelante Diputado.

- EL C. DIP. JULIO CÉSAR VÁZQUEZ CASTILLO: Bueno Presidente, pues la verdad te felicito a nombre del Partido del Trabajo y la Fracción, muy contentos con el trabajo tuyo y la Mesa Directiva y también felicito a nuestra compañera Monserrat por su ratificación y seguimos echándole ganas para que este Congreso pueda avanzar, pero sobre todo Baja California; en hora buena Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado. Adelante Diputado Gallardo.

- EL C. DIP. FAUSTO GALLARDO GARCÍA: Gracias Presidente, bueno el día de ayer también tuve el espacio para reconocértelo, pero lo quiero hacer aquí ante los compañeros Diputados; discúlpenme mi garganta pero; nada más agradecerte siempre la apertura al dialogo que tuviste como responsable de la conducción de estos trabajos aquí en el Congreso en este periodo, siempre humilde, siempre sencillo, siempre escuchar, abierto a las propuestas, a las sugerencia y eso te hace un buen político, felicitarte por eso, felicitar a los compañeros que te acompañaron, también en el periodo hicieron una buena fórmula, un buen equipo de trabajo e invitar, bueno primero agradecer porque soy parte de la Mesa Directiva del próximo periodo, agradecer la confianza depositada por todos Ustedes para los próximos, la conducción del próximo periodo y trabajar en los mismo términos no, con dialogo abierto, pero eso ya le tocará aquí al Presidente, entonces en hora buena, felicidades.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado, efectivamente fue para mí una muy buena experiencia haber transitado por la presidencia aquí con mi Mesa Directiva, entonces agradezco mucho.

- LA C. DIP. LORETO QUINTERO QUINTERO: Pues, no me quiero quedar atrás Presidente, también para felicitarte a ti y a todos tus compañeros, muy buen papel, sobre todo siempre en apertura al dialogo y felicitar a la nueva Mesa Directiva, también siempre van a contar conmigo y mucha suerte.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Loreto Quintero, muchas gracias.

- EL C. DIP. RODRIGO ANIBAL OTAÑEZ LICONA: Diputado Presidente, felicitarte por la labor, reconocer que incluso sin estar de acuerdo, el respeto siempre estuvo y eso es lo que agradecemos, que siendo algo que muchas veces no estamos de acuerdo, pero hay formas, hay respeto, en este periodo fue un periodo de respeto, te lo agradezco y te lo reconozco y a la siguiente Mesa Directiva todo mi respaldo para seguir trabajando en el mismo sentido, con respeto, con debate y a sacar los temas adelante por Baja California, felicidades Diputado.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Otáñez, así es y así será y siempre va haber respeto para todas y todos Ustedes.

- LA C. DIP. TRINIDAD VACA CHACON: Gracias, Diputado pues, felicitarlo por su entrega al trabajo, por cumplir cabalmente con sus objetivos y por la disposición que siempre tuvo para atender los temas de todos los Diputados, en lo particular por la confianza y seguimos trabajando en el mismo sentido, ahí le encargo en su comisión nuestras iniciativas y dar también la felicitación a la nueva Mesa Directiva, a todos sus integrantes compañeros; y de manera particular a la Diputada Monserrat

Caballero por su continuidad y estoy segura que nuestros temas también seguirán transitando, los de todos, felicidades y gracias una vez más por la confianza.

- EL C. PRESIDENTE: No muchas gracias, pero fue parte también de Ustedes este trabajo, quiero decirles que no fallamos en una sola, en ni una sola sesión los integrantes de esta Mesa Directiva y pues aquí estuvimos al pie del cañón y vamos a seguir y apoyándolos también a Ustedes con los trabajos, para salir adelante con todos los temas en favor de los bajacalifornianos.

- LA C. DIP. CARMEN LETICIA HERNÁNDEZ CARMONA: Bueno, no sé si para finalizar, pero agradecer desde, ahora sí que, desde la directiva a todos, es una experiencia nueva, retroalimentadora, pero yo veo mucha madurez a pesar de ser, pues ahora sí que, con la primera legislatura y con diferentes actores representantes de la población civil, donde ellos deben tener confianza en que la necesidades que ellos tengan hoy van a ser escuchadas y tratadas, analizadas, reflexionadas, razonadas, todo lo que en su momento debamos hacer y en este crecimiento que yo he percibido desde un inicio hasta el tiempo que llevamos, en esa solidaridad de humanismo, que nos motiva a buscar un México mejor, y un Baja California estable, ordenada y segura, muchas gracias a todos y a la directiva que fueron muy solidarios, fuimos dando brazo con brazo el esfuerzo para hacer un mejor papel en su momento al inicio (inaudible), a lo mejor una que otra novatada pero nos pusimos rápido en pie y también el reconocimiento a Monserrat, que ha tenido también un crecimiento y maduración en su actuar, porque no es fácil el tener tantas diferencias y querer jalar como dice la carreta a todos para un mismo sentido, pero, pues ha

tenido la paciencia, el criterio, la templanza, yo admiro ese crecimiento y madurez porque, todo se va sembrando para bien para el futuro.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada, y decirles a todos Ustedes y a los bajacalifornianos que nos están viendo y vamos a seguir trabajando en conjunto con la nueva Mesa Directiva que también los felicito, claro que sí con mucho gusto, los vamos apoyar en lo que podamos, igual felicito a mi compañera de fracción y mi Coordinadora la Diputada Monserrat Caballero, la felicito nuevamente por ser la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y aparte pues nuestra Coordinadora y vamos a seguir trabajando juntos.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Gracias Diputado.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante Diputado Moreno.

- EL C. DIP. LUIS MORENO HERNÁNDEZ: Bueno Diputado, solamente para decirte que reconozco en ti una persona noble y generosa, muy sincera y creo que eso fue sello distintivo de tu presidencia, a veces hay cosas que no vemos y a que a veces es importante verlas a través de una pantalla no, que es el trabajo que todos los días se hace pero que a veces uno lo ve, y que bueno que tengamos ésta muy buena oportunidad de ver solamente un poquito de lo mucho que hiciste, de la recopilación de tu trabajo, te quiero felicitar y decirte a ti y a los miembros de la Mesa Directiva que desde luego que apelaremos a su experiencia para poder sacar adelante este periodo que viene, porque es un periodo muy complejo, pero que el día de hoy tuvimos una sesión atípica, si se dieron cuenta fue una sesión donde

todos pudimos avanzar de la mano, donde dejamos a lado posturas partidistas, donde dejamos a un lado pronunciamientos de naturaleza política, partidista y privilegiamos el bien común, privilegiamos el sentir de la sociedad en medio de la crisis que se está viviendo y lo que viene al parecer es más fuerte; y que estoy convencido que podremos salir adelante bajo un esquema de unidad, de muchísima comunicación, pero sobre todo de respeto a la dignidad de las personas y que espero que ese sea el sello de la Mesa Directiva que viene, así que agradezco muchísimo las muestras de confianza, los buenos deseos, los mensajes de aliento, pero sobre todo el sentido de solidaridad que hoy vibró en esta sesión, muchas gracias por las muestras afectuosas pero sobre todo quiero aprovechar el espacio para reconocer tu tiempo como Presidente Diputado.

- EL C. PRESIDENTE: Diputado Moreno, pues igual estamos para apoyarlos y apoyarte en lo que se pueda, sé que te conozco y sé que vas a presidir muy bien esta Mesa Directiva ya con los demás compañeros Diputados y pues que cuentas con todo el apoyo, sé que lo vas hacer muy bien, te conozco, eres muy buen orador, buen Diputado, creo que vas hacer muy buen papel aquí en la Presidencia, te deseo lo mejor a ti y a los compañeros también que integran la Mesa Directiva y felicidades nuevamente.

- LA C. DIP. MONSERRAT CABALLERO RAMÍREZ: Diputado muchas felicidades, muchas felicidades por este logro, es un logro y un honor presidir esa mesa, muchas felicidades a todos los que están ahí y sobre todo muchísimas gracias a todos y cada uno de Ustedes por su paciencia, sobre todo Usted Diputado, por su paciencia para

con su servidora, Usted forma parte de mi crecimiento y reitero a esta XXIII Legislatura el agradecimiento y las formas que ha tenido para ayudarme y ayudarse a conducir esta XXIII Legislatura, porque esta XXIII Legislatura somos todos y cada uno de los nosotros, las diferentes fuerzas que aquí convergen, Usted es amigo y compañero de MORENA y no tengo más que decir que agradecerle infinitamente su paciencia ante mi inexperiencia y que este crecimiento, poco o mucho se lo debo a todos y cada uno de Ustedes, felicidades Diputado.

- EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada, pues decirle aquí estamos aprendiendo juntos, somos compañeros y pues yo confirmo que vamos a seguir trabajando juntos Usted y yo como partido, como fracción, igual con los demás compañeros y compañeras de otras fracciones, pero también está haciendo un excelente trabajo, la verdad, la felicito mucho por eso está donde Usted está, ok, gracias Diputada. Agotado el orden del día, se cita a los Diputados y Diputadas integrantes de la XXIII Legislatura a Sesión Ordinaria de Clausura el día martes treinta y uno de marzo del dos mil veinte, a las diez horas, en el Salón de Sesiones "Benito Juárez García"; **siendo las siete doce horas (07:12 p.m.) del día veinticinco de marzo del dos mil veinte, se levanta la sesión, gracias**. (timbre)